

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Departamento de Sociología IV
(Metdología de la Investigación Social y Teoría de la Comunicación)



TESIS DOCTORAL

Representaciones de género y acceso a la propiedad de la tierra en Colombia

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

María Fernanda Sañudo Pazos

Directora

Fátima Arranz Lozano

Madrid, 2015

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA**

**Departamento de Sociología IV ((Métodos de la
Investigación y Teoría de la Comunicación))**



REPRESENTACIONES DE GÉNERO Y ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN COLOMBIA

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR**

María Fernanda Sañudo Pazos

Bajo la dirección de la doctora
Fátima Arranz Lozano

Madrid, 2014

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA**

**DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA IV:
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y TEORÍA DE
LA COMUNICACIÓN**

**DOCTORADO: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LAS CIENCIAS SOCIALES**



TESIS DOCTORAL

**REPRESENTACIONES DE GÉNERO Y ACCESO A LA
PROPIEDAD DE LA TIERRA EN COLOMBIA**

**AUTORA
MARÍA FERNANDA SAÑUDO PAZOS**

**DIRECTORA:
DRA. FÁTIMA ARRANZ LOZANO**

MADRID 2014

Agradecimientos

Mi principal agradecimiento está dirigido a la profesora Fátima Arranz, quien durante todo este tiempo me brindó su apoyo, paciencia y valiosos aportes académicos para la preparación de este documento.

A Guillermo Hoyos Vásquez (Q.E.P.D), ex director y fundador del Instituto Pensar; y, al padre Alberto Múnera, S.J, también ex director del mismo centro, quienes me impulsaron para avanzar y poder finalizar este empeño en el que me embarque hace algunos años.

A mis padres, Benjamín e Inés y a mis hermanos Ángela y David, por su incondicional apoyo, ellos y ellas fueron mi soporte emocional durante todo este tiempo.

A Silvia Bohórquez y de más compañeras del Instituto Pensar, de quienes también recibí apoyo incondicional.

A hombres y mujeres de las organizaciones campesinas (ANMUCIC, ANUC – UR, FENSUAGRO), quienes atentamente me brindaron sus valiosos testimonios sobre su participación en los procesos estudiados.

A hombres y mujeres, ex funcionarios del Ministerio de Agricultura e INCODER, quienes amablemente pusieron a disposición de esta investigación, sus conocimientos y experiencias.

SIGLAS

ANMUCIC: Asociación Nacional de Mujeres, Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia

ANUC: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

ANUC-UR: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Unidad y Reconstrucción.

APEN: Patriótica Económica Nacional

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BM: Banco Mundial

CNA: Coordinadora Nacional Agraria

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CONAIC: Coordinadora Nacional de Organizaciones Agrarias e Indígenas de Colombia

CONPES: Consejo de Política Social y Económica

DNP: Departamento Nacional de Planeación.

DRI: Desarrollo Rural Integrado

EPL: Ejército Popular de Liberación

FAO: Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FENACOA: Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias

FENSA: Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria

FENSUAGRO: Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria

FMI: Fondo Monetario Internacional

IICA: Instituto Interamericano de Desarrollo Rural.

INCORA: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Reemplazo desde 2002 al INCORA.

ONIC: Organización Indígena de Colombia

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PCC: Partido Comunista Colombiano

PCML: Partido Comunista Marxista Leninista

PNR: Plan Nacional de Rehabilitación.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SINTRADIM: Sindicato Trabajadores del INCORA

UNIFEM: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

UNIR: Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria

TABLA DE CONTENIDO

Abstract	8
1. Introducción	14
1.1 El problema de investigación	14
1.2 Metodología	26
2. Marco teórico	34
2.1 Aproximaciones al concepto de representaciones	36
2.1.1 Representaciones y construcción social de la realidad	37
2.1.1.1 Las críticas a las propuestas esbozadas	51
2.1.2 Cultura, representaciones y construcción social de la realidad	54
2.1.2.1 Convergencias y divergencias de las propuestas	57
2.1.3 Representaciones desde la perspectiva bourdiana	61
2.1.3.1 Convergencias y divergencias de las propuestas	75
2.2 Aproximaciones conceptuales a las representaciones de género	81
2.2.1 Producción de lo masculino y lo femenino y construcción social de la realidad	85
2.2.2 Producción de sexo y género y construcción social de la realidad	88
2.2.3 Las representaciones de género	91
2.3 Las representaciones de género desde una perspectiva bourdiana	94
2.3.1 Representaciones de género y nociones de campo	99
2.3.1.1 Representaciones de género y acceso a la tierra	99
2.3.1.2 El campo de la política de tierras y representaciones de campo	103
3. El campo de la política de tierras	114
3.1 Acumulación, estructura de la propiedad y clases sociales	115
3.1.1 Rasgos de las clases sociales rurales	118
3.1.2 Guerras de independencia y estructura de la tierra	120
3.1.3 Los albores de siglo y la agricultura empresarial	126
3.2 Evolución y consolidación del campo de la política de tierras	131
3.2.1 Los años 30 y el posicionamiento político del problema agrario	131
3.2.1.1 Los conflictos agrarios y el campesinado como agente negociador	136
3.2.1.2 Negociación alrededor de los conflictos por la tierra	141
3.3 Las reformas agrarias de los sesenta	145
3.3.1 Tierra, violencia y origen del conflicto armado	146
3.3.2 Las reformas agrarias e inclusión del campesinado	152
3.3.2.1 Primera etapa: Alianza para el progreso y política de tierras	153

3.3.2.2 La radicalización de la reforma agraria y la articulación del campesinado_	156
3.4 Pacto de Chicoral y contrareforma agraria_____	161
3.5 La reforma agraria en el contexto del DRI_____	164
3.5.1 El DRI en los albores de los ochenta y la cuestión agraria_____	167
4. Representaciones de género y la negociación de la “Ley 30 de 1988” _____	175
4.1 Género y mujeres un espacio en la política y en el movimiento campesino_____	176
4.1.1 La política para la Mujer Rural de 1984_____	176
4.1.2 Las femócratas, género y desarrollo rural_____	181
4.1.3 ANMUCIC agente clave en la negociación de la política de tierras_____	186
4.2 La negociación de la Ley 30 de 1988_____	196
4.2.1 El contexto de la negociación_____	196
4.2.2 La reforma agraria en un contexto de transformación de lo rural_____	198
4.2.3 Negociación para la incorporación de las medidas de género_____	200
4.2.3.1 Los agentes, habitus y representaciones de género_____	200
4.2.3.2 Cómo operaron las representaciones de género en la negociación_____	229
5. Representaciones de género y la negociación de la “Ley 160 de 1994” _____	240
5.1 Los procesos que condicionaron la negociación_____	242
5.1.1 Ley 30 de 1988 y trabajo organizativo de ANMUCIC_____	242
5.1.2 La Constitución de 1991_____	248
5.1.3 El deterioro de la guerra y los efectos en el campesinado_____	253
5.1.3.1 Impacto de la guerra en las mujeres rurales_____	256
5.1.4 Reforma agraria en un contexto neoliberal_____	261
5.1.5 La Política de Mujer Rural de 1994_____	266
5.2 La negociación de la “Ley 160 de 1994”_____	267
5.2.1 La contrapropuesta del campesinado_____	267
5.2.2 La negociación para la incorporación de las medidas de género_____	270
5.2.2.1 ¿Con quiénes negocian?: actores, habitus y representaciones de género_	274
5.2.2.2 ¿Cómo operan las representaciones de género?_____	285
6 Conclusiones_____	296
7. Bibliografía_____	304

ABSTRACT

GENDER REPRESENTATIONS AND ACCESS TO LAND OWNERSHIP IN COLOMBIA.

Why if, in the past three decades, there is a significant progress in incorporate gender measures in rural development planning, rural women keep on a marginal population in the design and implementation of public policies for the rural sector? In several studies, especially those conducted by Deere and León (2000, 2004) in Colombia's case, are specified on the number of conditions that women face, to exercise their right to land. The authors recognize that multiple causes and locate these two groups. On one side are those materials that affect the rural sector in general, but they have a differential effect on women such as: the concentration of land ownership, a situation linked to the dynamics of armed conflict; the wrong implementation of development models according to PNUD (2011, p 304.) "have not responded to the demands and needs of rural producers with smaller resources and capabilities"; and inefficient institutionalism and political infrastructure that involves no effective response to the problems of this sector.

On the other hand, are those causes that also have material expressions and are determining and determined by previous, are located in the culture area. In this this aspect Deere and León (2000, p. 4) highlight how the conceptualization of gender and sex that occurs in specific contexts, influences significantly the possibilities of rural women to access land. They specify that the existence of mechanisms of exclusion are based on "patriarchal ideologies into masculinity constructions and femininity and gender labor division."

Although these studies provide clues to understanding the cultural intervention, as only emphasize this aspect is crucial in the implementation of land policy. Generally not specific about how the negotiation process between

agents, under which these are constructed (policies) processes are also imbued with cultural connotations.

Facio (1992) emphasizes how in the explorations of the effects of state strategies to advance equality, is a key considerate in the formulation of these, those involved are beings of flesh and blood, people who embody attitudes, judgments and preconceptions on men and women, about their behavior and their needs. Insisting that such valuations will influence, in a greater or lesser extent, the decisions made; and in what ranks as objective and goal of state decisions and actions. This aspect reveals a sociocultural dimension of policies, in which the ideas, values, attitudes, beliefs and social imaginary of the different actors involved constitute frameworks of interpretation and meaning production (Puello, 2007, p. 83).

According to this, we propose that, in part, the low access of rural women to land ownership, also has to do with the contents that are negotiated between agents on issues relating to this subject, negotiation is clearly mediated by "a interpretation model of the world which is the source and sustenance conceptualization / social and cultural construction that makes sexual difference and that constitutes a way of orienting behaviors, expectations, valuations, perceptions and representations of men and women "(Sanudo, 2014, p. 20).

Under this assumption, we decided to investigate how gender representations that embody the agents in negotiating land policy, which means how to mediate social conceptions that a social group has built symbolically and practically on sexual difference. In claims that agents operate, interests and achievements. Specifically explored under a bourdiana perspective, which constitutes the focus of this research, how the negotiations on the rights of women and men to the land ownership is an issue influenced by schemes perception and appreciation inherent to the androcentric structure which constituting agents.

Specifically, the analysis focused on two key moments: the negotiation of land reform laws: "Law 30 of 1988" and "Law 160 of 1994," paths standards, besides being the product of women rural as negotiator agent, measures gender as one of the strategies to regulate access to land in Colombia rural habitants. Since the contents which are reflected in these, cover a large number of elements, we focus only on particular negotiation aspects in the context of the gender dimension related to access to land.

Trading as Bourdieu has defined as a field, which means a series of scenarios that emerge is analyzed and institutionalized in order to settle disputes arising in relation to the position of the subjects in the structure of the land; and under which a number of agents are articulated to fight for achieving their interests against this.

Meaningful summary

As part of this work we want to show how the negotiation between social agents, for formulating land policy in Colombia, particularly in a way for the incorporation of gender measures in different government strategies to ensure access to land ownership, is a process mediated by the principles of vision and action, that under the androcentric logic establish subjects. In this way we investigate, in particular on how gender representations that embody the agents operate, not only in negotiations, and also in positioning their interest accomplishments they achieve. More precisely, we show how the symbolic elaborations about working in the rural context are produced on female and male, are determining to the type of formal recognition and in fact, the right to land ownership. Specifically, the analysis focused on two key moments: the negotiation of land reform laws: "Law 30 of 1988" and "Law 160 of 1994," as which besides being the product of rural women interaction negotiator agent, in these measures of gender strategies for regulating land access were incorporate in Colombia.

Conclusions

The emergence of the social agents, is an issue that should be thought of as the direct product of the historic structure of ownership land in which these are occupying a distinct place. This question has been instrumental in the type of capital they access and the possibilities of entering the field where issues concerning to the ownership of land are negotiated and also traded in getting their goals. I must add, that both access to capital (economic, political, social, cultural and symbolic) as opportunities to participate and win, in the areas of negotiation, it will depend on how agents have been "configured" and their acceptance, under the imprint of the androcentric logic. As part of that reality, bodies, objects, subjectivities, ways to interpret and act upon the world to become "unconscious schemes of perception and appreciation", which under the imprint of "historic structures on the male order " have been incorporated into the subjectivity and materiality of bodies.

By understandings and explanations of the world that are under this logic, individuals and society produce and organize reality as a structure, which opposes the masculine and feminine, in which the first, usually occupies the privileged place. Such opposition, clearly average valuation of men and women and therefore their chances of being recognized as subjects of agrarian reform. In this sense both the field of signification as the action, are mediated by differential opposition, leading to a naturalization of the relationship between dominator and dominated. So gender representations are formed not only in the product of such division, but in a way, through its circulation, naturalize the difference and what this shows.

This question assumes that rural women generally have less access to capital, because they are willing to be rural (by adding the androcentric logic to be part of a social class - the rural people in general has occupied a marginal position

in the structure of land ownership), and therefore have had less chance to place their interests in terms of negotiation.

As shown throughout the document, such as did not have the capital (political, social, economic and symbolic) "to play the game properly", they entered the negotiation embody gender representations aligned with the androcentric logic. Appealing to images and meanings of womanhood accepted and social sanctioned and culturally (caregivers, mothers, vulnerable), claiming their land rights (collective ownership and prioritization in land reform programs), as a right supported the naturalization of female has done historically.

In this context a female subject that fundamentally strengthens its identity in the care of others or in connection with another or other always (mother, wife, sister, partner) was naturalized. From this category other representations are invoked: the political subjects being capable to drive social transformation processes. Then believe that through essentializing a category from which was defined and validated female (mainly care), they sought to be valued as individuals with potential to contribute to the development of their communities and the revitalization of the rural economy.

Accordingly, we consider that in this process the use of representations associated to care, became a strategic issue. We affirm that, to the extent that circulate through the meaning of being a traditional and socially accepted woman, appealed to what was to achieve better material conditions, which enable them to improve not only their lives, but their position in society, which means the empowerment in all areas.

Achieved recognition and under other processes on which also realize, they were acquiring power, they had greater access to different capitals. Accordingly, we propose that through both essentialism, which seems to be a commitment immersed des essentialization (questioning of gender identities), they sought to

enter and position themselves at the scene of a social mobilization concentrate in male; and also pursuing the become key agents for dialogue with the government at different levels (national, departmental and municipal).

In this regard we believe they, through the organization, are configured as active social agents in the production of representations and meanings, that although does not become detached from traditional, somehow challenge established models of family level, community, social movement and society in general.

1. Introducción

1.1 El problema de investigación

En gran parte la historia de Colombia, en opinión de los más importantes estudiosos de la cuestión agraria en este país¹, ha estado demarcada por la evolución del patrón de distribución de la propiedad de la tierra en un territorio determinado (García, 2006). Esta puede ser unimodal, es decir que la propiedad, está distribuida entre medianos propietarios; y, bimodal, en la que la mayor parte de las tierras está fraccionada entre pocos grandes propietarios y una pequeña parte de las tierras está en manos de muchos pequeños propietarios. En Colombia, tradicionalmente la estructura ha correspondido con la segunda de estas modalidades.

La acumulación de este bien, en pocas manos, ancla sus raíces en la colonia, época desde la cual, mediante una serie de arreglos institucionales y además a través del uso de la fuerza, las élites rurales y urbanas se han apropiado de grandes porciones del territorio nacional, situación que tiene como contraparte que una gran porción de las y los habitantes rurales históricamente tengan un acceso limitado a este bien² (Fajardo, 2000).

Tal modelo, además ha dado lugar a una serie de conflictos, los que se manifiestan con fuerza entrados los años treinta del siglo XX y que perviven hasta hoy. La presencia de disputas en torno a la tenencia de la tierra, han

¹ Entre ellos cabe destacar a Absalón Machado, Salomón Kalmanovitz, Jesús Bejarano, Dario Fajardo, entre otros, autores que a través de sus aportes, nos ayudaron a perfilar parte de la información que se presenta en este documento.

² En este país el latifundio y el minifundio se constituyen en los tipos de propiedad agraria predominantes, en los que se sustentan relaciones sociales entre los actores que adquieren históricamente carácter de dominación.

³ En términos bourdianos, como agente se entiende a los sujetos, que en relación a la clase social a la que pertenecen, en virtud de lo cual encarnan una serie de habitus, que además de condicionar las formas y maneras en que interpretan la realidad, son determinantes de sus prácticas. Es importante resaltar que los agentes, además se configuran en relación a la importancia de la lógica androcéntrica, sobre la que Bourdieu, hiciera tanto énfasis en su libro. En este país el latifundio y el minifundio se constituyen en los tipos de propiedad agraria predominantes, en los que se sustentan relaciones sociales entre los actores que adquieren históricamente carácter de dominación.

implicado que el Estado despliegue una serie de estrategias para dirimir las. En este contexto, además se han formalizado escenarios, para la negociación de las problemáticas relativas a la estructura agraria. En estos espacios convergen y se posicionan una serie de agentes sociales, quienes como representantes de las clases sociales, que se han ido conformando en las zonas rurales, luchan por la consecución de sus intereses.

Sí bien históricamente hombres y mujeres campesinos, ha ocupado una posición marginal en este modelo, es a los varones, a quienes en general se ha privilegiado como sujetos negociadores y por ende como los sujetos del derecho a la tierra. El Estado, desde comienzos del siglo XX hasta hoy, a través de una serie de mecanismos (institucionales, legales, políticos, jurídicos, entre otros), mediante los que intenta dirimir los conflictos, ha reconocido a los varones campesinos como los agentes³ con quienes en general se debe concertar los asuntos relativos a la tenencia de la tierra (también de la productividad). Siendo en general los beneficiarios directos de los acuerdos a los que se llegan el marco de las negociaciones.

Por otra parte, cabe resaltar, que tanto la configuración de estos como sujetos interlocutores con el Estado, como la capacidad que tienen para integrar los escenarios de negociación, son cuestiones mediadas por la lógica androcéntrica (Bourdieu, 2000). La jerarquía de lo masculino sobre lo femenino, (es decir de lo productivo, sobre lo doméstico, de lo público sobre lo privado, etc.) opera para que los varones sean quienes tengan mayores oportunidades de adquirir los capitales⁴ (en términos bourdianos) necesarios para participar en los espacios de negociación, posicionar y alcanzar sus intereses.

³ En términos bourdianos, como agente se entiende a los sujetos, que en relación a la clase social a la que pertenecen, en virtud de lo cual encarnan una serie de habitus, que además de condicionar las formas y maneras en que interpretan la realidad, son determinantes de sus prácticas. Es importante resaltar que los agentes, además se configuran en relación a la impronta de la lógica androcéntrica, sobre la que Bourdieu, hiciera tanto énfasis en su libro "La dominación masculina" (2000).

⁴ Dado que este es un concepto, sobre los que abordaremos en profundidad más adelante, brevemente podemos decir, que corresponde a los medios, capacidades, recursos, etc., que un agente tiene para participar en un campo, posicionar y avanzar en sus intereses.

En cuanto a las mujeres, habitualmente (y, digo habitualmente porque aun siendo reconocidas como sujetos de derecho, en el marco de las últimas leyes de reforma agraria, ellas enfrentan discriminación y una serie de factores, que les impiden ejercer efectivamente su derecho) han estado al margen de las negociaciones y los beneficios que de estas se desprenden. Y, cuando son tenidas en cuenta (tanto como agente negociador, como sujeto de beneficios), es porque son percibidas (y, también se autoperciben) bajo las representaciones que se ajustan a los significados y sentidos que lo femenino adquiere bajo la lógica androcéntrica. Al respecto, Facio (1997, p. 45) observa, cómo que en el marco de las políticas sociales, por ejemplo “las mujeres son tratadas explícitamente a propósito de la familia o la sexualidad, es decir a ámbitos propios de lo privado”.

En relación a lo anterior, cabe destacar que es durante la década de los ochenta, cuando en Colombia, como en otros países de la región, los estados auspician la participación de las mujeres en la formulación de la política de tierras⁵. Este proceso está directamente conectado, no solo con la incorporación del enfoque de género en la planificación del desarrollo rural, sino también con el favorable panorama político nacional, que bajo la tutela de las directrices emitidas por instancias de cooperación al desarrollo (principalmente FAO, CEPAL, UNIFEM), perfila la situación y problemáticas que enfrentan las mujeres rurales como aspectos que debe incorporarse en la agenda política⁶.

En este contexto surge un agente, que en los años siguientes, será clave en las negociaciones de las leyes de reforma agraria y en la incorporación de las medidas de género como ejes transversales de las decisiones y acciones que

⁵ Como política de tierras, consideramos la serie de decisiones que estatalmente se toman para dirimir los asuntos y conflictos relacionados con la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia; y, las acciones concretas que se realizan (leyes, políticas públicas, programas) para dar vía a estas decisiones.

⁶ En este marco, el gobierno propicia procesos organizativos de mujeres en las zonas rurales del país, fomentando a través de estas su participación en la negociación de las últimas leyes de reforma agraria: Ley 30 de 1988 y 160 de 1994.

enmarca la política. Hablamos de la Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia -ANMUCIC-. Dicha instancia (en la que confluyen mujeres rurales de todo el país, que haciendo parte de organizaciones campesinas mixtas que reivindican su derecho a la tierra, no encontraron los espacios para posicionar sus particulares problemáticas o donde no eran reconocidas como actores políticos) a través del apoyo estatal y de alianzas establecidas con femócratas⁷, paulatinamente va adquiriendo una serie de capacidades (capitales) que le permiten, tanto articularse a los espacios de negociación, como avanzar en el posicionamiento de los intereses particulares, que estas encarnan frente a la propiedad de la tierra.

Sin embargo, estas debieron enfrentar una serie de obstáculos, no solo para articularse a dichos espacios y participar de manera efectiva en la concertación de la política de tierras, sino también para plasmar adecuadamente sus intereses. No podemos desconocer que los logros obtenidos⁸ han sido significativos⁹, pero en la tarea de posicionar sus demandas en la agenda política, las mujeres rurales afrontaron el rechazo, no solo de sus pares hombres, quienes no las reconocían como sujeto político con capacidad de incidencia en la política de tierras; también de las comunidades, porque en estas se consideraba que sus luchas iban en contra de los principios familiares; y, otro tanto de funcionarios y funcionarias de instancias gubernamentales, quienes, en general, consideraban a los varones, como el sujeto de la reforma agraria.

Tanto la formulación de la propuesta de investigación como su desarrollo, tuvieron como puntos de partida los problemas mencionados. De acuerdo con

⁷ Brevemente es de decir, que en el marco de este estudio definimos como femócratas a las mujeres, feministas o sensibles al género, que haciendo parte del Estado, trabajaban por impulsar la incorporación del enfoque de género a la planeación del desarrollo rural.

⁸ Entre otros: la titulación conjunta a la pareja y la priorización de mujeres cabeza de hogar, víctimas de la violencia como sujetos de reforma agraria.

⁹ Sí se considera que este es un país que legisla de espaldas al campesinado –población que en la actualidad corresponden a casi un 30% del total del país (PNUD, 2011); y, que además no diseña ni despliega las estrategias necesarias para que la igualdad entre hombres y mujeres del sector rural, sea un hecho.

esto, comenzamos por preguntarnos ¿Por qué sí, en las tres últimas décadas, hay un avance importante en la incorporación de las medidas de género en la planeación del desarrollo rural, las mujeres campesinas siguen siendo una población marginal tanto en el diseño como puesta en marcha de políticas públicas para el sector rural? Particularmente nos cuestionábamos sobre los factores, por los que la participación activa de las mujeres campesinas en la formulación de la política de tierras, proceso mediante el que lograron posicionar sus intereses, no redundó en un aumento del número de beneficiarias de reforma agraria.

En diversos estudios, sobre todo los llevados a cabo por León y Deere (1994, 2000, 2004) y Meertens (2000) para el caso de Colombia, se especifica sobre la serie de condicionantes que las mujeres deben enfrentar, para ejercer su derecho a la tierra. Las autoras reconocen que múltiples son las causas y ubican dos grupos de estas. Por un lado están aquellas materiales que afectan al campesinado en general, pero que tienen un efecto diferenciado en las mujeres tales como: la concentración de la tierra en pocas manos, situación ligada a la dinámica del conflicto armado; la implantación equivocada de modelos de desarrollo que según PNUD (2011, p. 304) “no han respondido a las demandas y necesidades de los productores rurales con menores dotaciones de recursos y capacidades”; la existencia de una institucionalidad débil, es decir una infraestructura gubernamental que no puede ofrecer respuestas efectivas a las problemáticas del campesinado en general.

Por otra parte, están aquellas causas, que sí bien tiene expresiones materiales y son también determinantes y determinadas por las anteriores, se ubican en el plano de lo cultural. Frente a este aspecto León y Deere (2000, p. 4) resaltan cómo la conceptualización sobre el género y el sexo, que se produce en contextos específicos, condiciona de manera importante las posibilidades de las mujeres rurales para acceder a la tierra. En concreto especifican que la existencia de mecanismos de exclusión tiene como base “ideologías

patriarcales insertadas en construcciones de masculinidad y feminidad y la división del trabajo por género”.

En relación a lo anterior, es de aclarar que sí bien en el marco de dichos estudios se ofrecen pistas para comprender la intervención de lo cultural, solamente se hace énfasis en como este aspecto, es determinante en la implementación de la política de tierras. En general no se abordan los procesos de formulación de las medidas aparejadas a dicha política, procesos que bajo la perspectiva de esta investigación, además de estar condicionados por los patrones culturales, que encarnan quienes los formulan, tienen implicaciones efectivas en la realidad social de los sujetos de la política.

Frente a lo anterior, Facio (1992) recalca cómo en las exploraciones sobre los efectos de las estrategias estatales para avanzar en la igualdad, es clave considerar que en la formulación de políticas¹⁰, quienes participan son seres de carne y hueso, personas que encarnan actitudes, juicios y preconceitos sobre hombres y mujeres, sobre sus conductas y acerca de sus necesidades. Insistiendo en que dichas valoraciones van a influir, en mayor o menor medida, en las decisiones que se toman; y, en lo que se ubica como objetivo y meta de las decisiones y acciones estatales. Este aspecto revela la existencia de una dimensión sociocultural de las políticas, en la que las ideas, valores, actitudes, representaciones e imaginarios sociales de los diferentes actores involucrados se constituyen en marcos de interpretación y producción de sentido (Puello, 2007, p. 83).

En este sentido nos planteamos, que en parte, el bajo acceso de las mujeres campesinas a la propiedad de la tierra, tenía que ver también, con los contenidos que fueron negociados entre los agentes, negociación que claramente estaría mediada por “un esquema de interpretación del mundo cuyo origen y sustento es la conceptualización/construcción social y cultural que se

¹⁰ Es de aclarar que este estudio no se centra en el análisis de la formulación, como se explicitará más adelante, la exploración se centró en los procesos de negociación entre agentes que participan en la construcción de la política de tierras.

hace de la diferencia sexual y que se constituye en una manera de orientar los comportamientos, las expectativas, las valoraciones, las percepciones y representaciones de hombres y mujeres” (Sañudo, 2003, p. 20). Es decir por los principios de visión y de acción, que bajo la lógica androcéntrica son determinantes del tipo de representaciones que se hace sobre los sujetos sociales, sobre sus expectativas, roles, oportunidades y necesidades.

En este orden de ideas, consideramos que tanto el debate como la formulación de la política de tierras en Colombia, debe ser entendido como el producto entre otros, de la negociación entre una serie de agentes que encarnan tipos de representaciones de género según su lugar en el marco de la estructura de clases, de su pertenencia étnica, de su rango etario y de su configuración de sujetos con género. En esta vía nos propusimos pensar que estas representaciones intervienen de manera importante en los contenidos que se plasman en la política; y, además tienen relación directa con las posibilidades que tienen hombres y mujeres campesinos de acceder progresivamente a la propiedad de la tierra.

Bajo esta presunción, nos propusimos el indagar sobre cómo operan las representaciones de género que encarnan los agentes, en la negociación de la política de tierras. La idea en sí, fue la de comprender cómo la serie de significados y sentidos sobre lo femenino y lo masculino, que encarnaron los agentes que han participado en el debate y formulación, intervienen no solo en la negociación que llevan a cabo dichos agentes, también en el posicionamiento de los intereses que estos persiguen frente al acceso a la propiedad de la tierra y en los logros que alcanzan. De manera más precisa, perseguimos el visibilizar sobre cómo las construcciones y elaboraciones simbólicas que los agentes encarnan, sobre los roles de hombres y mujeres campesinos, han sido determinantes en el tipo de reconocimiento formal y de hecho, del derecho a la propiedad de la tierra.

En concreto, el análisis se centró en dos momentos claves: la negociación de las leyes de reforma agraria: “Ley 30 de 1988” y “Ley 160 de 1994”¹¹, sendas normas, las que además de ser producto de la articulación de las mujeres rurales como agente negociador, se incorporaron medidas de género como una de las estrategias para regular el acceso a la tierra en Colombia de campesinos y campesinas. En sentido estricto, nos enfocamos en la negociación para la incorporación de estas medidas de género.

Situándonos desde una perspectiva bourdiana, consideramos que los agentes que intervinieron en la negociación de estas leyes (funcionarios y funcionarias públicas, representantes de las organizaciones campesinas mixtas, representantes de la Sociedad de Agricultores Colombianos –SAC-, representantes de la ANMUCIC, entre otros y otras) están constituidos y constituidos por habitus, de los que las representaciones de género son sus más fieles expresiones. En este sentido estas además de estar estrechamente conectadas con la ubicación socioeconómica y cultural de los agentes, se configuran como los recursos, mediante los cuales estos y estas, dotan de significado a la realidad social; y, son guía para la percepción de los otros y otras y de las acciones que realizan en un campo específico, en el que se ubican para conseguir un fin particular (Piñero, 2008).

De acuerdo con lo anterior, consideramos entonces definir como campo¹² a la política de tierras, en la medida en que esta se consolida como una red de instituciones gubernamentales con prácticas y discursos cuyo objetivo es el regular el acceso a la propiedad de la tierra y los conflictos que emergen en relación a este aspecto.

¹¹ Presentaremos a lo largo del texto las referencias de estas leyes haciendo alusión al número y año en que fueron sancionadas, debido a que estas no se han denominado con título específico en el marco de los documentos legales emitidos por el Estado.

¹² Este brevemente puede ser conceptuado como el escenario en el que se enfrentan unos agentes que encarnan habitus desiguales y que tienen “medios y fines diferenciados según su posición en la estructura del campo de fuerzas...” (Bourdieu, 2007, p. 111).

Bajo esta perspectiva dicho espacio, debe ser considerado como un espacio en permanente construcción, donde se dirimen una multiplicidad de representaciones, entre ellas las de género, que encarnan los agentes sociales que en él interactúan y donde el capital encuentra un lugar para desplegarse. En este sentido, este se ha constituido históricamente en el escenario, en el que se articulan agentes, con intereses específicos sobre la tierra y con tipos de capital diferenciado en relación a la clase social a la que pertenecen, al género y a los habitus que encarnan.

Bajo la anterior apreciación, este se puede considerar como un espacio estructurado y jerarquizado de posiciones; escenario en el que los agentes, mediante el poder que le otorga el detentar ciertos tipos de capitales, entablan una lucha por posicionar y alcanzar no solo sus intereses frente al acceso a la tierra, sino también el de ubicar las representaciones que estos encarnan, sobre el uso que a este bien puede dársele o las funciones que este tiene socialmente; y, en concreto sobre el acceso que los individuos en relación al género al que pertenecen, pueden tener a la propiedad de la tierra.

Este campo además, debe ser entendido como el espacio social, donde se reproduce y refuerza la dominación masculina. Los agentes que encarnan esquemas de percepción y disposiciones acuñadas bajo la impronta androcéntrica, interactúan en dichos campos, para afianzar inconscientemente un orden social jerárquico.

De acuerdo con lo anterior y siguiendo a Arango (2002), la propuesta de Bourdieu sobre el campo de poder, ofrece además elementos claves para comprender cómo opera la relación entre la dominación de clase y la dominación sexual.

Estructura del documento

- **Propuesta conceptual**

De acuerdo con lo expuesto, comenzaremos con un capítulo dedicado a la exposición del andamiaje conceptual soporte de este estudio, en el que se realizará en primer lugar una aproximación conceptual para explicar lo que estamos considerando como representaciones. Atendiendo a las propuestas que se han hecho desde diferentes perspectivas, apostaremos por una construcción compleja de su definición, haciendo énfasis en el papel que estas tienen en la construcción social de la realidad.

Bajo esta lógica, comenzaremos por abordar las propuestas específicas que en el campo de la sociología y la psicología social se han producido sobre el tema, atendiendo a algunas de las críticas que se han hecho sobre dichas propuestas. La razón de esta prelación, se debe a que es en estos marcos disciplinares y bajo la tutela de autores y autoras específicos, se ha realizado un mayor desarrollo conceptual sobre las representaciones sociales. Al finalizar este aparte, presentaremos algunas consideraciones, que desde una perspectiva crítica se esbozan, frente a la propuesta conceptual de Moscovici.

De manera complementaria, continuamos con una propuesta sobre las representaciones sociales, desde una perspectiva antropológica. Sí bien en el marco de esta disciplina, no existen planteamientos teóricos consistentes sobre esta categoría, consideramos que algunas de las reflexiones que se originan en el contexto de la antropología simbólica, nos ayudan en la tarea de comprender el sentido que adquieren los procesos de simbolización como mecanismos vitales para la producción social de la realidad.

En esta vía de análisis se contempló como clave el comparar las propuestas de los principales exponentes de la teoría de las representaciones (Durkheim y Moscovici) con las ideas, que sobre todo se construyeron bajo la tutela de las

reflexiones geertzianas sobre la cultura. La comparación no tiene otra finalidad que la de encontrar convergencias y divergencias sobre los contenidos expuestos.

En este camino de estructurar la noción de representaciones sociales y en relación directa con objetivo que nos hemos fijado, es decir el dilucidar sobre cómo operan estas en los procesos de negociación entre agentes de la incorporación de las medidas de género en la política de tierras en Colombia, apostamos por acuñar una serie de reflexiones conceptuales desde una perspectiva bourdiana.

Sí bien en el marco de los planteamientos de Bourdieu no existe un amplio desarrollo sobre las representaciones sociales, consideramos que de la mano de los principales conceptos que él traza, es posible bosquejar conceptualmente sobre el tema y además entender en específico el cómo los procesos de interpretación y simbolización, median en los procesos de negociación entre agentes en un campo específico y esto a su vez cómo determina la producción social de la realidad.

Seguidamente se presentará una aproximación al concepto de representaciones de género. Cabe decir que para la construcción de este punto, se apeló a las nociones generales sobre representaciones y a los conceptos de género desarrollados en el marco de las teorías feministas, dado que este no es una categoría lo suficientemente desarrollada en la actualidad.

Posteriormente ofrecemos insumos para comprender conceptualmente la relación entre representaciones de género y la noción de campo y en concreto, del campo que nos hemos fijado analizar: el de la política de tierras en Colombia. En este marco proponemos en primera instancia, algunas consideraciones desde las que sea posible dilucidar sobre la relación entre representaciones de género y acceso a la tierra, aspecto que también fueron analizadas en clave bourdiana.

- **La política de tierras en Colombia**

En el marco del segundo capítulo haremos una presentación breve de los antecedentes de la configuración de la estructura de la tenencia de la tierra en relación a dinámicas económicas, sociales y políticas puntuales y, cómo de esta relación se desprende la conformación de clases sociales rurales y de los agentes, que encarnando capitales específicos y diferenciados, se posicionan posteriormente en los escenarios para la negociación de aspectos relativos a la propiedad de la tierra.

Además daremos cuenta del surgimiento y evolución de instituciones y prácticas mediante las que el Estado busca regular el acceso a la propiedad de la tierra y que se constituyen en los espacios para la negociación de la política entre los agentes.

En el marco de este aparte, cubriremos un marco temporal que comprende desde la década del treinta hasta comienzos de los años ochenta, del siglo pasado. En este aparte se evidenciará cómo las diferentes dinámicas tanto de carácter internacional y nacional, en el ámbito de lo político, económico y social condicionaron la institucionalización de dicho campo y el posicionamiento de los agentes en los escenarios para la negociación.

- **La negociación de la política de tierras (capítulos IV y V)**

Tal como especificó con anterioridad, para el análisis de los procesos de interacción y como median en estos las representaciones de género, se seleccionaron dos momentos de la política de tierras: la negociación y formulación de las leyes de reforma agraria: “130 de 1988 y 160 de 1994”, sendas normas, en las que además de articularse a las mujeres como sujetos claves en la negociación, se incorporaron medidas de género, como ejes reguladores del acceso a la propiedad de la tierra. Siendo, este último aspecto, en el que centramos nuestras indagaciones.

En el marco de estos capítulos comenzaremos por discernir sobre los factores que ayudaron no solo para que la incorporación del género sea una realidad en la planeación del desarrollo rural de Colombia y en específico en los temas concernientes a la reforma agraria; sino también para que emergiera un agente fundamental para que tal incorporación se constituya en un eje de la negociación de la política de tierras: la Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia.

Posteriormente mostraremos el contexto en el que se produjo tal negociación, dando cuenta de los agentes que participaron en esta, abordando aspectos relativos a sus habitus, los capitales y las representaciones de género encarnadas. Finalizaremos mostrando cómo operaron las representaciones de género que los agentes detentaban en los procesos de negociación de sendas leyes, en específico en lo concerniente a la incorporación del género como eje para el acceso a la propiedad de la tierra de hombres y mujeres.

- **Conclusiones**

Por último presentaremos las principales reflexiones que surgieron en torno al análisis de los resultados, que esperamos se constituyan en puntos de partida para futuras investigaciones sobre temas relativos a la relación entre género y acceso a la propiedad de la tierra.

1.2 Metodología

Objeto de análisis

Tal como se explicitó anteriormente, el principal objetivo de esta investigación fue el dar cuenta de cómo operan las representaciones de género, que encarnan diferentes agentes, en la negociación de la política de tierras, centrándonos de modo específico en aquellas estrategias, en que además de

incorporarse medidas de género (como ejes reguladores del acceso), se formularon con la articulación de las mujeres rurales. En este sentido centramos el análisis en la negociación de las leyes de reforma agraria: “Ley 30 de 1988 y Ley 160 de 1993”; y, en específico en los procesos de concertación entre agentes.

Dado que los contenidos que se plasman en estas, abarcan un número considerable de elementos, nos enfocamos solamente en la negociación sobre aspectos particulares, en el marco de los que se relaciona el género con la dimensión del acceso a la propiedad de la tierra. Es decir sobre las decisiones, en las que se establece por un lado el reconocimiento de las mujeres como sujetos de reforma agraria; y, por otro en la serie de medidas que se proponen, para que estas puedan ejercer efectivamente su derecho a la tierra.

Bajo la impronta de los principales conceptos, acuñados por Bourdieu, partimos de considerar que la negociación entre los agentes se da en lo que él ha definido como campo. Este en el marco de este estudio, corresponde a los escenarios que se han configurado, para dirimir los conflictos que emergen en relación a la posición de los sujetos, en la estructura de la tierra; y, en el marco de los cuales se articulan una serie de agentes para luchar por el logro de sus intereses.

Con respecto a las representaciones de género, a estas las abordamos, como uno de los elementos, que median la negociación, en este campo específico. Es decir, cómo estas, al ser producto de los principios de visión y de acción, los que se han configurado bajo la lógica androcéntrica y que encarnan los agentes, operan en concreto tanto en el posicionamiento de los intereses de los agentes como en los logros que obtienen.

Relativo a lo anterior, queremos introducir una consideración importante. Los agentes, al ser configurados corporal y subjetivamente, a partir de unos esquemas de percepción y apreciación inherentes a la estructura

androcéntrica, esquemas que además encarnan, participan en los campos de poder e interactúan con otros agentes, a partir de las representaciones de género que devienen de tal estructura. Así las elaboraciones simbólicas y prácticas concretas que los agentes revisten son determinantes no solo para el relacionamiento entre estos, sino también para la definición de que es lo legítimo a perseguir mediante las luchas en un campo de poder.

Método

De la mano de los principales conceptos de Bourdieu, este estudio, por un lado se planteó, como una reconstrucción sociohistórica en clave crítica de los procesos que enmarcaron, no solo el surgimiento de los agentes, sino también la negociación entre estos en el marco específico del campo de poder referenciado.

De acuerdo con esta apuesta, nos centramos primero en discernir sobre las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales, que enmarcaron los procesos de acumulación de la tierra, en manos de unos agentes determinados, la marginalización de otros del acceso a la propiedad; y, cómo este aspecto fue determinante en la producción de principios de visión y de acción que estos encarnan y en el acceso a tipos y volúmenes de capitales, que a largo plazo les permitirían situarse en los escenarios de la negociación. Lo anterior implicó una revisión cuantiosa de estudios sobre la historia agraria del país, de los que rescatamos principalmente, aquellos que nos permitieron dar cuenta de la emergencia de clases sociales rurales y además discernir sobre los rasgos que hombres y mujeres pertenecientes a estas, iban adquiriendo, rasgos que interpretamos bajo el concepto de *habitus* de Bourdieu.

Sí bien consideramos, clave la reconstrucción histórica de los procesos, aplicamos a la información una mirada crítica, dado que el interés fundamental, fue el entender cómo los procesos de acumulación de la tierra, no solo propició

la formación una estructura de clases sociales, sino también dio lugar a que unos agentes se instituyeran con el poder para definir el deber ser de la realidad rural; y, con ello la capacidad para posicionar con mayor fuerza no solo sus representaciones sobre lo económico, lo político, lo social, sino también sobre los roles que hombres y mujeres campesinos deben cumplir en contextos específicos.

Con respecto a los procesos de negociación, el uso de información de segunda mano complementada con información de primera mano, nos permitió además de reconstruir los procesos, el identificar la serie de factores que ayudaron, por un lado a la institucionalización del campo, y que además han sido determinantes en las concertaciones que entre agentes, se establecen en el marco del campo de la política de tierras.

Complementariamente con el fin de estructurar mejor nuestra apuesta, en relación a los procesos de negociación, relacionamos los aspectos relativos a los agentes (configuración, habitus, representaciones de género y capitales) con el tipo de posicionamiento de estos en los espacios de negociación, las estrategias que desplegaron, los intereses que perseguían y los logros que alcanzaron.

En cuanto a la indagación por las representaciones de género, consideramos que tanto la formación de las clases sociales en relación a la estructura de la tenencia de la tierra, son procesos que se suceden bajo la lógica androcéntrica, es decir bajo una perspectiva del mundo, donde lo masculino se sitúa por encima de lo femenino. En este sentido nos enfocamos a dar cuenta sobre cómo el tipo de percepciones y apreciaciones que sobre hombres y mujeres encarnaban los actores, debe ser considerado directamente el producto de lo anterior.

En este sentido la indagación en específico estuvo guiada por las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las representaciones de género que encarnan los agentes que entran en negociación para la formulación de las leyes referenciadas?
- ¿Cómo se han configurado dichas representaciones, en el marco de qué procesos y dinámicas? Y ¿Cómo estas están relacionadas con la pertenencia de los agentes a una clase social específica y a los habitus que encarnan?
- ¿Cuál es el tipo de capital del que están provistos los agentes y cómo estos capitales fueron determinantes en la negociación?
- ¿Cuáles son las representaciones que se privilegian bajo dicha negociación? Y ¿por qué razones se privilegian?
- ¿Cómo la provisión diferencial de los capitales con los que cuentan los agentes determinan el tipo de representaciones que se privilegian?
- ¿Cuáles de estas representaciones que encarnan los agentes causan conflicto en relación a los intereses que cada uno persigue?
- ¿Cuáles son las que generan acuerdos?
- ¿Cuáles son las que se producen en el marco de la negociación y se plasman en las leyes referenciadas?
- ¿Cuáles son las representaciones de género que intervienen con mayor importancia en las posibilidades de acceso que tienen hombres y mujeres campesinos de acceder a la tierra?

Para la recolección de información de primera mano se privilegió una técnica de investigación de carácter cualitativo: la entrevista semiestructurada a profundidad. Para la selección de este instrumento, se consideró la utilidad que este reviste para “visibilizar la trama argumental mediante la cual los sujetos sociales explican los eventos vividos o imaginados; el discurso político moral mediante el cual juzgan, valoran, proponen, se organizan o revelan.” (Uribe, 2001, p. 45).

Siguiendo a Bertaux (1988, p. 78) mediante esta técnica es posible “conocer lo social a través de lo individual; dado que se sustenta en la experiencia del individuo, no teniendo que ser este último una persona en particular ni especial, ya que sólo basta con ser parte de la comunidad a la cual se estudia”.

Bajo nuestra perspectiva, a través de este instrumento, es factible no solo abarcar la experiencia objetiva de los agentes, sino también la dimensión subjetiva, aspectos clave para comprender cómo operan las representaciones de género en los procesos de negociación.

De acuerdo a lo anterior el uso de esta herramienta bajo un enfoque de género, nos permitió indagar no solamente sobre los significados y representaciones que ellas y ellos encarnan (como parte de un género, una clase social), los que pusieron en escena cuando se articularon en el campo para debatir sobre sus intereses, además contribuyó a visibilizar cómo la lógica androcéntrica, determina la interpretación de la realidad, de las formas de constitución de la alteridad y del “yo”, de las necesidades particulares frente a la tierra, entre otros aspectos. También nos orientó para comprender la configuración de un sujeto como parte y resultado de múltiples procesos colectivos.

Esta se diseñó y aplicó de acuerdo a las características de las personas que participaron en la negociación. Cabe aclarar que para tal fin, tuvimos en cuenta las diferencias entre los agentes, en relación al tipo de habitus y capitales que encarnaban, además de la pertenencia a una clase particular y a un género específico.

En este sentido, antes del diseño, la primera tarea que acometimos, fue la de identificar a los agentes que participaron en la negociación de las leyes, antes referenciadas, y caracterizarlos de acuerdo a los aspectos que mencionamos. Esta tarea se realizó con base en la información histórica, que con base en fuentes de segunda mano, íbamos recolectando para dar cuenta de los

procesos. Información que fuimos complementando a medida que avanzábamos en las entrevistas.

De acuerdo con lo anterior, diseñamos un guion por agentes, el que principalmente se basó en las preguntas referenciadas anteriormente:

- Mujeres campesinas pertenecientes a la ANMUCIC y a las organizaciones campesinas mixtas – ANUC-UR.
- Hombres de las organizaciones campesinas mixtas ANUC-UR y FENSUAGRO
- Representantes de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.
- Funcionarios y funcionarias de las instituciones encargadas de diseñar e implementar las medidas relativas a los procesos de reforma agraria: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA.
- Funcionarias y funcionarios del Ministerio de Agricultura, en específico de quienes hicieron parte de la Oficina de Mujer Rural.
- Funcionarios y funcionarias de instancias de cooperación al desarrollo que apoyaron los procesos: Instituto Interamericano de Desarrollo Rural.

Se efectuaron un total de 20 entrevistas, 17 de estas se realizaron en Bogotá, 3 fueron realizadas en Valencia (España), dado que algunas personas claves en el proceso se encuentran actualmente exiliadas en esa ciudad. Además hicimos uso de entrevistas hechas por terceras personas, que sin pretender cumplir el mismo objetivo, que nos fijado en esta investigación, abordaron temas que nos ayudarían a concretar nuestra apuesta. Amablemente nos cedió, German Cardoza 4 entrevistas (líderes hombres del movimiento campesino de lucha por la tierra, lideresa de ANMUCIC, ex gerente del INCORA y funcionario del INCORA). También Magdalena León y Carmen Deere, nos concedieron parte de las entrevistas, llevadas a cabo a un grupo de mujeres de ANMUCIC en 1998.

Debemos aclarar que mediante las entrevistas, estábamos apelando a recuerdos, en este sentido consideramos, que muchas de los testimonios o los aspectos sobre los que hicieron referencia, estuvieron modelados por la serie de experiencias que vivieron estos agentes, posterior a la participación en los procesos de negociación, además han estado influenciados por una serie de dinámicas que influirían en las representaciones de género que ahora encarnan y que seguramente es desde donde estaban haciendo memoria.

Nombre	Organización u instancia a la que pertenecieron durante las negociaciones	Fecha entrevista
Leonora Castaño Cano	ANMUCIC	Enero 2014.
Aleyda Barreto	ANMUCIC	Octubre 2013
María Carvajal	ANMUCIC	Septiembre 2013
Emma Prada	ANMUCIC	Septiembre 2013
Anita Cantillo	ANUC-UR	Septiembre 2013
Matilde Mora Poveda	ANUC-UR	Septiembre 2013
Ángel Tolosa	ANUC- UR	Agosto 2013
Javier Orozco	Sindicato INCORA Funcionario INCORA	Enero 2014
Luis Carlos Acero	FENSUAGRO	Enero 2014
German Cardoza	Sindicato INCORA Funcionario INCORA	
Norma Villarreal	Ex funcionaria Ministerio de Agricultura	Octubre 2013
Fabiola Campillo	Ex funcionaria Ministerio de Agricultura	Octubre 2013
Diana Medrano	Ex funcionaria Ministerio de Agricultura	Octubre 2013
Liliana Melo	Ex funcionaria Ministerio de Agricultura	Octubre 2013
Pilar Zuluaga	Ex funcionaria INCORA	Octubre 2013
John Mateus	Funcionario INCORA	Noviembre 2013
Manuel Ramos	Funcionario INCORA	Noviembre 2013
Carlos Ossa Escobar	SAC Funcionario INCORA	Noviembre 2013
Myriam Gutiérrez	Funcionaria IICA	Septiembre 2013
Vladimir stland	SAC	Septiembre 2013

2. Marco teórico

Las representaciones sociales se han constituido, en las últimas décadas en un objeto importante de estudio, en el campo de varias de las disciplinas articuladas a las Ciencias Sociales. Esta cuestión está directamente relacionada con la utilidad que su abordaje brinda para el análisis de la realidad social, en la medida en que posibilita entender no solo las diversas maneras en que los sujetos explican, hacen inteligibles, ordenan y actúan sobre la serie de fenómenos que experimentan, sino también porque ayudan a reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento social y de la visión de mundo que las personas o grupos encarnan.

Tal como afirma Mato (2001, p. 133) al ser estas “formulaciones sintéticas de sentido, producidas por actores sociales como formas de interpretación y simbolización de aspectos claves de su experiencia social” su exploración nos conduce a discernir sobre los efectos que dichas construcciones tienen sobre la realidad social de los sujetos, en la medida en que se sitúan como guías y referentes de sus prácticas.

De acuerdo con lo anterior y bajo una perspectiva construccionista, el estudio de las representaciones sociales se sitúa como una vía también para atender a cómo las prácticas sociales, como resultado de las múltiples interacciones entre los sujetos (con base en unos referentes simbólicos y de sentido), las que se suceden en contextos y procesos históricamente situados, configuran la realidad y la modelan. Bajo esta lógica es factible hacer una lectura de estas (las representaciones) como hechos sociales, que a la vez que son producto de la realidad social, tiene efectos sobre ella.

Partiendo de la idea sobre que el sujeto no existe como un ámbito al margen del objeto y viceversa, sino que se constituye en el entrecruce de las dimensiones objetiva y subjetiva, en virtud de lo cual se produce permanentemente la realidad, el abordaje de las representaciones nos permite

comprender como la imbricación de estos dos ámbitos, juega un esencial papel en la producción de sentidos y significados sobre lo que los sujetos experimentan. Bajo estas consideraciones las representaciones nos remiten paralelamente a mundos objetivados (reglas, instituciones, normas, prácticas) y a mundos subjetivos (percepciones, visiones, interpretaciones).

En particular, el abordar las representaciones de género facilita el vislumbrar cómo los significados y sentidos que sobre lo femenino y lo masculino se producen y circulan en contextos específicos y momentos particulares, operan como estructurantes de la realidad de los sujetos, modelándolos al mismo tiempo. En este sentido el acercamiento analítico a estas, permite visibilizar cómo las creencias, valores, los supuestos ideológicos que cada sociedad ha edificado, en relación a las interpretaciones que se hace de la diferencia anatómica, se sitúan como referentes para la asignación diferenciada de características y roles sociales, la diferenciación de oportunidades y de expectativas.

En específico el uso de las representaciones de género como categoría de análisis para el presente estudio, contribuyó a la comprensión sobre cómo la serie de significados y sentidos sobre lo femenino y lo masculino, que encarnaron los agentes que han participado en el debate y formulación de la política de tierras en Colombia, intervienen no solo en la negociación que llevan a cabo dichos agentes, sino en el posicionamiento de los intereses que estos persiguen frente al acceso a la propiedad de la tierra y en los logros que alcanzan. De manera más precisa, su exploración ayudó a visibilizar sobre cómo las construcción y elaboraciones simbólicas que los agentes encarnan, sobre los roles de hombres y mujeres campesinos, han sido determinantes en el tipo de reconocimiento formal y de hecho, de su derecho a la propiedad de la tierra.

2.1 Aproximaciones al concepto de representaciones sociales

La apuesta conceptual, que se presenta a continuación, sobre las representaciones sociales, es el producto de un dialogo reflexivo entre los planteamientos que en el marco de diferentes disciplinas se han realizado sobre dicha categoría. Sí bien existe una consistente producción frente al tema, en este trabajo, nos remitiremos a las ideas desarrolladas en el campo de la sociología, de la psicología y de la antropología, por considerar que las propuestas hechas por estudiosos y estudiosas del tema, afiliados a estas disciplinas, nos aportan elementos para elaborar ajustadamente los referentes conceptuales de nuestro estudio.

Si bien son varios los matices que puede alcanzar su definición, de acuerdo al enfoque usado, las variadas propuestas convergen, en otorgarle una marcada importancia como elemento clave en los procesos de construcción social de la realidad. Esto es posible gracia a que estas: 1. Se constituyen en procesos de interpretación y simbolización de la realidad, los que se suceden en el marco de las interacciones entre los sujetos sociales en contextos particulares; 2. Adquieren tanto el carácter de proceso como el de resultado. Es decir estas además de ser manifestaciones concretas, corresponden al proceso que les da lugar; 3. Revisten un carácter construccionista. Estas siendo el producto de la interacción entre los sujetos, quienes están situados en una realidad específica, además modelan permanente el contexto del que provienen y a los sujetos mismos; 4. El ser producto de la conexión entre dos ámbitos del ser humano: la subjetividad y la realidad externa; y, 6. El papel de las representaciones como orientadoras de la acción social.

En cuanto a las divergencias, estas en primera instancia se suceden a nivel de las razones por las que convienen. Es decir, sí bien por ejemplo Durkheim y Moscovici (considerados a nivel de su disciplina como los principales exponentes de la teoría de las representaciones sociales), coinciden en apreciar a la interacción social como elemento clave en los procesos de

significación e interpretación de la realidad, para el primero el intercambio entre los sujetos sociales, se constituye en una vía para la circulación de las representaciones, en cuyo origen las personas no juegan un papel relevante. Por el contrario para Moscovici la interacción da lugar a las representaciones y los seres humanos juegan un importante papel en su producción.

En segunda instancia, las discrepancias, van marcadas por el énfasis que ponen autores y autoras, aun en el mismo marco disciplinar, sobre ciertos elementos o componentes de las representaciones en relación al enfoque teórico y metodológico al que se afilian o bajo el que realizan las lecturas de los procesos que estudian.

2.1.1 Representaciones y construcción social de la realidad

A nivel de la sociología, Durkheim (1898) es el primero en desarrollar una propuesta teórica sobre las representaciones a las que denomino colectivas. El autor considera a estas como una suerte de estructuras intersubjetivas de la conciencia, las que se configuran como resultado de la interacción de los sujetos (Lobato, 2009). En este sentido estas vendrían a ser una especie de rompecabezas, el que se ha ido montando, mediante la combinación u asociación de experiencias individuales, las que además han sido modeladas por la conciencia colectiva y de las que son su producto. Tal como se puede entrever en lo anterior estas “son producidas por las acciones y reacciones intercambiadas entre las conciencias individuales y, al mismo tiempo las sobrepasan” (Vera, 2002, p. 107).

Frente a lo anterior Durkheim (2011) es enfático en afirmar “que gran número de nuestros estados mentales, los más esenciales al menos, son de origen social” (p, 189) y por lo tanto no es posible concebir los componentes del gran engranaje que es la sociedad, sino se los entiende como el producto y reflejo de la conciencia colectiva, la que en si corresponde a “la comunión de una pluralidad de conciencias individuales en una conciencia común” (P, 197).

En este sentido a estas representaciones podríamos definir las como un conjunto de saberes sociales, es decir de maneras de explicar, clasificar y ordenar el mundo, que se producen gracias a la interacción de los sujetos, en momentos y situaciones específicas. Aunque sí bien se resalta sobre la importancia de la interacción, bajo la perspectiva durkheniana, su producción trasciende lo individual, porque estas corresponden a la serie de conocimientos acumulados a lo largo de la historia, los que además de producirse socialmente, instituyen este ámbito.

El carácter colectivo que les otorgado a estas, no solo se debe a que se instauran socialmente como referentes compartidos, sino también por el papel que cumplen en la cohesión y la regulación grupal. Así la existencia de representaciones colectivas, legitima la presencia de estructuras sociales, instituciones y normas, mediante las cuales, se individualiza lo colectivo y se colectiviza al individuo. En palabras del autor “Solamente, viniendo así a mezclar a nuestra vida individual, esos diversos ideales, se individualizan en sí mismos, en estrecha relación con nuestras representaciones, se armonizan con ellos, con nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros hábitos, etc.” (p. 198). En sí mediante la asimilación e interpretación/reinterpretación de las ideas y conceptos que devienen de lo grupal, lo sujetos se adhieren a lo colectivo.

Bajo la perspectiva propuesta estas se han clasificado en dos clases: los conceptos y los ideales (Plascencia, 2007). En cuanto a los primeros, los ubica como formas fijas de pensar, los que adquieren un carácter asentado por estar articulados lingüísticamente. Además se considera que estos son impersonales porque “no remiten a experiencias estrictamente personales sino a contenidos que los rebasan” (p. 43) y expresan lo que objetivamente son los hechos sociales, la realidad que viven y experimentan los sujetos.

En cuanto a los ideales, estos se definen como “aspiraciones colectivas” y su función es la de “transfigurar las realidades a las que se refieren”. Es decir se

constituyen en los referentes de valoración de los objetos, personas, hechos y dinámicas que atraviesan la vida de las personas y el grupo al que pertenecen. Estos pueden cambiar y transformarse y aunque a diferencia de los conceptos, no revisten un sentido universal, pueden adquirirlo de acuerdo a las posibilidades de su uso en escenarios específicos.

En lo referente a la función constitutiva, que Durkheim reconoce como rasgo principal de las representaciones (Beriaín, 1990), es de resaltar que estas al ser el envase de la serie de significados que históricamente se han construido, (como medio para explicar y hacer inteligible el mundo, los objetos, los hechos y las personas) mediante su existencia y circulación es cuando la realidad cobra sentido.

De acuerdo con esto, podemos decir que las representaciones cumplen un importante papel en la construcción social de la realidad. Estas al constituirse en referentes comunes y compartidos, que provienen del sentido común, un sentido común que se ha ido construyendo paulatinamente, posibilitan que la serie de fenómenos y dinámicas que los sujetos experimentan sean inteligibles para estos. Además de orientar la estructuración de la realidad, la afianzan y la reproducen. También estas son útiles en los procesos de objetivación de los hechos que suceden a nuestro alrededor.

Con el fin de desarrollar mejor las ideas anteriormente expresadas, apelamos a algunas de las propuestas de Berger y Luckmann (1968), desde las cuales podemos reforzar la idea propuesta por Durkheim sobre el papel que las representaciones cumplen en la estructuración de la realidad social de los individuos. Los autores recalcan cómo los diferentes aspectos de la vida cotidiana son constantemente interpretados por los sujetos. Este proceso se realiza con base en la serie de significados, que las personas han ido internalizando, es decir los que han ido asimilando e incorporando en su ser, a través de la interacción con otros.

Este proceso va dando lugar a “esquemas tipificadores”, los que se sitúan como mecanismos mediante los cuales se hace inteligible lo que está por fuera de los sujetos. Dichos esquemas, además de ser compartidos, son determinantes en la comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor y nos sirven como referentes para establecer relaciones con otros y para autodefinirnos. En este sentido la cotidianidad se configura como una realidad objetiva, la que tiene existencia concreta a partir de la puesta en escena de las subjetividades, es decir esta existe porque hombres y mujeres se la imaginan de esa manera y son quienes dotan de significado a las diferentes dimensiones que la componen. En este sentido, para los autores:

El mundo de la vida cotidiana se da por establecido como realidad por los miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones y que está sustentado como real por éstos (Berguer y Luckman, 1968, p. 39).

La historicidad de esa realidad hace que permanezca y que se colective a partir de la confluencia de las diversas capas de experiencia y las distintas estructuras de significado que intervienen, configurándose lo que se denomina “sentido común”. Cada capa de estas se constituye en una posibilidad de realidad, existiendo entonces múltiples posibilidades de esta, las cuales son complementarias de una realidad absoluta que es la “realidad de la vida cotidiana”. Es decir “una realidad ordenada que se presenta ya objetivada, o sea constituida por un orden de objetos, que han sido designado como objetos antes de que yo apareciera en escena” (p. 39). En este sentido un sujeto que hace parte de una colectividad “aprehende la realidad de la vida cotidiana como una realidad ordenada. Sus fenómenos se presentan dispuestos de antemano en pautas que parecen independientes de la aprehensión de ellos mismos y que se imponen.” (p. 39).

Por otra parte es de considerar que el caudal de significados, que los sujetos encarnan para darle sentido al entorno en el que desarrollan su experiencia vital, es lo que permite que lo que para alguien es real, se dé por sentado como tal. Así las representaciones contribuyen a que ese mundo me sea permanentemente familiar y su aprehensión se sucede bajo esta lógica. Además también cumplen un importante papel en la asimilación de cambios abruptos. Nuevas dinámicas y fenómenos producto de las diferentes transformaciones que puede enfrentar un grupo social, las que ponen en entredicho la objetividad, obligan a que los individuos reinterpreten los hechos, fenómenos y objetos que los rodean, aspecto en el que las representaciones cumplen un papel esencial porque permiten hacer inteligible lo extraño. A partir de lo conocido, es decir de los contenidos que se plasman en el sentido común, las personas se explican, asimilan y objetivan esos nuevos elementos de la realidad, es decir “la realidad de la vida cotidiana busca integrar el sector problemático dentro de lo que ya no es problemático” (Berger y Luckman, 1968, p. 42).

Además es de resaltar que las representaciones, al ser producto de la objetivación de la realidad, coadyuvan a su estructuración, en la medida en que al mismo tiempo que “la expresividad humana se manifiesta en productos de la actividad humana” (p. 52) se pone al alcance de los sujetos. En este proceso interpretaciones y significados están disponibles para ser usados permanentemente en la tarea de dar sentido al mundo que nos rodea. De esta manera “la realidad de la vida cotidiana no solo está llena de objetivaciones sino que es posible únicamente por ellas” (p. 53).

Tal como se expuso en párrafos anteriores, lo propuesto por Berger y Luckmann (1968) corrobora las propuestas durkhenianas, sobre el papel que cumplen las representaciones como instituyentes de la realidad. Estos autores, además nos ofrecen otros elementos para ampliar esta comprensión. Ellos nos instan a considerar que la eficacia de las representaciones en la configuración social de la realidad, es tal por el lenguaje.

Este al ser el mecanismo mediante el que se vehiculizan las interpretaciones, facilita la objetivación de la realidad. Además al constituirse en un sistema de signos, ayuda a que la realidad se institucionalice. En si lo que ocurre es una sedimentación y objetivación de las experiencias compartidas, las que se hacen accesibles a todos los que pertenecen a un grupo social a través de la interacción lingüística. Por tanto el lenguaje, se constituye en el medio por el que las interpretaciones de la realidad, se distribuyen colectivamente y se instalan en la conciencia de las personas.

Esta última idea, nos permite conectarnos con un aspecto, sobre el que resalta Durkheim (2011). Este autor especifica que las representaciones colectivas, existen independientes del sujeto, instalándose en los individuos a través de procesos que implican su puesta en circulación. En este sentido podríamos decir que el lenguaje bajo la perspectiva durkheniana, se situaría como uno de los mecanismos, mediante los cuales lo colectivo se individualiza.

Posteriormente y a nivel de la psicología social, se retoman críticamente algunos de los presupuestos acuñados por el sociólogo francés, sin embargo a nuestro modo de ver, en estas reformulaciones se conserva y por ende afianza la idea sobre la existencia de una estrecha relación entre las representaciones y la construcción social de la realidad. La novedad de las nuevas propuestas, es que se otorga al sujeto un papel protagónico en la producción de las interpretaciones sobre el mundo que lo rodea.

En este marco, principalmente Moscovici (1979, 1981) entre otros han desarrollado una serie de aproximaciones teóricas sobre las representaciones, a las que a diferencia de Durkheim le ha otorgado la connotación de sociales. Bajo esta perspectiva, se apuesta por una reformulación, en términos psicosociales del concepto de representaciones colectivas (Villarreal, 2007), que en palabras de Valencia (2007) se constituye en la base del desarrollo de nueva perspectiva de carácter psicosociológico, en el marco de la cual se van erigiendo las bases conceptuales y metodológicas para estudiar los fenómenos

sociales, su naturaleza y el papel que los sujetos (en sí la subjetividad) tiene en la configuración social de la realidad¹³.

De acuerdo con esta propuesta, en primer lugar las representaciones¹⁴ se constituyen en un producto directo de las interacciones entre sujetos. Sí bien como se observó en la propuesta durkheniana la interacción se constituye en un elemento importante en la construcción de interpretaciones sobre la realidad, la importancia de estas radica en que solamente es una vía para que lo colectivo se individualice.

Bajo esta consideración, la subjetividad aparece como una entidad ajena a la producción de símbolos y significados y en esta medida la interacción entre individuos se sucede solamente con base en la información y referentes que existen en el afuera. Por el contrario para Moscovici (y otros y otras que veremos más adelante), la relación entre individuos, al ser un proceso en el que se pone en escena la subjetividad, es determinante para la construcción de conceptos, creencias, nociones, reglas y explicaciones que un buen número de personas comparten en contextos determinados y los que dan forma a la realidad .

Así lo grupal, no existe a priori de los sujetos, sino que esta dimensión se va configurando en relación al intercambio permanente entre los individuos; y, además los individuos también se van configurando en la medida en que la realidad se estructura. En este sentido, las representaciones deben conceptuarse como producto de la intersección entre lo psicológico y lo social, reconocimiento mediante lo que se intenta:

¹³ El acento social que se reconoce a este concepto se asienta en el sentido que estas adquieren, no solo en la generación de procesos sociales, sino porque facilitan la interacción, es decir, tal como lo expone Araya (2002, p. 16) “en la medida en que se crea una visión compartida de la realidad y un marco referencial común, las representaciones sociales posibilitan, entre otros muchos procesos sociales, el proceso de las conversaciones cotidianas”.

¹⁴ Tal como se dijo antes, a lo largo de este capítulo solamente aparecerá representaciones, pero en si estamos aludiendo a las representaciones sociales.

Restituir en la psicología social la conciencia de lo social, aportando los medios para comprender la vida social desde una perspectiva psicológica. Este tipo de perspectiva es un prerequisite necesario para entender la influencia de las relaciones sociales en los procesos psicológicos (Duveen y Lloyd, 2003, p. 29).

Bajo esta lógica, el sujeto no es un ente pasivo o una instancia que reproduce y pone en circulación de manera indiferente las comprensiones comunes del mundo, lejos de esto se constituye en un dispositivo que crea y reproduce la realidad que lo circunda, a través de las comprensiones que pone en circulación en el día a día; y, a través de las relaciones cara a cara. Es importante resaltar que en tal proceso, el bagaje que instituye al individuo como tal, juega un papel vital, porque es desde dicho repertorio que se construye y reconstruye la realidad. Este planteamiento aleja definitivamente las propuestas acuñadas en el marco de la psicología social, de las planteadas por Durkheim, quien como vimos considera al sujeto un ente sin mucho poder en la construcción de las representaciones y por ende de la realidad que lo rodea.

En este sentido las representaciones podrían ser consideradas en primera instancia como una “modalidad particular del conocimiento”, la que se plasma en el sentido común y que además media en la “elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos” (Moscovici, 1979, p. 17-18). En segundo lugar deben ser comprendidas como “un sistema de referencia que permite dar significado a los hechos”. Por ende estas se constituyen en la base desde la cual podemos hacer una lectura de la realidad y construir las explicaciones que requerimos para entender lo que observamos y vivimos, pero también para referenciar y soportar las acciones que cotidianamente llevamos a cabo.

Similar postura podemos observar en la propuesta de Berger y Luckman (1968) quienes plantean que el caudal de significados y sentidos que devienen de la interacción entre sujetos y de la experiencia cotidiana, se van poco a poco

sedimentando en saberes desde las cuales se define e institucionaliza el ser y deber de la realidad y de los sujetos. En este sentido podemos entrever que las representaciones, como maneras particulares de conocer y actuar, van asentándose en la rutina del día a día, hasta llegar a configurarse como universos simbólicos que operan de forma significativa en lo que se ha denominado como sentido común.

En esta lógica y para comprender mejor la relación entre las representaciones y la construcción social de la realidad, es clave apelar a las tres dimensiones, que Moscovici (1979) ha identificado como componentes de estas: Información, campo de representación y actitud. La primera corresponde a la “suma de conocimientos”, explicaciones, nociones, referentes que un grupo tiene acerca de la realidad o de un objeto social. Es decir atañe al cumulo de significados que los individuos, a través de la interacción y de manera histórica, han ido produciendo para darle sentido a su vida cotidiana. Estos al ubicarse como la base del sentido común, se constituyen en recursos, que al estar disponibles de manera permanente facilitan la aprehensión de la realidad.

La segunda dimensión, es decir el campo de la representación, es la relativa a la organización jerarquizada, que hacen los grupos sociales y los individuos, de los conocimientos, de acuerdo al “contenido, las propiedades cualitativa o imaginativas” (Mora, 2002, p. 79). Este proceso “remite a la idea de imagen, de modelo social, al contenido concreto y limitado de las proposiciones que se refieren a un aspecto preciso del objeto de representación”. Podríamos decir que corresponde a la construcción de esquemas de tipificación, los que al ser el resultado de la organización de la información en pautas, no solo permiten que la realidad se visualice como algo coherente, sino que además orientan la producción de información sobre dicha realidad. Similar postura podemos encontrar entre Berger y Luckmann (1968), quienes proponen que gracias a la interacción permanente se van configurando “esquemas tipificadores”, los que sirven de patrones, no solo para interpretar la realidad, elaborar símbolos que den cuenta de este, sino también actuar.

En cuanto a la dimensión denominada actitud, esta corresponde a las sensaciones, reacciones y emociones que generan los contenidos y que permiten que los sujetos tomen posición y actúen en coherencia con dicha posición (Moscovici, 1979). Las reacciones que los sujetos tienen frente a lo que sucede en su entorno, ayudan a afianzar la serie de significados, que dan sentido a lo que nos sucede.

Además bajo la perspectiva moscoviana, las dimensiones referidas tienen sustento en los procesos de objetivación y anclaje. La objetivación corresponde al proceso de selección y descontextualización de elementos hasta “formar un núcleo figurativo que se naturaliza enseguida” (Mora 2002, p 100), es decir la configuración de un corpus de símbolos, significados e imágenes mediante los que sea posible explicar lo que sucede en el entorno y hacerlo inteligible. En palabras de Mora “La objetivación lleva a hacer real un esquema conceptual, a duplicar una imagen con una contrapartida material” (p 102). Es decir comporta la construcción de un modelo o esquema, el que tendrá como función mediar entre la realidad y el sentido común, es decir el de configurarse como un marco cognoscitivo, que a su vez orientará las explicaciones, nociones u otras que se construyan para dar cuenta de la realidad.

Moscovici (1981) en coherencia con las propuestas de Jodelet (1986), considera que el proceso de objetivación por un lado posibilita que los símbolos (incluyendo la palabra como tal) se acoplen a los objetos (personas, cosas, hechos) y en este proceso no solo se nominan e identifican, sino que también se los representa y se les dota de sentido. Mediante esto “lo abstracto como suma de elementos descontextualizados debe tornarse una imagen más o menos consistente en la que los aspectos metafóricos ayuden a identificarla con mayor nitidez, a reconocerla en el plano social” (Bruehl, 2008, p. 22). A lo anterior se denomina esquema figurativo, es decir el proceso mediante el cual, lo abstracto adquiere realismo.

En sí lo que sucede en el marco del esquema de figuración, es que se mezclan muy superficialmente las experiencias y las estructuras simbólicas, como una forma de dotar de realismo, a lo que en principio no tiene explicación o no es posible asimilarlo. Así “la imagen es objetivada junto con una carga de afectos, valores y condiciones de naturalidad. Los conceptos así naturalizados se transforman en auténticas categorías del lenguaje y del entendimiento” (p. 24).

En cuanto al anclaje, este marco cognoscitivo, posibilita que las representaciones adquieran sentido en el seno de la colectividad, es decir que además de ser compartidas se constituyan en recursos útiles para hacer inteligibles los diversos fenómenos que atraviesan la realidad y además como base de referentes que los individuos crean para definir y modelar su actuar. Por lo tanto estas se constituyen en:

Un sistema generador de significados consensuales que permiten el reconocimiento y la transformación de lo que es nuevo, extraño en un elemento familiar y predecible a través de procesos de clasificación y de asignación de nombres que pasan a integrar categorías y etiquetas (Bruehl, 2008, p. 33).

Por su parte Jodelet (2006), reconoce que en el marco del proceso de anclaje, las representaciones cumplen con tres funciones: 1. Una función cognitiva de la integración de la novedad, es decir que el objeto o hecho observado, es asimilado por los sujetos e integrado en su psiquis; 2. Una función de interpretación de la realidad, mediante la cual las personas hacen inteligible y asimilan la representación como un referente familiar y compartido; y, 3. La función de orientar las conductas y las relaciones sociales. Los referentes se concretan y se constituyen en la guía natural de las acciones.

De acuerdo con lo anterior tanto la objetivación como el anclaje, son procesos que están determinados, en gran medida, por la situacionalidad del sujeto, es decir por su experiencia histórica, su identidad (cultural, genérica y etaria), por

su ubicación en estructuras de poder y de clase. Variables que condicionan en gran medida la producción de estas, su contenido y funcionalidad.

A nuestro modo de ver los conceptos referenciados cobran relevante importancia, cuando son leídos bajos las propuestas de Berger y Luckman (1968). Para los autores los procesos de clasificación que los sujetos hacen del mundo y los diferentes ámbitos que lo componen, de acuerdo a su experiencia rutinaria, conllevan a un grado de objetivación significativo de la realidad. Es decir toda acción de representarse el mundo y de actuar en concordancia a esto, al ser cuestiones sujetas a la habituación, da lugar a la creación de pautas, que son aprehendidas como tales por los sujetos, quienes las ejecutan permanentemente ratificándolas como tales.

Este proceso es denominado por los autores, como institucionalización de los sentidos y significados que proceden del ordenamiento y que se constituyen en la base de los hábitos. Mediante estos y su uso frecuente, es factible continuar con la objetivación de la realidad, es decir con su ordenamiento y tipificación.

Bajo esta lógica la tipificación da lugar a totalidades simbólicas o lo que los autores denominan universo simbólico. En este nivel la realidad se ubica dentro de una totalidad significativa, desde la que se los explica y se justifican. Esta totalidad es compartida, por los miembros de una sociedad, quienes al compartir los contenidos de dicho universo, se conciben como parte de una comunidad o colectividad.

Por otra parte es de resaltar que Moscovici y Jodelet coinciden con la propuesta de Berger y Luckmann en la medida en que le otorgan importancia del lenguaje como mecanismo que conecta a las representaciones con la realidad. Bajo esta perspectiva la articulación entre lo individual y lo social se sucede a través de este. Es decir la serie de comprensiones que los sujetos tienen de la realidad, aportan a la construcción de sentido, cuando se vehiculizan a través de las representaciones. Poner en circulación, a través del

lenguaje, o de otras formas de simbolización, a estas, se constituye en el mecanismo clave para la fabricación del mundo. En esta vía se piensa que el lenguaje o cualquier manifestación comunicativa van a contribuir a la producción, reproducción y mantenimiento de significados compartidos.

Lo anterior nos permite recalcar sobre la importancia que tiene la intersección entre lo subjetivo y lo objetivo, cuestión que es clave en la producción de las representaciones y también de la realidad. El énfasis puesto en lo objetivo, tal como se plasma en las explicaciones precedentes, nos obliga a que necesariamente debamos reflexionar sobre la dimensión subjetiva de su producción. Para ello apelamos a la explicación acuñada por Jodelet (1986, p. 50) en el marco de lo la autora denomina “las tres esferas de pertenencia de las representaciones sociales”: “la de la subjetividad, la de la intersubjetividad y la de la trans – subjetividad”.

Con respecto a la primera esfera los procesos de representación operan a través de los mismos individuos, es decir estos son quienes se apropian, asimilan, construyen y reconstruyen las representaciones. Dichos procesos están mediados por lo cognitivo, lo emocional y la situacionalidad del individuo. De acuerdo con esto, el sujeto juega un doble papel. Por un lado cumple con un rol activo en la elaboración de las representaciones; y, por otro las integra pasivamente, es decir se constituye en un receptáculo neutral de lo que otros y otras han representado. En este sentido las representaciones, reflejan el significado que personalmente un individuo crea y tiene sobre objetos y hechos localizados en su entorno social y material, los que están “articulados a su sensibilidad, sus intereses y sus emociones, así como también al funcionamiento cognitivo” (p. 52).

En cuanto a la esfera de la intersubjetividad, las representaciones expresan los significados que se construyen producto de la interrelación de los sujetos “especialmente las elaboraciones negociadas y producidas en común a través de la comunicación verbal directa” (p. 52). De esta manera la interacción se

constituye en un proceso clave para la construcción de nociones compartidas sobre diversos asuntos del mundo de la vida. Bajo esta perspectiva los sujetos interactúan desde las representaciones que encarnan, las que intervienen como medios de comprensión, interpretación y de construcción de significados comunes.

Por último, en relación a la trans – subjetividad, mediante esta se alude a la conjunción de los componentes subjetivo e intersubjetivo, “Su escala abarca tanto a los individuos y a los grupos, como a los contextos de interacción, las producciones discursivas y los intercambios verbales” (p. 53). Esta esfera remite a todo lo que es compartido por los miembros de un colectivo o grupo social. En este punto, la autora parece estar en sintonía con la propuesta de Bourdieu sobre clase social y capital, al considerar que un grupo se reconoce como tal, en la medida en que comparte una serie de nociones y creencias sobre el deber ser del mundo que los rodea y de los sujetos mismos, las que se han configurado en relación a la posición de los individuos en una estructura social y de poder. De acuerdo con lo anterior es posible entrever que la comunalidad puede ser el resultado del:

Acceso al patrimonio de recursos proporcionados por el aparato cultural para la interpretación del mundo, el cual proporciona los criterios de codificación y clasificación de la realidad, los instrumentos mentales y los repertorios que sirven para construir significados compartidos, y constituye la retro-escena que permite la intercomprensión (p. 54).

En relación a lo anterior podemos discernir cómo la subjetividad comienza a entenderse no solo como “fenómenos exclusivamente individuales, sino como espacios importante de cualquier fenómeno social” (Bourdieu, 2000a, p. 225) y en este sentido las representaciones evidencia “la producción de subjetividad social”. Esta última vendría a ser el locus donde se aloja lo social y lo individual, configurándose simbólica y emocionalmente en la experiencia histórica del individuo.

Bajo el anterior argumento, podemos decir que los seres humanos instituyen su experiencia en los diferentes ámbitos del mundo de la vida, aspecto que les permite un posicionamiento activo o no en relación ante las diferentes situaciones que viven y enfrentan. La producción de sentido y las múltiples maneras que este puede tomar, es un aspecto que se sucede en relación “a la constitución histórica en el nivel subjetivo, de las diferentes actividades y relaciones significativas en la constitución del sujeto” (p. 174).

2.1.1.1 Las críticas a las propuestas esbozadas

Hoy la producción teórica sobre las representaciones tiene más de 50 años. Esta comienza a ser prolija posterior a los años sesenta del siglo pasado, principalmente gracias a los desarrollos conceptuales que frente al tema se hicieron en el campo de la psicología social. Sí bien, Durkheim, pretendió la ubicación de las representaciones colectivas, como una de las principales categorías de análisis en la sociología, solo es hasta que el concepto es acogido y reinterpretado por Moscovici y otros y otras, es que comienza una apuesta consistente por su estructuración.

En la actualidad, el concepto no solo ha sido desarrollado ampliamente en el campo de la psicología social, también desde diferentes perspectivas y disciplinas se ha realizado un importante esfuerzo por construir marcos explicativos desde los que atender la complejidad que dicha categoría trae aparejada. En este sentido, se puede decir, siguiendo a Bangerter, Eicher, Emery, Gilles, y Maridor (2011) que en la última década las propuestas revisten una connotación más interpretativista, que explicativa.

Frente a esta apreciación, las autoras afirman que en las primeras elaboraciones sobre el tema, las propuestas versaban sobre conceptos claros y sin ambigüedad, llamando a reglas estrictas y estudiando fragmentos concretos de la realidad. Sin embargo, este tipo de acercamientos ha sido altamente

cuestionado, dada la poca apertura a considerar otros moldes para análisis y la utilidad de estos para darle una mayor estructuración al concepto.

En este sentido en el marco de una tendencia interpretativista, los planteamientos conceptuales que han surgido son más fértiles y existe un esfuerzo por capturar las variaciones entre contextos y realidades; además concurre el deseo de posicionar un entendimiento sobre el dinamismo que encierran las representaciones sociales y la importancia de las dimensiones dialógicas, culturales y antropológicas en la producción y circulación de estas. De acuerdo con esta presunción, es posible comprender que las representaciones tienen un carácter volátil y además están supeditadas a la transformación constante (Marková, 2006, p. 430).

Lo anterior ha implicado además el entrecruce de perspectivas, para que desde lo interdisciplinario sea factible abordar la producción de representaciones. Esta cuestión visibiliza un desmarcamiento de las teorías psicológicas sociales, las que se consideraban como el recurso explicativo privilegiado (Bangerter Et al. 2011).

Retomando los cuestionamientos sobre los planteamientos acerca de las representaciones sociales, que han emergido en el campo de la psicología social, es de resaltar los que se esbozan en el marco de la psicología discursiva británica. Frente a esto, Howarth y Volklein (2005) especifican que las críticas sobre todo se han centrado en: las ambigüedades teóricas que revisten las propuestas, el acento desmedido que se pone en lo social, el reduccionismo cognitivo y la falta de una agenda crítica.

Con respecto a la primera, es decir las ambigüedades teóricas, las autoras recalcan cómo, principalmente las propuestas de Moscovici, han sido duramente discutidas por considerarse demasiado amplias y vagas, fragmentadas y en ocasiones discordantes. Además observan como en los planteamientos del autor (Moscovici), no es posible entrever una apuesta por

construir una teoría de las representaciones, sino por estructurar un concepto en la búsqueda de una teoría.

Además sostienen cómo la falta de precisión conceptual conduce a que dicha categoría sea usada sin mayores elaboraciones en diversos campos. Con el fin de ratificar esta apreciación, las autoras citan a Jahoda (1988), quien critica cómo la poca rigurosidad en la elaboración conceptual conduce a que constantemente se traslape este concepto con otras categorías tales como la de sentido común, ideología o cultura.

Otro de los cuestionamientos sobre el que llaman la atención Potter y Wetherell (1987) corresponde con la sobrevaloración de lo social en la construcción de las representaciones, cuestión que implica una negación de la capacidad humana de la reflexividad. En específico lo que se ubica como debatible, es la pasividad de los agentes y con ello la negación de la capacidad del sujeto para romper con el horizonte de las representaciones sociales, cuestión que como vimos si intentó Jodelet (1986) en sus planteamientos.

Bajo nuestra consideración, esto revela que a la final no existió un tajante alejamiento de las propuestas de Durkheim y en conclusión “la teoría presenta la representación social como un proceso en el que cada mente se infiltra con las mismas imágenes y las explicaciones y por lo tanto las personas llegan a desarrollar una visión consensuada de la realidad”¹⁵ (Howart y Volkleim, 2005, p.12). En este sentido el énfasis puesto en lo social implica la desestimación del carácter dialógico o conflictivo que permea la producción de las representaciones sociales.

En tercer lugar, como se dijo antes, los debates además se centran en el reduccionismo cognitivo que encarna dicha categoría. Potter y Wetherell (1987) resaltan sobre el peso que le es otorgado a lo cognitivo en la producción de las representaciones, cuestión que principalmente se explica por la alusión

¹⁵ Traducción del inglés al español realizada por la autora.

desmedida a los procesos psicológicos como ejes de la configuración de los sujetos y de la realidad social. En la medida en que Moscovici propone el anclaje y la objetivación como los dos procesos psicológicos fundamentales que, cae en el error de creer que la elaboración de las representaciones es una cuestión puramente cognitiva y no que corresponden a hechos sociales, culturales o ideológicos (Jodelet, 1986).

Por último al hacer alusión a la no existencia de una agenda crítica las autoras llaman la atención sobre cómo en el marco de las propuestas de Moscovici, las representaciones sociales no se conciben como un producto también de la resistencia frente a la dominación. En esta medida no se cree en la capacidad que tienen los individuos de resignificar las interpretaciones y comprensiones del mundo y de ser capaces de usar estas para desarticular los procesos de dominación. De acuerdo las autoras Howart y Volkleim (2005, p 21) “Una aproximación crítica a las representaciones sociales obviamente necesita una comprensión más clara de la ideología”; y, de cómo a través de esta se instauran y mantiene privilegios para algunos y exclusiones para otros.

2.1.2 Cultura, representaciones y construcción social de la realidad

A diferencia de la sociología, en el marco de la antropología las representaciones sociales no alcanzaron el estatus de una de las principales categorías de análisis, sin embargo podemos aludir a varios conceptos y propuestas que tienen similar connotación que el de representaciones sociales.

En concreto en el ámbito de la antropología simbólica, Geertz (1994), pone especial énfasis en los símbolos por considerarlos importantes en la configuración de las visiones y percepciones de la realidad y en las acciones de los individuos¹⁶. Estos están embazados en la cultura como sistema, la que bajo la perspectiva del autor se ubica como una estructura “de significación

¹⁶ En palabras de Ortner (1982, p. 2) las preguntas eje de las apuestas del autor, son por “¿Cómo los símbolos modelan las maneras en que los actores sociales ven, sienten y piensan acerca del mundo, o, en otras palabras, cómo los símbolos operan como vehículos de “cultura”?”.

socialmente establecida en virtud de la cual la gente hace cosas”, así esta se considera “puro sistema simbólico”, una trama de estructuras de significación, una “multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o entrelazadas entre sí” (Geertz, 2003, p. 24). Estas además de ser tejidas por los sujetos sociales, producto de la interacción, se constituyen en el soporte de lo que la gente hace y de cómo interpreta lo que le sucede.

Bajo esta perspectiva dicho entramado simbólico, no tiene otra función que, la de regular la conducta humana, argumento que se fundamenta bajo dos ideas. En primer lugar, esta corresponde a “una serie de mecanismos de control” del comportamiento individual y colectivo. En segundo lugar el ser humano depende en gran medida de estos “programas culturales para ordenar su conducta”. En este sentido al ser la cultura concebida de esta manera, esta “suministra el vínculo entre lo que los hombres (y las mujeres)¹⁷ son intrínsecamente capaces de llegar a ser y lo que realmente llegan a ser”.

Las representaciones en el sentido anterior se constituirían entonces en parte de ese entramado y mediante ellas se regularía la comunicación, el comportamiento e interacción de los sujetos. Al hacer parte de dicha estructura, estas se sitúan como elementos clave para que los individuos, como parte de una colectividad y en el marco de la interacción, comprenden lo que sucede a su alrededor e integran dicha comprensión en sistemas morales preexistentes, dando lugar a estrategias (tanto comunicativas como no), cuyo cometido es el ordenamiento de lo social.

De acuerdo a lo anterior las representaciones al ser programas de percepción y al constituirse en una serie de mecanismos de control, se constituirán en guías para la acción e instrumentos para la inteligibilidad del entorno. Si consideramos a estas como formas de pensar y crear la realidad social, estarán compuestas por “elementos de carácter simbólico ya que no son sólo

¹⁷ Geertz en general hace referencia solo a los hombres.

formas de adquirir y reproducir el conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad social” (Geertz, 2003, p. 43).

Bajo esta perspectiva las representaciones, además de ser símbolos, están conformadas por estos, constituyéndose en la vía principal de la significación, es decir en la expresión directa de lo “que los actores sociales ven, sienten y piensan acerca del mundo” (Ortner, 1982). En este sentido al ser parte de dicho entramado, se constituyen en esquemas históricamente producidos y se originan como “modalidades particulares del conocimiento”, las que tienen sus características propias y funcionalidades específicas de acuerdo al momento y contexto en el que surgen.

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que estas se constituyen en los medios y formas para transmitir lo que Araya (2002, p 33) ha denominado el “fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de su historia”, es decir “las creencias ampliamente compartidas, los valores considerados como básicos y las referencias que conforman la memoria colectiva y la identidad de la propia sociedad”. Al hacer referencia a la cultura, como un aspecto de la realidad que condiciona la producción y reproducción de las representaciones, estamos hablando de un “trasfondo simbólico” en el que se ancla la producción de estas. Este se constituye en el “escenario” en el que se mueven y posicionan los sujetos y, es el que además abastece permanente de contenidos de las comprensiones que hacen los sujetos del mundo que los rodea. La información que suministra y deviene de aquel trasfondo facilita la “normalización” de los hechos que enfrentan los individuos y hace que la realidad se vuelva familiar e inteligible.

En relación a lo dicho, los códigos culturales compartidos se constituyen en los referentes, desde los que se construyen las representaciones y desde lo que se facilita su objetivación y el anclaje. El conjunto de creencias, valores, actitudes, normas y tradiciones, que un grupo social ha construido y tiene como referentes, se instituyen en factores claves para que los individuos enfrenten y

den sentido a las situaciones cotidianas y, además facilitan la clasificación de la información que se recibe del entorno y de la organización jerárquica, que se hace de esta, de acuerdo a sus necesidades particulares (Elejabarrieta,1995).

En este sentido los contenidos culturales son la base de conjunto de procedimientos, métodos y técnicas mediante las cuales los sujetos operan en la vida social, cultural y política. En sí, se trata de estilos y tipos de significados, que permean e imbuyen los comportamientos y que resultan fundamentales en los procesos sociales, políticos, económicos y culturales, que atraviesan la vida de los sujetos.

En conexión con lo establecido, consideramos que todos y todas, en el marco de contextos culturales específicos, compartimos una serie de sentidos y significados que hacen posible las “transacciones interpersonales”. El conjunto de estos se plasman en las representaciones y en esta medida estas adquieren la capacidad de ser mediadoras entre los contenidos culturales y las prácticas sociales. Así los primeros se constituyen en esquemas, que mediante las representaciones, hacen posible nuestra negociación con el mundo que nos rodea.

2.1.2.1 Convergencias y divergencias entre las propuestas

Como sabemos las representaciones sociales es sobre todo un concepto construido en el marco de la psicología social, por el contrario en el marco de la antropología es la cultura el concepto que se sitúa como el principal eje de reflexión. Esto aparentemente debería suponer diferencias insoslayables entre uno y otro concepto, sin embargo encontramos algunas similitudes. Por ejemplo, cuando Moscovici (1989, p. 12) establece que estas “equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales”, parece estar hablando directamente del concepto de cultura tal como lo planteó en su momento Taylor (Geertz, 2003), quien la conceptúa

como una “totalidad compleja” la que abarcaría creencias, costumbres y cualquier otro hábito de una sociedad¹⁸.

En cuanto a las propuestas de Geertz (2003), podemos encontrar bastantes similitudes con las de Moscovici. En primera instancia es de resaltar la coincidencia en que los autores, le otorgan a los conceptos que trabajan, una facultad reguladora. El primer de estos nos conmina a considerar que la cultura por sobre todo es un mecanismo ordenador, porque reviste un carácter público¹⁹. En este sentido, todas y todas aprehendemos y usamos un código común, el que es funcional en contextos específicos, gracias a la interacción.

Por su parte, Moscovici (1989) concibe a las representaciones como esquemas mentales o modelos de conocimiento, que abarcan, entre otras funciones, la de regular la comunicación, el comportamiento e interacción de los sujetos. Mediante la objetivación y el anclaje, los individuos, como parte de una colectividad y en el marco de la interacción, comprenden lo que sucede a su alrededor e integran dicha comprensión en sistemas morales preexistentes, dando lugar a estrategias (tanto comunicativas como no), cuyo cometido es el ordenamiento de lo social.

Otro elemento de convergencia es la importancia que le dan a los símbolos. Estos se constituyen en la vía principal de la significación. Este planteamiento no solo trae aparejada una noción operativa sobre estos, pues más allá de considerarlos meros vehículos del significado se contemplan, en el marco de un sistema como “formulaciones tangibles de ideas, abstracciones de la experiencia fijadas en formas perceptibles, representaciones concretas de ideas, de actitudes, de juicios, de anhelos o de creencias” (Ortner, 1982, p. 86).

¹⁸ Su perspectiva además de ser holística se inscribe en el marco del evolucionismo y según Geertz (1994, p. 53) refleja el convencimiento de la continuidad entre el “progreso biológico y el progreso cultural”.

¹⁹ Entendiendo que dicho rasgo no está relacionado con el tipo de espacio (público y privado), sino con la adquisición de una serie de códigos que a todos y todas, además de permitirnos interactuar, nos sirven para actuar.

Por otra parte, es de considerar que tanto las representaciones como la cultura se constituyen en esquemas históricamente producidos y se originan como modalidades particulares del conocimiento, las que tienen sus características propias y funcionalidades específicas de acuerdo al momento y contexto en el que surgen. En relación a este aspecto, tanto Geertz como Moscovici, le otorgan una importancia relevante al concepto de sentido común. Tal como se expuso, en párrafos anteriores, para este último las representaciones surgen del cruce entre el conocimiento lógico, científico podría decirse y el conocimiento de la vida cotidiana (aspecto conceptuado como sentido común).

Dicho entrecruce produce una manera particular de imaginarse, apreciar y construir el entorno inmediato, la que está condicionada por factores de carácter histórico. En cuanto a Geertz (2003, p. 96), considera que la cultura, es decir el conjunto de significados que los individuos construyen de manera interactiva, son el resultado de una amalgama entre la perspectiva objetiva de la realidad “y la sabiduría coloquial, mundana, los juicios y aseveraciones basados en ésta”, a lo que el autor denomina también como sentido común.

Otro punto que puede ser de parcial coincidencia entre los autores citados, es el relativo a la importancia de la interacción de los sujetos tanto para la construcción, reconstrucción y reproducción de las representaciones como de la cultura. Uno y otro, no pueden entender, que la existencia de la realidad devenga de una esencialidad que todos poseemos y que la interacción se limita a ser un vehículo para dicha esencialidad.

Por el contrario se sitúan en una perspectiva bajo la que se consideran, que el encuentro e intercambio permanente entre los sujetos, es la condición para la existencia de las representaciones y el conjunto de significados y símbolos que componen a la cultura. Además coincidentemente establecen que la producción de una y otra (representaciones y cultura) se constituye en proceso de doble vía. Por un lado estas son el resultado de la interacción, pero también

al circular, además de mediar en la interacción, inciden en la configuración de la realidad de los sujetos.

Sin embargo, en el marco de esta apreciación, es posible entrever un punto de distanciamiento entre Geertz y Moscovici. Para el primero, el entramado de símbolos, que es la cultura, son públicos por excelencia, es decir se producen en escenarios y espacios donde los sujetos tienen comunalidad, aspecto en el que la subjetividad no tiene mayor peso. Para este autor, las reflexiones y acciones que realizan las personas en contextos concretos y bajo el condicionamiento de dinámicas históricas, dependen de la “manipulación de ciertas clases de recursos culturales” con los que se cuenta (Geertz 2003, p. 79). En sí hombres y mujeres echan mano de un repertorio de símbolos y significados que todos y todas conocen porque su construcción deviene de la interacción. Jamás los ubica como un constructo cognitivo, sino como la serie de esquemas culturales, de los que los individuos se han apropiado para regular su conducta y vivir en el mundo de la vida.

Por el contrario Moscovici cuando invoca lo individual, está llamando la atención sobre los contenidos que permanecen en el ámbito psíquico de los individuos y que inciden también en la producción de lo social. Este ámbito también, bajo la perspectiva del autor, ha sido moldeado por lo social, pero mantiene cierta autonomía. En este sentido la aprehensión de la realidad, mediante la interacción, es un proceso influenciado, en gran parte por la configuración subjetiva.

Frente a este desencuentro entre Moscovici y Geertz, Pardo (2013) establece que uno y otro concepto, deben ser entendidos como producto y base de estructuras socio – cognitivas públicas. La autora considera, que mediante esta comprensión es posible sortear el conflicto. Establece que esta presunción no la propone tanto por homologar conceptos, sino para hacernos entender que cada una ha sido acuñada y desarrollada por sus representantes, en marcos disciplinares diferentes, situación que ha implicado un énfasis de ciertos

elementos sobre otros. Además, Pardo nos propone pensar que una y otra, se constituyen en modelos de conocimiento, que integran tanto lo cognitivo (esquemas, guiones, planes) como lo social (interacciones, formas de coexistencia). En este sentido tanto representaciones como cultura pueden ser entendidas como “estructuras socio-cognitivas compartidas”, en las que se cristalizan “objetos sociales”.

2.1.3 Representaciones desde la perspectiva bourdiana

A lo largo de la obra de Bourdieu, no es factible encontrar un significado concreto sobre las representaciones. Sin embargo es posible intuir el concepto de dos maneras. En primera instancia cuando específicamente habla de las representaciones sociales y su importancia en la construcción de la identidad étnica. Y, en segunda instancia, estas como parte del habitus.

Con respecto a la primera propuesta, podemos encontrar planteamientos concretos sobre el concepto, en un texto denominado “Identidad y Representación” (Bourdieu, 1991, p. 223). En este el autor distingue dos modalidades de representaciones. Por un lado enfatiza su carácter mental es decir como “actos de percepción y apreciación, de la cognición y de reconocimiento”; por otro les otorga un carácter objetivo, denominándolas “representaciones objetivadas”, es decir el sentido y significado plasmado en algo material en las cosas, las que “funcionan como signos, emblemas o estigmas, y también como potencias”. Una y otra se perciben como interconectadas.

Bourdieu, en el texto, además establece que el relacionamiento entre las representaciones y los procesos de construcción identitaria, emerge porque, en la definición de rasgos que permiten la distinción entre unos y otros sujetos (y por ende el reconocimiento de derechos, por ejemplo territoriales), está implícita una “lucha en torno a las clasificaciones”, que a la final es una disputa por ubicar las representaciones legítimas sobre la realidad y sobre los sujetos mismos.

En este sentido las representaciones son funcionales y surgen cuando se da un enfrentamiento entre agentes “por el monopolio del poder” para crear la realidad que la gente ve y cree; y para imponer la “legítima definición de las divisiones del mundo social” (p. 223). En este sentido “los agentes buscan poner estas clasificaciones al servicio de sus intereses materiales o simbólicos”, para conservarlos y transformarlos.

Además a las representaciones sociales, el autor les otorga una eficacia específica que deviene de su capacidad de evocación. Este carácter nemotécnico está relacionado con la necesidad de los agentes de naturalizar lo que no tiene un origen natural. Es decir la urgencia de aludir a un origen o a unas especificidades especiales para apelar a la distinción y para situar unos referentes que permitan recordar que tal origen fundamenta la existencia del grupo y su reconocimiento.

Tal como se especificó al comienzo, el concepto de representación, en la obra de Bourdieu está aparejado al concepto de habitus. Piñero (2008), de acuerdo con el autor, propone pensar a estas como un elemento que se configura en relación a los habitus; y, que además revisten el poder de incidir en su conformación. Al considerar que estos se definen como un “sistema de disposiciones duraderas, que funcionan como esquemas de clasificación” (Rizo, 2006, p. 1), entonces revisten la capacidad de orientar y ordenar las valoraciones, percepciones y acciones de los sujetos, es decir las maneras como las personas interpretan y hacen inteligible la realidad en la que se encuentran inmersos.

La anterior apreciación puede ser ampliada, teniendo en cuenta que los habitus además constituyen las representaciones que los agentes encarnan, en la medida en que estos corresponden a una serie de estructuras socialmente estructuradas (“porque implica el proceso mediante el cual los sujetos

interiorizan lo social” (p. 1) y estructurantes (“porque funciona como principio generador y estructurador de prácticas culturales y representaciones”).

Así las interpretaciones que los agentes hacen de la realidad y cuando actúan sobre ella, tienen correspondencia con los contenidos que devienen de dichas estructuras. Además al incumbir con dichos contenidos, tienen la capacidad de ampliar o modificar el habitus, a través de las prácticas que generan²⁰. Al respecto Gutiérrez (2005, p. 376) establece:

Además de estructura estructurada, historia hecha cuerpo, el habitus es estructura estructurante, principio a partir del cual el agente construye sus prácticas y representaciones del mundo, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo posible y de lo imposible, de lo pensable y de lo no-pensable.

En conexión con las reflexiones precedentes, es de resaltar que además que el habitus, se constituye en un tanque en el que se deposita información de experiencias pasadas, este también se constituye en el dispositivo, mediante el cual ese pasado, o la información construida por la experiencia vivida, se reactualiza permanentemente. En este sentido las representaciones se constituirían tanto en los elementos en que se embaza tal información y con su puesta en circulación, en los diferentes espacios sociales, donde el agente se posiciona e interactúa con otros, puede constituirse en un mecanismo de actualización de los contenidos que le dan forma al habitus (esquemas y disposiciones).

En relación a lo anterior y al considerar que el habitus corresponde a un “conocimiento incorporado” en los cuerpos (Giménez, 2002, p. 3), el que no

²⁰ Esto es posible porque el “habitus goza de un carácter flexible” tal como lo afirma Rizo (2006, p. 2), quien citando a Bourdieu considera “El habitus no es destino, como se lo interpreta a veces. Siendo producto de la historia, es un sistema abierto de disposiciones que se confronta permanentemente con experiencias nuevas, y por lo mismo, es afectado también permanentemente por ellas. Es duradera pero no inmutable”.

solo reposa en los esquema ²¹ de percepción sino también en las disposiciones ²², podemos decir que este se vehiculiza a través de las representaciones, es decir a través de los significados y sentidos, que va adquiriendo y puede ir adquiriendo dicho conocimiento de acuerdo, por ejemplo a la posición del agente en una estructura de clases, o en relación a su pertenencia a un grupo social específico. Bajo esta perspectiva podríamos decir que:

Las representaciones no constituyen objetos que se encuentran suspendidos en forma etérea en el espacio social, sino que están incorporadas (es decir, integradas en el cuerpo simbólico) en el pensamiento de un agente por un proceso en construcción (Piñero, 2008, p. 5).

De acuerdo con lo expresado, proponemos considerar que las representaciones nos remiten a: 1. Elementos (hechos, objetos, personas) de la realidad, que han sido objetivados (reglas, instituciones, normas), los que además, condicionan y son los referentes de las acciones y comportamientos; y, 2. Las configuraciones y expresiones que adquieren, dichos elementos cuando estos se inscriben en el plano subjetivo, el que no solo se traslapa con el social y viceversa, sino que se influyen y condicionan mutuamente.

En este sentido las representaciones revelan la estrecha relación que existe entre “las estructuras internas de la subjetividad y las estructuras sociales externas” (p. 3) Estas no se constituyen en esferas opuestas, sino que se configuran como “dos estados de la misma realidad que se asientan y se inscriben, a la vez e indisolublemente, en los cuerpos y en las cosas” (p. 4). De acuerdo con esto se puede decir que los agentes, comprenden, ordenan,

²¹ El esquema tiene un sentido más cognitivo.

²² “El término disposición parece particularmente apropiado para expresar todo lo que recubre el concepto de habitus (definido como sistema de disposiciones): en efecto, expresa ante todo el resultado de una acción organizadora que reviste, por lo mismo, un sentido muy próximo al de términos como estructura; además designa una manera de ser, una propensión o una inclinación” (Bourdieu, 1999, p. 95)

clasifican y hacen inteligible la realidad en conexión con la lógica que proviene de la integración de sendos ámbitos. Al recalcar que “el agente social no sólo actúa hacia el exterior, sino que está condicionado subjetivamente –desde adentro- por el sistema de disposiciones adquiridas” (p. 3), es posible entrever que las representaciones se constituyen en un aspecto mediante el que se refuerza dicha integración.

Bourdieu (1979) es tajante en advertir que la configuración del habitus o los habitus que un agente encarna, es un proceso directamente relacionado con la posición de estos en una estructura de clases, cuestión que además de permear la formación de estos, es determinante para la configuración de las representaciones²³. Este aspecto debe necesariamente ser entendido en una doble vía.

En primera instancia al considerar que los habitus que encarnan los agentes, tienen correspondencia directa con el acceso de estos a los diferentes tipos de capital y a sus contenidos, en virtud de la clase social a la que pertenecen, entonces las maneras en que los sujetos interpretan, simbolizan y construyen los referentes para actuar, son procesos mediados en gran medida por lo anterior.

Bourdieu (1989) define al capital como el conjunto de recursos (materiales, simbólicos, culturales) que un agente detenta, por su pertenencia a una clase social. Martínez (2013) nos conmina a entenderlo como “cualquier tipo de recurso capaz de producir efectos sociales”, es decir una forma similar al poder. De acuerdo con esto, se especifica que este corresponde a “aquello que es eficiente en un campo determinado, como arma y como apuesta de lucha, lo cual permite a su, portador ejercer un poder, una influencia”. De acuerdo con esta idea, proponemos considerar, que no solo las representaciones que

²³ Si consideramos que tanto los esquemas como los sistemas de disposiciones, al ser el resultado de la incorporación histórica de la estructura social a través de la posición ocupada en dicha estructura por el agente (Pech, Rizo y Aldaya, 2008, p. 43), entonces la construcción de los contenidos que regulan los principios de visión y de acción que encarnan los sujetos sociales, va a ser un proceso determinado por tal proceso.

encarnan los agentes, devienen del acceso a capitales, sino también que la fuerza que estas pueden tener en el modelamiento de la realidad va a depender de dicho acceso.

En cuanto a la clase social esta, se define como el espacio social, que es compartido por los agentes que participan de un mismo habitus y que tienen un acceso más o menos similar a los diferentes tipos de capital. De acuerdo con Souza (1996, p. 34)

Las clases sociales resultan de la posición ocupada en el espacio social según los capitales que se posean en el presente y la herencia social. Dicha posición en el espacio social constituye las condiciones sociales de existencia, que dan lugar a distintos habitus, gustos, prácticas y estilos de vida²⁴.

En este sentido el acceso a capital y la pertenencia a una determinada clase social, estarán en la base de los sentidos y significados que un agente elaborará y detendrá sobre su entorno, sobre los objetos, hechos, sobre sí mismo y sobre los otros y otras; y además, será determinante en la legitimidad y fuerza que estas (las representaciones) alcancen en un campo específico, es decir como elementos que mediaran en la construcción de prácticas sociales.

En relación a lo anterior, además podemos decir que al ser el habitus un producto de la interiorización y asimilación de las relaciones de poder, las representaciones que éste genera se constituyen en mediaciones del poder simbólico. Lo anterior puede ser matizado, si consideramos que al ser el agente portador de una serie de esquemas de interpretación del mundo y referentes del actuar, en virtud de la clase social que ocupa y los capitales que detenta, tiene cierta ventaja, en un determinado espacio social, para el posicionamiento

²⁴ Mediante esta propuesta, Souza nos insta a entender que Bourdieu, rebasa la propuesta marxista sobre el concepto, pues considera que no solo un agente se posiciona en un eslabón del esquema social, por el acceso a recursos materiales (capital económico) sino también por el acceso de control de aquellos bienes que otorgan prestigio y reputación.

de sus maneras de comprender el mundo y lo que pasa en él y por ende para el logro de sus intereses.

Bajo este presupuesto es clave y de acuerdo con Gutierrez (2004) preguntarnos por ¿Cuál es el papel que cumplen las representaciones en la imposición del poder? En principio es de decir que estas, al ser un componente del habitus, pueden ejercer un poder estructurante y con ello, además de ser determinantes en la transmisión de las comprensiones hegemónicas sobre la realidad, contribuyen a su afianzamiento. En este sentido podemos decir que estas adquieren una función importante en la dominación dado que “son operadoras de integración social de un orden arbitrario a través de un proceso de imposición de la legitimación de la dominación” (p. 296).

Para comprender con mayor detalle las anteriores apreciaciones resulta clave apelar al concepto de campo. Bourdieu al hablar de estos, nos conmina a pensarlos como los escenarios, en los que los agentes, en relación al acceso a los diferentes tipos de capital y el poder que de este acceso se desprende, se posicionan; y, además en virtud de tal posicionamiento, logran ubicar y avanzar en el logro de sus intereses. Concretamente se refiere a este como

El espacio de las relaciones de fuerza entre los diferentes tipos de capital o, con mayor precisión, entre los agentes que están suficientemente provistos de uno de los diferentes tipos de capital para estar en disposición de dominar el campo correspondiente y cuyas luchas se intensifican todas las veces que se pone en tela de juicio el valor relativo a los diferentes tipos de capital; es decir, en particular, cuando están amenazados los equilibrios establecidos en el seno del campo de las instancias específicamente encargadas de la reproducción del campo de poder. (Bourdieu, 1989, p. 50-51)

En este sentido podríamos decir que las representaciones pueden ser entendidas como un elemento mediador tanto para el posicionamiento de los

agentes como del acceso a los “beneficios específicos que están en juego en el campo” (Bourdieu, 2013); y. además resultan importantes, en la medida en que se tornan en referentes para el establecimiento de “relaciones objetivas con las otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.)²⁵”.

Si consideramos que estas (las representaciones) se proyectan en medios o mecanismos, que configuradas histórica y socialmente, posibilitan que los agentes actúen conforme a lo que se espera de ellos regularmente (Bourdieu, 1984) entonces estas se construirán en parte de ese bagaje con el que un agente cuenta (en relación a su clase social, a los habitus y capitales que detenta) para posicionar y lograr sus intereses. Sin embargo la eficacia de estas, tal como se dijo anteriormente va a depender del tipo de capital y el volumen que un agente detente, es decir del poder que tenga para definir el deber ser de la realidad, mediante la puesta en escena de los significados y sentidos que encarna²⁶.

Bourdieu (1983, 1989, 1997) identifica y define varios tipos de capital, cuyos significados nos pueden ayudar a precisar mejor lo que entendemos por representaciones bajo la perspectiva del autor y a comprender cómo estas operan en los campos. Comenzaremos por el capital económico, el que se reconoce como el proceso de apropiación directa de bienes y servicios a través de transacciones económicas. En palabras de Martínez (2013, p. 34) este “se expresa a través del equivalente dinero, símbolo establecido para su representación, estando sujeto a la lógica de la escasez, y se valora por la ley de la oferta y la demanda”.

²⁵ Bajo este argumento creemos que estas existen en cuanto los individuos (sociales) las ponen en juego y en este sentido se proyectan como un “instrumento” del que se sirve el poder, es decir al servicio de las dominaciones sociales. Sin embargo estas no tienen una realidad propia, sino que son en tanto el que domina les da sentido.

²⁶ Frente a lo anterior es clave considerar, que los diferentes tipos de capital, son funcionales para los agentes, es decir los revisten de poder, de acuerdo al campo en el que estos participen y también del propósito que persiguen. Sí bien para el autor existen especies de capital que son eficientes en todos los campos, “su valor relativo varía según los campos, e incluso según los estados sucesivos de un mismo campo”. Bajo este argumento Bourdieu, nos conmina a pensar que estos adquieren practicidad, si al detentarlos, un agente puede ejercer poder sobre otros.

Sin mayor profundidad, podríamos decir que en determinados campos, quien tiene el mayor acceso a este capital, puede constituirse en el agente que por un lado puede imponer sin mucho esfuerzo las representaciones que encarna, con el objetivo de avanzar en sus propósitos en el marco de un determinado campo. Sin embargo bajo la perspectiva de Bourdieu (1984) no siempre el acceso a recursos productivos se constituye en una ventaja para los agentes que juegan en el campo de poder, dado que existen otros marcadores sociales, desde los que se define el prestigio de un sujeto y que juegan un importante papel en las representaciones que tiene de los otros y otras y que proyecta al exterior.

Un segundo capital es el denominado cultural, el que para Bourdieu (1979, p. 12) se manifiesta de tres formas:

Estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc., y finalmente en el estado institucionalizado, como forma de objetivación muy particular, porque tal como se puede ver con el título escolar, confiere al capital cultural —que supuestamente debe de garantizar— las propiedades totalmente originales.

Con respecto al primero este corresponde a una manera de ser y actuar con el cuerpo. En este sentido la inculcación y asimilación de habitus conlleva a tipos de manejo corporal, de estilos de caminar, hablar, moverse; y, supone su incorporación mediante la pedagogía familiar. Bajo la perspectiva del autor, este no puede ser delegado y su transmisión no puede hacerse por donación, compra o intercambio sino que debe ser adquirido. Este tipo de capital cultural, bajo nuestra consideración sería mayormente determinante de la configuración

de las representaciones, dado que marca la manera como un agente se auto representa y se proyecta hacia afuera, en específico en el marco de un campo. Es clave resaltar que la manera como maneja y usa su cuerpo o las formas que usa para relacionarse con los otros, son aspectos que tienen efecto en el poder de posicionar y ubicar su comprensión del mundo como la comprensión legítima.

Frente a la segunda forma que adquiere el capital cultural: el estado objetivado, este está conformado tanto por los bienes culturales que posee un agente, como de los medios para obtenerlos, además de las disposiciones y conocimientos que le permiten apreciarlos de forma válida. En relación a las representaciones, podemos decir que el acceso a este tipo de capital cultural se constituye no solo en un determinante del tipo de comprensión que el agente hace de su realidad, sino también de la manera como puede expresar dicha comprensión. Por ejemplo si el individuo detenta los valores, que lo ubican como “culto” o “culto”, las apreciaciones que él o ella hagan del mundo o de la realidad que explican, se constituirán en evaluaciones legítimas y con poder de influenciar a otros y otras. En este sentido

Este capital cultural solamente subsiste como capital material y simbólicamente activo, en la medida en que es apropiado por agentes y comprometido, como arma y como apuesta que se arriesga en las luchas cuyos campos de producción cultural (campo artístico, campo científico, etc.) – y más allá, el campo de las clases sociales- sean el lugar en donde los agentes obtengan los beneficios ganados por el dominio sobre este capital objetivado, y por lo tanto, en la medida de su capital incorporado (Bourdieu, 1979, p. 14).

En cuanto a la tercera forma del capital cultural: el estado institucionalizado, a este es posible acceder y detentarlo de acuerdo a los títulos escolares obtenidos por el agente, dado que estos le otorgan la capacidad de competir en campos, donde el conocimiento adquirido, validado y legitimado, es altamente

valorado. Este tipo de capital, es hondamente relevante en la configuración de las representaciones y la funcionalidad que estas adquieren en determinados campos. Por ejemplo la explicación de la realidad bajo argumentos académicos le otorga a los agentes, la posibilidad de ser mayormente valorados. Además el conocimiento escolar permite una sofisticación de las representaciones.

Otro tipo de capital, al que Bourdieu (1984) hace referencia es el capital social. Este corresponde al conjunto de los recursos con los que el agente cuenta en el presente o con lo que puede contar en el futuro. El acceso a estos está determinado por la pertenencia a un grupo, a una red social que puede estar o no institucionalizada. De acuerdo con el autor, la cantidad que de este detenta un agente va a depender del agregado de conexiones que pueda movilizar y del volumen de las otras formas de capital que ese grupo posea (Martínez, 2013). Frente a lo anterior en concreto Bourdieu (2000a, p. 131) establece:

El capital es trabajo acumulado, bien en forma de materia, bien en forma interiorizada o <<incorporada>>. Cuando agentes individuales o grupos se apropian de capital privado o exclusivamente, posibilitan, también, gracias a ello, la apropiación de energía social en forma de trabajo vivo o de trabajo cosificado.... El capital hace que los juegos de intercambio de la vida social, en especial de la vida económica, no discurran como simples juegos de azar en los que en todo momento es posible la sorpresa.

En cuanto a la relación de este tipo de capital con las representaciones, podríamos decir que estas, entonces serían la serie de comprensiones válidas que surgen por la pertenencia a un grupo o red social. Su legitimidad y poder para que un agente logre avanzar en sus intereses o tenga un mayor poder sobre otros, va a depender del valor que dichas explicaciones y comprensiones sobre la realidad tengan en un nivel más amplio, es decir van a depender de la fuerza e importancia que un determinado grupo tenga frente a otros o en el marco social en el que se ubica o en un contexto o coyuntura particular.

Por último está el capital simbólico. Este es definido por el autor (1997, p. 171-172) como:

Una propiedad cualquiera, fuerza física, valor guerrero, que, percibida por unos agentes sociales dotados de las categorías de percepción y de valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se vuelve simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza mágica: una propiedad que, porque responde a unas <<expectativas colectivas>>, socialmente constituidas, a unas creencias, ejerce una especie de acción a distancia, sin contacto físico.

En palabras de Fernández (2013, p. 36) este capital corresponde al conocimiento y reconocimiento, que pueden tener y obtener las y los agentes en relación al acceso y el detentar otros tipos de capital. De acuerdo con lo anterior este

Sólo puede generarse dentro de un campo concreto y en relación con los tipos de capital eficientes en él y cualquier especie de capital puede convertirse en capital simbólico cuando es percibida según unas categorías de percepción que son, al menos en parte, fruto de la incorporación de las estructuras de un universo social o de un campo específico dentro de él.

De acuerdo con el el contenido otorgado a este tipo de capital, podemos afirmar que las representaciones, como maneras de interpretar, construir y actuar ante la realidad, van a ser expresiones directas de este. Es decir cualquier sentido o significado construido bajo esquemas de poder, para refrendar el prestigio de un agente, se constituirá en una expresión del habitus de este mismo. De la misma manera, su circulación en los campos, estará encaminado a refrendar y fortalecer tal prestigio.

De acuerdo con lo anterior y retomando la relación entre las representaciones y la violencia simbólica, es clave precisar que los principios de visión y de acción, que encarnan los agentes, se configuran, en parte por la pugna entre estos en determinados campos sociales. Quienes detentan un mayor poder, en relación al acceso a un tipo específico de capital, tienen más posibilidades de imponer los sentidos y significados que encarnan. De esta manera y de acuerdo con la relación de fuerzas que estructura el campo, estos sentidos y significados se imputarán como los legítimos, lo que se hace través de procesos de dominación simbólica. Es decir unos agentes y grupos tienen el poder o la autoridad de

Constituir lo dado por enunciación, poder de hacer ver y de hacer creer, poder de ratificar o poder de transformar la visión del mundo, y con ello, poder de transformar las prácticas sobre el mundo y el mundo mismo (Gutiérrez, 2005, p. 375).

En este sentido las representaciones, deberían ser consideraras como la serie de contenidos, que son puestos en circulación por unos agentes y que les sirven a estos, como estrategias para posicionar y lograr sus intereses. Estas al revertir de mayor legitimidad, por provenir de quienes detentan el “poder”, se constituyen, también en una expresión de la dominación simbólica. Aseguramos esto porque las representaciones al transmitir unas formas de percepción y acción de quienes tienen un mayor poder en el marco de la relación de fuerzas, ayudan a que se promuevan y fortalezcan las visiones “legítimas de la realidad”, es decir a la dominación.

Por último y en la vía explicativa que nos hemos propuesto, también consideramos necesario el precisar la relación que existe entre las representaciones y las prácticas sociales, es decir, de las acciones específicas mediante las que se moldea y modifica la realidad. Entre las funciones que se atañen a estas, está el de ser programas que guían la acción (Moscovici, 1979).

De acuerdo con lo anterior, es posible entrever que las representaciones, al proceder de la interacción de los sujetos, interacción que es factible, gracias al entrecruce e entre lo individual y lo social, se constituyen, no solo en modos de organizar y hacer inteligible la realidad, sino también proveen a los sujetos y grupos que las comparten, de los referentes para anclar el actuar individual y colectivo; y, además los dota de las herramientas y mecanismos para actuar ante situaciones sociales específicas.

La transmisión de estas a través de las acciones, es un proceso que corresponde a la dimensión del anclaje. Previamente y mediante la objetivación, los sujetos las han asimilado e interiorizado, procesos que son claves para su posterior función práctica en el marco de la realidad. En este sentido y a partir del enraizamiento en el mundo cotidiano, los sujetos pueden disponer de una serie de conocimientos que les son útiles en su día a día. El anclaje implica la “instrumentalización social del objeto”, es decir la inserción de las representaciones en la dinámica social, constituyéndose así en instrumentos útiles de comunicación y comprensión (Jodelet, 1986).

Lo anterior y a través de los referentes que nos otorga la propuesta de Bourdieu (1993), nos permite decir que estas (las representaciones) al ser parte del habitus son constituidas en la práctica y orientadas a funciones prácticas. De acuerdo con lo anterior al ser el habitus un sistema objetivo incorporado en el actor, del que las representaciones son una de sus emanaciones, entonces este a través de la función práctica que estas adquieren en contextos y espacios determinados se manifiestan como soluciones aplicables. Dichas soluciones, son el resultado de la experiencia de los agentes, la que no solo se produce en virtud de la práctica, sino también de lo que se ha depositado en los agentes por su misma reiteración. Esto supone que con el tiempo experiencia y práctica, dan lugar a principios de percepción, pensamiento y acción, los que a su vez dan “origen de todas las estrategias a las cuales puede recurrir el agente para enfrentar situaciones imprevistas y así actualizarlas” (Hernández, 2006, p. 7).

2.1.3.1 Convergencias y divergencias entre las propuestas

Piñero (2008, p 3), a través de su artículo “La teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de Pierre Bourdieu: una articulación conceptual”²⁷, expresa que el significado de las representaciones en relación a los planteamientos del autor, puede entenderse en una doble dimensión. En primera instancia propone entender que las representaciones se constituyen en elementos del habitus. Aspecto sobre el que hemos dado cuenta en el aparte inmediatamente anterior. Por otro lado la autora establece que, en virtud de las funciones que revisten tanto el habitus como las representaciones estos pueden ser conceptos homologables, en relación a los siguientes aspectos:

- **Objetivación y subjetivación²⁸ dos momentos de un mismo proceso.**

Moscovici (1989) establece que la construcción de la realidad, deviene de la intersección entre lo social y lo psicológico (considerado como lo individual), en este sentido “las representaciones no constituyen objetos que se encuentran suspendidos en forma etérea en el espacio social, sino que están incorporadas (es decir, integradas en el cuerpo simbólico) en el pensamiento de un agente por un proceso en construcción” (Piñero, 2008, p. 5). Así las representaciones que encarnan los sujetos, en primera instancia nos remiten a: 1. Elementos (hechos, objetos, personas) de la realidad, que han sido objetivados (reglas, instituciones, normas), los que además, condicionan y son los referentes de las acciones y comportamientos; y, 2. Las configuraciones y expresiones que adquieren, dichos elementos cuando estos se inscriben en el plano subjetivo.

²⁷ Frente a la articulación la autora expresa “Si bien ambas propuestas se desarrollan en campos disciplinarios distintos, es posible delimitar relaciones de analogía, complementariedad y de esclarecimiento en un nivel conceptual, plataforma para el análisis de los fenómenos sociales”. (Piñero, 2008, p. 8).

²⁸ Es de considerar, que sí bien parece apelarse a la objetivación y subjetivación como dos polos de un esquema, sabemos que en concreto Bourdieu, no expresa un conformismo con las propuestas dicotómicas. En palabras de Giménez (2002) mediante el concepto de Habitus, lo que quiere mostrar es que tanto las estructuras sociales (lo objetivo- Las instituciones), como las estructuras subjetivas (disposiciones, se constituyen en dos momentos de la misma realidad y están estrechamente articulados.

Frente a lo anterior y siguiendo a Jodelet (1986, p. 52), la subjetividad no debe entenderse solamente como una dimensión interior del individuo, opuesta a y condicionada por lo social. Mediante su propuesta de las tres esferas de pertenencia de las representaciones²⁹, admite sobre cómo la subjetividad, además de ser un ámbito modelado por la interacción, se constituye en una esfera en la que se suceden procesos también importantes para la configuración de estas. Bajo esta perspectiva, la autora asiente que dichos procesos “pueden ser de naturaleza cognitiva y emocional, y depender de una experiencia en el mundo de la vida”.

Tal como manifiesta Moscovici (1979) el análisis de las representaciones, permite entrever el estrecho vínculo que existe entre lo social y lo individual (aspecto al que él denomina psicológico). Bajo este supuesto se considera que las personas no construyen su realidad aisladamente, sino que se influyen mutuamente sobre la base de las comprobaciones compartidas, referidas a los objetos que hacen parte de su realidad (Vergara, 2008). De acuerdo con esto, el plano subjetivo no solo se superpone con el social y viceversa, sino que se influyen y condicionan mutuamente.

Con respecto al concepto de habitus Giménez (2002, p. 3) establece que, mediante este, Bourdieu pretende mostrar la estrecha articulación que existe entre “las estructuras internas de la subjetividad y las estructuras sociales externas”, postulando que estas no se constituyen en esferas opuestas, sino que se configuran como “dos estados de la misma realidad que se asientan y se inscriben, a la vez e indisolublemente, en los cuerpos y en las cosas”. En este sentido “el agente social no sólo actúa hacia el exterior, sino que está condicionado subjetivamente –“desde adentro”- por el sistema de disposiciones adquiridas”. En relación a la producción de las representaciones, este es un proceso altamente marcado por la intersección entre los planos interno y externo, entre la realidad objetiva y la subjetiva.

²⁹ Aspecto tratado en apartes anteriores.

- **La configuración tanto de las representaciones como del habitus dependen de la situación y condición del agente en los espacios sociales**

Las representaciones en palabras de Moscovici (1979) revisten un carácter heterogéneo y no consensual; y, presentan dicho carácter porque los sujetos y el espacio social en que estos se ubican, se configuran como instancias supeditadas a dinámicas culturales, económicas y políticas diversas³⁰.

La producción de estas corresponde al proceso por el cual un hecho, objeto o circunstancia se hace inteligible, es decir cuando en base a la serie de referentes sociales que encarnan los sujetos, estos otorgan sentido a lo que sucede y validan aquello que se presenta como “realidad”, (Moscovici, 1989). Esta asimilación consciente de la realidad, no es un proceso homogéneo, para Moscovici y Jodelet, esto dependerá de varios factores: la posición de los individuos en estructuras de poder y en clases sociales, la experiencia de socialización, el acceso a información, el género y el rango etario en el que una persona se encuentre y la pertenencia a un grupo étnico, entre otros. Además es un proceso supeditado a todo el historial y repertorio cultural, que ha dado lugar a un momento social específico y a unos tipos de subjetividades. Frente a lo anterior Jodelet (1986, p. 45) establece:

La jerarquía de valores que se impone en la sociedad y sus diferentes grupos contribuye a crear una «red de significados», a través de la cual las representaciones sociales son situadas socialmente y evaluadas como hecho social. Este juego de significados externos tiene incidencia sobre las relaciones establecidas entre los diferentes elementos de la representación.

Frente al concepto de habitus, Bourdieu (1989) establece que la configuración de estos depende por un lado de la posición de los agentes en las estructuras:

³⁰ Al respecto Piñero (2008, p. 11) establece que las representaciones “se encuentran ligadas a la ubicación de socioeconómica y cultural del agente o grupo social”.

social y de poder, cuestión que está determinada por el tipo de acceso a los diferentes capitales, los que han sido legitimados por el grupo o grupos en los que el individuo se inserta y por autoridades específicas. En este punto es importante resaltar el papel que el poder y la violencia simbólica tienen en la configuración de los habitus, aspecto sobre el que Bourdieu pone un especial énfasis a diferencia de Moscovici.

En Bourdieu (1991) la estructuración del habitus es una cuestión determinada por las relaciones de poder, en las que se inscriben los agentes. El autor al respecto resalta varias cuestiones. Primero, al ser los habitus instrumentos de conocimiento y comunicación están bajo los efectos del poder y su configuración se sucede de acuerdo con esta lógica; segundo, al ser “instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y de conocimiento” cumplen con la función de ser mecanismos desde los que unos agentes, con poder simbólico y material, pueden dominar a otros agentes e imponer los modos de ver y percibir la realidad.

En relación a lo anterior cobra importancia un aspecto sobre el que el autor ha llamado la atención en varios de sus libros, el de violencia simbólica (Bourdieu 2000b, p. 57- 58). Esta es ejercida por el agente o clase que detenta el poder, contra quienes están al margen de lo que se establece como lo legítimo. El autor la concibe “como violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término del sentimiento” (p. 12).

Esta se entiende entonces, como una relación social, impuesta por quien detenta el poder y tolerada, asumida y vivida por quien es víctima de ese poder. Bajo esta perspectiva recalca que “El efecto no se produce en la lógica pura de las conciencias conocedoras, sino a través de los esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen los habitus.

- **Tanto las representaciones como los habitus estructuran los comportamientos y acciones de los individuos**

Moscovici (1979) establece, que entre las funciones de las representaciones está el ser programas que guían la acción. En este sentido, al ser el producto y encarnar el conocimiento del sentido común, se constituyen en reflexión práctica, la que está orientada hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social y material.

Por su parte Velásquez y otros (2013), citando a Maricela Perera, reconocen la existencia de cuatro funciones de las representaciones, la de conocimiento, dado que permiten comprender y hacer inteligible la realidad; la identitaria, porque mediante estas, los sujetos definen referentes colectivos, desde los que sustentan su identidad; la de orientación, en el sentido que estas se configuran en la guía de las acciones, comportamientos y prácticas de los individuos; y, la de ser referentes de acciones, tomas de posición y de decisiones, de las conductas asumidas.

De acuerdo con lo anterior, es posible entrever que las representaciones, al proceder de la interacción de los sujetos, interacción que es factible, gracias al entrecruce e entre lo individual y lo social, se constituyen, no solo en modos de organizar y hacer inteligible la realidad, sino también proveen a los sujetos y grupos que las comparten, de los referentes para anclar el actuar individual y colectivo; y, además los dota de las herramientas y mecanismos para actuar ante situaciones sociales específicas.

La transmisión de éstas a través de las acciones, es un proceso que corresponde a la dimensión del anclaje. Previamente y mediante la objetivación, los sujetos han hecho una asimilación e interiorización de estas, aspectos que son claves para su posterior función práctica en el marco de la realidad. En este sentido y a partir del enraizamiento en el mundo cotidiano, los sujetos pueden disponer de una serie de conocimientos que les son útiles en su día a día. El anclaje implica la “instrumentalización social del objeto”, es

decir la inserción de las representaciones en la dinámica social, constituyéndose así en instrumentos útiles de comunicación y comprensión (Jodelet, 2006).

En cuanto al concepto de habitus, Bourdieu (1993, p.91) establece que este como sistema de disposiciones es “constituido en la práctica y orientado hacia funciones prácticas”. Las disposiciones están impresas en el cuerpo (la fuerza de lo social y de la historia – la reiteración graba en los cuerpos) y se instituyen en referentes de las acciones de los agentes (Giménez, 2002) es decir de la manera de situarse, moverse, actuar y orientarse en un espacio o espacios sociales. Este actuar depende directamente de la lógica del espacio social y de la posición que el agente ocupe en este.

De acuerdo con lo anterior “El habitus como sistema objetivo incorporado en el actor, se manifiesta en el sentido práctico como soluciones aplicables que aparentemente se observan como invenciones individuales, deliberadas” (p.9). Dichas soluciones, en palabras de Hernández (2006, p. 9), son el resultado de la experiencia de los agentes, la que no solo se produce en virtud de la práctica, sino también de lo que se ha depositado en los agentes por su misma reiteración. Esto supone que con el tiempo experiencia y práctica, dan lugar a principios de percepción, pensamiento y acción, los que a su vez dan “origen de todas las estrategias a las cuales puede recurrir el agente para enfrentar situaciones imprevistas y así actualizarlas”.

Dichas estrategias, bajo la óptica de Bourdieu (1985, p. 2-3) son el producto del sentido práctico, es decir del dominio versado que los agentes han adquirido a través de la experiencia, el que se ha cimentado en el cuerpo de los agentes. En este sentido la estrategia “es el producto del sentido práctico como sentido del juego, de un juego social particular, históricamente definido, que se adquiere desde la infancia al participar en las actividades sociales, especialmente”. En si mediante este concepto lo que el autor pretende mostrar,

es cómo los agentes actúan bajo referentes, que no necesariamente son el producto de un acatamiento estricto a normas, sino que parecen naturales.

2.2 Aproximaciones conceptuales a las representaciones de género

En el marco del siguiente aparte, en primer lugar reflexionaremos, desde diversas aproximaciones, sobre la producción de significados y sentidos sobre lo femenino y lo masculino y cómo dicha producción se constituye en un aspecto clave en la producción social de la realidad cuestión que nos servirá para proponer algunas consideraciones sobre las representaciones de género y sobre la relación entre estas y el acceso a la tierra. Por último evidenciaremos una propuesta sobre cómo entender las representaciones de género desde una perspectiva bourdiana.

Para cumplir con lo establecido, apostamos por construir nuestros planteamientos soportados principalmente³¹ en las propuestas de Judith Butler, Pierre Bourdieu y en las propuestas culturalistas de Clifford Geertz, Sherry Ortner, Harriet Withead y Martha Lamas.

Con respecto a la utilidad de los planteamientos de Butler, consideramos que su visión del sexo y el género, además de permitirnos entender que estas dos categorías corresponden a construcciones sociales y culturales situadas y producidas en marcos de poder; se constituyen en experiencias subjetivas y objetivas, que en su entrecruce permanente producen sujetos con género y sexo (partiendo de considerar que estas dos categorías no se contraponen necesariamente).

En relación al eje de nuestro análisis (representaciones de género) sus propuestas, que toman como referentes los presupuestos de la sociología y de filósofos como Foucault, se constituyen en claves para leer el cómo los

³¹ Esto no significa que no se tomaron en consideración otras propuestas, solo que las de estos autores y autoras, tuvieron un mayor peso en la construcción conceptual del asunto que nos compete.

significados asociados a los géneros, que por supuesto no son fijos ni estables, tienen un potencial preceptivo, en la medida en que contribuyen a la normativización de lo que heterosexualmente se considera como masculino y femenino y por ende son aspectos claves en la construcción social de la realidad.

Bajo esta consideración el abordar la configuración de representaciones bajo la impronta de “matrices de poder y discurso” desde las cuales ha sido producido el sujeto, es apostarle a pensar que el sujeto “no es ni una base, ni un producto, sino la posibilidad permanente de un proceso de resignificación y la propia posibilidad del poder de ser reformulado” (Butler, 2007) con lo cual la realidad también conlleva este rasgo.

Con respecto a la obra de Bourdieu, es de decir que su utilidad no solo radica, en las posibilidades que para el presente análisis nos brindan conceptos como habitus, campo, estrategia, agente, capital, entre otros; sino también porque a través de sus propuestas de carácter constructivista es posible entender las representaciones de género, como construcciones históricas naturalizadas que devienen de la lucha entre agentes, quienes entran en pugna por posicionar sus versiones sobre el deber ser de la realidad en un marco que se construye bajo la lógica androcéntrica.

Por otra parte, apelar a las propuestas de Bourdieu, sobre todo aquellas que se plasman en su libro “La dominación masculina” nos permiten entender cómo las representaciones de género que encarnan hombres y mujeres (estos entendidos como agentes, situados en campos) se producen, hacen parte y proceden de “esquemas de percepción tanto de pensamiento como de acción” donde lo masculino se sitúa como el rasero. En este sentido nos emplazamos bajo el entendimiento que los significados asociados a lo femenino y lo masculino, son el producto práctico de la visión androcéntrica, es decir de la visión “legítima” que regula y ordena el mundo en sus diferentes dimensiones.

En relación al provecho que podemos sacar de las propuestas culturalistas (Geertz (2003), Ortner y Withead (2003) y Lamas (2003)) bajo estas es posible comprender cómo los significados y sentidos que adquiere lo femenino y lo masculino y, las formaciones prácticas a las que dan lugar, son productos situados. La elaboración de percepciones y expresiones específicas sobre el género y la sexualidad, corresponden con procesos que tienen lugar en contextos específicos.

Por otro lado, dicha perspectiva nos ayudara a comprender que tales representaciones, no son solo el producto expreso de órdenes concretos de realidad, sino que además, al ponerse en circulación, mediante la interacción de los sujetos, son determinantes en la configuración misma de la realidad de la que proceden. En este sentido se torna clave el conectar significados y contextos y el “detectar cuáles son los aspectos económicos, políticos y sociales más significativos para la organización sexual de la realidad” (Lamas, 2003, p. 19).

Además la utilidad de los autores y autoras referenciados, nos permite fijar una posición crítica frente a la tendencia generalizada de definir el género como la contraparte cultural del sexo, dimensión que ha sido precisada como la esencia humana por excelencia. Varias autoras, entre ellas Butler (2007), Amorós (1997), Valcárcel (1997), Puleo (1993) entre otras, han denunciado como la ubicación del binarismo como el modelo bajo el que se organiza la sociedad y el peso cultural que se le ha otorgado al género, se han constituido en discursos que provienen de un discurso cultural hegemónico, el que ancla sus raíces en el Romanticismo (Valcárcel, 1997) y, cuyo mayor desarrollo se expresa durante la Ilustración.

Los discursos y las prácticas que surgieron en este contexto, le apuntaron a racionalizar y legitimar la idea sobre que la naturaleza es un estado, que debe ser “controlado, mediado, domesticado o superado según los casos” (Amorós, 1985, p. 34). En este lugar se ubicó a las mujeres y por ende se las situó como

los sujetos a quienes también se debe domesticar, controlar y dominar. En la perspectiva de Amorós (1997, p. 27) bajo estos supuestos “una mujer pasó a ser una hembra de la especie humana”, una esencia distinta a la del varón y con esto “Comenzó el procesos de fabricación de la <<mujer>> como lo <<absolutamente otro>>. El tremendo residuo natural presente en la humanidad”.

Estas nociones, creencias y supuestos ideológicos, no solo que han quedado en discursos, sino que han pasado a modelar con fuerza la realidad de los sujetos sociales, y se han convertido en dispositivos bajo los que se producen subjetividades amoldadas bajo el binarismo y la naturalización. En este sentido “La explotación metódica de la diferencialidad” (Amorós, 1985) tuvo consecuencias importantes tanto en los procesos de representación y simbolización de lo femenino como en el plano material³².

Varias han sido las respuestas a esta construcción ideológica. En el marco por ejemplo de los estudios antropológicos, sobre todo de aquellos afiliados al culturalismo, por un lado se resalta que no necesariamente las sociedades elaboran las nociones de masculinidad y feminidad bajo el modelo de opuestos complementarios y que tampoco existe una asociación tajante de lo natural con lo femenino y lo cultural con lo masculino. Tal como lo establece Ortner y Whithead (2003, p.137) “Las creencias culturales acerca de los sexos no conforman sistemas lógicos bien definidos de oposición o de elementos complementarios”.

Frente a lo anterior Butler (2007, p. 105) trayendo a colación las propuestas de Geertz, considera que no se puede ubicar un marco tan cerrado para comprender la configuración del género y de la misma sexualidad. Si se considera que los procesos de simbolización no responden a universales y que

³² Frente a esto, Butler (2007) observa como la idealización de una suerte de esencia femenina ha dado lugar a “nuevas formas de jerarquía y exclusión”, a la construcción de discursos de verdad, a través de los cuales, se legitiman las prácticas sexuales normativas y se “deslegitiman las prácticas de género y sexuales minoritarias”.

estos se concretan amarrados a las dinámicas del contexto, sobre las que también tienen influencia. En este sentido no se puede esperar que el mundo se ordene bajo una lógica binaria y menos que aspectos como la naturaleza, no puedan corresponder a interpretaciones y ser conceptuados de diversas maneras.

Los cuestionamientos de esta autora, van más allá al establecer que no solo es clave repensar el modelo dicotómico, bajo el cual se visualiza la realidad, sino también comenzar a situar que tanto lo que se considera como sexo, como lo que se ha denominado género, son construcciones culturales. En este sentido nos invita a pensar que la sexualidad no es ni anterior a la cultura, ni es la base de la significación cultural, sino que es “una formación discursiva que opera como base naturalizada para la diferenciación entre naturaleza/cultura y las estrategias de dominación que esta distinción sostiene”.

2.2.1 La producción de lo femenino y lo masculino y la construcción social de la realidad

En palabras de Lamas (2003) el concepto de género actualmente, ha alcanzado un alto nivel de sofisticación. A través de los aportes de hombres y mujeres, en el marco de diversas disciplinas y también en el contexto de la movilización por la lucha de los derechos de las mujeres, se ha pasado de considerar a este no solamente como la interpretación cultural de la diferencia sexual a concebirse como un elemento estructurador de un conjunto de relaciones sociales y de la organización social, el que se produce en contextos específicos, siempre atravesados por estructuras de poder.

Bajo las propuestas de Geertz (2003) en torno al concepto de cultura, sobre las que se hizo énfasis en anteriores apartes, podemos decir que a cada realidad, le corresponde una amplia variedad de significados sobre diversas cuestiones relacionadas con el mundo de la vida. Entre estas, están aquellas que se relacionan con la diferencia sexual de los sujetos. De esta manera, la pluralidad

de interpretaciones que surgen sobre el dato anatómico y su correlación con el sentido social que se otorga a lo femenino y lo masculino, además de provenir de experiencias vitales, colectivas específicas, se constituyen en aspectos de trascendencia para la configuración de la realidad (Ortner y Whithead, 2003, p.137).

Partiendo de que la cultura se define como, un entramado de estructuras de significación que a su vez se constituyen en una “multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o entrelazadas entre sí”; que, además de ser tejidas por los sujetos sociales, producto de su experiencia e interacción, se constituyen en el soporte de lo que la gente hace y de cómo interpreta lo que le sucede (Geertz 2003, p. 19), podemos afirmar que cuando se apela a lo femenino y lo masculino, las nociones que circulan devienen de lo que la sociedad en particular, ha situado o ha construido como lo natural del comportamiento de los sujetos sociales. Esto en conexión a lo que socialmente se ha definido como hombres y mujeres.

En relación a lo anterior también debemos considerar que las nociones que se producen y circulan, además de responder a la necesidad de dar sentido a la realidad y reglarla, a la vez que la modelan, inciden sobre las mismas interpretaciones. Así los procesos de significación en torno al sexo, tienen un carácter circular y bajo este sentido “la estructura de relaciones sociales es moldeada por las mismas ideas culturales que la dinámica social propicia y cristaliza gracias a ella” (Ortner y Whithead 2003, p. 136).

Como sabemos Geertz (2003) le otorga a los procesos simbolización, su aprehensión y uso, un carácter público y bajo esta presunción podríamos decir que la producción de significados sobre la sexualidad no es una cuestión que corresponde a fenómenos psicológicos o a una característica del pensamiento, la personalidad o la estructura cognoscitiva de alguien, sino a un proceso que se va tejiendo y estructurando de manera colectiva, cuestiones que claramente van a depender del contexto en el que se anclan dichos procesos.

En relación a lo anterior, es de resaltar que la producción de significados que socialmente se aceptan como válidos y que sustentan las interpretaciones que se hace del deber ser de hombres y mujeres, es una cuestión “mediada por la compleja interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas” (Lamas 2003, p. 23), lo que sumado a prácticas y discursos configuran lo que Teresa de Lauretis (1989) ha denominado Tecnologías de género.

De acuerdo con la autora, el género debe considerarse como el producto y resultado de una variedad de “tecnologías sociales y de una serie de discursos institucionalizados, de epistemologías y de prácticas críticas” que inciden y afectan los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales; y, en un sentido amplio, son determinantes “del campo de los significados sociales”³³. Frente a esto, Lauretis considera que dichas tecnologías, tienen como finalidad el crear, normalizar y naturalizar las representaciones sobre la sexualidad, para que sean asumidas sin mayores resistencias y restricciones por los sujetos sociales. Mediante la puesta en marcha de estas, además de la producción de los cuerpos y las subjetividades se provoca y ratifica la diferencia sexual.

En este sentido el género como efecto de la puesta en marcha de dichas tecnologías adquiere la forma de representación, es decir se transforma en un conjunto de percepciones y prácticas, en permanente construcción, cuyos rasgos son acordes al momento histórico, en el que se enmarca la realidad de los sujetos. Esta construcción, no solo está mediada por las visiones que se sitúan como hegemónicas, sino también está atravesada por los procesos de resistencia a tales visiones. Esta última cuestión supone la reformulación, en

³³ Este concepto, en el marco de su propuesta, es elaborado con base en la tesis foucaultiana de “tecnologías del sexo”. Foucault, en la Historia de la Sexualidad, la Voluntad del Saber (1992) establece que la sexualidad no debe abordarse como un asunto íntimo de los sujetos, sino como una realidad que es construida bajo presupuestos hegemónicos, es decir como “resultado de una <<tecnología del sexo>>, definida como un conjunto <<de nuevas técnicas para maximizar la vida>>, desarrollada y desplegada por la burguesía a partir del siglo XVIII con el propósito de asegurarse su supervivencia de clase y el mantenimiento en el poder” .

muchas ocasiones, de los referentes que en el marco de la realidad, le han dado lugar a las significaciones sobre lo femenino y lo masculino.

Por otra parte, Butler (2001) nos conmina a pensar que la producción de significados en torno a lo femenino y lo masculino, se constituye en una cuestión que está mediada por el poder. La autora establece, que por ejemplo las normas de género se han constituido, primero en un resultado del poder que se ha ejercido sobre las mujeres (como sujeto – sujetado) y dichas normas, obligan a vivir de una manera determinada, obligan a una serie de actos y acciones (normas como producto de la autoridad), es decir nos constriñen y por tanto determinan la manera como los sujetos experimentan y explican la realidad³⁴.

En sí somos reproductoras y reproductores de las normas, las ejecutamos, las prolongamos, las transmitimos y en la mayoría de los momentos tenemos pánico de dejar de escenificarlas y todo nuestro intento se concentra en ser sujetos ajustados a las normas sociales de cada modelo. Esta reproducción de las normas, es determinante para la reafirmación de los parámetros que tiene la realidad en la que nos movemos.

En este sentido relacionar representaciones de género y poder, implica necesariamente pensar en la funcionalidad que estas adquieren, como modos para reforzar dicho poder. Siguiendo a Butler (2007) podríamos decir que los significados y sentidos que adquiere lo femenino y lo masculino en contextos particulares y que circulan a través de discursos y prácticas, están encaminados a afianzar y reproducir, aquello que se ha determinado como legítimo.

La autora nos conmina, entonces a pensar el género como un mecanismo para la normalización de los sujetos o para su ajuste a los “estándares” que

³⁴ Las normas de género se viven y en palabras de Butler “se actúan”, son como una especie de guion, ya establecido y construido por las fuentes de autoridad.

proviene del sistema sexo/género. Así las representaciones de género se constituyen y son constituyentes de las normas que en cada sociedad existen para afianzar el género, adquiriendo entonces un papel determinante en la producción de las subjetividades y los cuerpos.

2.2.2 La producción de sexo y género y la construcción social de la realidad

Butler (2007, p. 55) nos invita a considerar que el sexo está tan culturalmente construido como el género y, “en este caso no tendría sentido definir el género como la interpretación cultural del sexo, si esta es ya, de por sí misma, una categoría dotada de género”.

En este sentido, más allá de cuestionar el uso de la diferencia sexual como fundamento y argumento para establecer lo que nos hace diferentes de los hombres, la idea es la mostrar cómo esa misma diferencia sexual también ha sido construida y naturalizada de tal modo, que aparentemente parece innata al sujeto³⁵.

Frente a esta postura Bourdieu (2000b, p. 27) llama la atención sobre la necesidad de entender que, es el mundo social (con sus principios de visión y división en opuestos) quien construye el cuerpo como una realidad sexuada y establece al respecto:

La definición social de los órganos sexuales, lejos de ser una simple verificación de las propiedades naturales, directamente ofrecidas a la percepción, es el producto de una construcción operada a cambio de una serie de opciones orientadas o, mejor dicho, a través de la acentuación de algunas diferencias o de algunas similitudes.

³⁵ Una discusión – debate interesante entre las feministas de la diferencia y las propuestas de Butler, se puede encontrar en el texto: “la cuestión de la transformación social” (Butler, 2001, p. 7-30).

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que los conceptos sobre hombre y mujer no pueden entenderse como manifestaciones de la diferencia sexual, porque ni el sexo, ni el género son naturales, más bien son contingentes; además son el producto de proceso de naturalización y por lo tanto se constituyen en una suerte de guion o fórmula para ser dentro de una estructura patriarcal – heterosexual – binaria; cuestión que es posible por el poder impuesto al sujeto y vivido por este (sujeción en palabras de Butler) y por la asimilación de una serie de normas, que provienen de unas instituciones y unos saberes institucionalizados que actúan como autoridad.

De esta manera los procesos de sexualización y generización de los sujetos, se estructuran con base en fuerzas históricas que han contribuido a la deshistorización de las realidades y a la construcción de un mundo social de carácter binario. El que ha determinado la clasificación de la sexualidad y de los roles atribuidos a cada uno de los géneros. Es decir que tales procesos están determinados por las “estructuras históricas del orden masculino” lo que impacta en los modos y maneras que las personas tienen de clasificar y organizar los espacios, los tiempos, las labores, entre otros. Este proceso de diferenciación, según Bourdieu (2000b), se ha ido incorporando en los cuerpos “en los hábitos de sus agentes” y funcionan como “esquemas de percepciones, tanto de pensamiento como de acción”.

Volviendo Butler (2001, p. 45), la autora plantea que todo este proceso de naturalización ha supuesto la institucionalización de unas “nociones de realidad” que al ser producto de la imposición de una fuerza (autoridad) ha determinado “qué tipo de cuerpos y sexualidades se consideran como reales y verdaderas y cuáles no”. En este sentido, procede a preguntarse por los mecanismos que se han puesto en marcha, para que esta concepción de género y sexualidad hegemónica se constituya en un presupuesto que estructura el orden de la realidad. O como lo establece Bourdieu (2000, p. 34) a través de qué modo, estos “esquemas prácticos de la visión androcéntrica”

determinan valores, significados y principios y configuran una visión y vivencia del mundo.

Considerando que la complejidad de la realidad de nuestros cuerpos y nuestras subjetividades es alta, al hablar tanto del género como del sexo, como categorías que además de ser representadas, dan lugar a representaciones, debemos contemplar que son producto directo de la normalización de la que los cuerpos y las mentes han sido objeto, a través de procesos de domesticación y normalización. Así la manera en que comprendemos lo que nos sucede, explicamos lo que nos rodea y situamos referentes desde donde actuar, también es producto de estos procesos de normalización.

La propuesta de Amigot y Pujol (2006), nos puede ayudar a complementar las apreciaciones anteriormente expuestas. Las autoras establecen en primer lugar, que el sistema sexo/género condiciona la inteligibilidad de los sujetos. Y, en este sentido dicho sistema es determinante en la manera como un individuo se percibe a sí mismo (sexualmente hablando) y a los demás; y además condiciona la manera como se percibe y comprende la realidad. Por otra parte y en relación a lo anterior, establece como el género al ser un dispositivo de poder se sitúa como el referente desde donde se define lo sexual como natural. Mediante este, se

Realizan dos operaciones fundamentales e interrelacionadas; por un lado, la producción de la propia dicotomía del sexo y de las subjetividades vinculadas a ella y, por otro la producción y regulación de las relaciones de poder entre varones y mujeres (Amigot y Pujol 2009, p. 120).

2.2.3 Representaciones de género

Podemos decir que los sujetos se constituyen en seres sociales a través del reconocimiento de los otros, situación en la que se ancla, además el auto-reconocimiento. Estos procesos dependen en gran parte del género (Butler,

2007). Nos hacemos inteligibles para los otros y otras y nos comprendemos a nosotros mismos, de acuerdo a los sentidos y significados que va adquiriendo la diferencia sexual.

En este sentido “las personas solo se vuelven inteligibles (y se hacen inteligibles)”³⁶ cuando poseen un género que se ajusta a las normas reconocibles de inteligibilidad de género”. (p. 71). Tal inteligibilidad adquiere complejidad, en la medida en que el género se entrecruza con otros marcadores sociales tales como la raza, la clase, lo etario, entre otros. Esto da lugar a sentidos y significados diversos, cuestiones determinantes en el reconocimiento y autoreconocimiento.

De esta manera las representaciones de género, se constituyen en un sistema de referencia que nos permite dar un particular significado a los otros y por tanto a los hechos que nos rodean. Es decir la configuración de los sujetos con género, en el marco de un sistema sexo/género particular, es determinante para el tipo de percepción y además para el tipo de comportamientos, que de esta se desprende (Lauretis, 1989).

Sí socialmente soy considerada como mujer y me percibo a mí misma como tal, entonces voy a apreciar mi entorno de una manera; y, también me lo voy a explicar de acuerdo con los referentes de feminidad bajo los que he sido construida/sujetada. En este sentido podemos decir que las representaciones de género, se constituyen no solo bajo la perspectiva que tengo como sujeto con género, para hacer inteligible lo que me rodea, sino que además se instituyen como guía de mis prácticas y acciones.

En relación a lo anterior y en consonancia con Moscovici (1979) podemos pensar que las representaciones de género, también comportan 3 dimensiones: la información, el campo de representación y la actitud. Con respecto, a la primera, es decir la “suma de conocimientos, explicaciones, nociones,

³⁶ Agregado por nosotras.

referentes que un grupo tiene acerca de la realidad o de un objeto social” (Mora 2002, p. 80), esto directamente va a depender de la configuración de un sujeto como sujeto con género. El acceso a los contenidos desde los que se explica y comprende la realidad, es una cuestión mediada por el sentido y significado que socialmente me haya sido adjudicado por ser hombre o mujer.

En cuanto al campo de la representación, es decir la organización jerarquizada, que hacen los grupos sociales y los individuos de los referentes para explicar lo que les sucede, también es una cuestión influenciada por la manera como he sido dotada de género. La prelación de ciertos contenidos, la ubicación y organización en niveles es un proceso que puede ser diferenciado entre hombres y mujeres. En cuanto a la actitud: las sensaciones, reacciones y emociones que generan los contenidos y que permiten que los sujetos tomen posición y actúen en coherencia con dicha posición, igualmente son procesos en los que opera el sentido y significado que me haya sido otorgado en relación a la diferencia sexual.

Por otra parte si consideramos que el género puede ser entendido como un sistema de valores, ideas y prácticas, entonces las representaciones aparejadas a este, permiten a los individuos orientarse en la realidad de la que hacen parte, hacerla inteligible y actuar sobre ella. Además posibilitan la interacción y la comunicación entre género e intra géneros. Los sentidos y significados que adquiere entonces esta categoría, proporcionan un código para el intercambio social y para nombrar y clasificar los diversos aspectos que componen la realidad. Desde esta perspectiva, las representaciones de género se constituyen un conjunto de ideas, creencias y significados a través de los cuales un grupo social, en un momento histórico determinado, precisa las características, roles y comportamientos sociales e individuales de las personas; y, además son determinantes en la producción de estereotipos. Con respecto a lo anterior es de resaltar que

Los contenidos de las representaciones de género son históricamente situadas y consensuales, lo que significa que las representaciones de lo femenino y lo masculino tendrían la misma estructura en los hombres y en las mujeres de determinado grupo en un momento histórico dado, y que dichas representaciones valoran asimétricamente lo femenino y lo masculino, privilegiando esto último, lo que redundaría en una organización social de los roles y posturas de poder de poder en desventaja para las mujeres (Cuétara, 2008, p. 160).

En sí podemos decir que las representaciones de género, son concepciones sociales que devienen de lo que un grupo social ha construido simbólica y prácticamente sobre la diferencia sexual. Sabemos que estas como elaboraciones simbólicas y prácticas concretas, se matizan de acuerdo a la posición de los sujetos en estructuras de poder y por el entrecruce con categorías como la étnica y la clase. Estas concepciones instituyen la valoración y clasificación que se hace de los sujetos y además constituyen las prácticas que devienen de tales valoraciones.

2.3 Las representaciones de género desde una perspectiva bourdiana

De acuerdo con la perspectiva de Bourdieu (2000b) el “prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de biologización de lo social” que se ha realizado en el marco androcéntrico, han contribuido a que tanto el género como el sexo, al constituirse en construcciones sociales naturalizadas, afiancen y refuercen “la división arbitraria que, está en el principio tanto de la realidad como de la representación de la realidad” (p. 14).

En este sentido las representaciones de género, pueden entenderse como producto de “esquemas inconscientes de percepción y de apreciación”, que bajo la impronta de “las estructuras históricas del orden masculino”, se han incorporado en la subjetividad y en la materialidad de los cuerpos. Mediante las comprensiones y explicaciones del mundo que se acuñan bajo esta lógica, los

sujetos y la sociedad producen y organizan la realidad como una estructura, en la que se opone lo masculino y lo femenino³⁷. Al respecto el autor establece “La división entre los sexos parece estar <<en el orden de las cosas>>, como se dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable” (Bourdieu, 2000b, p. 21).

Este orden instaurado, se ha constituido en una “inmensa máquina simbólica”, que además de producir los sentidos y significados que refuerzan dicho orden, los afianza y los reproduce. Esta máquina construye y naturaliza el cuerpo como una realidad bidimensional: biológica y cultural, es decir “como una realidad sexuada y como depositaria de principios de visión y de división sexuales” (p. 22).

De acuerdo con lo anterior, la diferencia anatómica socialmente construida se constituye en la base de la construcción generizada de los cuerpos, la que además afianza la diferencia basada en lo sexual; y, en este sentido

Se establece una relación de causalidad circular que encierra el pensamiento en la evidencia de las relaciones de dominación, inscritas tanto en la objetividad, bajo la forma de divisiones objetivas, como en la subjetividad, bajo la forma de esquemas cognitivos que, organizados de acuerdo con sus divisiones, organizan la percepción de sus divisiones objetivas (Bourdieu, 2000b, p. 24).

La producción social de la diferencia entre hombres y mujeres, es decir como dos esencias sociales jerarquizadas, se afianza en el tipo de relaciones que de esta diferencia se proyectan: “relaciones sociales de dominación y de explotación instituida entre los sexos”, las que a su vez se refuerzan a partir de la existencia de “principios de visión y de división que conducen a clasificar

³⁷ Es de precisar que Bourdieu no considera que la realidad sea dicotómica, tal como lo quiso demostrar Lévi-Strauss, a lo que nos conmina mediante sus planteamientos, es a entender que la producción dicotómica del mundo, es el producto de un orden que se fundó en un momento determinado y al que a través de una serie de operaciones se fue naturalizando, hasta hacerlo parecer como el modelo bajo el que se estructuran todas las sociedades.

todas las cosas del mundo y todas las prácticas” (p. 45). Bajo la perspectiva del autor, tanto el campo de la significación como el de la acción, se encuentran mediados por la oposición diferencial entre lo masculino y lo femenino y por la naturalización de la relación entre dominador y dominado. Así las representaciones de género se constituyen, no solo en el producto de tal división, sino en una manera de, a través de su circulación, naturalizar la diferencia y lo que de esta se desprende.

El posicionamiento de lo masculino por encima de lo femenino, no solo es el producto de este ordenamiento arbitrario de la realidad, sino que al ser una cuestión “naturalizada”, pasa a ser parte de los habitus y en este sentido se constituye en el principio organizador de las percepciones y de las acciones. Tanto hombres como mujeres, al encarnar los habitus quedamos atrapados “en unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación de las relaciones de poder” (p. 40).

En este sentido, las representaciones de género al constituirse en modos y maneras de hacer inteligible la realidad, además de ser el producto de las relaciones de dominación, soportan la naturalización y su reforzamiento. Bajo la propuesta del autor, entonces estas al ser vitales para la apreciación de los otros y de sí mismo, ayudan a reproducir, lo que bajo un esquema donde domina lo masculino, ha sido creado para tal fin.

Con relación a lo expuesto podríamos decir que las representaciones de género además producirse bajo la dominación “no se producen en la lógica pura de las conciencias conocedoras, sino a través de los esquemas de percepción, apreciación y de acción que constituyen los hábitos” y con esto contribuyen no solo a afianzar también los efectos sobre los cuerpos y la subjetividad, sino a producir unas “inclinaciones espontáneamente adaptadas al orden, que la dominación impone”.

Ratificando lo anterior, es de decir que las representaciones de género además de constituirse en instrumentos para afianzar la dominación, facilitan que los principios de visión y de acción androcéntrica sean asimilados en las estructuras sociales y sean incorporados de manera duradera en los cuerpos. Bourdieu, especifica esta apreciación proponiendo que la experiencia práctica del cuerpo, por ejemplo además de ser una cuestión relativa a la incorporación de las estructuras androcéntricas, es la expresión de dichas estructuras.

Así los esquemas de percepción y apreciación, median en la producción de las representaciones que construyen los sujetos sobre sí mismos y sobre los otros. Bajo esta consideración, el autor resalta que el cuerpo se construye para la autovaloración, para ser observado por los otros y para generar las reacciones que se esperan, en el marco de tal estructura. Así la relación con el propio cuerpo y con el cuerpo de otros y otras, es producto del conjunto de significados, que aparejados a los esquemas de percepción y apreciación median la experiencia de interacción entre los agentes.

Siguiendo al autor “Estos esquemas en los cuales el grupo deposita sus estructuras fundamentales (como grande/pequeño, fuerte/débil, grueso/delgado, etc.) se interponen desde el principio entre cualquier agente y su cuerpo” (Bourdieu, 2000b, p. 83). En el marco de los principios de la dominación simbólica, los cuerpos adquieren, características y rasgos acordes con estos principios. De acuerdo con esta lógica socialmente circulan una serie de imágenes y representaciones que refuerzan las prácticas de dominación y por ende la naturalización de esta. Los cuerpos y los objetos, entonces se hacen inteligibles y adquieren existencia, a través de las “categorías dominadoras, es decir, masculinas”. Pero el cuerpo no solo se queda en el ámbito de la apreciación propia y para los otros, también las estructuras incorporadas generan en este, las disposiciones necesarias para afianzar la dominación.

Además de la corporalidad, las expectativas sociales sobre hombres y mujeres, están mediadas por los sentidos y significados que sobre los sujetos se han configurado en el marco de la estructura androcéntrica. La apreciación de las personas, en virtud de los significados diferenciales y jerárquicos adquiridos por lo femenino y lo masculino bajo dicha estructura, es determinante en la asignación de roles, espacios, comportamientos, prácticas, posibilidades, capacidades. Bajo esta lógica “Los hombres siguen dominando el espacio público y el campo de poder (especialmente económico sobre la producción) mientras que las mujeres permanecen entregadas (de manera predominante) al espacio privado (doméstico, espacio de la reproducción)...” (p. 177).

Lo anterior nos sirve para plantear que la valoración simbólica de hombres y mujeres que se hace bajo la lógica androcéntrica, se constituye en la base de la interacción entre agentes en los diferentes campos de poder. Tanto el acceso a los tipos de capital, como la apreciación que de los sujetos con género se hace bajo los contenidos de estos, son determinantes en la participación y de la interacción de los agentes en los espacios sociales.

Siguiendo la perspectiva de Bourdieu, es de decir que en relación a la estructura androcéntrica, mujeres y hombres, en cuanto a lo que representan por estar definidos como tales, acceden de manera diferenciada a los tipos de capital; y, además se incorporan de manera divergente en los campos de poder. Lo anterior es determinante en las posibilidades que los agentes tienen de incidir en tales campos, es decir en las oportunidades que tienen de posicionar y alcanzar sus intereses.

2.3.1 Representaciones de género y la noción de campos

2.3.1.1 Representaciones de género y acceso a la tierra

Meertens (2000), Deere y León (2000) establecen que la manera cómo las sociedades estructuran el género, es una cuestión determinante para el acceso a los factores de producción por parte de hombres y mujeres; y claramente inciden en las oportunidades y procesos de participación de los sujetos en la planificación del desarrollo rural³⁸ y por ende en la negociación de los aspectos relativos al derecho a la tierra.

La relación entre el acceso a la tierra y el género, es una cuestión mediada en gran parte por la red de significaciones que en torno a lo femenino y lo masculino se han configurado en contextos particulares; y, en relación a otros procesos de significación, en el marco de relaciones de poder. De esta manera, no solo el sentido que adquiere el acceso y la propiedad para los sujetos, sino también lo que representan, son aspectos mediados por dichas construcciones. Al respecto y de acuerdo con Córdova (2003, p. 180) culturalmente hablando existen varios condicionantes interrelacionados entre sí, los que son determinantes para el acceso a la propiedad de la tierra de hombres y mujeres.

En primera instancia llama la atención sobre la incidencia que en este aspecto tienen “la percepción dicotomizada de la división sexual del trabajo y de los papeles de género”; en segundo lugar ubica a la manera como se configuran los “sistemas de parentesco”, en específico lo que tiene que ver con la residencia, la conyugalidad y la herencia; y, en tercer lugar una idea instalada con fuerza, en el imaginario sobre que las mujeres “son incapaces de controlar

³⁸ Al respecto, Buendía (2012, p. 30) citando a Medrano y Villar (1988) recalca sobre la importancia que tienen los modelos culturales en la configuración de las dinámicas que atraviesan a las sociedades rurales. Llama la atención, además sobre el peso que tienen “las funciones, roles, identidades y costumbres”, que le son asignadas a varones y mujeres, en el modelamiento de dichas dinámicas.

eficientemente el proceso de producción agrícola”³⁹, lo que implica “la imposibilidad de ejercer un control efectivo sobre la tierra” (Córdova, 2003, p.180) .

Con respecto a la división sexual del trabajo, la autora establece como esta además de definir y prescribir los ámbitos de las actividades femeninas y masculinas, tanto en lo que respecta a la reproducción como a la producción, legítima la pertenencia de los sujetos a espacios específicos “instituyendo con esa exclusividad un estado recíproco de dependencia y complementariedad que se funda en el orden genérico” (p. 181). En cuanto a lo concerniente al parentesco, Córdova establece que, sin generalizar, la tendencia es que las mujeres después del matrimonio, se muden a los lugares de habitación de los maridos, aspecto que tiene marcada importancia a la hora de heredar la tierra, por ejemplo.

Por otra parte y con respecto al imaginario sobre la incapacidad de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas y el control de los recursos, este aspecto tiene que ver directamente con la manera como lo femenino ha sido representado en el marco de modelos tradicionales, situación que para Medrano y Villar (1998) tiene que ver con los procesos de socialización que se desarrollan en los ámbitos rurales.

La familia como institución, estructura grupal personificada, red de relaciones internalizadas, lugar donde se estructura primariamente el ser social, se constituye en el modelo para el desarrollo de comportamientos tipificados como la oposición entre los géneros y los roles que estos deben cumplir. Al respecto los autores afirman:

³⁹ La mayor parte de los estudios sobre la dinámica de la economía campesina llevados a cabo durante la década de los setenta y ochenta, dejaron de lado la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de producción, transformación y comercialización, relegando su papel al ámbito doméstico. Las cifras subvaloran la intervención de la mujer en la dinámica rural debido probablemente a la falta de una conciencia de género que atraviesa las instituciones encargadas del tema.

En la familia se cimentan estas relaciones, se reproducen las categorías definitorias de papeles sociales en torno a lo masculino y lo femenino... En la familia se moldean estos esquemas y se reproducen para permitir el funcionamiento de la estructura social (p. 15).

Así tradicionalmente, en las zonas rurales la mujer, niños, niñas y hombres y mujeres ancianos han estado ligados al área de la reproducción doméstica, a las tareas inherentes al hogar y a los espacios productivos siendo muy limitada la participación en espacios públicos⁴⁰. Este es el tipo de socialización que se ha llamado primaria⁴¹.

Debido a lo anterior y claramente también en relación a la conceptualización y valoración que se hace del papel de las mujeres en el ámbito productivo, existe una clara desvalorización e invisibilización del papel de estas en la dinámica económica. Según Campillo (1999), esta situación tiene que ver con la concepción de trabajo en el marco del capitalismo. Así la contribución femenina, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito productivo, carece de valorización monetaria, en relación a lo que se admite como trabajo. Frente a lo anterior, la autora resalta:

Una es la economía de los bienes, la que se concibe `la economía propiamente dicha`; y por otro lado, la economía oculta, invisible, la economía del cuidado. Lo que la diferencia es que el trabajo en la segunda no es remunerado, no se contabiliza y sobre todo es realizado principalmente por las mujeres, sin distinción de edad, raza o etnia (p. 97).

En opinión de Díaz (2002) esto se debe principalmente a que no existe una distinción nítida entre el ámbito reproductivo y el productivo. Muchas de las

⁴⁰ Según el estudio de Díaz (2002), esta situación ha cambiado considerablemente en los últimos años, en las zonas rurales de Colombia, debido fundamentalmente al conflicto armado, a las dinámicas socioeconómicas que atraviesan el agro, aunque sigue muy vigente la participación de mujeres y niños en el espacio reproductivo.

⁴¹ Sin embargo, las prácticas domésticas y productivas no se encuentran en muchos casos suficientemente delimitadas, razón por la cual el trabajo femenino incluye, la mayor parte de veces el trabajo en estas dos esferas.

actividades de producción y transformación de alimentos y bienes no alimenticios de origen agrícola, que hacen las mujeres se integran al trabajo del hogar y no se asume como normal que tengan que ser remunerados.

Por otra parte, en el imaginario es común que se piense que los hombres participa más activamente en el espacio productivo, es decir en los espacios de socialización secundaria, situación que ha implicado: “un aprendizaje o una adquisición de conocimientos específicos de roles ligados al desempeño del individuo, dentro de ciertos espacios institucionales, que surge de la distribución social del conocimiento y de la división social del trabajo” (p. 29). Lo anterior repercute y es el resultado, del tipo de significados institucionalizados sobre lo masculino (hombre – comercializa, hombre – negocia, hombre- siembra, hombre- participación).

Para Wolf (1971) la construcción de roles llamados “tradicionales” en las sociedades campesinas, corresponde a la forma como se ha diferenciado el trabajo en monetarizado o no, según la relación que establecen con el Estado⁴² en calidad de proveedores y/o consumidores.

En opinión de este autor, la formación de los Estados modernos está ligada a concepciones patriarcales, donde el hombre juega un papel fundamental frente al Estado y a su familia (pretendido espejo del Estado), como proveedor y mediador entre el ámbito privado (familia) y el ámbito público (Estado). Su participación en los espacios públicos es reconocida, visibilizada y por ende monetarizada. Por el contrario las actividades en el ámbito privado no se valoriza en términos monetarios, son intangibles, no existen porque no aportan. Así el hombre se entroniza dentro del imaginario como el sujeto cierto, que existe por su actividad, mientras que las mujeres se toma como sujetos ambiguos, de existencia ligada a la reproducción aspecto necesariamente entendido como privado.

⁴² Wolf, reconoce como Estado la configuración de una sociedad altamente estratificada, donde las actividades de sus habitantes redundan en el mantenimiento de este.

Por otra parte, culturalmente se puede decir que las sociedades agrarias, establecen la supremacía masculina, como principio organizador de la distribución económica y social de recursos (Bourdieu, 2000a). Romany (1997, p. 102) frente a esta cuestión nos invita a considerar que

Mediante el funcionamiento de esta, las mujeres se ubican en la parte más baja de la escala económica y social, una posición que alcanza legitimidad en las formas concretas en que las actividades culturales y sociales caracterizan las diferencias de género.

De acuerdo con lo anterior podemos intuir cómo bajo esta, hombres y mujeres se incorporan de manera desigual a los procesos de producción y distribución de riqueza, en directa relación a los contenidos valorativos de las nociones sobre la masculinidad y la feminidad⁴³.

2.3.1.2 El campo de la política de Tierras y las representaciones de género

En el marco de este estudio, proponemos considerar que el campo de la política de tierras, se consolida como una red de instituciones con prácticas y discursos cuyo objetivo es el regular el acceso a la propiedad y los conflictos aparejados a este posterior a los años 30's del siglo pasado⁴⁴. Además podemos decir que este se ha estructurado en la medida en que posee formas más o menos estables de reproducción del sentido, desplegando así un

⁴³ En la misma tónica de Martha Nussbaum (2002), se considera esencial que para que las mujeres puedan ejercer y gozar, por ejemplo, de su derecho a decidir o tengan la capacidad para ello, es clave desmontar los impedimentos estructurales para el acceso a recursos productivos o a mecanismos que les permitan la generación de ingresos. No es una mentira, que sí las mujeres cuentan con mayores posibilidades de contar y controlar los recursos, directamente, tienen mayores posibilidades de decidir sobre que quieren para su vida.

⁴⁴ Realizaremos una breve introducción sobre la situación de la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia y las problemáticas aparejadas a esta. El objetivo es introducir al lector o lectora sobre aspectos que se constituyen en claves para comprender conceptualmente nuestra propuesta sobre la política de tierras como un campo de poder. Esta explicación será breve, dado que dichas temáticas serán abordadas de manera profunda en el siguiente capítulo.

conjunto de normas y reglas no siempre explícitas que establecen lógicas de relación entre los agentes adscritos (Martín, 2008).

Bajo esta perspectiva dicho espacio, debe ser considerado como un espacio en permanente construcción, donde se dirimen una multiplicidad de representaciones, entre ellas las de género, que encarnan los agentes sociales que en él interactúan y donde el capital encuentra un lugar para desplegarse. En este sentido, este se ha constituido históricamente en el escenario, en el que se articulan agentes, con intereses específicos sobre la tierra y con tipos de capital diferenciado en relación a la clase social a la que pertenecen, al género al que pertenecen y a los hábitos que encarnan: campesinos y campesinas (representados a través de organizaciones y sindicatos agrarios), hacendados y ganaderos, actores estatales, empresarios, entre otros.

Bajo la anterior apreciación, este se puede considerar como un espacio estructurado y jerarquizado de posiciones; escenario en el que los agentes, mediante el poder que le otorga el detentar ciertos tipos de capitales, entablan una lucha por posicionar y alcanzar no solo sus intereses frente al acceso a la tierra, sino también el de ubicar las representaciones que estos encarnan, sobre el uso que a este bien puede dársele o las funciones que este tiene socialmente; y, en concreto sobre el acceso que los individuos en relación al género al que pertenecen, pueden tener a la propiedad de la tierra. En este sentido los intereses no solo gravitan en torno a la consecución de beneficios materiales, sino también beneficios sociales y simbólicos, mediante los cuales ratifican los agentes su posición en el campo, en otros campos y en la sociedad en general⁴⁵.

Además los campos de poder, deben ser entendidos como los espacios sociales, donde se reproduce y refuerza la dominación masculina. Los agentes

⁴⁵ Frente a lo anterior, es de resaltar, que uno de los planteamientos que distancia a Bourdieu (1993) del pensamiento marxista, es la idea sobre que los espacios sociales, no se constituyen únicamente en escenarios de lucha por el acceso a los recursos productivos, sino que además se instituyen en campos de enfrentamiento simbólico entre los agentes, es decir lugares donde se “ponen en juego nada menos que la representación del mundo social...” (p. 27).

que encarnan esquemas de percepción y disposiciones acuñadas bajo la impronta androcéntrica, interactúan en dichos campos, para afianzar inconscientemente un orden social jerárquico. En este sentido hombres y mujeres, se ubican y posicionan en los espacios sociales, desde los esquemas y disposiciones que revisten y su lucha por alcanzar objetivos e intereses, a la final es una pugna que termina por ratificar un orden configurado masculinamente, al que las mujeres también se suman.

Relativo a lo anterior, queremos introducir una consideración importante. Los agentes, al ser configurados corporal y subjetivamente, a partir de unos esquemas de percepción y apreciación inherentes a la estructura androcéntrica, esquemas que además encarnan, participan en los campos de poder e interactúan con otros agentes, a partir de las representaciones de género que devienen de tal estructura. Así las elaboraciones simbólicas y prácticas concretas que los agentes revisten son determinantes no solo para el relacionamiento entre estos, sino también para la definición de que es lo legítimo a perseguir mediante las luchas en un campo de poder.

Por otra parte consideremos que “Pensar en términos de campo es pensar relacionamente” tal como afirma Bourdieu (2013). Pero es de observar que las relaciones entre los agentes corresponden a “relaciones de fuerza objetivas”, las que se van entretejiendo en gran parte con el tipo de capital que detentan estos, el que necesariamente debe ser funcional a los objetivos que se persiguen en el campo y el que posibilita que unos agentes tengan mayor poder sobre otros. De acuerdo con lo anterior la ubicación de los agentes en este campo está determinada por la “distribución de poderes” que pensamos principalmente tiene que ver con el acceso a los capitales: económico, social y simbólico. Dicho acceso implica el establecimiento de jerarquías entre estos, estructura que se configura en relación al volumen global de los capitales y, a la composición de estos.

De acuerdo con lo anterior y siguiendo a Arango (2002), la propuesta de Bourdieu sobre el campo de poder, ofrece además elementos claves para comprender cómo opera la relación entre la dominación de clase y la dominación sexual. La autora establece que clase y género son categorías relacionales, es decir constituyen “posiciones dentro de una estructura de relaciones de poder” (p. 102); y, establece que su entrecruce es determinante en las posibilidades que los agentes tienen, no solo de ubicarse en un campo, sino también de alcanzar sus intereses y previamente de acceder a los capitales.

Por otra parte, partimos de precisar que la configuración del campo al que nos estamos refiriendo no es un proceso fortuito ni estático. Este responde o es el resultado de una serie de dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas (sobre las que daremos cuenta en el siguiente capítulo), cuyo entrecruce en marcos históricos específicos, han posibilitado el que este, vaya adquiriendo con el tiempo, ciertos matices, es decir ciertas variaciones en aspectos tales como: los actores articulados⁴⁶ y su nivel de articulación, intereses y objetivos de la lucha entre estos, las estrategias que despliegan, el tipo de capital que detentan, el volumen de este y su funcionalidad, entre otros.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que históricamente este se ha ido configurando como un campo de fuerzas es decir “como un conjunto de relaciones de fuerza objetivas que se imponen a todos aquellos que entran al campo y que son irreductibles a las intenciones de los agentes individuales o incluso a las interacciones directas entre los agentes” (Bourdieu, 2013, p. 28). En este sentido en el marco de este campo se explicitan relaciones de dominación y de lucha, aspectos que se encuentran matizados por el tipo de

⁴⁶ La serie de sujetos que se enfrentan en este juego, cuentan con capitales específicos de acuerdo a su configuración como tales, cuestión que tiene directa relación con las dinámicas que han producido la estructura de la tenencia de la tierra. En este sentido cada sujeto desde los esquemas de obrar, pensar y sentir que surgen de su pertenencia a una clase específica o contexto también, en el que se ha configurado una noción sobre el deber ser del acceso y uso de la tierra, luchan por el posicionamiento de las imágenes y representaciones que se consideran las adecuadas y legítimas. Esta disputa conllevaría a la obtención de los beneficios específicos de este campo, es decir a “hacer ver y hacer valer ciertas realidades” y “cambiar las categorías de percepción y de apreciación del mundo” (Bourdieu 1987, p 137).

asimetrías que existen entre los agentes, las que tienen su razón de ser por la desigual distribución y composición del capital que detentan, cuestión demarcada, también por la pertenencia a un género.

Bajo la lógica androcéntrica se instituye no solo la diferenciación entre los agentes: hombres y mujeres, sino además la jerarquización de lo masculino sobre lo femenino. Esta cuestión es determinante para el acceso a los diferentes tipos de capital y su volumen; por lo tanto los varones tienen mayores posibilidades de ubicarse en un campo, en una mejor posición y además detentan una mayor capacidad para definir el orden de la realidad.

Frente a lo anterior Arango (2002) reconoce que sí bien las mujeres, en relación a la clase a la que pertenecen, pueden acceder a un volumen considerable de capital, este acceso se ve limitado por el hecho de haber sido definidas y conceptuadas bajo los principios androcéntricos. Frente a lo anterior la autora recalca “De este modo, la transformación de la división sexual del trabajo mediante el acceso de las mujeres a profesiones y oficios tradicionalmente masculinos, no basta para modificar la relación de fuerzas simbólicas entre hombres y mujeres” (p. 103).

Esta idea nos lleva a considerar un aspecto sobre el que llama la atención Bourdieu (1991): las estrategias de reproducción, es decir las maneras y mecanismos mediante los cuales los agentes buscan conservar o aumentar su capital y con ello mantener o mejorar su posición en la estructura de clases. Es de decir, que sí bien las estrategias buscan modificaciones en la organización del campo, la funcionalidad y eficiencia de estas va a depender del volumen y la estructura del capital que detentan. En este sentido “Las estrategias son las acciones probables y posibles de los habitus. Son las probabilidades objetivas inscritas en cada habitus -que reflejan los capitales distribuidos-, las que disparan las distintas acciones, que son vividas como posibilidades subjetivas por los agentes sociales, como expectativas de éxito o fracaso” ” (Alonso, 2013, p 10).

Seguendo al Bourdieu, el Estado en el marco de este campo sería el agente que “concentra un conjunto de recursos simbólicos” (2002, p. 50) los que lo dotan de mayor legitimidad para regular lo que se dice y debe hacer frente a la problemática referida. En cuanto a los otros agentes que conforman dicho campo (organizaciones de campesinos y campesinas, hacendados, ganaderos, empresarios) los definimos como tales, en la medida en que encarnan unos *habitus* particulares, de acuerdo a su configuración como clase social, aspecto directamente relacionado con la evolución histórica de la estructura de la tenencia de la tierra. En este sentido consideramos que los diferentes agentes, que participan en el campo, se constituyen en emanaciones sociales de las realidades de las que son producto, las que han sido objetivadas e interiorizadas y se evidencian en los modos en que los agentes perciben, se representan o representan a los otros, se relacionan entre sí y luchan por el posicionamiento de sus intereses.

Retomando el concepto de *habitus* como “disposición estratégica” (Bourdieu, 1987, p 79), podemos decir que la formación de los agentes, como tales, en el marco de la conformación de la estructura de la tenencia de la tierra, la que directamente está relacionada con la configuración de las clases sociales rurales, ha permitido que estos encarnen una serie de esquemas de percepción y de acción, que los dotan de ciertas ventajas o desventajas a la hora de posicionarse y luchar, en el marco del campo, por el logro de sus intereses. Aspectos como el hablar correctamente, el manejo de ciertos términos y conocimientos, el tipo de trato que se da a los otros, la ubicación de la vivienda en los cascos urbanos de las zonas rurales o en las grandes ciudades y el género al que se pertenece, pueden constituirse en mecanismos simbólicos para avanzar en lo que se persigue como agente.

Con respecto a la formación de clases rurales, el autor (2002) especifica sobre la importancia de considerar, que las elites rurales, no necesariamente como agentes se han configurado por su vivencia o permanencia en los campos, sino

que pueden ser reconocidos como tales, incluso viviendo en la ciudad, en la medida en que acceden en mayor medida a la propiedad de la tierra. Observa que es posible, entonces que dicho sujeto (como perteneciente a una clase social) además del poder y prestigio económico que detenta por el acceso a la tierra, tenga por su ubicación en el ámbito urbano el acceso a por ejemplo tipos de capital cultural y social, los que le otorgaran mayores oportunidades para conseguir sus intereses. En este sentido, nos invita a considerar como “Los valores de los pueblos rurales y de las pequeñas ciudades irrumpen no sin resistencias en las aldeas dispersas del medio rural” (P, 47), teniendo un peso considerable en las características que los agentes detentan y en las ganancias que obtienen de su participación en el campo⁴⁷.

En relación a lo anterior es clave tener en cuenta la relación que se establece entre lo urbano y lo rural (entendiendo este aspecto como determinante para la formación de las clases sociales y por supuesto de los habitus de las personas), las connotaciones que en diferentes niveles va adquiriendo tal oposición y los efectos que esto puede tener en la configuración del campo de nuestro interés. En relación a esto, un aspecto sobre el que vale la pena discernir es en cuanto a los efectos que dicha relación tiene sobre los procesos de distinción de los agentes.

Como sabemos Bourdieu (1984) no solo define a la distinción como gusto estético, sino que considera que también corresponde a las maneras en que interpretamos la realidad y la experimentamos, de acuerdo a los esquemas de percepción y de acción, que encarnamos en función de la pertenencia a una clase social. Podríamos decir entonces que este corresponde a las disposiciones estéticas que surgen y se institucionalizan por las condiciones

⁴⁷ En este orden de ideas es de considerar que bajo la perspectiva del autor, es clave tener en cuenta que la ruralidad (que no solo tiene como eje el acceso a la tierra, sino con un sin fin de factores interrelacionados) se va reconfigurando permanentemente. Este ámbito enfrenta constantemente procesos de desestructuración y por ende tiene lugar su reconfiguración, lo cual supone cambios considerables en las clases, en los agentes y en las problemáticas que se negocian en el marco del campo. También esto modifica los intereses y las estrategias que se usen para conseguir los fines.

sociales de los agentes, las que son posibles y posibilitan un tipo de consumo de bienes culturales, simbólicos, económicos y sociales.

En este sentido el acceso a lo urbano, entendido este como el ámbito privilegiado sobre el rural (en cuanto a lo institucional, social, económico y simbólico), le permite a los agentes detentar una posición diferenciada sobre aquellos a quienes se considera como sujetos eminentemente rurales (en nuestro caso campesinos y campesinas). La posibilidad que los agentes tienen de desplazarse hacia y emplazarse en lo urbano (ciudades y cascos urbanos de los campos) se sitúa como un mecanismo de distinción, es decir como criterios de selección o de exclusión, aspectos que otorgan mayor poder para conseguir los beneficios del campo en cuestión.

Relacionado con lo que se ha venido tratando hasta el momento, podemos situar la propuesta que Bourdieu (2004) establece en su obra “El baile de los solteros” sobre el campesino y su cuerpo. En el marco de esta obra nos invita a considerar como las clases sociales rurales se diferencian entre sí por la hexis corporal, la que se ha configurado en gran parte por el acceso al capital económico y cultural y claramente por el tipo de acceso de los sujetos a los beneficios de lo urbano (considerado como el ámbito de la civilización). Al respecto nos dice “es la hexis corporal lo que constituye el objeto primero de la percepción, a la vez en sí misma y a título de signum social” (p. 116).

Este aspecto puede considerarse relevante en el tipo de posicionamiento de los agentes en el campo referido. Las élites rurales y los funcionarios y funcionarias públicos (sobre todo del nivel central) detentarán gestos, actitudes, vestimenta y modales que pueden ser considerarse más refinados y socialmente mejor aceptados que las de campesinos y campesinas y quizás se constituyan en ventajas a la hora de conseguir el posicionar sus intereses.

Con respecto a lo anterior, otro elemento que resalta el autor es sobre la importancia que tiene la dominancia de la economía de mercado sobre la

pequeña producción campesina, aspecto que conlleva también a la conformación de las clases y de los agentes. El privilegio estatal que se le da a la primera sobre la segunda, implica tipos de relación y de dominación entre los agentes, las que son determinantes en las negociaciones en el campo referido.

Otra consideración a tener en cuenta, es que los agentes que componen este campo, en ocasiones pueden ser próximos por la clase a la que pertenecen y el capital que detentan (ganaderos y empresarios), por los beneficios que persiguen (campesinos y campesinas y empresarios agrícolas) o por los significados que encarnan en torno al uso y la propiedad de la tierra (ganaderos y funcionarios y funcionarias estatales); en otros momentos pueden distanciarse enormemente, lo cual supone que la lucha por los beneficios del campo será más feroz.

Un punto esencial en todo este debate, es el referente a la violencia simbólica. Las relaciones entre los agentes en el marco del campo, corresponden al tipo de interacciones que socialmente se han establecido en el marco de la estructura agraria. Tal como se especificará en el capítulo siguiente, el modelo bimodal, además de dar lugar a las clases sociales rurales, también determina el tipo de relaciones sociales entre los sujetos. Las élites rurales establecen relaciones con campesinos y campesinas, en lógica de dominación. Dominación que puede ser directa o sutil. Con directa hacemos referencia, por ejemplo a relaciones económicas que claramente benefician al hacendado⁴⁸, en cuanto a las maneras sutiles de dominación, podríamos decir que son aquellas que socialmente se han configurado y desde las que se mantiene una relación jerárquica: ser el padrino o madrina de los hijos e hijas de un peón o del arrendatario.

Las posibilidades pueden ser variadas, pero lo que no se puede desconocer es que proceden de la ubicación de un agente en un sistema jerárquico que está

⁴⁸ Sobre estas y otras cuestiones especificaremos en detalle en el siguiente capítulo, en el marco del cual explicitaremos en detalle la relación entre estructuración de la tenencia de la tierra y formación de clases sociales.

determinado por la estructura de la tenencia de la tierra. Además es de considerar que la naturalización de la jerarquía permite la instauración de formas de dominancia y todas estas tienen expresión concreta en el campo de nuestro interés. En este sentido consideramos que

La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como natural... (Bourdieu, 1999, p. 224-225).

Por otra parte, opinamos que en el marco del espacio que se analizará, se establece además de una lucha concreta por el acceso a la propiedad de la tierra, en concreto por los beneficios económicos que esto supone, una lucha simbólica para la producción del sentido común, es decir de la “nominación legítima” sobre el acceso a este bien. Tanto para una como para otra lucha, la violencia simbólica y la violencia real, juegan un papel esencial. En la medida en que el ser propietario de grandes extensiones de tierra, otorga poder y estatus, el uso de la fuerza se ha constituido en el mecanismo privilegiado para la acumulación de este bien.

La acumulación por medio de la violencia, podemos decir que a su vez ha dado lugar al uso de la violencia simbólica. En este sentido los agentes con mayor poder, negocian desde los efectos que ha ocasionado el uso de la violencia directa y quienes tienen menor poder (campesino y campesino) negocian también desde los efectos que el uso de la fuerza ha ocasionado sobre ellos⁴⁹.

⁴⁹ Sí bien esta es una cuestión que se va a desarrollar más adelante con mayor profundidad, queremos resaltar que el uso de la fuerza, se ha constituido en una estrategia para la acumulación de la tierra en pocas manos. Esta situación ha sido una constante durante todo el siglo XX y en lo que va corrido del XXI. La intimidación física, las amenazas, las desapariciones forzadas, las masacres y el desplazamiento forzado de población, se constituyen en acciones mediante las cuales se desposeído a campesinos y campesinas de sus tierras (Sañudo, 2011).

Siguiendo a Bourdieu (2004) podríamos decir que mediante el uso de la fuerza, los agentes modelan también la percepción y la organización concreta y simbólica de toda la vida social, afirmando su poder y legitimándose como el sujeto rural legítimo. En palabras de Sañudo (2011) la violencia armada se ha constituido en una manera de mantener intrincados juegos de poder, mediante los que se busca mantener de órdenes dominantes o de oposiciones de los agentes en una estructura de poder.

3. El campo de la política de tierras en Colombia

La información que se presenta en este capítulo, tiene como finalidad la de brindar al lector elementos para comprender, bajo la perspectiva teórica y metodológica propuesta en esta investigación, la configuración del campo de la política de tierras en Colombia y las características que este ha ido tomando históricamente.

Se evidenciará en primer lugar cómo el tipo de estructura de la tenencia de la tierra que se configura en relación a diversos factores y los conflictos que emergen en relación a esto, tienen directa relación con la consolidación de una institucionalidad encaminada a regular los aspectos relativos a la propiedad de este insumo; y, cómo dicha institucionalidad, se ha constituido, en momentos coyunturales, en escenario, para que diferentes agentes se enfrenten con el objetivo de negociar los conflictos y construir mecanismos para promover el acceso a este recurso productivo.

En relación a lo anterior mostraremos cómo el acceso a la propiedad, propició, la formación de las clases sociales⁵⁰ aspecto íntimamente relacionado con la configuración de los agentes que más adelante tendrán protagonismo en la negociación de aspectos relativos a este tema.

En este capítulo solamente se presentarán los principales aspectos de la configuración de este campo y los rasgos que esta ha ido adquiriendo, información que nos permitirá contextualizar el posterior análisis de los procesos de negociación que enmarcaron la formulación de las leyes de Reforma Agraria: 30 de 1988 y 160 de 1994, que tal como se ha explicitado en

⁵⁰ Recordemos que estas, en el marco de este trabajo, se definen bajo la perspectiva de Bourdieu (1984, p. 38), quien las conceptualiza como “conjuntos de agentes ocupando posiciones similares que, situados en condiciones similares y sometidos a condicionamientos similares, tienen todas las probabilidades de tener disposiciones e intereses similares, luego de producir prácticas similares y parecidas tomas de posición”. Este conjunto de agentes comparte maneras y modos de percibir, nombrar, construir la realidad, dado que en general comparten principios de visión y de división.

la introducción, se constituyen en procesos que enmarcan la incorporación de cuestiones relativas al género en la política de tierras.

Es de aclarar que la no especificación en muchos casos, sobre consideraciones de género o de la situación de las mujeres, en los procesos referenciados, se debe a dos cuestiones: por un lado, la bibliografía consultada no presenta en general datos sobre el papel de estas en la construcción de la política de tierras; y por otro, solo es hasta comienzos de la década de los ochentas que las cuestiones de género, se ubican como ejes transversales de la definición de la política de tierras en Colombia.

3.1 Acumulación de la tierra, estructura de la propiedad y clases sociales rurales⁵¹

La estructura de la propiedad de la tierra en Colombia⁵² según Machado (2009) se puede considerar históricamente como de tipo bimodal: por un lado se presenta una elevada concentración de este recurso en pocas manos; y, por otro el acceso de millones de personas bajo la modalidad de minifundio. Los antecedentes de la configuración de tal modelo, deben ser rastreados, en la serie de procesos económicos y políticos que se gestaron durante la Colonia (periodo comprendido entre los años 1550 y 1810), específicamente en la etapa correspondiente al reinado en España de los Borbones⁵³ (siglo XVIII).

⁵¹ Sí bien la configuración de una estructura de la tenencia de la tierra en Colombia, no tiene que ver solamente con actividades referentes a la producción agropecuaria haremos énfasis en esta, dado que la conformación del campo de la política de tierras en Colombia, principalmente tiene que ver con el acceso a la propiedad de la tierra para actividades de producción de este tipo. Esto es posible verificarlo al revisar las diferentes leyes que se formularon durante todo el siglo XX, en las que se puede entrever que la promoción y regulación del acceso a este recurso se relaciona sobre todo con la producción agrícola y ganadera. Además es de resaltar que la agricultura y la ganadería se configuran como principales ejes de la actividad económica del país, durante los siglos XIX y XX.

⁵² Siguiendo a Machado (2002, p. 26) esta se define como “un sistema de relaciones jurídico-políticas de dominio sobre la tierra, que adopta diferentes formas históricas: unas fundamentadas en la propiedad (latifundio, minifundio, plantación), otras en la tenencia precaria (aparcería, arrendamiento, colonato, etc.)”.

⁵³ Sí bien se especifica que es a partir de la llegada y reinado de los Borbones a los tronos de España que comienza con fuerza la consolidación de la bimodalidad en la tenencia de la tierra, es de resaltar que previamente con la Conquista y las primeras etapas de la Colonia, se instauraron las condiciones para el posterior despojo de la tierra y la acumulación de esta en

Durante esta época es cuando se da un impulso al capitalismo en territorio americano, bajo esta lógica (la del capitalismo) dicho territorio, comenzó a ser concebido en una doble dimensión. Por un lado, como mercado para los productos europeos; y, por otro como proveedor de materias primas. Es en este contexto que se sucede la transformación de la tierra en bien transable con el objetivo de incentivar la agricultura de exportación.

Para ello fueron necesarios una serie de arreglos institucionales, mediante los que se propició la desintegración de resguardos⁵⁴. Dicha medida, operó como estrategia para legitimar la concesión de tierras, y con ello el control y dominio de sus habitantes, a mujeres y hombres de origen español, criollos y “mestizos blanqueados”⁵⁵, a quienes se los conminó al desarrollo de procesos de explotación privada (sobre todo agrícola y extractivista). Esta táctica, en el territorio, que hoy corresponde a Colombia, entre otras cuestiones dio lugar a una serie de aspectos estrechamente relacionados⁵⁶:

1. Una temprana configuración de clases sociales rurales, en el marco de las cuáles por un lado se puede ubicar a una “aristocracia terrateniente” (Reyes, 1979), en manos de quienes se concentraron las tierras más productivas, ubicadas muy cerca de los núcleos urbanos; y, por otro se conformó un grueso de población flotante (indígenas y mestizos), que dadas las bajas posibilidades de acceso a la propiedad se vieron

pocas manos. Bajo esta presunción es útil llamar la atención sobre la creación de la figura de la encomienda. Mediante esta se entregaba a una persona un grupo considerable de población nativa, quienes además de ser sujetos para la evangelización, se constituyeron en mano de obra.

⁵⁴ El Resguardo es una institución legal sociopolítica de origen colonial español en América. Surgió para suplir las necesidades de las ciudades coloniales, no solo de mano de obra sino también para la provisión de alimentos.

⁵⁵ Nos referimos a aquellas personas hijas e hijos de españoles e indígenas, quienes además de tener una tez más clara que otros y otras, habían amansado algún tipo de poder, que las y los legitimaba frente al sistema como sujetos de derecho a la propiedad.

⁵⁶ Es de resaltar que los aspectos referenciados variaba en características a lo largo y ancho del país, en relación a factores geográficos, a las dinámicas económicas y las actividades productivas que se iban instituyendo en ciertas zonas, a la presencia de otras actividades como la minería o al tipo de población predominante en ciertas regiones. Esta variación va a incidir además en el tipo de vínculo que se establecía entre los sin tierra o los habitantes del minifundio con la hacienda. La articulación podía gravitar entre ser aparceros, peones o arrendatarios de tierra (Sañudo, 2000).

obligados a permanecer en los terrenos concesionados (en calidad de mano de obra)⁵⁷; y, a conformar la pequeña propiedad privada en territorios altos y lejanos de los núcleos urbanos (Zuleta, 1976).

2. La configuración temprana de una estructura agraria, la que presenta rasgos correspondientes a lo que se ha denominado como bimodalidad, es decir:

Un sistema donde se conforman dos polos de tenencia de la propiedad de la tierra: uno conformado por un gran número de propietarios con muy poca tierra (minifundio) y otro donde un porcentaje pequeño de propietarios que monopolizan un gran porcentaje de ella; en el medio hay una porción de medianos propietarios que no tienen una relación significativa de poder en la estructura” (Machado 2002, p. 38).

De manera complementaria, es de aclarar que la expresión que tomó el latifundio en aquella época fue la de la hacienda. Este modelo se consolidó gracias a la existencia de pequeñas propiedades a su alrededor, las que además de proveer una parte de la mano de obra, suplían de productos alimenticios a propietarios y propietarias. Tal como específica Colmenares (1997, p. 43) “el sistema de hacienda coexistió con comunidades campesinas y se alimentó de ellas”, estableciéndose entre uno y otro una especie de simbiosis que se alimentó el entramado de relaciones sociales, políticas y económicas de carácter rural”.

3. La transformación del valor de la tierra, en ocasión de la liberalización de la tierra y de la mano de obra indígena. Esta comienza a ser percibida como un insumo clave para el desarrollo de actividades económicas,

⁵⁷ Frente a lo establecido es de aclarar que tanto los procesos de desintegración de los resguardos como los procesos acelerados de mestización y el declive demográfico de la población nativa, coadyuvaban a la formación de una mano de obra libre, que como lo plantea Colmenares (1997) no estaba sujeta a las cargas del tributo, que la Corona impuso a los indígenas, al comenzar la Colonia.

mediante las cuales sea viable la participación en circuitos de comercio internacional e intercolonias. Tovar (1980) establece frente a lo anterior que tanto la demanda internacional de productos cárnicos, de caña de azúcar y de cacao, como la demanda interna de alimentos en relación a las necesidades de las urbes y de los centros mineros, implicaron un afianzamiento de la producción agrícola y ganadera y con ello una transformación del valor del suelo, ahora este recurso visto como bien transable.

4. En relación a lo anterior, este recurso comienza a constituirse en la principal fuente de poder económico y de prestigio para quienes accedían a grandes extensiones (latifundio). Muestra de esto es que la clasificación social empieza a sustentarse, en gran parte por la posesión de este recurso (Fals Borda, 1976). En este sentido el monopolio de la tierra, se constituye en el factor que media la concentración del poder social, cuestión que para García (2006, p. 227) fue factible porque dicho modelo surgió y se consolidó como expresión de un orden señorial, es decir como “una constelación de poder, articulado al monopolio selectivo sobre la tierra agrícola y al dominio paternalista sobre la mano de obra adscrita servilmente a esta tierra”⁵⁸.

3.1.1 Rasgos de las primeras clases sociales rurales

Siguiendo a García (1973) en este momento, tiene lugar la configuración de una “rígida y desequilibrada estructura de clases”, que en función de la posición de los sujetos en la estructura de la tenencia de la tierra, se caracteriza por estar compuesta por: 1. las élites rurales (terratenientes de origen español, criollos o mestizos blanqueados); y, 2. Grupo que estaba compuesto por un

⁵⁸ Los hacendados a base se convierten en las elites hacendiles implicando esto que "A su alrededor se tejiera la maraña de relaciones comerciales y productivas locales y regionales, constituyéndose en el eje del movimiento económico y social, de las jerarquizaciones de poder y de entramado de las representaciones ideológicas tradicionales, desplegándose un complejo ambivalente de relaciones con la comunidad: de dependencia y fidelidad y de rechazo y recelo, ambigüedad contradictoria que estará presente en todo el sistema de interacciones sociales, políticas y culturales."(Hernández, 1991, p. 21).

crisol de actores en relación al tipo de acceso a la tierra⁵⁹: peones⁶⁰, minifundistas (propietarios de pequeños predios de tierra), arrendatarios⁶¹ y colonos⁶².

Tal como se sugirió con anterioridad, tal conformación de la estructura, fue posible, en palabras de Vega (2012), por: a) La transformación del valor de la tierra, cuestión que se sucede en el marco de la entrada del capitalismo a la región; b) La privatización de las tierras y la expulsión violenta de los habitantes de los territorios concesionados, situación que fue posible a través de la desintegración de los resguardos; c) La conversión de la fuerza de trabajo en mercancía, cuestión que se explica porque gran parte de la masa de habitantes rurales que quedaron marginados del acceso a la tierra debieron articularse a los latifundios en calidad de trabajadores, aparceros, arrendatarios, peones. Este aspecto en palabras del autor conllevó, entre otros a “la monetización de todas las relaciones e intercambios y la imposición de impuestos sobre los recursos y la tierra, al tráfico de personas y el sometimiento brutal de seres humanos (servidumbre), al establecimiento de formas de usura y de crédito que enriquecen a de las clases dominantes” (p. 4).

De acuerdo con Machado (2002) dicha estructura además correspondió con un orden social, económico y político, que se constituye en virtud del entramado de relaciones entre los sujetos de acuerdo a su posición en la estructura de la tenencia de la tierra (aspecto que demarca la pertenencia a una clase social).

⁵⁹ A quienes de aquí en adelante llamaremos a esta serie de actores, campesinos. Tal decisión se toma bajo el referente que nos brinda el concepto propuesto por Wolf (1971). Este autor llama campesinos a la serie de actores que desarrollan prácticas relativas a la producción agrícola y a otras como la ganadera, cuyos excedentes son transferidos a grupos dominantes de gobernantes que los emplea para asegurar su propio nivel de vida y que distribuyen a los demás grupos sociales que no labran la tierra pero a cambio de ser alimentados dan a cambio otros artículos que ellos no fabrican.

⁶⁰ Estos en palabras de Vega (2004, p. 21) el grupo denominado peones, correspondía a “los campesinos sin tierra y sin recursos, empleados en las haciendas a cambio de un salario”.

⁶¹ El autor referenciado, define a los arrendatarios como “los trabajadores permanentes de las haciendas, de las que recibían una parte significativa de sus medios de subsistencia (vivienda, y trabajo), pero a cambio de innumerables compromisos”. (p. 21)

⁶² Con respecto a los colonos Vega, establece que estos corresponden a campesinos y campesinas que no tenían títulos legales de las tierras en las que se encontraban.

Bajo esta consideración una mejor posición en tal estructura (dada por la concentración y acumulación) otorgaba poder, prestigio y estatus. En palabras del autor, esto se matiza en que “Quienes poseían la tierra, tenían el monopolio sobre los recursos y los mecanismos de intercambio, de transferencia de recursos y de representatividad política”⁶³ (p. 27). Además al constituirse en los propietarios del insumo para la producción, detentan un papel clave en la configuración de las “formas de organización del trabajo” y con ello en las formas de organización social. En este sentido el ser dueños de grandes extensiones de tierra (latifundio) permitió tener un mayor y amplio dominio “sobre las comunidades que están a su alrededor aspecto que le es funcional al proceso de dominio” (p. 37).

3.1.2 Guerras de independencia y estructura de la tenencia de la tierra

Con las guerras de independencia (hechos que marcan gran parte del siglo XIX) el modelo (bimodal) no enfrentó mayores transformaciones. Grandes extensiones de tierra situados en conexión con los principales centros urbanos fundados durante la colonia se encontraban en manos de “una reducida oligarquía” (Kalmanovitz, 2009, p. 53), quienes además de no contar con títulos legales, detentaban el poder sobre este recurso desde la colonia; paralelamente existía una gran masa de población compuesta⁶⁴ por un lado por propietarios (la mayoría sin título) de pequeñas parcelas; y, por otro de personas sin tierra; y, algunas tierras (no muchas) estaban en manos de empresas extranjeras y nacionales (mineras, agroindustriales).

Sin embargo lo anterior, no todos los territorios del país, estaban ocupados. Para esta época aun existían grandes extensiones de tierra sin asignar y legalizar, las que según Kalmanovitz “fueron objeto de una carrera por su apropiación durante todo el siglo XIX”, Este aspecto se constituyó en un factor

⁶³ Estos aspectos permanecen hasta hoy, claro que con cambios importantes en relación a las dinámicas que han atravesado al país históricamente.

⁶⁴ Esta masa estaba compuesta por mujeres y hombres indígenas, mestizos, negros libertos y españoles pobres, quienes trabajaban en las haciendas en calidad de aparceros, peones o trabajaban en sus propias parcelas.

determinante para la consolidación definitiva de la bimodalidad de la tenencia de la tierra (p. 55), proceso en el que el naciente Estado, jugó un papel fundamental.

Mediante un prolijo desarrollo normativo, este propició por un lado el acceso de personas a grandes extensiones de tierra (quienes provenían de las elites conformadas con anterioridad, dueños y dueñas de haciendas y empresas); y por otro estimuló, mediante la concesión legal de pequeñas extensiones de tierra, a que campesinos y campesinas se establecieran en zonas de baldíos. La intencionalidad que subyace a esta decisión gubernamental, es la de usar las concesiones de tierras como “un instrumento para alcanzar diversos objetivos” (p. 57). Por un lado le permitía al Estado generar cuantiosos excedentes pues la mayoría de las concesiones (de grandes extensiones) se otorgaron a personas, con suficiente capital para invertir en explotaciones agroindustriales y extractivistas, lo que le significó al país el percibir recursos para ser invertidos en otros ámbitos; por otro mediante la cesión de este recurso a quienes no lo tenían o precariamente accedían a este, el gobierno persiguió la desactivación de posibles conflictos agrarios.

Además de la política de concesiones, las expropiaciones que generaban las guerras de independencia y “la operación de un mercado incompleto e imperfecto de tierras” se constituyen en factores que al combinarse dieron lugar, durante la segunda mitad del siglo XIX a “una estructura agraria fundamentada en la concentración y el control de la propiedad rural por parte de terratenientes, comerciantes, capitalistas, políticos, militares y compañías extranjeras” (Kalmanovitz, 2009, p. 54). Es de resaltar que en paralelo se afianzaba una economía agrícola de pequeña escala, la que principalmente estaba orientada a la generación de excedentes marginales para la subsistencia de colonos y campesinos.

Por otra parte es importante subrayar que es en el marco del siglo XIX el Estado se preocupó de manera importante por expedir normas encaminadas a

la legalización de la propiedad sobre este bien. En esta vía y para la resolución de problemas, relativos a la propiedad y el acceso, se conformó una estructura institucional, en la que confluían diversas instancias (sobre todo correspondientes al ejecutivo) con roles específicos (Colmenares, 1987). Sin embargo y de acuerdo con Machado (2009) los intentos estatales por regular estas cuestiones, deben ser entendidos como estrategias orientadas a promover la acumulación de este recurso en pocas manos⁶⁵. En este sentido este (el Estado) se constituyó en un actor fundamental para la consolidación de la estructura bimodal.

Es de resaltar también que durante este periodo de tiempo, la economía rural, se proyecta con fuerza hacia el mercado internacional aspecto con un peso significativo en los procesos de concentración. De acuerdo con Tovar (1988) esto se debe fundamentalmente a que el país transita a un modo de producción mercantil, basado en la exportación, transacción que se constituye en fundamental para la dinamización de la economía. En este contexto los sectores exportadores se configuran como ejes importantes de la dinámica económica del país y el Estado da un impulso prioritario a la producción de exportables.

Melo (1987) resalta como en este momento se conforman, además de las haciendas existentes, nuevas, las que fueron creadas por empresarios urbanos “muchos con ellos con experiencia comercial previa”. En estas se instauró una “compleja serie de formas de organización laboral” (p. 137). Podemos ver entonces la emergencia de nuevos actores como parte de las clases sociales rurales.

De acuerdo a lo anterior es posible observar que las clases sociales rurales, lejos de reestructurarse se afianzaron, dado que la bimodalidad se consolidó.

⁶⁵ Porque como dice Melo (1987, p. 131) esta tendencia, que en principio parecía querer favorecer el acceso a tierra de personas que se encontraban sin tierra al interior de la frontera agrícola, a la final favoreció a un puñado de empresarios rurales y urbanos, quienes se hicieron “a amplias concesiones territoriales, con la esperanza de convertirlas en haciendas ganaderas o productoras de bienes de exportación”.

Sí en el anterior periodo, los criollos (hijos e hijas de españoles en América) no tenían mayores privilegios sobre la tierra, a partir de las guerras de independencia estos y estas entran a conformar en gran medida el grupo con mayor concentración y poder sobre este recurso. Otros como comerciantes y empresarios también detentan un puesto importante en tal grupo. Un aspecto a resaltar, en relación a lo anterior, es cómo a partir de la abolición de la esclavitud, la masa de campesinos sin tierra o con un acceso precario se amplió (Kalmanovitz, 2008). En este sentido, consideramos que mediante las guerras de independencia, lejos de consolidarse esta como una manera de desarticular las jerarquías, estas se ratificaron.

Por otra parte y siguiendo a Melo (1987) una de las dinámicas que caracterizaron el siglo XIX fue la expansión de la frontera agrícola, a través de procesos de colonización. Pero esto solamente conllevó a que una pequeña fracción de la clase campesina, pudiese acceder a grandes proporciones de terreno rural, aspecto que no tuvo mayor impacto tampoco en su estatus, dada su marginación histórica del sistema político y social. En principio el recurso económico no le bastó para dar el paso hacia las élites rurales.

Sin embargo, tal como lo manifiesta el autor, el resultado más sobresaliente de este proceso es que un gran número de personas sin tierra, pudieron acceder a pequeñas propiedades, en las que se instalaron, siendo factible el iniciar y consolidar procesos de producción de alimentos para la subsistencia y de algunos excedentes para comerciar en los mercados de los núcleos urbanos. Es de considerar que “hasta finales del siglo XIX el abastecimiento de los centros urbanos de productos agrícolas, con excepción de carne y azúcar, dependió de los pequeños propietarios” (Melo, 1987, p. 136).

Por otra parte el impulso a la colonización, propició “sustancialmente la distribución de los habitantes en el territorio nacional”, con lo cual se “abrieron zonas agrícolas en áreas hasta entonces incultas” (p. 130). Estos sujetos, a quienes se denominaría colonos y colonas, ocuparon terrenos en las zonas

rurales, que en ocasiones pertenencia al Estado (baldíos); pero además ocuparon zonas que pertenecían a criollas y criollos⁶⁶, que tras las guerras de independencia, fueron beneficiados con la concesión y el título de propiedades hasta donde los “ojos pudiesen posarse”⁶⁷ (Melo, 1987), situación que generó algunos conflictos, que “se expresaron en solicitudes al gobierno, pleitos y actos diversos de violencia” (p. 131).

Los ganadores de los pleitos en general serían las élites, quienes gracias al poder que detentaban, podían influir de manera contundente en el plano jurídico y político. Esto es posible porque en los núcleos urbanos, se va configurando una burocracia, la que va tejiendo alianzas con terratenientes, empresarios, hacendados. Estos últimos, en relación a los recursos económicos que poseen, el estatus y posición social van a ejercer una importante presión política e influencia ideológica sobre el Estado tanto al nivel central como en los niveles regionales.

En este sentido es de resaltar, que las élites rurales comenzaron a jugar un importante papel en el plano político, incidiendo en los espacios de toma de decisiones y en la gobernabilidad. Además muchos de estos sujetos fueron nombrados en posiciones claves de la institucionalidad, con lo cual su radio de influencia y dominio se iba acrecentando⁶⁸. De esta manera se puede entrever que las élites, iban consolidando su poder, en varios ámbitos, no solo por su posición, en la estructura de la tenencia de la tierra (cuestión que en parte es la base de su poder) sino por el entramado de relaciones que iban tejiendo alrededor de la posesión de este recurso.

⁶⁶ Así se denominaba a las personas de origen español (padre y madre provenientes de la Península Ibérica) nacidas en el continente americano.

⁶⁷ Popularmente se dice que Simón Bolívar cuando repartió las tierras, decía a sus soldados y generales que hasta donde pudiesen posarse los ojos serían zonas de su propiedad.

⁶⁸ Esta situación es muy importante en el siglo siguiente, sobre todo desde mediados, pues el nombramiento de personas de las élites en puestos decisorios de asuntos agrarios, tuvo un significado muy importante en el mantenimiento de la bimodalidad. Sobre este aspecto volveremos más adelante.

Es de considerar, además que a finales del siglo XIX, un aspecto de marcada importancia, el que será relevante para comprender la continuidad de procesos de acumulación de la tierra en pocas manos y por ende la conformación de las clases sociales rurales, es el desarrollo de la actividad ganadera. Esta junto con la minería y la agricultura se constituyeron en las principales y más extendidas prácticas económicas en el país durante la última década del siglo referido y además se estableció como uno de los sectores con mayor atractivo para la inversión⁶⁹.

En este contexto y siguiendo a Machado (2009, p. 45) mediante el desmonte del bosque y la siembra de pastos fue posible “la conquista de las tierras bajas por parte de los terratenientes”. Así la cría de ganado se constituyó en una estrategia para que sectores de las élites rurales y urbanas, ampliaran sus propiedades y su radio de acción sobre otros territorios, con lo cual se reforzó el poder económico, político y social de la hacienda. Lo anterior no hubiese sido posible “si los hacendados no hubieran tenido el control del poder político real, que a su vez surge de la concentración del poder económico que resulta de todo el proceso que precedió al desarrollo de la hacienda” (Reyes, 1979, p. 23).

En este sentido dicha actividad, además de ser una maniobra económica para la ampliación de las propiedades de las élites rurales y de su capital económico, también, otorgaba prestigio, poder político y territorial. Frente a lo anterior Ausdal (2008), establece que mediante esta se instituye una relación tierra-ganado-poder, base de la configuración de los ganaderos como una facción de la élite rural, con una importante influencia política y social. Su poder históricamente se ha consolidado a través del despojo de las tierras del

⁶⁹ Sendos son los aspectos que coadyuvan a esto. Por un lado el impulso de la navegación a vapor por el Río Magdalena (que hasta hoy se constituye en la principal arteria fluvial del país, dado que une el centro del país con los principales puertos marítimos de la Costa Atlántica); y, por otro la fundación de nuevas ciudades y la ampliación del territorio ocupado (proceso impulsado por la colonización), la construcción de carreteras y el surgimiento de una generación de comerciantes y empresarios quienes además de perspicazmente, darse cuenta de las ventajas, que para tal práctica, tenían las zonas planas del país y los valles de los grandes ríos, contaban con capital para invertir no solo en tierras y ganado, sino también en tecnología (aspecto clave para el impulso de dicha práctica) (Ausdal, 2008).

campesinado y de sujetarlos, mediante arreglos económicos y sociales, como capital votante. En esta vía de análisis es de reconocer además, que las haciendas ganaderas dieron lugar a complejos procesos de interacción social (Flórez, 2008) entre las élites y los campesinos, aspecto que jugó un papel esencial en la posterior conformación “de importantes sociedades regionales” (p. 123).

3.1.3 Los albores de siglo y la consolidación de la agricultura empresarial

Al comenzar el siglo XX se sucede un hecho fundamental: la Guerra de los Mil Días⁷⁰, la que fue “sin duda la conflagración civil más larga y cruenta y la de más devastadores efectos para la economía nacional” (Bejarano, 1987, p. 45). Tras la finalización de esta, la reconstrucción económica y política del país no se constituyó en una tarea fácil. Es en manos del presidente Rafael Reyes, en quien recayó la labor de sacar al país de la crisis. En este camino, “adoptó una nueva política económica sustentada sobre la centralización fiscal, el proteccionismo y el impulso estatal a las actividades empresariales” (p. 46).

Bajo su gobierno tuvieron lugar dos hechos que son fundamentales para la estructuración del modelo de tenencia de la tierra en Colombia. Por un lado se formula la primera política de fomento agrícola, en el marco de la cual se otorgó un especial impulso a la exportación y subvención de la producción de café, tabaco, caucho y algodón (Machado, 2009).

Por otro lado, a través del estímulo a la inversión extranjera, se propició la entrada de empresas foráneas como la United Fruit Company, interesadas en la producción a gran escala de banano para la exportación⁷¹. La presencia de

⁷⁰ La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil disputada entre 1899 y 1902 y se origina por el enfrentamiento entre el partido Liberal y el gobierno del partido Nacional. Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental (en un principio nacionalista después conservador) bien organizado y un ejército de guerrillas (liberales) mal entrenado y anárquico.

⁷¹ Esta empresa fue beneficiada con cuantiosos subsidios, exenciones de impuestos y adjudicación de extensos terrenos para la explotación en la región caribe del país (Bejarano, 1987).

esta empresa en dicha región, es una cuestión acompañada del despojo de la tierra de miles de habitantes, quienes a través de la fuerza fueron intimidados y obligados a abandonar sus predios. El despojo y el desplazamiento de campesinos y colonos dieron lugar a numerosos y graves conflictos, los cuales fueron a su vez resueltos a través de la fuerza y el uso de la violencia institucional.

En relación a lo anterior, Bejarano (1987) establece que posterior a la Guerra de los Mil Días y hasta entrado el cuarto del siglo XX, se dio un aumento importante tanto del área total cultivada de productos para el consumo local como del área total de productos para la exportación. Con respecto a la producción para el consumo interno, es de resaltar que campesinos y campesinas jugaron un papel fundamental, pues su participación en la producción de alimentos para el abastecimiento del mercado nacional y sobre todo de las ciudades, se constituyó en casi un 60%, sobre todo en lo que respecta a caña de azúcar, cebada, trigo y maíz (Bejarano, 1987).

En este contexto, la demanda de alimentos gracias al crecimiento urbano, fue un aspecto esencial para la dinamización de la agricultura y la ganadería. Las poblaciones ubicadas cerca de las principales ciudades, se instituyeron como enclaves campesinos de producción agrícola para la alimentación (sobre todo en la zona Andina), contrario a lo que pasó en las zonas más alejadas, las que se configuraron en parte como enclaves ganaderos, actividad que reposaba en, su mayoría en manos de terratenientes y hacendados.

Una cuestión sobre la que es clave llamar la atención, es sobre como que durante las primeras décadas del siglo XX, se consolida la doble cara del modelo agropecuario, el que tiene correspondencia con la estructura de la tenencia de la tierra. Por un lado en los latifundios se acentúa una producción a gran escala, tecnificada y de carácter industrial, ya sea para la exportación o para suplir mercados nacionales más amplios; y, por otro una producción

campesina de alimentos principalmente, la que suple mercados locales y en la que no se invierten mayores recursos para su tecnificación.

En este sentido lo que se puede observar es que sí bien se conserva la economía campesina, en este contexto, se inserta el latifundio y por ende a las élites rurales, a los nuevos procesos del capitalismo. Mediante la “alianza con los grupos que controlan el mercado financiero, de almacenamiento y mercadeo y con la agroindustria” (Machado 2002, p. 65) se pasa de la dualidad minifundio – latifundio a la economía empresarial – economía campesina, pero sin que se desestructure la tenencia de la tierra de carácter bimodal.

En este contexto la tierra y sus recursos comienzan a vislumbrarse, con mayor fuerza, como insumos para la producción y no cualquier producción, una producción eficiente y competitiva, mediante la cual sea posible suplir las necesidades de exportación y de un consumo local de alimentos pensado a gran escala. Todo este cambio apalancado por el Estado, instancia que en la urgencia de modernizar el ámbito rural legítima, mediante discursos y prácticas, la gran producción, como la actividad viable, es decir la que debe situarse por encima de la economía campesina, a la que se considera poco competitiva y mínimamente eficiente.

Un aspecto importante a considerar, en relación a lo establecido, es el surgimiento de una institución gremial, que tendrá una marcada importancia en la formulación de las políticas rurales en Colombia, que para nuestro estudio, se constituye en un agente fundamental en el proceso de negociación de la política de tierras, como lo veremos más adelante. Hablamos de la Sociedad de Agricultores Colombianos, instancia que si bien nace a finales del siglo XIX, adquiere un papel protagónico en los primeros años del siglo XX, el que sigue vigente hasta hoy. Su origen y consolidación está relacionado con la urgencia de volver competitiva la producción agrícola, sobre todo de aquella orientada a la exportación.

En el marco de esta instancia confluyen productores y políticos, quienes mantenían un control burocrático y financiero sobre los territorios de mayor producción en el país y quienes pretenden incidir a nivel estatal con el fin de obtener, de este sector, beneficios económicos y técnicos para la modernización de la agricultura⁷² (Bejarano, 1997).

Además en este gremio confluían sobre todo, representantes de las élites rurales, quienes o por el poder político que habían alcanzado en algunas regiones del país, o por el nivel de capital cultural que detentaban, gracias a su papel en el gremio exportador o por su formación fuera del país, se constituyeron en agentes con un peso importante para la formulación de las políticas agrícolas⁷³.

En palabras de Bejarano (1985, p. 37) la SAC debe ser considerado un grupo de presión, en la medida en que “sus acciones se han encaminado a afectar las decisiones del poder público a través de diversos canales de acceso a ese poder, con el objetivo de avanzar en sus intereses económicos y de carácter privado”⁷⁴.

Otro hecho de marcada trascendencia, sobre el que es necesario resaltar, además que está directamente relacionado con los procesos de acumulación

⁷² A finales del siglo XIX a nivel del agro y sobre todo de aquel orientado a la exportación, se habían implementado algunas innovaciones de carácter tecnológico con miras a mejorar la productividad de los suelos, sin embargo estas no habían sido suficientes para hacer de la agricultura y la ganadería prácticas competitivas. La SAC siendo consciente de ello, se constituye en una instancia, que a nivel privado, propugnó por una revolución tecnológica de la agricultura en el país, que no solo se daría por la vía de las transformaciones técnicas, también sería necesario la creación de mecanismos de difusión y de investigación (Bejarano, 1985). Los miembros de dicha instancia, estaban convencidos que, mediante la introducción en el país, de algunos avances obtenidos en Europa y USA, en el ámbito de las ciencias agronómicas, la productividad y calidad de los productos, tanto para la exportación, como para el consumo interno, mejorarían considerablemente. Por otra parte dicha instancia, enfatizó en la importancia del desarrollo de una infraestructura institucional, no solo para el fomento de esta práctica, sino para el apoyo a la asociatividad, como mecanismo para la producción a gran escala.

⁷³ Este hecho, revela como los agentes que componen dicha instancia, al ser parte de una clase social, consolidada históricamente, mediante las alianzas que van estableciendo con agentes gubernamentales, modelan el deber ser de la ruralidad.

⁷⁴ Un mayor análisis sobre este grupo se presentará cuando demos cuenta de la institucionalización del campo referido, dado que la SAC se constituye en uno de los agentes que participa activamente en las negociaciones en materia de tierras.

de la tierra en el país, es el despegue y afianzamiento de la producción del café, proceso que debe ser entendido en una doble vía.

Por un lado en algunas zonas (lo que hoy se conoce como los departamentos de Santander, Cundinamarca y Tolima) se consolidó, desde finales del siglo XIX, un modelo de producción de tipo hacendil. En estas zonas, debido a la crisis en las exportaciones de caucho, índigo y tabaco, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la producción de café se constituyó en una opción viable para que las clases terratenientes rurales, continuaran participando en los canales de exportación, con ello conservando su poder y un lugar privilegiado a nivel social y político (Palacios, 1989).

Este tipo de haciendas comienzan a afianzarse como importantes polos de dinamización económica, cuestión que se ve reforzada porque por un lado comerciantes de origen urbano, vieron de interés invertir grandes cantidades de capital, en un producto altamente demandado en el exterior; y, por otro porque gracias a la vecindad con parcelas campesinas, fue posible el acceder a mano de obra barata, lo que entre otras cuestiones tuvo un efecto negativo sobre la pequeña producción agrícola, la que se vio desplazada en pos de la consolidación del trabajo asalariado (Machado, 2001).

Además es de resaltar que la consolidación de la hacienda cafetera se facilitó porque el Estado puso en marcha "un engranaje de instrumentos crediticios y comerciales muy ligados a las estructuras de parentesco, las relaciones políticas y la pertenencia o representación de intereses provinciales bien delimitados" (p. 34). Gracias a esto muchos comerciantes de procedencia urbana y sin abandonar este como su ámbito de residencia, se transformaron en caficultores y exportadores, participando activamente en los canales de comercio internacional y en este contexto "fueron permeables a las ideologías políticas y a las corrientes de pensamiento europeo"⁷⁵.

⁷⁵ Las anteriores referencias, nos permite entrever que gracias al cultivo y comercialización del café, tiene lugar la ampliación de los actores pertenecientes a la clase terrateniente rural, pues

Es de reiterar que este tipo de hacienda, al seguir la misma lógica del latifundio, se constituyó en un espacio de afianzamiento de las jerarquías. Tal como lo anota Palacios, en estas se imponía “sistemas de trabajo bastante opresivos” y además en relación a la “gran disparidad cultural y étnica entre los propietarios (blancos) y los jornaleros y peones (indios y mestizos) se reforzaron actitudes ideológicas racistas” (Palacios, 1989, p. 45).

Por otra parte se sucedió la consolidación de un modelo de producción de café a pequeña escala, sobre todo en las zonas situadas en la parte occidental del país, el que se sustentó en el acceso de los pobladores a la pequeña y mediana propiedad (el tamaño de las parcelas oscilaba entre 30 y 50 hectáreas). Este proceso fue posible gracias a la colonización de esta región, por parte de campesinos y campesinas sin tierra, quienes no contaban ni con los recursos económicos, ni con el apoyo estatal y mucho menos con el poder social, para consolidar el modelo hacendil.

Sin embargo tanto la riqueza en humus de los suelos, como el hecho que el cultivo de café, no demandara grandes inversiones de capital ni de tecnología, además al ser un producto durable y de fácil procesamiento, propiciaron que este se consolidara como la mejor opción productiva para campesinos y campesinas⁷⁶. Sin embargo como anota Palacios (1989) esto no supuso un salto significativo en la jerarquía social, no solo porque este grupo poblacional no alcanzó a detentar grandes propiedades de tierra (el factor más determinante del lugar que se ocupe en la escala social), sino también porque no pudieron tener acceso a recursos económicos, ni políticos cuestión que no posibilitó el construir poderes locales importantes.

ya no solo esta está compuesta, en algunas zonas del país, por hacendados y empresarios, sino que ahora hacen parte de dicho grupo, comerciantes de procedencia urbana.

⁷⁶ Bejarano (1994), resalta que, esta al ser una actividad económica bajo la tutela de pequeños productores y productoras, permitió una eficiencia en el uso de la mano de obra, la que provenía de las mismas familias. Además estos entraban en conexión directa con quién compraba el grano para su comercialización, cuestión que incide en un mayor acceso a capital, lo que a largo plazo mejoró considerablemente su situación económica y social.

3.2 Institucionalización, evolución y consolidación del campo de la política de tierras

3.2.1 Los años 30`s y el posicionamiento del problema agrario en la agenda política

Solo es hasta la década de los treinta del siglo pasado que la “cuestión agraria se perfiló por primera vez como un asunto políticamente importante” ⁷⁷ (Zamosc, 1987, p. 18). El origen de esto se sitúa directamente en la emergencia de una serie de conflictos por la tierra entre terratenientes y campesinos, sin embargo de acuerdo con autores como Zamosc (1987), Gilhodes (1976) y Sánchez (1977) la ubicación en el plano político de las problemáticas rurales, se debió además a la interrelación de una serie de factores sucedidos entre 1925 y 1929. Durante este periodo (considerado como de mayor auge económico en los albores del siglo pasado) dichos factores a modo de ver de los autores referenciados, propiciaron transformaciones significativas en la realidad del país, las que fueron determinantes para el tratamiento político y a nivel institucional de dichas problemáticas.

A continuación brevemente expondremos los principales aspectos relativos a estos factores:

- **Crecimiento económico, inversión pública y revalorización de la tierra.**

El auge de las exportaciones durante este periodo conllevó a que la economía nacional experimentara un acelerado crecimiento, proceso que propició la inversión estatal en infraestructura para el transporte interno y las mejoras

⁷⁷ Bejarano (1985, p. 192) establece que hasta finales de la década del 20, del siglo pasado “la legislación existente sobre tierras, era en gran medida inoperante y apenas afectaba las áreas marginales de la actividad económica, reduciéndose a algunas leyes sobre colonización que le otorgaban el derecho al colono de hacerse propietario si cultivaba los baldíos nacionales”.

públicas⁷⁸. Esta inversión supuso la dinamización económica de amplias zonas rurales y su integración a los circuitos de mercadeo. Dicha articulación, aunada a un incipiente proceso de industrialización y modernización propiciada por el Estado tuvo un especial efecto en la revalorización de la tierra recurso que ahora retiene el interés de otros sectores, quienes encuentran la inversión en este, una opción para aumentar su capital.

Sí bien en anteriores periodos el acceso este insumo se postuló como de importancia para comerciantes, empresarios y líderes políticos de las ciudades, es hasta comienzos de los años 20's del siglo pasado, que además de los actores referidos, otros como profesionales e industriales y algunas facciones de la burguesía urbana, se suman al complejo grupo con intereses particulares en el agro y por ende en la tierra (Gaitán, 1984). Así:

Capas medias y altas de la sociedad vieron en la posesión de este recurso una oportunidad de riqueza: comerciantes, abogados, terratenientes o políticos de familias prominentes, jóvenes ambiciosos, caciques políticos, tenderos, prestamistas se constituyeron en nuevos actores con intereses sobre todo de tipo especulativo (Machado 2009, p 173).

- **Industrialización del país, crecimiento urbano, migraciones campo-ciudad y consolidación de un proletariado urbano.**

El incremento de las exportaciones fue a la par con el incremento de las importaciones, sobre todo de tecnología. Este aspecto facilitó el despegue de procesos de manufactura de productos alimenticios y de otros, con lo cual en palabras de Bejarano (1989) se elevó la capacidad productiva del país en sectores como el textil, el de alimentos, el de materias primas para la producción agrícola y el de la metalmecánica. Lo anterior propició un desarrollo industrial sobre todo en el ámbito urbano, escenario que atrajo a

⁷⁸ Bejarano (1989, p. 67), resalta frente a la inversión pública, que esta “llegó a representar entre 1925 y 1929, el 29.4% de la inversión total nacional, especialmente en transporte, donde el porcentaje ascendió a 74.9% en este mismo período”.

campesinos y campesinas hacia las principales ciudades del país. Estos sectores vieron en la industria o en las obras de infraestructura, un nicho de posibilidades laborales (Gaitán, 1984) dado que se ofrecían salarios significativamente superiores a los del campo (Bejarano, 1989).

En relación a este aspecto es de considerar que, a través de la migración rural – urbana, se configura una masa proletaria⁷⁹, la que establece alianzas importantes con fracciones radicales del Partido Liberal, el Partido Comunista y el Partido Socialista Revolucionario, grupos políticos que se habían consolidado con fuerza en la escena política del país, desde los inicios del siglo XX. Estas alianzas en palabras de Bejarano (1985) fueron determinantes para que el proletariado, se constituyese con el tiempo, en un actor político de relevancia y en aliado de las luchas campesinas por la tierra⁸⁰.

Frente a lo anterior, Sánchez (1977) observa cómo dichas conexiones incidieron en la configuración de ligas campesinas y sindicatos agrarios, formas organizativas que según el autor, se constituyeron en las principales expresiones para la posterior canalización del descontento rural.

La configuración de estas formas organizativas, es una cuestión directamente relacionada, por un lado con la influencia del Partido Comunista y algunas facciones radicales del Partido Liberal, quienes comenzaron a formar en sus filas al proletariado urbano de origen campesino. Muchos de aquellos y aquellas que hicieron parte de las filas, por ejemplo del PCC, regresaron a los campos con la finalidad de propiciar procesos organizativos locales para denunciar el abuso, del que eran víctimas; por otra parte, Sánchez resalta la importancia que tuvo la disposición de la Ley 83, mediante la cual se reconocía

⁷⁹ Al respecto Sánchez (1977, p. 9), establece “como consecuencia de la expansión del sistema productivo, tuvo lugar una creciente diferenciación social, es decir, el surgimiento de nuevas clases sociales y el fortalecimiento de las emergentes que buscaban cada vez más afanosamente su incorporación al sistema político – hegemónico y excluyente- y, eventualmente su derrocamiento”.

⁸⁰ Respecto a esto, un ejemplo a resaltar es la conexión que se estableció entre los obreros sindicalizados de las urbes con organizaciones campesinas, alianza mediante la que fue posible visibilizar la explotación y las precarias condiciones y maltrato de peones y arrendatarios.

y facultaba a campesinos y campesinas a agremiarse, aspecto que sí bien coadyuvo a la emergencia de procesos organizativos, lo que hizo no es sino “dar vida jurídica a una fuerza política que el Estado ya no podía parar” (p. 63).

- **Estado, burguesía y la crisis de la hacienda.**

El ascenso del partido liberal al poder en 1928, junto con la presencia de facciones radicales de dicho partido en el gobierno, en palabras de Machado (2009) favorecieron, que en el marco estatal se posicionara con fuerza la idea de transformar la estructura de la tenencia de la tierra y las condiciones de trabajo aparejadas a esta. La principal razón que se arguyó, es que la hacienda y las formas de sujeción de la mano de obra en las que esta se sustentaba, se constituían en un obstáculo para el desarrollo del capitalismo industrial, dado que dificultaba la innovación tecnológica, limitaba la movilidad de mano de obra, restringía el desarrollo del comercio, las mejoras en infraestructura favorecían a unos pocos y, además impedía el desarrollo pleno del capitalismo.

Frente a lo anterior, Gilhodes (1976, p 8) observa que durante este periodo “había ya importantes fracciones burguesas dentro del gobierno que apoyaban la ruptura de relaciones de producción semif feudales y la implantación de relaciones capitalistas en el campo”, cuestión que significó el entrar en contradicción con los intereses de terratenientes y otros actores de las élites rurales.

Además el autor resalta como dicha burguesía, presionó para que el Estado, realizara los acomodamientos institucionales necesarios para la modernización de lo rural, estableciendo que en este contexto “era necesario al mismo tiempo que la agricultura elevara su productividad y los excedentes obtenidos en ella, para alimentar una creciente población urbana, que dieran lugar a una producción suficientemente abundante y hacer que los precios agrícolas bajaran y por tanto que el precio relativo del salario fuera barato y se incrementara así la acumulación capitalista industrial” (p. 10).

En sí, se puede decir que el proceso de industrialización empujado por el Estado, estaba orientado, no solo a reformar la estructura de la tenencia de la tierra, sino también y, como resultado de lo anterior, conformar una clase media rural, quienes no solamente debería cumplir un papel como productores, sino también, que con el tiempo se podría transformar en potenciales consumidores de los productos manufacturados (Machado, 2009).

Tal como señalamos al comienzo de este aparte, los factores referenciados y su conjunción, bajo la lógica de esta investigación, promueven la configuración de un escenario para que la cuestión agraria se ubique como un asunto importante la agenda política en la década de los treinta. Sin embargo es de considerar que dicha ubicación también está directamente relacionada con la emergencia de conflictos agrarios, a los que el Estado pretende dar solución, a través de prácticas y discursos regulatorios del acceso a la propiedad de la tierra.

3.2.1.1 Los conflicto agrarios y la configuración del campesinado como agente

En el marco de los estudios sobre la historia política de Colombia, se considera que el movimiento campesino surge como tal durante la década de los treinta⁸¹ y de ahí en adelante, a través de diversas expresiones organizativas, comienza a jugar un importante papel en el ámbito de las negociaciones sobre aspectos y problemáticas concernientes a la reforma de la estructura de la tenencia de la tierra.

Bajo la perspectiva bourdiana, podemos decir que desde este momento y, de acuerdo, a cuestiones como la formación política que va adquiriendo, a través

⁸¹ Al respecto Meertens (2002, p. 59) establece “los años treinta ocupan un lugar especial en la historiografía de Colombia. Se conocen como la década de las luchas agrarias que constituyeron, además de un hito en los estudios rurales de Colombia, una pieza indispensable en la comprensión de los procesos políticos e institucionales de la época. Esas luchas se relacionaron en forma directa con las transformaciones del sistema de la hacienda en aquellos años”.

de las alianzas con partidos como el Comunista y el Liberal, las conexiones con una burguesía estatal progresista, el acceso y apropiación de mecanismos legales para la defensa de sus derechos, la importancia que adquiere como actor clave para el desarrollo capitalista del agro, entre otras cuestiones, es que el campesinado se conforma como un grupo (claramente heterogéneo con acceso a capitales sociales, políticos y simbólicos importantes); y, por ende como un actor legítimo para la negociación, en el plano gubernamental, de temas relativos a la propiedad de la tierra.

Varios autores entre ellos Machado (2009), Gilhodes (1976), Sánchez (1977), Meertens (2000), entre otros coinciden en afirmar que la protesta campesina emerge con fuerza y de manera organizada en lugares y regiones donde existían conflictos por el acceso y propiedad de la tierra. En específico donde se presentaba la alta concentración de la propiedad en pocas manos y, donde además no existía claridad sobre títulos y linderos y se presentaban formas abusivas de sujeción de la mano de obra.

Gilhodes (1976), nos ofrece una tipologización concreta sobre el tipo de conflictos que se suscitaron en esta década, dividiendo estos en tres: 1. Aquellos que pusieron el énfasis en denunciar las condiciones de trabajo en las haciendas. En el marco de este conflicto, es de resaltar la influencia ejercida por el PCC, cuestión que incidió notablemente en la conformación de ligas campesinas y sindicatos agrarios; 2. Pugnas explícitas por la concentración de la tierra en manos de terratenientes, hacendados, empresarios, comerciantes, políticos y, el despojo del que habían sido víctimas campesinos y campesinas. De acuerdo con Sánchez (1977) en el marco de este tipo de conflicto, también la protesta se canalizó a través de ligas campesinas y sindicatos agrarios; y, 3. Conflictos en zonas del país donde todavía pervivía población indígena, quienes defendían el territorio arguyendo la posesión de títulos coloniales, que aún seguían vigentes.

De manera complementaria Machado (2009) establece que en la base de los conflictos, se puede entrever la necesidad de cambio del modelo productivo, reivindicación que gravitaba entre el reconocimiento de los derechos de propiedad para campesinos y campesinas, el fraccionamiento de las haciendas, la regulación de las relaciones de trabajo y la recuperación de los baldíos, que paulatinamente había sido otorgados por el Estado a empresarios, comerciantes y terratenientes. En este contexto es de resaltar que una cuestión que comienza a vislumbrarse en el marco de estas luchas, es la reivindicación de derechos fundamentales del cultivador⁸².

Por otra parte y de acuerdo con Vega (2004) un factor fundamental para la consolidación de un movimiento agrario por la tierra y los derechos de los campesinos, durante esta década, tiene que ver con la migración urbano – rural, que se produjo como resultado de la relentización del desarrollo industrial en el país, posterior a la primera guerra mundial. En este contexto gran parte de la población rural que había migrado a las ciudades regresa de nuevo al campo. Muchos y muchos de estos, al haber hecho parte de la masa proletaria, fueron formados políticamente tanto en las filas del Partido Comunista, como del Partido Socialista y las facciones radicales del Partido Liberal, quienes se congregaban sobre todo en el Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, UNIR.

Dicha formación, en palabras de Vega (2004) propició una serie de cambios subjetivos, es decir “la emergencia de nuevas ideologías y formas de organización política” (p, 24), las cuales posibilitaron que bajo nuevos lenguajes se expresaran ancestrales aspiraciones por la tierra. Bajo esta perspectiva podemos decir que las ideas socialistas que tuvieron un calado importante en la masa proletaria después, en el marco de la movilización campesina se

⁸² Frente a esto, Meertens (2002) observa, como la libertad de cultivo se convirtió en el eje de lucha de las organizaciones agrarias. Se esperaba que mediante la libertad de cultivo, fuese posible el acceso a los canales de comercialización.

constituirían en referentes políticos claves para la lucha por la tierra y por los derechos de los trabajadores rurales⁸³.

En específico los problemas agrarios, bajo este marco ideológico, fueron entendidos como una “expresión de las contradicciones entre capital y trabajo” (p. 27), cuestión que requería un tratamiento a través de un “programa antiterrateniente y democrático”. Mediante esta estrategia, se buscaba en última instancia “la democratización de la posesión de la tierra” (Vega, 2004, p. 25) y en concreto “la lucha contra el latifundio hasta lograr su desaparición y conseguir la liberación del campesino mediante la posesión de la tierra”.

Bajo esta lógica la protesta campesina organizada tomó expresiones concretas a través de las ligas campesinas y los sindicatos de trabajadores agrícolas. Unas y otros comenzaron a propagarse rápidamente en varios territorios de la nación, consolidándose con mayor facilidad en zonas donde se habían desarrollado luchas locales por la tierra⁸⁴. Estas expresiones organizativas, tal como se estableció antes, constituyeron alianzas importantes sobre todo con el Partido Comunista y con el UNIR, instancias que, además se fortalecieron enormemente gracias a la masa de militantes campesinos que conformaban sus filas (a través de ligas y sindicatos).

Frente a este aspecto es clave discurrir sobre lo planteado por Uribe (2007), quien considera que las tendencias ideológicas de uno y otro partido, fueron determinantes tanto para el tipo de reclamos, como para el tipo de estrategias que se desplegaron en los diferentes territorios. Sí bien los dos partidos le apuntaban a la desestructuración del modelo de la tenencia de la tierra, a través de la descomposición de las grandes haciendas y el reconocimiento de la propiedad de campesinos y colonos, en las zonas donde el PCC tuvo influencia (departamento del Tolima sobre todo) comenzó a calar la idea que al

⁸³ En este contexto, muchos campesinos y también personas de origen urbano jugaron un papel importante como “mediadores ideológicos”, promoviendo la “revolución social”, la “abolición de la propiedad privada” y la no participación electoral.

⁸⁴ Meertens (2002, p. 68), aludiendo a datos del Ministerio de Trabajo establece que entre 1930 y 1940 se registraron oficialmente 103 sindicatos agrícolas y ligas campesinas en todo el país.

cambio en la estructura de la tenencia de la tierra, se llegaría a través de la revolución. Así se supuso que mediante la sublevación agraria, sería posible dar al traste con el poder político, social y económico, que las élites rurales, habían ido amansando históricamente a través de la acumulación de la tierra; y, así fundar en los campos un nuevo modelo⁸⁵ (Sánchez, 1977).

Por su parte el UNIR, contemplaba la transformación de dicha estructura, a través de la incidencia en el plano político, es decir a través de acciones organizadas para afectar el plano gubernamental y con esto dar lugar a la construcción de una legislación sensible a las problemáticas de campesinos y campesinas. Una perspectiva redistributiva es posible entrever en las apuestas de este Partido, tal como lo establece Sánchez, quien observa que “en efecto, la solución unirista, bien en su fórmula redistributiva, o en las cooperativas intervenidas estatalmente, se inscribe dentro de los marcos del sistema económico – vigentes” (p. 79)⁸⁶.

A los aspectos anteriormente mencionados debemos sumarle otra consideración, sobre la que Gaitán (1984) y Machado (2009) ponen especial énfasis. La experiencia urbana de campesinos y campesinas permitió que estos y estas conocieran y se apropiaran de recursos jurídicos para reclamar ante el Estado la revisión de títulos de propiedad sobre los baldíos y en general sobre muchas de las grandes haciendas del país. Esta cuestión, otorgó un matiz práctico a las ideas revolucionarias, es decir quienes retornaron a los campos encarnaban los argumentos legales mediante los cuales era posible el

⁸⁵ En el contexto de influencia del PCC, por un lado campesinos y campesinas se organizaron para llevar a cabo huelgas solicitando la libertad de cultivo, la supresión de los servicios de trabajo abusivos, el incremento en las remuneraciones para el caso de peones y trabajadores de las haciendas y un mejoramiento en las condiciones de trabajo; por otro lado usaron tácticas más agresivas, como las invasiones de las haciendas, la destrucción de la infraestructura que se hallaba en estas, la posesión de predios, entre otros (Bejarano, 1985).

⁸⁶ En la perspectiva de Meertens (2002), esta postura política revela los intereses de las facciones burguesas, instaladas en el Estado, quienes reivindicaban la necesidad de democratizar la propiedad de la tierra con el objetivo de enfilarse a Colombia, definitivamente en el camino del capitalismo. Sin embargo para la autora el posicionamiento del UNIR, como un partido aliado de las luchas campesinas por la tierra, “significaba una canalización efectiva de las demandas hacia el parlamento”, espacio en el que eran defendidas por senadores como Jorge Eliecer Gaitán, bajo esta lógica, estas encontraron eco en el plano político.

desestructurar la inequitativa distribución de la tierra de una manera formal. En este sentido dichos argumentos reforzaban las apuestas de carácter ideológico, cuestión que para Bejarano (1985, p 189) se relacionaba no solo con un intento de “poner en cuestión no solamente la frontera jurídica de las tierras, sino también su explotación económica”.

3.2.1.2 Negociación alrededor de los conflictos por la tierra

La emergencia de conflictos agrarios, urgió del Estado la construcción de estrategias políticas con el fin de solventarlos. El programa político del gobierno de López Pumarejo (1934 – 1938), fue un intento por resolver las inequidades existentes en los campos, cuestión visualizada como el principal factor obstaculizante del desarrollo económico del país y el foco de los conflictos. A dicho programa se le denominó “Revolución en Marcha”.

En el marco de este programa, se explicitó el interés, por modernizar al país, para que este se pusiera definitivamente a tono con los aires capitalistas. Con miras a avanzar en dicha pretensión, se establecen una serie de reformas profundas, de la mano de un equipo de liberales progresistas. Dichas reformas estaban enfocadas a: 1. Sacar al país de su postración colonial y feudal, a través de la transformación de las estructuras económica, social y política; 2. Impulsar el proceso de industrialización nacional; y, 3. Dar espacio al movimiento popular de origen agrario y obrero.

Tal como podemos ver la concepción de López sobre la propiedad de la tierra, no es otra que la de sentar las bases para cumplir con los requerimientos del mercado de capitales de los países capitalistas más desarrollados tendientes a crear las condiciones de exportación de capitales y de inversión directa indispensable para sus economías y anhelados por los dirigentes colombianos⁸⁷. Sin embargo lo anterior, siguiendo a Machado (2009) se puede

⁸⁷ Con respecto a los temas relativos a la tenencia de la tierra, en las zonas rurales, López se considera un representante de un liberalismo radical, en el marco del cual se establece que la propiedad de este insumo no solamente corresponde con el título formal, sino también con el

decir que en marco del gobierno de López, se sentaron las bases y se configuraron los escenarios, para incorporar a diferentes actores en la negociación de las políticas que se pretendían implementar para la modernización.

No es sino hasta este gobierno, que las clases populares y el movimiento social campesino y obrero, encuentran un espacio favorable para el posicionamiento de sus demandas no sin olvidar que esto es posible bajo la presión de los conflictos agrarios. En este contexto, dichos actores encontraron en el gobierno, no solo un aliado para el logro de sus objetivos, sino también un interlocutor, que las y los reconoce como sujetos políticos y les concede dicho estatus al incorporarlos activamente en los debates y discusiones sobre las políticas que se pretendían implementar.

Así el gobierno impulsa la construcción negociada de una ley para la regulación de este aspecto tan problemático para el país. En el marco de este escenario los diferentes agentes (representantes de los gremios, del movimiento campesino, del PCC y el UNIR y de la Asociación Patriótica Económica Nacional⁸⁸ -APEN- y parlamentarios liberales) comienzan, desde 1935 una ardua tarea por construir propuestas para transformar la estructura de la tenencia de la tierra y con ello el poder sustentado en esta o el mantenimiento de las condiciones que habían propiciado el orden rural del momento.

En el marco de estas propuestas representantes del movimiento campesino, del PCC y del UNIR coinciden en la:

Defensa del trabajo de los labriegos, la necesidad de adecuar las normas y las instituciones para regular el uso de la propiedad y respetar los derechos legítimos tanto de propietarios como de campesinos y

sentido social que los usuarios le dan. En este sentido la propiedad estaría mediada por la explotación económica de la tierra.

⁸⁸ Este corresponde a un partido político constituido por un sector de los terratenientes, el que tenía como finalidad frenar las tendencias reformistas del gobierno de López y además perseguir y expulsar a los arrendatarios y aparceros.

colonos y poner término a los abusos de grandes propietarios frente a la desposesión de los campesinos (Machado 2009, p. 187).

Por su parte, los parlamentarios liberales centraron su propuesta en la seguridad jurídica de la propiedad rural, bajo el precepto de aprovechamiento económico de la tierra, con el objetivo de acabar con el sistema semifeudal y antieconómico sustentado en la existencia del latifundio improductivo y en la sujeción de mano de obra, mediante relaciones no formales de trabajo.

En cuanto a la SAC y APEN como representantes de las élites terratenientes buscaban que el Estado creara medidas para la defensa de la propiedad privada, la regulación de las relaciones laborales entre hacendados y trabajadores y el acabar con los procesos organizativos rurales, por considerarlos focos de subversión.

Las propuestas fueron, a comienzos de 1936, entregada a representantes del gobierno nacional, quienes citaron a los agentes referenciados, a arduos debates para definir los contenidos que finalmente se explicitaría en la Ley. Y, sí bien de acuerdo con Gaitán (1984) el Estado quiso hacer un esfuerzo por considerar las propuestas, bajo el presupuesto de la equidad, lo que se entrevé es que las demandas de los campesinos no fueron consideradas en su totalidad, dado que el gobierno se dejó seducir por los gremios y las organizaciones de las élites rurales Este aspecto que condujo al socavamiento de una política de reformas, que se postulaban por la alianza entre un Estado cada vez más autónomo e interesado en el desarrollo nacional y los trabajadores del campo (Machado, 2009).

Lo anterior se debe a tres factores:

- Por un lado los representantes del campesinado, aun estableciendo alianzas con el PCC y el UNIR y detentando conocimientos legales para la defensa de sus derechos, no contaban con el poder suficiente para

incidir de manera contundente en el plano político. En relación a esto y de acuerdo con Sánchez (1977) por ejemplo los líderes campesinos, no contaban con capacidades para explicitar estructuradamente sus demandas, además que a nivel oratorio no estaban muy entrenados, aspectos que incidía en que sus propuestas perdieran fuerza.

- En segundo lugar, sí bien como se dijo antes, contaban con alianzas importantes, tal como señala Ghilodes (1976) la gente del PCC y del UNIR, a la final perseguían sus propios intereses, los que tenían una mayor correspondencia con las necesidades de la masa proletaria urbana.
- En tercer lugar, en el imaginario de las élites rurales, de los gremios y de los entes estatales, campesinos y campesinas eran concebidos como una masa poblacional atrasada, dado que no tenían acceso a formación, capacitación, salud y otras cuestiones que se percibían como obstaculizantes para el definitivo despegue económico del sector rural.

Por otra parte es de considerar que tanto con la APEN, como la SAC, se constituían en instancias contrarias a las pretensiones estatales de modernización del agro, a través de la democratización de la propiedad. Estas instancias, compuestas también por liberales tradicionales, le quitaron poco a poco el respaldo al gobierno, cuestión que conllevó a que en el nivel estatal, se comenzará a modificar el enfoque para la solución del problema agrario. Los parlamentarios que discutían la iniciativa, se perdieron en la necesidad de tranquilizar a los grandes propietarios, sector hacía donde se movió “el equilibrio del poder” (Machado, 2009).

El texto definitivo de la Ley de Tierras, como se conoce a la Ley 200 de 1936, en palabras de Gilhodes (1976) no contempló directamente las demandas campesinas. Esta sobre todo recoge las pretensiones de las facciones liberales

sobre el deber ser del desarrollo rural del país. En sí mediante esta Ley lo que se perseguía era destrabar jurídicamente el acceso a los factores de producción, es decir su democratización, como una vía para la modernización de este sector.

De esta manera, a la final, las propuestas y demandas de los campesinos, quedan subsumidas a los intereses de sus promotores (liberales radicales – burguesías industriales), los que confluían en la necesidad de aumentar la producción y como vía para ello, se pensó como necesario y urgente el acabar con la gran propiedad, que se conceptuaba como altamente improductiva y por ello contraria a lo que se requería para entrar en la lógica capitalista. En este sentido la redistribución de la propiedad no se contempló como una cuestión de justicia y equidad, sino como el estímulo para que la gran masa de mano de obra presente en los campos, mediante el acceso a los recursos productivos, se convirtiera en un productor o productora eficiente.

En sí mediante esta Ley no se afectó el poder de la clase terrateniente ni motivó o instrumentó procesos de ascenso social para el campesinado, ni tampoco la articulación del campesinado a “un proceso de transformación nacional que significaran una reestructuración del poder en la sociedad colombiana, hasta entonces fundamentado en la propiedad de la tierra como principal activo generador de riqueza en una sociedad atrasada” (p. 180). A la final en palabras de Gaitán (1984, p. 91) “la aprobación de la Ley 200 de 1936 trajo, por lo tanto, como consecuencia, el saneamiento de los títulos de los latifundistas con el propósito de que aquellas tierras mal habidas pudieran parcelarse y con ello recibir fáciles ganancias”.

3.3 Las reformas agrarias de los sesentas

Un segundo momento, que podemos identificar como clave en la construcción negociada de las políticas relativas a regular la propiedad de la tierra, se sucede en el marco de la totalidad de la década de los sesentas. Sin embargo, consideramos clave el dar cuenta de una serie de antecedentes sucedidos

entre las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado. La serie de dinámicas políticas, económicas y sociales que atravesaron al país durante esta época fueron determinantes para la configuración de los escenarios, en los que el campesinado y otros actores se posicionarían con fuerza durante la segunda mitad de la década de los sesenta, para la construcción de medidas y estrategias encaminadas a la transformación de la estructura agraria del país.

3.3.1 Tierra, violencia y origen del conflicto armado

En palabras de Machado (2009, p. 219):

Los años cuarenta fueron el preludio de grandes cambios y conflictos políticos en la sociedad colombiana. No sólo se retrocede en materia de legislación agraria, a través de la formulación de la Ley 100 de 1944, mediante la que se legitima la aparcería, sino que el país inicia un proceso de conservatización que lo llevará a la dictadura y la ingobernabilidad política.

Durante esta década cobra de nuevo importancia la idea de modernizar el sector rural, pero bajo el convencimiento que es mediante la gran propiedad que se llegará a tal objetivo. En este contexto se fija un plan de fomento agrícola, que de acuerdo con Machado y Samaca (2000) puede ser considerado como la primera apuesta seria de planificar el desarrollo rural del país. Dicho Plan, se fundamentó en tres ejes: impulso a la producción agrícola

a través de la mecanización de esta⁸⁹, desarrollo institucional⁹⁰ y una política de protección a la propiedad privada⁹¹.

La intención modernizadora de los cuarenta, tiene repercusiones importantes para el desarrollo agrícola nacional. En este marco la agricultura colombiana logra una significativa tasa de crecimiento, dinámica acompañada de transformaciones técnicas que conllevaron a su acelerada modernización, cuestión que incide en un incremento considerable de la productividad agrícola y ganadera y con ello el afianzamiento en los campos de una modalidad empresarial de producción (Bejarano, 1985). Pero sin bien se incorporó al agro a la lógica capitalista, no desapareció la agricultura tradicional, la que “siguió subsistiendo de forma precaria, concentrada en cultivos de ladera y en tierras de baja productividad” (p. 244).

De lo anterior, podemos entrever que para esta época continua el “acentuado dualismo agrícola”, el que estaba relacionado con la persistente bimodalidad de la estructura de la tenencia de la tierra. Por un lado, gran parte de las tierras⁹² de terratenientes y hacendados están destinadas a los cultivos comerciales, los que mediante el uso intensivo de maquinaria, innovación tecnológica y apoyo estatal, experimentaron un incremento considerable⁹³. Por otro persistía una gran masa de campesinos y campesinas, quienes a través del acceso precario

⁸⁹ Frente a este aspecto, Machado (2009, p. 190) observa “la importación de tractores y maquinaria agrícola dio cuenta de un nuevo proceso de mecanización del campo y el comienzo de la moderna agricultura en el país”.

⁹⁰ En este contexto, además se promocionó el fortalecimiento de la SAC. Es tal la importancia, que le es otorgada a esta instancia que a comienzos de la década de los 40’s, le es reconocido carácter nacional y la calidad de ser un cuerpo consultivo del gobierno (Fajardo, 1983). Lo anterior nos permite intuir que los gobernantes del momento perciben a las élites rurales como los únicos agentes con quienes se debe discutir y negociar los términos en los que se habla de la modernización rural.

⁹¹ Lo anterior implicó la promulgación de la Ley 100 de 1944, mediante la cual se intentó promover el acceso de los campesinos y campesinas a la tierra, mediante el arrendamiento, la aparcería, la colonización y la titulación de baldíos. Además, a través de dicha Ley, se buscó el “recuperar sistemas de producción con relaciones sociales premodernas, donde la explotación de la mano de obra por los propietarios les permitía mantener una producción de alimentos en las fincas” (Machado, 2009, p. 78).

⁹² Tierras ubicadas en las planicies del país y cercanas a las principales carreteras y ríos.

⁹³ Este aspecto posibilitó que dichos agentes tuvieran la oportunidad de insertarse activamente en canales comerciales nacionales e internacionales

a los insumos para la producción y con bajo acceso a tecnología, producían alimentos para mercados locales.

Esta apuesta modernizadora del agro se sucede en un contexto de confrontación bipartidista, que desde un carácter violento, suma al país en “un conflicto social y político de gran magnitud, que se expresará en la denominada Violencia de los años cincuenta”⁹⁴ (Machado 2009, p. 200)⁹⁵. Uribe (2007, p. 76) reconoce que sí bien está venía gestándose desde mediados de los cuarentas, adquiere un carácter nacional, desde 1948, a partir del asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948. Este evento “dio origen a numerosas sublevaciones locales de quienes estaban indignados con la muerte de su líder”⁹⁶.

La confrontación entre partidos, tiene una especial incidencia en el campesinado. Tanto liberales como conservadores, ven en esta masa poblacional, la posibilidad de afianzar su poder en las zonas rurales del país, cooptándolos en sus filas, no solo como potencial capital votante, sino como parte de los ejércitos ilegales que comienzan a conformarse para fortalecer su poder a nivel regional.

En el contexto de la ofensiva conservadora y la cooptación de la que fueron víctimas campesinos y campesinas, en este contexto se sucede la agudización

⁹⁴ A este proceso se denomina “violencia bipartidista”, la que corresponde con el conflicto entre liberales y conservadores (los principales partidos políticos del país y mayoritarios) por el poder político

⁹⁵ Frente a este tema el autor resalta “la violencia rompió los marcos del vecindario rural, pero actuó de forma diferenciada en las cabeceras municipales y en las veredas. Los grupos dentro del municipio se aliaron generalmente con las instituciones oficiales y entraron en conflicto con la población de las veredas, mientras que los campesinos se dividieron profundamente bajo los símbolos de los partidos tradicionales, liberal y conservador. Los campesinos no solo fueron arrastrados a combatir, sino que respondieron al conjunto de condiciones políticas y económicas de su contexto, generando así un círculo vicioso de destrucción” (p. 205).

⁹⁶ Como respuesta el gobierno conservador en Cabeza de Olaya Herrera, envió al ejército a controlar el caos en las zonas rurales del país, con el consiguiente asesinato de miles de liberales. A la arremetida conservadora, le sobrevino la reacción de los liberales, quienes tomaron en sus manos la justicia, asesinando a su vez a un número considerable de conservadores.

de los conflictos por la tierra, con el consiguiente fortalecimiento de los procesos organizativos rurales. En palabras de Machado (2009, p. 210):

El cierre de los canales de participación política que deviene con los gobiernos conservadores creó las condiciones para el surgimiento de las primeras guerrillas liberales y grupos de autodefensa campesina, que serían a su vez los antecedentes más inmediatos del surgimiento de grupos armados en el campo, que derivarían en los sesenta en la creación de las FARC.

Estas expresiones del inconformismo tuvieron una especial influencia del Partido Comunista.

El Frente Nacional y los conflictos agrarios

Al desangramiento del país por la violencia bipartidista de los años cincuenta, se pretendió dar solución a través de la instauración del Frente Nacional, arreglo político al que llegaron los partidos tradicionales en 1958. Este se estructura a través de la coalición política pactada entre liberales y conservadores, quienes mediante un acuerdo pactaron alternarse el control del gobierno cada 4 años.

Sin embargo, como anota Gilhodes (1976, p. 67), este nuevo escenario, no conllevó a una transformación de las condiciones de los campesinos y campesinas de las zonas rurales, dado que “con el restablecimiento de los procesos electorales, ambos partidos tendieron a utilizar al movimiento campesino, como agente electoral”. Mediante la cooptación se buscó afianzar el poder de “caciques locales y de mantener su predominio en el campo, ya sea por razones económicas o simplemente para aumentar sus dominios personales”. En este sentido lejos de reconocer en el campesinado a un importante interlocutor político, una vez más ellos y ellas son concebidos

como el soporte social del poder político y económico de las élites rurales, quienes estaban alineadas con alguno de los partidos tradicionales⁹⁷.

Además en relación a lo anterior es de considerar que la violencia bipartidista, produjo la migración masiva de campesinos y campesinas a las ciudades. En el marco de este proceso las tierras de campesinos y campesinas, pasan a engrosar la propiedad de las élites rurales, aspecto que bajo la tendencia de modernización del agro, revela una estrecha relación entre “la violencia, la concentración de la tierra y la expansión del capitalismo agrario” (Zamosc 1987, p. 26).

Para Vega (2012) la violencia bipartidista, en un contexto de modernización del agro, se constituyó en una estrategia para consolidar definitivamente en el país el modelo capitalista. Mediante tácticas violentas se legitimó el robo de tierras y se apuntó a la desestructuración de cualquier forma de oposición política o económica. Es durante esta época que se produce la reconcentración de las tierras, en manos de viejos terratenientes, quienes habían sido afectados por la Ley 200 de 1936⁹⁸. Dicho proceso para el autor, debe comprenderse como una revancha terrateniente, agentes que en alianza con el Estado, tiraron al trasto cualquier posibilidad de reconversión de la estructura de la tenencia de la tierra⁹⁹.

⁹⁷ En palabras de Zamosc (1987, p. 25) “el Frente Nacional reconstruyó un tipo extremo de Estado – instrumento, tratando de congelar todas las expresiones de conflicto social, excluyendo a las clases subordinadas de la escena política, y distribuyendo cada centímetro de poder institucional entre los dos partidos de las clases dominantes, lo que tuvo efectos considerable en el monopolio del poder en las zonas rurales del país”.

⁹⁸ La reconcentración de la propiedad junto con el debilitamiento de la protesta campesina, se constituyeron en factores que en su relación, coadyuvaron a la formación de un nuevo agente de las élites rurales: el gamonal. Siguiendo a Sánchez (1976), correspondes con este rótulo hombres y mujeres (en su mayoría hombres) de los partidos liberal y conservador, que en el contexto de la violencia se hicieron a más tierras y con ello fortalecieron además de su poder económico su capital político. Además del campesinado que estaba en sus tierras como jornaleros y jornaleras, peones y peonas, arrendatarios y arrendatarias, también la gente rural con acceso limitado a la tierra y colonos, se constituyeron en capital votante, es decir en la masa que en el marco de una democracia representativa sostendría el poder de estos o de sus aliados en el plano político, a través del derecho al voto.

⁹⁹ Siguiendo a Machado (2009) la expropiación de las tierras de los campesinos, en el marco de la violencia bipartidista, tuvo entre otras finalidades el afianzamiento de la ganadería extensiva. Esta además de ser concebida como una opción económica rentable para las élites rurales, además se percibe como una de las maneras de afianzar el poder social y político,

Siguiendo a Uribe (2007) se puede decir que la violencia bipartidista y la no solución de las condiciones estructurales que permitían la vigencia del modelo bimodal de tenencia de la tierra, dieron lugar a focos importantes de resistencia armada campesina. Muchos dirigentes de las ligas campesinas y sindicatos agrarios fundados entre las décadas de los treinta y cuarentas se convirtieron en cabecillas de una resistencia armada de lucha por la tierra durante los cincuenta.

En palabras de la autora “lo que confluyó alrededor de estos dirigentes campesinos fue una tradición de lucha agraria, una marcada antipatía hacia los partidos tradicionales y un sentimiento de injusticia acumulado a lo largo de varios años de infructuosa lucha por la tierra” (Uribe, 2007, p. 78)¹⁰⁰. Estos cabecillas fundaron en ciertas regiones del país “Repúblicas Independientes”, las que corresponden a “enclaves campesinos emplazados en zonas agrestes y alejados de los principales núcleos urbanos del país” (p. 80).

Los ataques militares a dichos enclaves no se hicieron esperar. En el contexto del gobierno del presidente Guillermo León Valencia a finales de la década de los cincuenta, se sucedieron las acometidas más contundentes contra estas formas de organización del campesinado, a las que se consideraba como focos del comunismo y la subversión. Tras la arremetida militar muchos campesinos y campesinas, huyen de la persecución y se internan en las selvas del país para en 1964 fundar oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia

sobre todo en las zonas de planicie del país. Los ganaderos, como una facción de las élites rurales, lograron en este momento su consolidación como gamonales con un poder de importancia regional, quienes estuvieron avalados por la Federación de Ganaderos, instancia creada en la década los 50' del siglo pasado, en la que reposó un importante poder político para incidir en el ámbito gubernamental.

¹⁰⁰ La autora, además anota como el PCC y el Partido Liberal tuvieron una marcada influencia en estos procesos de resistencia. En las zonas donde el primero ejerció su predominio, los campesinos y campesinas organizados, además de ubicar a la reforma agraria como el eje de su lucha, se posicionaron en contra de los partidos tradicionales, arguyendo la necesidad de una transformación política del país y la apertura de canales políticos para su participación en el ámbito institucional. En cuanto a los procesos, en los que el Partido Liberal, tuvo influencia, las y los militantes campesinos, no ponían en tela de juicio el orden político imperante y solamente esperaban su reconocimiento, en este marco de sus derechos agrarios.

guerrillera del Partido Comunista en Colombia, de donde nacerían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Posteriormente, exactamente el 5 de mayo de 1966, la Segunda Conferencia del Bloque Sur oficializa la conformación de las FARC como brazo armado del PCC. Bajo las directrices de la Internacional Comunista formulan su Mandato Agrario, en cuyo marco se plasmaron sus objetivos de lucha: "una reforma agraria revolucionaria que liquidará las bases de la propiedad latifundista y entregará la tierra al campesino, garantizando las condiciones para su explotación económica" (Uribe, 2007, p. 45)¹⁰¹.

3.3.2 Las Reformas agrarias de los sesentas y la inclusión del campesinado como agente de negociación

En plena vigencia del Frente Nacional (a lo largo de la década de los sesenta) es posible identificar dos fases en la construcción y negociación de las políticas de reforma agraria (Zamosc, 1987). Una primera etapa que abarcó las administraciones de Alberto Lleras Camargo (1958 – 1962), en el marco de las que se “se veía el movimiento hacia una reforma agraria limitada como un elemento clave en la reconstrucción del poder de las clases dominantes después de la violencia” (p. 71).

En la segunda fase, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970), el énfasis se desplazó hacia los aspectos sociales y económicos “profundizando la reforma agraria como parte de una política que apuntaba a superar las limitaciones estructurales del esquema existente de acumulación capitalista en el país”. En sendas fases se explicita definitivamente una tendencia modernizadora del agro y del país, cuestión a la que anteriormente no se llegó, dadas las condiciones sociopolíticas que se suscitaron en el marco de la violencia bipartidista.

¹⁰¹ Además en el Mandato se explicitan los ejes sobre los que debe gravitar la reforma agraria: redistribución y titulación de tierras, acompañamiento técnico, financiero y mejora en condiciones de vida de campesinos y campesinas.

3.3.2.1 Primera etapa: Alianza para el Progreso y política de tierras

Con respecto a la primera fase, Zamosc (1987, p. 56) observa como las reformas para afectar la tenencia de la tierra, respondían a la urgencia de minimizar los focos de resistencia campesina y acabar con la base social de la subversión. La idea en sí, era la de frenar la consolidación del comunismo en el país “y reconstituir el ascendiente político de los partidos tradicionales sobre las masas campesinas” en quienes se veía, más que sujetos con derechos, capital votante para mantener a los partidos en el poder”¹⁰².

En este escenario, es clave resaltar un factor externo de gran importancia: la política hemisférica de Estados Unidos, que como respuesta al triunfo del socialismo en Cuba, buscaba, mediante una batería de ayudas de tipo económico y social, enmarcadas en lo que se ha denominado Alianza para el Progreso, que “las clases dominantes latinoamericanas adoptaran una serie de reformas agrarias” para contener el avance del comunismo y, además una ampliación de los mercados y nuevas áreas de desarrollo para el capital (Machado 2011, p. 1).

La operativización de los objetivos de dicho Programa, estuvo aparejada al fortalecimiento de la cooperación internacional para el desarrollo con la región. No solo a nivel de Estados Unidos, sino también de la Organización de las Naciones Unidas –ONU- y de otros organismos de ayuda al desarrollo, se posicionó la idea que la Comunidad Internacional, debería jugar un mayor papel para sacar a los países latinoamericanos del atraso, la miseria y del subdesarrollo. Así mediante discursos, declaraciones, convenios, recomendaciones y prácticas se divulgaba e imputaba una visión norteamericana del desarrollo rural, que desde una perspectiva de desarrollo

¹⁰² Bajo esta perspectiva las reformas se establecían por un lado, como tácticas para desactivar a la oposición y por otro, como una manera de frenar el descontento campesino, que en el marco del triunfo de la Revolución Cubana, podría propagarse con fuerza y constituirse en un factor desestabilizador del aparente orden social que se había conseguido aparentemente con el Frente Nacional.

integral, perseguía la incorporación del campesinado al desarrollo económico nacional.

Tal incorporación se esperaba que se sucediera a través del acceso a factores productivos, en específico a la tierra, cuestión que los Estados debían auspiciar mediante reformas agrarias (Lutz, 2006). El acceso a la propiedad de la tierra, se pensó, entonces como una cuestión que debía ir acompañada de apoyo técnico especializado (bajo la mirada de los entes de cooperación agrícola), para que campesinos y campesinas hiciesen un uso óptimo de este recurso. De acuerdo con este enfoque “la población rural que vive de la agricultura debe enfocarse, con el apoyo del Estado y para el fortalecimiento de este último, hacia la maximización de la explotación de la tierra” (p. 18).

La reforma agraria de 1961, condensada en la Ley 135 se estableció como un puntal para avanzar en el desarrollo rural del país. Esta se concibió bajo un modelo de intervencionismo estatal, en el marco del cual a las instancias gubernamentales les fue adjudicado el principal papel en la modernización del sector agropecuario. Bajo esta orientación se creó un conjunto de instituciones, cuyo cometido, desde una perspectiva sectorial, era el viabilizar los objetivos planteados en dicha Ley¹⁰³: llegar a una reforma agraria integral.

Dicha Ley fue el resultado de un pacto entre diferentes agentes, en el marco del cual se excluyó al campesinado en la definición de las estrategias y políticas relativas a la tierra¹⁰⁴. El proceso de construcción de las normas contenidas en la Ley 135, fue el resultado de la negociación conflictiva entre un bloque “compuesto por sectores modernos como financistas cafeteros, industriales y algunos sectores empresariales del campo”, miembros de los

¹⁰³ Esta, en palabras de Fajardo (2002) se enfocó principalmente a la solución de problemáticas referidas a la generación de empleo rural, el abastecimiento alimentario y la superación de la violencia.

¹⁰⁴ Machado (2009, p. 164) establece que esta se construyó sin la incorporación “de una organización campesina de corte nacional que representara los intereses del campesinado; si bien existían algunas organizaciones campesinas, ellas no representaban todos los intereses del campesinado. Organizaciones auténticamente campesinas, surgidas de luchas por la tierra y que reclamaban con fuerza la reforma agraria, no eran reconocidas por el Estado, pues se les consideraba subversivas”.

principales gremios (SAC), “los representantes de los sectores progresistas del Partido Liberal y los más recalcitrantes del Partido Conservador” y funcionarios públicos de instancias relativas a cuestiones rurales (Kalmanovitz 1989, p. 34).

En referencia a lo dicho, es de anotar que la negociación de la Ley, entre los actores referenciados, revela dos tendencias. Por un lado, están quienes (partido conservador, élites, gremios) no siendo enemigos de la reforma agraria, consideran que mediante esta, no deben afectarse las tierras productivas y ubicadas dentro de la frontera agrícola (es decir las que no corresponden a baldíos), es decir aquellas que tradicionalmente han estado en manos de hacendados, terratenientes y empresarios agrícolas. De acuerdo con esta precisión se posicionan a favor del acceso a tierra, bajo el modelo de la colonización dirigida para campesinos¹⁰⁵. En el marco de sus propuestas además es posible entrever una defensa de: 1. derecho a la propiedad frente al derecho al trabajo; 2. De la propiedad empresarial individual frente a la propiedad comunitaria campesina; 3. del crecimiento económico frente a la igualdad social; y, 4. De la preservación del sistema frente a la amenaza del cambio social.

En cuanto a la segunda tendencia, en esta se enmarcan las propuestas del Partido Liberal y de sectores progresistas, quienes ven en la reforma agraria integral, de carácter masivo e inmediato, la única posibilidad de modernizar al sector rural y además lograr el equilibrio político, tan esquivo por varias décadas.

De acuerdo a lo anterior, la negociación y construcción de la Ley, fue el producto del debate en torno a “14 proyectos muy disímiles y de orientaciones diferentes” (Bejarano, 1985, p. 290), el que se canalizó a través del Comité

¹⁰⁵ Decimos campesinos, porque solo es hasta las leyes 30 de 1988 y 160 de 1994, es que se considera a las mujeres también como beneficiarias de reforma agraria. Tanto en el marco de la Ley 200 de 1936, como la que estamos referenciando en este aparte y en la 1° de 1968, a quien se adjudicaba tierra era al varón.

Agrario Nacional, instancia creada con la finalidad de recoger las propuestas y redactar el anteproyecto de la ley.

Para Bejarano, dicha iniciativa tuvo como intencionalidad directa, el neutralizar la pugna entre los diferentes agentes. Así mediante la aparente inclusión de las diferentes perspectivas, el Estado esperaba ganar el apoyo de los partidos políticos, de los gremios y de la oligarquía. Bajo este proceso, dicha instancia:

Elaboró un anteproyecto de Reforma Social Agraria que fue acogido como proyecto por el gobierno y presentado a estudio y decisión del Congreso Nacional, el cual a su vez debatió sobre el proyecto presentado por el gobierno, hasta llegar a una difícil transacción política teniendo como resultado la Ley 135 que fue sancionada en diciembre de 1961 (Bejarano, 1985, p. 290).

3.3.2.2 La radicalización de la Reforma Agraria y la articulación del campesinado al ámbito institucional

La segunda etapa es la comprendida entre 1966 y 1970, que en el marco del gobierno de Carlos Lleras Restrepo se orientó a aspectos sociales y económicos, es decir “hubo un intento de profundizar la reforma agraria como parte de una política que apuntaba a superar las limitaciones estructurales del esquema existente de acumulación capitalista en el país” (Zamosc, 1987, p. 61).

Esta iniciativa se plasma en la Ley 1° de 1968, la que se conoce como Ley de Arrendatarios y Aparceros. Mediante esta, en palabras de Cardoza (2005, p. 46) “se despejó el paso a la aplicación de la Reforma Agraria, enfatizando en la afectación de los predios inadecuadamente explotados y en la entrega de la tierra a aparceros que la trabajaban”.

En sí a lo que se apuntaba mediante su operativización, era por un lado el proteger a los pequeños arrendatarios y aparceros para evitar su desalojo; y, por otro incluyó la acción de expropiación de tierras explotadas bajo esta modalidad (es decir mediante el arriendo y la aparcería), como una forma de sanción a los dueños ausentistas, con la consiguiente otorgación del título de propiedad a quienes sí explotaban los predios.

En cuanto a la negociación de dicha Ley, esta fue el resultado de la interacción entre el movimiento social campesino y los sectores progresistas del partido liberal, encabezados por Carlos Lleras Restrepo¹⁰⁶. La limitación en el tipo de agentes participantes, se debe principalmente a que Lleras, consideraba que tanto personajes de los partidos tradicionales como de los gremios y las élites rurales, se habían constituido tradicionalmente en un obstáculo para llevar a cabo una verdadera reforma agraria y por lo tanto debían mantenerse al margen de la negociación¹⁰⁷. Sí bien el articulado del proyecto de Ley debió modificarse varias veces para que fuese sancionada por el parlamento, en esta la cuestión agraria y la situación del campesinado por fin se ubicaban como centro de la arena política y de esta manera “el campesinado emergía como el aliado natural del reformismo burgués” (Cardoza, 2005, p. 83).

El mecanismo de articulación del campesinado en la negociación y construcción de la Ley, se hizo a través de una instancia creada para ello, denominada Comité Operativo. A esta le fue asignada la tarea de diseñar un plan concreto para la organización de los usuarios de los servicios estatales rurales. Mediante esta estrategia lo que se perseguía era “la unificación del campesinado y que sus demandas convergieran en la gestación de un foco de fuerzas sociales para la incidencia política” (Sañudo, 2000, p. 56).

¹⁰⁶ A quien Zamosc (1987) considera “el principal vocero del matiz reformista de opinión que existía entre algunos sectores de la burguesía colombiana”.

¹⁰⁷ En si específica “puede decirse que la provisión de un canal de expresión campesina y la instigación de una dosis de conflicto abierto con los terratenientes, aparecía como la única alternativa realmente viable para un enfoque reformista que era incapaz de imponer sus puntos de vista agrarios al interior de la coalición de clases dominantes”. (p. 83).

Mediante el diseño y puesta en marcha del Plan Operativo, del que se encargó a dicho Comité, se impulsó de manera importante la creación de asociaciones de usuarios campesinos. Bajo este modelo este sector participaría directamente en la prestación de los servicios estatales. En este proceso, un concepto fundamental fue el de “participación campesina”, el que se constituyó en eje de la capacitación tanto de funcionarios y funcionarias del Estado, como de “futuros líderes campesinos”¹⁰⁸.

Esta pretensión se plasma en el Decreto Presidencial 755, expedido el 2 de mayo de 1975, mediante el cual “se recalca la necesidad de favorecer la participación popular en el cambio social y en los asuntos de interés nacional en general” (Zamosc, 1987, p. 84). A partir de la promulgación de tal Decreto, se oficializa la creación de las asociaciones de usuarios campesinos de los programas estatales, instancias que se congregarían en torno a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.

Lleras y su equipo de gobierno (incluidos trabajadores y trabajadoras del INCORA y del Ministerio de Agricultura) bajo esta lógica, estaban convencidos que la organización del campesinado sería la clave no solo para el desarrollo económico de lo rural y del país, sino para que este sector por fin se constituya en un interlocutor político legítimo. De esta manera y tal como apunta Zamosc (1987, p. 56) “con la creación de la ANUC se delineó el escenario para los comienzos de la movilización campesina”, constituyéndose más adelante en un agente clave para la negociación de la política de tierras.

Autoras como Meertens (2000) consideran, que sí bien dicha iniciativa dio lugar a un mediano cambio en la correlación de fuerzas, entre los agentes con intereses en la propiedad de la tierra, a esta iniciativa subyace el interés por frenar el descontento rural y el afianzamiento de los grupos guerrilleros. Lleras

¹⁰⁸ En el marco de estos procesos, las mujeres rurales no eran consideradas como un actor clave para la capacitación, dado que quienes estaban encargados del diseño de las estrategias, por un lado en su mayoría eran varones y, por otro no contemplaban que las mujeres pudiesen tener un papel activo en el ámbito público y productivo, limitándolas al hogar y al cuidado (Sañudo, 2011).

consideraba que no era suficiente solo con atender estatalmente campesinado, sino también que era urgente el otorgar el estatuto político históricamente negado. En este sentido mediante el impulso organizativo, además de modelar a este sector bajo los presupuestos de la modernización, también se buscaba tener controlada a una fuerza, que se pensaba en cualquier momento podía desestabilizar la precaria calma conseguida con la instauración del Frente Nacional¹⁰⁹.

En este contexto campesinos hombres principalmente, se articularon no solo a la Asociación, sino también a las instancias estatales y en este marco, jugaron un importante papel en la construcción de diagnósticos sobre su situación y de acciones para solucionar las principales problemáticas que observaban: baja productividad, limitado rendimiento, baja disponibilidad de factores para la producción (tierra, mano de obra, crédito).

En relación a lo anterior, consideramos que dado el carácter de género que permeaba la división del trabajo, la que además hacía parte de los principios de visión y de acción del campesinado y de funcionarios y funcionarias, fue determinante para (tal como resalta Meertens (2000)) que tanto en diagnósticos y soluciones se pusiera especial énfasis en las condiciones relativas al ámbito productivo. Bajo esta lógica se invisibilizaron las situaciones problemáticas que enfrentaban las mujeres, niños y niñas en el ámbito doméstico, además de marginalizar que en la realidad estos grupos, aportaban de manera importante a la producción¹¹⁰.

¹⁰⁹ Así “era necesario crear una nueva organización campesina que uniera a estos sobre bases gremialistas y los distanciara de las estructuras tradicionales de poder. Pero esta no podía basarse en una autonomía campesina total, porque la consolidación de un movimiento campesino autónomo plantearía problemas de control a las clases dominantes”. (Zamosc 1987, p. 85).

¹¹⁰ Siguiendo a Charlesworth (1997) nos atrevemos a afirmar, que las estrategias organizativas y de articulación del campesinado al diseño y puesta en marcha de los servicios rurales, eran definidas para un sujeto en concreto, en relación a ámbito específico y al estar impregnados de una perspectiva masculina de la realidad, se institucionalizan como, uno de los mecanismos, a través del cual, se afianzó lo productivo como lo jerárquicamente relevante. Con ello las necesidades, expectativas e intereses de los varones (que aparentemente se postulan como neutrales) son aquellas que se priorizan, en la implementación de los contenidos del conjunto de estrategias. En este sentido, por ejemplo al en la cartilla que publica el Ministerio de

Sí bien las intenciones institucionales por avanzar en una real reforma agraria, tal como observa la autora referenciada, la articulación del campesinado a la estructura institucional, no fue suficiente, dado que a la final, mediante lo estipulado en la Ley 1ª de 1968, no se afectó la estructura bimodal. Sí bien una parte del campesinado accedió a tierra y a otros factores que le permitían insertarse en el ámbito productivo e insertarse en la dinámica económica, esta no fue una situación generalizada. Podríamos decir que el esfuerzo por integrar al campesinado en lo político, a través del proceso organizativo, este pensado como una estrategia para la transformación económica, no daba los resultados que el presidente Lleras y la burguesía progresista esperaban y además tampoco llenaba las expectativas que se habían despertado en el campesinado. Frente a este último aspecto, tal como señala Zamosc (1987, p. 101):

Aunque los delegados campesinos tenían poder de voto en las directivas nacionales de las entidades oficiales, su peso real era mínimo, dado que en su mayoría solo cumplían funciones de consulta y no participaban activamente en la adopción de decisiones.

Finalmente el proceso organizativo impulsado por el gobierno se quedaba en “una arreglo institucional corporativo”. Como ejemplo de lo anterior, el autor resalta que sí bien la ANUC se integró a la Junta Directiva del INCORA, solo contaban con 2 representantes, es decir con solo 2 votos, que nulo peso tenían frente a los trece votos de los burócratas y los políticos.

Sin embargo y en relación a lo que hemos venido planteando, podemos decir que mediante las acciones que desplegó el Estado, con miras al impulso de procesos organizativos, aspecto que se esperaba fuera el corolario, no solo de la articulación al ámbito estatal, sino también como vía para su modernización

Agricultura en 1968 para explicar la reforma agraria, las medidas que sobresalen son aquellas relativas a la reestructuración de lo productivo: reforma agraria, reforma tributaria, reformas financieras, reforma en la política de inversiones y, reestructuración de lo rural (Sañudo, 2011).

como sujeto productor, el campesinado se configuró como un agente, que comienza a detentar ciertas capacidades. Estas como resultado de la intervención estatal, le permitirían situarse en la negociación de la política de tierras, de una manera diferente. Es decir las apuestas de Lleras, lograron modificar de alguna manera la correlación de fuerzas y el posicionamiento del campesinado como agente en el campo, sobre el que hemos estado referenciando.

3.4 Pacto de Chicoral y la contrareforma agraria

A finales de la década de los sesentas y comienzos de los años setenta la redistribución de la tierra se instituía en el eje central de las asociaciones de usuarios campesinos, constituyéndose en el centro de su agenda política. Sin embargo debido a que el Estado no había logrado una reforma real de la estructura agraria, el campesinado unificado se radicaliza como estrategia para avanzar en sus demandas.

Un aspecto, sobre el que señala Zamosc (1987), que incide de manera importante en este proceso es el entrenamiento que una serie de promotores (seguimos hablando en masculino porque las mujeres, en palabras de Meertens poco fueron incluidas en estos procesos) recibieron en el marco de los cursos especiales organizados por el Instituto Interamericano de Desarrollo Agrícola (instancia de la Organización de Estados Americanos –OEA-, encargada de los temas rurales). Dicha instrucción estuvo a cargo de “intelectuales colombianos y de otros países latinoamericanos, la mayoría de los cuales compartía el enfoque radical que predominaba en las ciencias sociales durante los años sesenta” (p, 113).

En este contexto, los promotores, fueron permeados por nociones innovadoras sobre el desarrollo rural, las que bajo las premisas de un reformismo radical, les permitieron analizar las situaciones que experimentaban de una manera más amplia y constituir un discurso, mediante el que se evidenciaba “una conciencia rebelde contra las injusticias de la realidad agraria”.

Además entre otros de los factores, que favorecen la radicalización del campesinado, se cuentan con: 1. La expropiación violenta de tierras a campesinos y campesinas; 2. La SAC comenzaba a ejercer una presión importante a nivel estatal, para que se revisase lo planteado en el marco de la Ley 1° de 1968 y, además mediante sus discursos legitimaron las acciones violentas de los terratenientes en contra del campesinado; 3. Los efectos de la Ley sobre la estructura agraria, habían sido bastante limitados; 4. El posicionamiento en la escena política de la izquierda como una fuerza capaz de desestabilizar el aparente equilibrio ganado con la instauración del Frente Nacional; y, 5. La elección en 1970, de un presidente de talante conservador, Misael Pastrana Borrero, quien desde el comienzo esbozo propuestas en contra de la reforma agraria.

En este contexto, la ANUC comienza a usar como estrategia, las invasiones masivas de tierras, las movilizaciones a gran escala, la ocupación de oficinas públicas y los paros cívicos, que tal como señala Zamosc (1987) deben leerse como reacciones prácticas al derrumbe del reformismo y el posicionamiento de los intereses terratenientes.

Estas, que en el marco estatal fueron interpretadas como parte de un plan “subversivo y premeditado para alterar el orden público”, se dirigían a la búsqueda de una solución radical a los problemas relativos al acceso a la tierra. Es decir se constituyeron en una forma de presión, que el campesinado implementó con el fin de lograr sus intereses, los que confluían en torno a los siguientes aspectos:

Acceso a la tierra, exigiendo la redistribución inmediata y gratuita, la expropiación de tierras a terratenientes sin indemnización, el establecimiento de límites a la propiedad individual, el apoyo a la explotación comunitaria de la tierra, la colectivización de las agroindustrias, la liquidación de las relaciones de producción atrasadas, y

el respeto a las ocupaciones de hecho efectuadas por el campesinado (p. 122).

A la radicalización campesina, el gobierno de Pastrana respondió con el Pacto de Chicoral (1972), que en palabras de Zamosc (1987, p 171) “marcaba un colapso definitivo del intento de establecer una alianza entre la burguesía y el campesinado”. Mediante este se establece que las tomas de tierras serían severamente reprimidas “y que no habría títulos de propiedad para quienes pretendieran ser beneficiarios de la reforma agraria después de haber participado en las ocupaciones de hecho” (p. 170). En este contexto “el campesinado fue sometido a un acorralamiento institucional y los asesinatos, las torturas las detenciones ilegales se volvieron habituales (Múnera 1998, p 404).

En palabras de Cardoza (2005), mediante dicho Pacto, por un lado, se pone fin a los elementos redistributivos de la Reforma Agraria desarrollada en la década del sesenta; por otro se explicita el énfasis en la productividad de los latifundios; además que se limitan las funciones del INCORA y de otras entidades del sector agropecuario en temas relativos al acceso a la tierra, instancias a las que de ahora en adelante se las orienta al fomento de la productividad agropecuaria. Dichas transformaciones de acuerdo con el autor, se suceden en el marco de un cambio en el modelo de desarrollo rural, en contexto del cual, las estrategias que se disponen, ya no estarán orientadas a la producción de alimentos y materias primas para suplir las necesidades del mercado nacional, sino a la consolidación de la vía agroexportadora¹¹¹.

¹¹¹ La operativización de los principios establecidos en el Pacto de Chicoral, se hicieron a través de la ley 4ª de 1973, mediante la que se establecen nociones y acciones referentes a los mínimos de productividad por cultivos y por regiones; y, además se proponen los parámetros de infraestructura técnica e instrumentos de trabajo para que estos mínimos fuesen viables. Como complemento de esta Ley, se formuló la Ley 5ª de 1973, bajo la cual se definieron las líneas de crédito para empresarios y terratenientes, estrategias con la que se preveía una inyección de capital para la modernización del latifundio y la hacienda tradicional. Tal como podemos observar, de nuevo el escenario político se configura como un espacio para la defensa de los intereses de las élites rurales, a quienes se considera de nuevo a los actores principales para la modernización del agro.

Tanto el Pacto de Chicoral como la violenta reacción terrateniente, dieron lugar a la escisión de la ANUC en línea Armenia, la que seguía ligada al Estado y línea Sincelejo, en la que confluían los sectores más radicales del campesinado, quienes en el marco de su nueva identidad, pretendían constituirse en una nueva fuerza con capacidad para incidir en el plano político y lograr una verdadera reforma agraria.

En el seno de la Línea Sincelejo, también emergieron contradicciones ideológicas que a la final dieron lugar a subdivisiones al interior del movimiento, cuestión que poco a poco mermaría su capacidad de incidencia política. Al respecto Mondragón (2002) anota que para mediados de los setenta, en el marco de la ANUC radical dos sectores podían identificarse, uno bajo la influencia maoísta (PCML y la ML), quienes eran partidarios de la lucha armada, considerando esta la estrategia más viable para la reforma agraria; y, otro bajo la influencia de los liberales progresistas y de intelectuales de izquierda, en el marco del cual se estableció la necesidad de constituir y lanzar un partido político de carácter agrario¹¹².

3.5 Desarrollo Rural Integrado: reforma agraria en entredicho

A mediados de la década de los setenta, en Roma se celebró la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria, organizada por el Banco Mundial, a la que se invitaron a representantes de los gobiernos latinoamericanos, con el fin de evaluar los avances y alcances de las reformas de la estructura agraria llevadas a cabo en la década pasada. En este escenario, dicha instancia, además de dar a conocer, cuáles eran las nuevas perspectivas sobre el desarrollo del sector rural, estableció que el Desarrollo Rural Integrado (DRI) se constituiría en la estrategia para modernizar las economías campesinas (Sañudo, 2011).

¹¹² De acuerdo a lo anterior, se puede decir, siguiendo al autor que las conexiones de los Usuarios Campesinos con diversos sectores de izquierda (grupos guerrilleros y partidos políticos), es considerada una de las causas para la atomización del movimiento campesino gestado durante esta época. De acuerdo con Zamosc (1987), la no claridad ideológica de los mismos grupos, terminó por dividir al campesinado.

Específicamente a mediados de los años 70, bajo el gobierno del liberal López Michelsen, el DRI se ubica como el eje para el desarrollo del agro y de acuerdo con esta decisión, se determina un sistema de acciones estatales para atenuar el atraso del sector, sin afectar el sistema de propiedad de la tierra¹¹³. Se consideró que a través de estrategias relativas a acceso a crédito, investigación, difusión y transferencia de tecnología, estabilidad de precios y construcción de vías de penetración, los pequeños productores adquirirían las potencialidades para insertarse activamente en la producción y en el mercadeo de productos, de materias primas y para el suministro de mano de obra.

Este gobierno se inicia en el marco de un periodo de recesión económica mundial y para evitar afectaciones sobre la economía nacional, se declara la emergencia económica, desde la que se apuntaba a “adoptar medidas financieras que otorgaban un gran poder a la banca para que esta se dirigiera selectivamente las inversiones hacia los sectores industriales más eficientes y con mayor posibilidad de inserción en los mercados externos” (Zamosc 1987, p. 220).

Esta apuesta de acuerdo con Mondragón (2002), correspondía con la nueva orientación neoliberal en el marco del cual, el agente que cobró mayor importancia fue el agroexportador, sector al que se estimuló de manera importante, a través de la abolición de las barreras proteccionistas, liberación de las importaciones y exportaciones y subsidios.

El impulsó a este sector, se complementó con medidas para articular al campesinado a la nueva dinámica. Considerando que esta población, cumplía

¹¹³ Para la coordinación de este programa, se crea en 1976, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, instancia a la que se encargó de ser el enlace multisectorial e interinstitucional para operativizar los objetivos del DRI. En este contexto el DNP, formuló la Fase I del DRI (1976 – 1981), cuyo desarrollo fue financiado con préstamos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Canadiense para el Desarrollo. Como parte de esta primera etapa, las acciones se enfocaron principalmente a la inversión en infraestructura, actividades productivas, comercialización y desarrollo comunitario. A través de la integralidad de las acciones, las que en su mayoría se llevaron a cabo en zonas del país, donde predominaba el minifundio, se esperaba incrementar la producción y la productividad de los pequeños agricultores.

con un importante papel en la producción de alimentos para el consumo interno (producía para 1975 el 55% de los alimentos que se consumían en el país) y que dicha actividad se realizaba de manera precaria, es decir con bajo acceso a tecnología, conocimientos y recursos productivos, se planteó como clave la inyección de crédito, tecnología, acciones que complementadas, con el afianzamiento de los servicios estatales, conllevaría al incremento de la oferta de alimentos, de ingresos y oportunidades de empleo para el campesinado.

El acceso a la propiedad de la tierra (afectando la estructura de la tenencia), no se visualizó como el eje de la articulación del campesinado al desarrollo rural. Ahora la organización bajo un enfoque empresarial, se concebía como la táctica que le permitiría finalmente integrarse de manera activa a la economía del país. Además se consideró que el impulso de empresas agrícolas campesinas, tendría un mayor impacto si se dotaba al campesinado de asistencia técnica, capacitación y disponibilidad y acceso a servicios básicos sociales e infraestructura adecuada¹¹⁴.

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que en este contexto, el campesinado ya no fue situado en el plano político como una fuerza con potencial transformador y mucho menos, como un sujeto con capacidad de incidir en el sector público para avanzar en el desarrollo del país (es decir un actor político). Ahora se percibe, desde una perspectiva asistencialista, desde la que se orienta su inclusión como población objetivo.

Tal como señala Escobar (2007), a partir de la puesta en marcha de este Programa y con el consiguiente despliegue institucional para su

¹¹⁴ La estrategia DRI, tal como señala Zamosc (1987), tenía tres propósitos principales “disponer de alimentos baratos que contribuyeran indirectamente a la reducción de los salarios en el país, fijar límites a los procesos de descomposición campesina y migración masiva a las ciudades y tratar de disipar una buena porción del descontento rural que tan claramente se había manifestado en las luchas de la ANUC durante los años anteriores” (p. 222). Pero sí bien, las medidas contempladas como parte del DRI, parecían estar encaminadas a potenciar al campesinado como agente clave en la producción de alimentos, realmente este se enmarcaba en una estrategia más amplia del capital financiero internacional, que mediada por el Banco Mundial, buscaba en los países con capitalismo de periferia, reordenar sus economías para que fuesen funcionales a las futuras aperturas comerciales que los países de la región, experimentaron en los ochentas y noventas.

operativización, los problemas de este sector, ahora son visualizados y abordados como problemas sociales y los sujetos que los experimentan, comienzan a ser percibidos como “población beneficiaria de proyectos”.

Dicha tendencia, en concordancia con el autor, se debe a que el DRI se diseñó y pone en marcha bajo la tutela del Banco Mundial –BM-, instancia que ve en el campesinado un sector social tradicional o atrasado, el que debe ser modernizado a punta de tecnologías sociales (subsidios, programas), que en el marco de la intervención estatal, es una clara apuesta por la despolitización de los problemas concernientes al inequitativo acceso a la tierra.

3.5.1 El DRI en los albores de los ochenta y la cuestión agraria

A comienzos de la década de los ochenta la estrategia de desarrollo rural definida para el país, continuaba siendo el DRI, programa que entraba en su segunda etapa (1982-1986). Sin embargo se mantuvieron vigentes las apuestas de la primera fase, en esta etapa se sucedieron algunos cambios significativos.

Durante esta etapa, se puso un especial énfasis en la articulación del campesinado y de las autoridades locales en la definición y diseño de las estrategias concernientes al desarrollo rural, aspecto que se pensó conllevaría a que beneficiarios y beneficiarias asimilarían, en mayor medida las pretensiones empresarialistas del DRI. En este contexto, la atención se trasladó a regiones con potencial para la producción agrícola, lugares en los que se implementaron granjas modelo, como acciones que mediante la adopción de paquetes tecnológicos, apuntaban a la maximización de la productividad.

En el marco de dicha estrategia la participación de pequeñas y pequeños productores se consideró una cuestión esencial para lograr los objetivos planteados, es decir para avanzar definitivamente en la institucionalización y asimilación de la perspectiva empresarial por parte de este grupo poblacional.

Este proceso, en palabras de Escobar (2007, p, 243) debe ser entendido además como una de las tantas apuestas por desactivar el descontento, que persistía en las zonas rurales, frente a los fracasos de los intentos de reforma agraria.

Así el fomento y la apertura de espacios para la participación (en el marco de la segunda etapa del DRI), se sitúan como estrategias para avanzar en procesos organizativos locales, que sin retar al sistema aportaran al funcionamiento de este. En este sentido y bajo “esquemas de desarrollo autodirigido, mediante una combinación de esfuerzos organizativos comunitarios veredales, municipales y regionales, se produjo lo que los planificadores denominaron apertura organizacional del campesinado” (Escobar, 2009, p. 244)¹¹⁵. Este aspecto a la final se constituyó de nuevo en uno de los mecanismos de producción y control social de lo rural.

De acuerdo con lo anterior la intervención estatal, a través de la puesta en circulación de discursos y prácticas, mediante las que se ligan participación y empresarialización, apuntó a modelar a los sujetos, con el fin de 1. Despolitizar las cuestiones relativas a la lucha por la tierra; y, 2. La configuración del campesinado como empresarios o empresarias rurales. La interrelación de estos dos elementos revela como dichos sujetos, al ser modelados a través de la intervención, además van siendo sometidos cada vez más a las reglas de la producción capitalista. Estos y estas al apropiarse y asimilar las nociones y prácticas puestas en circulación por expertos y expertas, paulatinamente se configuran en agentes que facilitarán la instauración del modelo de desarrollo rural, en el marco del cual la redistribución de la tierra pasó a ser una cuestión no fundamental.

Además se diseña y pone en marcha el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR el, que se constituyó en una estrategia para ser ejecutada específicamente en

¹¹⁵ Cuestión que implícitamente apuntaba a “la apertura de nuevos espacios para el capital, y la creación de nuevas condiciones para el manejo de los conflictos sociales y políticos generados por el patrón del desarrollo” (Fajardo, 1991. p, 240).

áreas rurales azotadas por la violencia, especialmente guerrillera. En concreto surge en 1983 como una media de gobierno del conservador Belisario Betancour (1982-1986), que sí bien estaba amarrada al DRI, pretendía ir más allá, dado que perseguía el contribuir a la obtención y consolidación, en las zonas afectadas por la violencia, del clima de paz al que aspiran todos los colombianos y que necesita la Nación para avanzar por el camino del progreso y el bienestar.

La idea base para su formulación, que tal como hemos visto permea varias de las acciones relativas al agro, fue la de atacar las causas objetivas que daban lugar a la violencia. Esto a través, por un lado del fortalecimiento de la institucionalidad pública, es decir del incremento de la presencia de entidades relativas al desarrollo rural en las zonas priorizadas; y por otro mediante la promoción de la participación ciudadana en la planificación y asignación de recursos y en el diseño y formulación de programas y proyectos relativos a este tema.

Sí bien, tal como se especificó en anteriores párrafos la participación se constituyó en un asunto clave en el desarrollo de la segunda etapa del DRI, a diferencia de la ligazón con lo empresarial, en el marco del PNR, lo que se buscaba a través de su fomento, era el debilitar el apoyo social que habían ganado los grupos guerrilleros en ciertas zonas del país. A través de la inclusión de los sujetos, como ciudadanos y ciudadanas en el sistema político se esperaba que los sujetos, las organizaciones y las comunidades directamente interpelaran al Estado para la solución de sus necesidades. En palabras de Kalmanovitz (2009, p. 23) “La idea central era la de generar presencia del Estado en esas zonas con el argumento de que la violencia se originaba en la ausencia de instituciones cívicas y públicas”.

Esta apuesta partía de considerar que el gobierno debía directamente intervenir en las zonas de violencia. Intervención que debía ir más allá de lo militar. La idea ahora es la de, a través de la ejecución de programas y políticas sociales,

posibilitar la inserción del campesinado en el sistema político y contribuyera a configurar a este como un agente con capacidad para incidir en los asuntos públicos. Además se buscaba el socavar las causas de la pobreza rural, aspecto al que se relaciona con la ausencia del Estado y que a su vez da lugar no solo a la presencia de actores armados, sino también al deterioro de la guerra (Ochoa y Restrepo, 1997)¹¹⁶.

El PNR no solo se constituyó en una estrategia para acercar el Estado a la sociedad, en un contexto de apertura democrática, sino también como uno de los elementos para avanzar en la negociación de la paz con los grupos armados. Bajo esta lógica se consideraba que sí no se atacaban las causas estructurales que le daban origen, la guerra se deterioraría aún más, aspecto que conllevaría a altísimos costos sociales, políticos y económicos para el país. En este contexto, es que se sitúa de nuevo el debate sobre la reforma agraria, como el aspecto más urgente a solventar, si se quería avanzar hacia la paz¹¹⁷.

En palabras de Shuner (2002) la reforma agraria como un eje del PNR, en realidad no apuntaba a sortear las causas estructurales que daban lugar a la concentración de la tierra en pocas manos. Sin embargo es de resaltar que la ubicación de la reforma como un eje, más allá de ser una estrategia necesaria para acabar con la violencia, revivió el debate en torno a la inequitativa concentración de la tierra, en el seno tanto de los gremios como del movimiento campesino y en el ámbito estatal.

¹¹⁶ Ochoa y Restrepo (1997, p. 34) establecen que “esta lucha contra la pobreza se pretende original en su consecución, en la medida en que no pretende ser asistencial, transferir recursos de regiones y sectores sociales pudientes a los pobres, sino dotar de la infraestructura social y de servicios a las poblaciones, capacitarlas y asistirles técnicamente y vincular las zonas marginadas a los mercados locales, regionales y nacionales.

¹¹⁷ Frente a lo anterior, es de aclarar que este Plan, surge y se institucionaliza en el marco de los diálogos de paz que durante el gobierno de Betancour, se establecieron con los principales grupos guerrilleros del país: M-19, FARC y Ejército Popular de Liberación, EPL, a quienes a diferencia de los anteriores gobiernos, se reconoce como actores políticos. En este contexto tanto Estado como guerrillas coinciden en ubicar cuestiones referentes a la redistribución de la tierra como puntos álgidos que al ser solucionados ayudarían a avanzar en la pacificación del país. En el marco de este escenario las FARC jugaron un papel fundamental, dado que al anclarse su origen en la lucha por la tierra de los 50’s y 60’s y en relación a su fortalecimiento político, habían madurado su propuesta sobre cómo proceder con la reforma agraria del país.

Al interior SAC, sí bien no generaba el favoritismo entre todos los miembros, en un sector progresista, la idea de la reforma agraria como medida para impulsar el desarrollo del sector agropecuario y para avanzar en la desatomización de las causas de la violencia, había calado de manera importante. Lo anterior supuso una mediana modificación en la perspectiva que el gremio había manejado históricamente frente a este tema. Sin embargo la idea de la redistribución no se entendía en sí como una afectación de la gran propiedad. A lo que realmente se apuntaba era continuar con la lógica estatal que prevalecía en el momento, es decir a través de la compra por parte del INCORA, de predios que no estuviesen siendo eficientemente explotados, se contribuyera a facilitar el acceso de campesinos y campesinas, situados en zonas de alta conflictividad¹¹⁸.

Por otra parte en cuanto al movimiento campesino, consideramos que este como agente de la negociación de la política de tierras, también enfrenta un proceso de reconfiguración bajo la influencia del PNR. Tal como se dijo en anteriores apartes dicho Plan, se formula y pone en marcha, no solo con la intención de bajar los niveles de conflictividad con miras al incremento de la productividad de este sector y al mejoramiento de sus niveles de vida, sino también con el objetivo de acercar el Estado a las comunidades como vía para el fortalecimiento democrático. En este sentido, se abrió la posibilidad que el campesinado, a través de la ANUC (tanto la oficial como la disidencia) y otras organizaciones que habían surgido a finales de los 70's, participaran en las mesas de diálogo con los actores armados y en específico en las discusiones sobre la reforma agraria (Sunher, 2002).

Sin embargo tanto la modelación de la que habían sido objeto campesinos y campesinas, a través de la serie de estrategias desplegadas en el marco del

¹¹⁸ En este sentido se puede decir que la posición de la SAC se enmarcaba en los términos tradicionales, pero con algunos matices que surgen, debido a que por un lado, terratenientes, hacendados, empresarios y otros miembros de las élites rurales, estaban siendo víctimas del incremento de la violencia rural; y, por otro se consideraba que la estrategia de redistribuir minimizaría las posibilidades de ascenso al poder por parte de las guerrillas y, además contribuiría a que en definitiva el sector rural despegara como un sector dinamizador de la economía nacional.

DRI e incluso bajo el PNR, además de los efectos que la persecución política tanto estatal como para estatal había tenido sobre el movimiento campesino; y, la influencia tanto de las guerrillas como de los partidos políticos tradicionales (liberal y conservador) como de los de izquierda, propiciaron una reformulación de las reivindicaciones que estos encarnaban.

De acuerdo con Sunher (2002), esta serie de factores, posibilitaron que campesinos y campesinas amplíen sus demandas sobre reforma agraria, en las que se plasman, ya no solo una apuesta por la redistribución de la tierra, sino además la urgencia de reconocer y garantizar estatalmente los derechos civiles y políticos y la lucha contra la pobreza en las áreas rurales. En este contexto “la concentración de la propiedad de la tierra es vislumbrada por el movimiento campesino como una de las causas de la exclusión social, que impide la consolidación de formas de poder democráticas a nivel local y regional” (Albán 2011, p. 336).

En cuanto a los agentes estatales, podemos decir que bajo el gobierno de Betancour, la reforma agraria, adquiere de nuevo un matiz político, del que había sido desprovisto en la década de los 70’s. Así se sitúa este como un eje clave del debate político nacional, una de las cuestiones fundamentales para la negociación de la paz y una de las claves para el avance y fortalecimiento democrático. Sí bien en este contexto, la relación entre reforma de la estructura agraria del país y el desarrollo económico, prevalecía (esto se evidencia en la puesta en marcha de la segunda etapa del DRI) dado el deterioro de la guerra, tomó un carácter más que productivo.

La afectación de la gran propiedad y la redistribución de esta, es considerada como una cuestión vital en la construcción de la democracia. Promover y facilitar el acceso a la tierra de miles de campesinos y campesinas tiene correspondencia con la necesidad de incluir a un sector, que históricamente había sido marginado de la construcción del proyecto de nación. En este

sentido se consideró a la reforma agraria, como una de las principales estrategias de la apertura democrática¹¹⁹.

Frente a lo dicho, es de resaltar que la dinámica internacional condicionaba este proceso también. La década de los ochenta se caracteriza por ser un momento de renovación política para la región y de apertura democrática. Esta fue demarcada por la finalización de las dictaduras en los países del Cono Sur, el fortalecimiento del movimiento social y la emergencia de nuevos procesos organizativos (feministas, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos), la importancia que comienza a detentar la Corte Interamericana de Derechos Humanos como organismo que regula la protección, reconocimiento y garantía de estos derechos, entre otras cuestiones.

De acuerdo a lo anterior, lo que es posible entrever, es que a través de estrategias como el PNR, en las que claramente se evidencia un cambio en la perspectiva de los agentes estatales; a lo que se estaba apuntando era a una transformación política, es decir un cambio encaminado no solo al fortalecimiento de la democracia, sino a su extensión misma a los sujetos¹²⁰.

Este escenario permitió que ciudadanos y ciudadanas, en el marco de procesos organizativos, se sirvieran de dicha coyuntura para interpelar al sistema con discursos y prácticas más elaboradas y eficaces, mediante las cuales y siguiendo a Escobar (2001, p. 12) “buscan su visibilidad y el reconocimiento y posicionamiento de los puntos de vista y significados que

¹¹⁹ Bajo la perspectiva de análisis que nos hemos fijado, podemos decir que a nivel de los agentes gubernamentales, también estaban emergiendo transformaciones de sus principios de visión y de acción. La percepción sobre el campo, sus problemas y sus posibilidades, no estaba solamente atada a una visión economicista de un sector y sobre sus habitantes, la visualización ahora era bajo el tamiz de la ciudadanía y de los derechos. El cambio en los agentes, es posible explicarlo, porque estos provenían de un sector progresista, que pensaba, hablaba y actuaba bajo los referentes de la democracia.

¹²⁰ De acuerdo con lo establecido, podemos decir que los agentes estatales, encarnaban principios de visión y de acción diferenciados de sus predecesores, los que puestos en circulación a través de discursos y prácticas, a su vez modelaban los hábitos de ciudadanos y ciudadanas, quienes desde estos momentos y con mayor fuerza en la siguiente mitad de la década de los 80's, pasan a demandar del Estado no solo cuestiones netamente materiales, que aún estaban pendientes (como el caso del acceso a la propiedad de la tierra), sino también de aquellas que pasan por el reconocimiento.

trascienden los discursos dominantes”, “establecen luchas para el posicionamiento de significados y representaciones alternativas” y propenden por cambios concretos tanto en las condiciones materiales como simbólicas. En este sentido se pueden considerar como actores políticos dado que “llevan a cabo una lucha política más amplia por la transformación de la sociedad” (p, 15).

Sin embargo, el favorable clima político no tenía correspondencia con la realidad en los campos. Las élites rurales (hacendados, terratenientes, empresarios rurales), a las que ahora se sumaban narcotraficantes con intereses en estas zonas (para lavado de activos, fortalecer su poder social y político, entre otros), se constituyeron en una fuerza que, a través o de la incidencia en el plano político (dadas las alianzas que siempre han tenido con este sector o porque han hecho parte de este) o mediante el uso de la violencia, pusieron freno a los objetivos del PNR y entre ellos las pretensiones políticas de impulsar la reforma agraria¹²¹.

¹²¹ Frente a lo anterior es de resaltar, que desde comienzos de esta década tomó fuerza el narcotráfico como factor de violencia, expulsando miles de agricultores y agricultoras de sus tierras, y actuando como el más importante acumulador de terrenos de gran tamaño en el país, mediante mecanismos de expulsión del campesinado y adquisición de medianas y grandes propiedades rurales. Con la inyección de capital del narcotráfico se puso al servicio de los latifundios un aparato militar altamente tecnificado, acompañado de instructores extranjeros, que coadyuvó en las economías regionales a acelerar altos procesos de inversión y concentración de la propiedad territorial (Cardoza 2005). Sí bien estos actores no podían acceder al plano político para la negociación de cuestiones referentes a la reforma agraria, mediante la cooptación de funcionarias y funcionarios estatales, lograron incidir de manera importante en la formulación de las leyes agrarias de 80's y 90's .

4. Las representaciones de género y su mediación en la negociación de la Ley de Reforma Agraria “30 de 1988”.

Tal como se ha explicitado el principal objetivo de esta investigación es, el analizar la intervención de las representaciones de género en la configuración del campo de la política de tierras en Colombia, de modo específico observando las medidas relativas al género que regulan el acceso a la propiedad de la tierra tanto de mujeres como de varones campesinos, las que se plasman primero en la Ley de reforma agraria 30 de 1988 y posteriormente en la Ley 160 de 1994.

En este capítulo nos concentraremos en la primera de estas. Cabe aclarar que el análisis se centra no precisamente en la Ley, sino en la interacción entre los agentes para la incorporación de las medidas de género en la dimensión del acceso a la propiedad de la tierra de campesinos y campesinas, evidenciando cómo operaron las representaciones de género, que tales agentes encarnaba, en los procesos de concertación de la Ley.

Considerando, que la formulación de las leyes y de otros esfuerzos estatales (políticas públicas, planes de desarrollo, proyectos sociales, entre otros), es un proceso situado (es decir se sucede en un contexto específico y además está atravesado por una serie de dinámicas de carácter político, social, económico y culturales), para el desarrollo de este aparte proponernos, en primera instancia, evidenciar la serie de factores que condicionaron la negociación entre los agentes articulados al proceso de debate y formulación de la Ley 30.

En esta vía de análisis nos enfocaremos especialmente en discernir sobre los aspectos que coadyuvaron en la incorporación de la perspectiva de género en la planeación del desarrollo rural de Colombia; y, en específico en los temas concernientes a la reforma agraria. Posteriormente nos centraremos en dar cuenta de las dinámicas políticas y económicas, que se sucedieron en la década de los ochentas, enfocando el análisis en aquellas que incidieron de

manera importante tanto en la emergencia de escenarios para la concertación de las problemáticas referentes al acceso a la propiedad de la tierra, como para la negociación de la ley referenciada.

En aparte ulterior, daremos cuenta del proceso de negociación de la Ley, haciendo énfasis en las características de los agentes que participaron en esta, abordando aspectos relativos a la configuración de sus habitus y de las representaciones de género que encarnan. Además nos enfocaremos en visibilizar el tipo de capitales que encarnan y cómo esto incide en la participación en la negociación, en el posicionamiento de sus intereses y en los logros obtenidos. Por último precisaremos sobre cómo operaron las representaciones de género en los procesos de negociación en lo concerniente a la incorporación del género como eje para el acceso a la propiedad de la tierra de hombres y mujeres.

4.1 Género y mujeres: un espacio en la política y en la movilización social

4.1.1 La política para la mujer rural de 1984

Una de las innovaciones de la segunda fase del DRI, fue el diseño y puesta en marcha de una serie de estrategias dirigidas a mejorar la situación de las mujeres campesinas (DNP, 1984). Entre estas estrategias formuló la política para mujer rural de 1984.

Este tipo de estrategias, siguiendo a Moser (1998), se trazan e implementan con fuerza durante la década de los ochentas en los países de América Latina, con el principal objetivo de reconocer y potenciar el papel que las mujeres juegan en el ámbito productivo, en especial en la producción de alimentos¹²². Desde la perspectiva de León (2006) la ubicación de este interés a nivel de la

¹²² Tal como se precisó en el anterior capítulo, la potenciación de la participación de campesinos y campesinas en la producción de alimentos, se constituyó en una estrategia del programa DRI. En la etapa sobre las que hicimos referencia, mostramos como el varón campesino, fue el sujeto privilegiado de los proyectos aparejados al DRI. Las mujeres como sujeto de intervención bajo este programa, solo son contempladas en la década de los ochenta y en específico en la segunda apuesta del DRI.

región, se debe no solo a la toma de conciencia sobre la situación de inequidad que experimentan las mujeres campesinas, sino también a que desde organismos internacionales encargados de la construcción de directrices económicas y para la potenciación del desarrollo rural, específicamente desde la FAO, CEPAL, se establece que con el fin de dinamizar la producción agropecuaria y alcanzar la seguridad alimentaria, resulta urgente la incorporación de las mujeres no solo a la planificación del desarrollo rural, sino también en las acciones puntuales, que el Estado realiza, con el fin de dinamizar la economía de este sector (Sañudo, 2011).

En palabras de Calatrava (2002) otro factor que jugó un importante papel para el desarrollo de acciones institucionales en los niveles nacionales, está relacionado con los avances internacionales, durante la Década de la Mujer (1975-1985), específicamente en los conseguidos en el marco de las Conferencias Mundiales sobre las mujeres y los Planes de Acción que de estos encuentros se originaron, a través de los cuales se insta a los Estados a tomar medidas para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar cualquier forma de discriminación, garantizar sus derechos civiles y un acceso igualitario a los bienes y servicios, además de promover activamente la participación de las mujeres en lo público.

Sí bien en el contexto de estas medidas, la productividad y la seguridad alimentaria (familiar, comunitaria y nacional) se constituyeron en los principales móviles para ubicar a las mujeres como sujetos de intervención del DRI, el fomento de la participación, tenía una apuesta implícita: mejorar la situación socioeconómica de este grupo poblacional (Suarez, 2009). Aunque se pone un especial énfasis en lo productivo, la dimensión reproductiva no se margina de las acciones, dado que se considera que la intervención en este ámbito se constituye en una condición para empoderar a las mujeres. En esta línea, se establece que uno de los elementos que facilitará el empoderamiento, es el logro de su independencia económica, “vía la satisfacción de sus necesidades

prácticas mediante acceso a empleo y al mercado, y la satisfacción de intereses estratégicos” (p. 79).

Por otra parte, Suarez, señala que la viabilidad de dicha pretensión en específico en Colombia, se debe principalmente a la conjunción de tres factores. En primer lugar la generación de datos sobre la dinámica del sector rural, desde los que se reveló por ejemplo la importancia de la mano de obra familiar como fundamento de las economías campesinas, el papel de las mujeres rurales tanto en las unidades de producción como en la agroindustria y el aporte de las actividades desarrolladas por estas al PIB nacional¹²³.

En segundo lugar, la presencia de mujeres feministas en el plano gubernamental, fue un elemento que posibilitó el posicionamiento de dicha temática como eje del diseño de políticas públicas para el sector rural¹²⁴. En tercer lugar, la formulación y despliegue de medidas en el plano nacional, a través de las cuales se buscó la viabilización de las recomendaciones de los organismos internacionales para la promoción de la mujer como un agente clave en el desarrollo rural¹²⁵, sobre todo de aquellas emitidas por la FAO, la CEPAL y UNIFEM.

En relación a esta última idea es de resaltar que en el nivel internacional, en conexión con los avances normativos relativos al reconocimiento de los

¹²³ Frente a este aspecto resalta Ospina (1998, p. 60) “Los resultados de diversos estudios a comienzos de los ochentas y auspiciados por el Ministerio de Agricultura, así como las evaluaciones realizadas a los programas implementados por el ICA, el INCORA y la Federación de Cafeteros, según las cuales era evidente que las mujeres, en un alto porcentaje, eran las principales productoras de alimentos para el autoconsumo y para los mercados locales”.

¹²⁴ La misma autora revela como durante esta época la presencia en cargos de decisión de mujeres urbanas, feministas, formadas en disciplinas relativas a lo agrario y rural y quienes habían establecido por su trabajo una estrecha relación con las mujeres campesinas del país, coadyuvaron no solo al posicionamiento del género como eje transversal de las acciones estatales, sino también al fortalecimiento de las mujeres campesinas como un actor fundamental, que mediante su participación activa, comienza a incidir en la formulación de las políticas para su atención.

¹²⁵ Bajo esta perspectiva desde instancias como la FAO y la CEPAL, se emiten una serie de recomendaciones a los estados de la región, para que se incorpore el enfoque de género en los procesos de desarrollo rural, entendiéndose esto como una estrategia para promover la igualdad entre hombres y mujeres.

derechos de las mujeres (Promulgación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -1979-) y los principios establecidos en las Conferencias Mundiales sobre la mujer, la relación entre patrimonio y género comienza a cobrar alta relevancia en el plano internacional. Este aspecto además comienza a modelar los avances que, en los niveles nacionales, se vienen haciendo para el reconocimiento de los derechos de las mujeres campesinas a la tierra.

En el marco de la dinámica anteriormente referenciada, mediante CONPES¹²⁶ 2109, se formaliza la Política para la Mujer Campesina en Colombia, que tal como se señala en esta, se apuntaba a:

Modificar las condiciones de la participación económica y social de las mujeres campesinas de tal manera que se asegurara la mayor eficiencia en sus labores productivas, el incremento de la oferta de alimentos y el mejoramiento de la calidad de vida de ella y su familia. (Meertens, 2000, p. 85).

Para el logro de lo anterior se explicitaron los siguientes objetivos:

i) garantizar el acceso de las mujeres a los recursos productivos; ii) asegurar su intervención en proyectos generadores de ingresos y empleo; iii) impulsar su participación en la vida política del país; iv) superar los índices de analfabetismo de esta población; v) mejorar las condiciones de trabajo doméstico; vi) elevar los niveles nutricionales de las mujeres campesinas y sus familias. (Ospina, 1998, p. 61).

Estos se operativizaron a través de sendas estrategias, enmarcadas bajo el programa de “Mujer Campesina”. Mediante una primera, se buscó adecuar los instrumentos de política agropecuaria con el fin de abarcar a la población

¹²⁶ Estos documentos son emitidos por el Departamento Nacional de Planeación, en concreto por el Consejo de Política, Económica y Social. Su finalidad es la de establecer las directrices, para que la institucionalidad pública, diseñe políticas, planes, programas y proyectos.

femenina productora de alimentos. En el marco de esta, concretamente se especificaron las siguientes acciones: promoción del acceso a créditos, la conformación de cooperativas de productoras y su vinculación a canales de comercialización y mercadeo, el acceso a asistencia técnica y a la oferta de tecnologías adecuadas para hacer eficiente la producción y por último el mejoramiento de la vivienda rural.

En cuanto a la segunda estrategia, a través de esta se persiguió “el intensificar acciones de tipo social, con la idea de desarrollar un contexto más favorable y equitativo para las mujeres” tanto en el plano comunitario, como familiar y productivo (p. 6)

En lo referenciado, se observa que ahora la pretensión de transformar a los varones campesinos en productores eficientes y con capacidad empresarial, también se extiende hacia las mujeres, cuestión que en palabras de Muñoz (2002) terminó por instrumentalizarlas para el logro de los objetivos económicos que principalmente permeaban las estrategias del DRI.

En este sentido, la política referida, aun constituyéndose en un importante avance para el país; y, sobre todo para el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales, al conceptuarse bajo la perspectiva de los modelos de desarrollo rural dominantes, mediante los que se privilegia lo económico, no abordaron los condicionamientos sociales y culturales que las mujeres experimentan cuando se habla de acceso a factores de producción.

Además en el marco de esta no se observaron los factores desde los que se promueve el mantenimiento de un modelo de división sexual del trabajo en el que se sustenta la marginación de las mujeres de la mayor parte de los ámbitos del mundo rural. De acuerdo con lo anterior “la pretensión de aliviar las necesidades económicas inmediatas de las mujeres campesinas mediante mecanismos que no tocan las estructuras que producen la fuerte diferenciación social, refleja un sesgo economicista en la política” (Suarez, 2009, p. 83).

Esta estrategia gubernamental a nuestro modo de ver, no manifiesta una real intención por abordar los problemas particulares que enfrentan las mujeres en el sector rural por ser tales, sino que evidencia la necesidad de intervenir a un sector que ha estado fuera de las medidas estatales; y, que por ende no ha podido contribuir de manera eficiente al desarrollo rural del país. En este sentido la situación y condición de las mujeres campesinas, se constituyen cuestiones que quedan subsumidas a los problemas que enfrenta un sector en general (el campesinado), los que directamente se relacionan con los bajos niveles de eficiencia que se le atañen a la economía campesina.

Concretamente lo anterior implicó que la oferta global de servicios y programas para este sector, no se adecuara a sus necesidades específicas y dentro de un contexto más general de Equidad y Desarrollo. De acuerdo a esto, entidades como el Fondo DRI, INCORA y el Instituto Colombiano de Agricultura – ICA- se limitaron a impulsar proyectos puntuales destinados a la generación de ingresos para favorecer a pequeños grupos de mujeres, pero en forma aislada y marginada del resto del quehacer institucional (Muñoz, 2002).

4.1.2 Las femócratas y la incorporación del género en la planeación del desarrollo rural

El diseño de la política referida fue posible también gracias a la presencia de un grupo de mujeres¹²⁷ feministas¹²⁸, de procedencia urbana, de clase media, altamente cualificadas¹²⁹ y con una importante trayectoria institucional¹³⁰. Estos

¹²⁷ A las que en el marco de este estudio llamaremos femócratas por considerarlas agentes que desde una perspectiva feminista y de enfoque de género, propendieron por la incorporación de las medidas de género en las estrategias relativas al desarrollo rural.

¹²⁸ La mayor parte de estas hacían parte del movimiento feminista colombiano, que venía consolidándose desde la década anterior y venía trabajando en el marco estatal, para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en general.

¹²⁹ La recolección de información para el desarrollo de este trabajo nos permitió el identificar a las mujeres que en el marco estatal jugaron un papel esencial en la incorporación del género a las cuestiones rurales y las que se posicionaron en escenarios clave para la toma de decisiones. Entre ellas cabe destacar: Cecilia López (Ministra de Agricultura 1982 – 1986), Diana Medrano (ex directora de la Oficina de Mujeres Campesinas del Ministerio de Agricultura 1982 – 1986), Norma Villarreal (ex asesora Ministerio de Agricultura), Fabiola Campillo

aspectos permitieron el reconocimiento de estas, como sujetos con la autoridad para construir propuestas desde las que fuese posible planear el desarrollo rural para el país desde una perspectiva de género. Sobre esta última idea, uno de los exgerentes del INCORA, manifiesta lo siguiente:

“En esa época estaba Cecilia López a la cabeza del Ministerio, ella es economista y había estudiado por fuera del país y sabía mucho de género y además se codeaba con las mujeres de organismos internacionales que estaban trabajando con los temas de mujer rural. Como sabes ella era del Partido Liberal, de una prestigiosa familia de Cartagena. Bueno ella y otras como Norma, Diana y algunas más, uno las referenciaba como quienes sabían de mujer campesina y además las conocíamos porque ya venían años trabajando en el INCORA, en el Ministerio” (Entrevista a Ex gerente del INCORA. Bogotá noviembre de 2013).

Este grupo de mujeres, sin detentar un título “formal” como expertas en género, habían profundizado, a lo largo de su trabajo, en conocimientos referentes a este aspecto, ya sea a través de cursos cortos, asistencia a seminarios internacionales y por cuenta propia. Esto fue posible debido a que en su mayoría, además de hacer parte de la institucionalidad pública, conformaban escenarios académicos y de activismo, en los que permanentemente se debatía y reflexionaba sobre la situación de las mujeres en Colombia y en la región y en específico sobre las mujeres rurales.

En estos espacios, además establecieron alianzas importantes con mujeres del movimiento social internacional y nacional que luchaban por la defensa de los

(Asesora Ministra de Agricultura) y Pilar Zuluaga (ex funcionaria INCODER). La totalidad de estas eran profesionales y habían realizado para el momento especializaciones en temas puntuales del sector rural.

¹³⁰ Muchas de las anteriores previamente habían hecho parte de otras instancias institucionales, aspecto que nos permite suponer que estas se constituyeron en virtud de ellos y en relación a su pertenencia a una clase social específica, como agentes institucionales con accesos a capitales específicos.

derechos humanos y abogaban por su reconocimiento. Al respecto, una de ellas señala:

“Las que estábamos en ese momento en el Ministerio y en el INCORA, éramos mujeres que hacíamos parte de redes internacionales y nacionales donde debatíamos sobre las mujeres rurales. Me acuerdo que en esos espacios en los que confluíamos varias de nosotras, estaban también mujeres académicas y mujeres activistas, que desde hace años estaban con fuerza posicionando el tema en varios espacios. Unas y otras nos encontrábamos y nosotras a la final éramos en enlace con el gobierno”. (Entrevista a ex asesora Ministerio de Agricultura. Noviembre de 2013).

Además cabe destacar, que dada su trayectoria institucional y el estar articuladas en escenarios claves para la toma de decisiones frente a las dinámicas del desarrollo rural, habían adquirido un reconocimiento por parte no solo de las autoridades regionales y locales, sino también en las comunidades y en las organizaciones de base campesinas. Frente a este aspecto, es clave señalar, cómo estas además mantenían estrechas relaciones con algunas mujeres, que como parte de la ANUC, habían empezado a consolidar un importante liderazgo a nivel campesino. Sobre este aspecto nos refiere una de las entrevistadas:

“Yo venía trabajando con proyectos del DRI en varias partes del país. Desde que comenzó este venía trabajando. Ir y venir a las regiones hizo que yo pudiera tener contacto estrecho con alcaldes y funcionarios del ICA del INCORA a nivel local. Me movía mucho por los campos y entonces la gente de los municipios comenzó a reconocirme como experta en temas del DRI. A través de las actividades yo entraba en contacto también con la gente y con la gente del movimiento campesino y así comencé a conocer a algunas mujeres que estaban moviendo cosas interesantes en la ANUC. Ellas

venían haciendo un trabajo duro porque no era fácil que las tuvieran en cuenta. Algunas como Leonora Castaño, Gilma y las otras que después harían parte de la ANMUCIC, venían dando una pelea dura para que en la ANUC les dieran espacio. Con estas mujeres comenzamos a trabajar y a ver que podíamos a hacer para que el Estado tomara en serio la cuestión de las mujeres”. (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Octubre 30 de 2013).

Tal como se especificó con anterioridad, desde la perspectiva de esta investigación consideramos que dichas mujeres, a quienes reconocemos como agentes claves para que las cuestiones de género comenzaran a calar de manera importante en el plano institucional, encarnaban una serie de principios de visión y de acción sobre lo rural y el género que se habían ido configurando en relación a su trayectoria, pertenencia a una clase social, formación, entre otros aspectos. Bajo esta presunción asumimos que estas, mediante los discursos que ponían en circulación y las acciones que desarrollaban, en un contexto que lo favorecía, aportaban a la modelación de las representaciones, que tanto a nivel de la política formal, como de las comunidades, se tenían sobre el papel de las mujeres rurales en el campo.

Estas bajo la impronta de discursos feministas, los que se acuñaban en escenarios como los de las Conferencias Mundiales sobre las Mujeres y en espacios académicos, interpelaban a diversos actores (funcionarios y funcionarias, comunidades, agentes locales, gremios, movimiento social) sobre la urgente necesidad de incorporar el género a la planeación del desarrollo; y, mediante esto no solo lograr el reconocimiento de las mujeres rurales como un actor clave en las dinámicas de este sector, sino también como un sujeto al que debían reconocérsele los mismos derechos que a los varones, sobre todo en lo que respecta al acceso a los recursos productivos (principalmente tierra y crédito).

De acuerdo con lo anterior y siguiendo a Bourdieu (2000b), afirmamos que este grupo de mujeres, a las que llamamos femócratas, al detentar capitales de tipo social, cultural y también económico que les permitían situarse en escenarios claves para la toma de decisiones, jugaron un papel fundamental para un cambio en las representaciones que circulaban sobre las mujeres campesinas; además lograron, desde nuestra perspectiva que este cambio, comenzara a modelar las acciones estatales dirigidas a este sector. Al respecto consideramos clave citar uno de los apartes de un testimonio brindado por una de las entrevistadas:

“Al estar en puestos de decisión a muchas nos facilitó el que el género comenzará a ser un eje de la planeación. Yo creo que esto es lo que facilitó la cosa. Bueno no solo es estar, sino que teníamos que decir al respecto. No es que habláramos que las mujeres eran importantes para la producción, sino que nos basábamos en estudios y cosas que se estaban diciendo y haciendo afuera en las que se iba mucho más allá. Nosotras no hablábamos no solo de la tierra y que se reconociera a las mujeres esta, sino que hablábamos desde una perspectiva en la que este recurso se pensaba como un eje clave para el empoderamiento, una necesidad estratégica que al suplirla llevaría a la equidad”. (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Septiembre de 2013)

Por otra parte es de resaltar que institucionalmente estaban las condiciones dadas para que el género comenzara a situarse como un eje de la planificación del desarrollo rural. A nivel del Ministerio de Agricultura, principal entidad para la gestión de los objetivos de la segunda fase del DRI, se creó la Oficina de Mujer Rural, instancia que además de estar encargada de dirigir los programas destinados a las mujeres de los sectores rurales, jugó un papel fundamental en el diseño y aplicación de la Política para la Mujer Campesina. Sí bien dicha instancia contaba, desde su creación, con limitaciones presupuestales se

constituyó en un puntal para que más adelante se tomará en serio estatalmente la urgencia de incorporar el género a la planeación del desarrollo rural.

Además de lo anterior, la existencia de esta instancia y la legitimidad que esta tenía en las mujeres del campo, facilitó la construcción consensuada entre agentes (femócratas y campesinas) de las estrategias encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales.

4.1.3 La ANMUCIC, agente clave en la negociación de la política de tierras¹³¹

En 1984 y por influencia de las Naciones Unidas (específicamente de UNIFEM) y el apoyo del Ministerio de Agricultura, específicamente la oficina de Mujer Rural, se crea la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia –ANMUCIC-. Sí bien en el marco de la Política para mujeres campesinas de 1984, no se consideraba el impulso a procesos organizativos de mujeres como un objetivo principal, en esta se señalaba la necesidad de crear mecanismos para el fomento de la participación de estas en los proyectos y programas relativos al desarrollo rural.

Bajo este paraguas, el del fomento de la participación, el impulso de procesos organizativos “era tácitamente considerado indispensable dado que el logro de los objetivos previstos no podía ser sin la existencia de una fuerza coherente que promoviera y presionara por su cumplimiento” (Villarreal, 2004, p. 248).

Sí bien el surgimiento formal de la ANMUCIC está directamente relacionada con la puesta en marcha de la Política de Mujer Rural de 1984, desde nuestra perspectiva debe considerarse como el resultado de una amalgama de factores, entre los que se podrían destacar:

¹³¹ En este aparte solamente queremos introducir algunas consideraciones breves sobre el surgimiento de esta organización, aspectos que nos situaran en el posterior análisis que haremos de estas como agentes claves en los procesos de negociación de la Ley 30 de 1988.

- Procede de iniciativas gubernamentales ligadas a las políticas de desarrollo rural vigentes en aquel momento para Latinoamérica¹³²
- Corresponde con procesos auspiciados por organismos internacionales de cooperación y otros.
- Se establece como prioridad por otorgar un papel protagónico a las mujeres, entendiendo que ellas juegan un papel preponderante en el bienestar de sus hogares y en la producción de alimentos.
- Se constituyen como resultado de la convergencia de diferentes experiencias organizativas en espacios mixtos como el de la ANUC.
- Están abocados principalmente a la solución de necesidades prácticas, desde las cuales se comienza a pensar en las necesidades estratégicas.
- Surgen no solo como resultado de las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres de los sectores populares, sino también proceden del no encontrar en las organizaciones mixtas y en el movimiento social en general, espacios donde las mujeres puedan reivindicar sus derechos como tales.

Como antecedentes de este proceso se debe ubicar a las manifestaciones de inconformismo en la década de los 20. Mujeres como Juana Julia Guzmán, líder y cofundadora del Baluarte Rojo¹³³ de Lomagrande en Córdoba; Felicita Campos quien jugó un papel fundamental en la creación de ligas campesinas en Sucre; Josefa Blanco y Petrona Yance quienes trabajaban mancomunadamente con los obreros de las bananeras, de lo que hoy se conoce Urabá Antioqueño, en la lucha por sus reivindicaciones. Pocos ejemplos citados demuestran la beligerancia, resistencia y presencia de las mujeres en las organizaciones desde tempranas épocas.

¹³² Según Pérez y Farha (1998) los enfoques de desarrollo rural en Colombia han incidido en la organización de mujeres en los sectores rurales. Y en cuanto a esta organización en particular, su promoción, por parte del Ministerio de Agricultura y de instancias internacionales, tiene que ver con una postura, que podría llamarse “productivista”, es decir como resultado de una serie de estrategias institucionales dirigidas a la incorporación de la mujer al desarrollo. La intencionalidad clara, era la de acabar con la pobreza y que mejor herramienta que incorporar a las mujeres de sectores altamente empobrecidos en programas que les permitieran tener un mejor nivel de vida.

¹³³ Partido político afiliado al Partido Comunista.

Por otra parte entre la década de los 50 hasta finales de los 60, de la mano del Estado y otras instituciones como la iglesia surgen organizaciones de mujeres campesinas, que como lo afirma Díaz (2002, p. 28) proceden de “Un abierto interés de las instituciones patriarcales por estimular la organización de este sector. El Estado, los partidos políticos, la iglesia y los poderes internacionales dedicaron buenos esfuerzos a impulsar formas de asociación en el campo, en particular entre las mujeres, y para ellos aprovecharon en la mayoría de los casos organizaciones ya controladas por ellos”.

Entre estas formas organizativas se destacan: los Clubes de Amas de Casa bandera del programa de mejoramiento del Hogar Rural (1953) y la Asociación de Amas de Casa Rurales de Colombia (1963), teniendo como objetivo la capacitación de las mujeres en labores que redundaran en la generación de excedentes monetarios. En palabras de la autora tales organizaciones estaban ligadas al Estado y a las instituciones en una doble dimensión: se suponían como espacios de control del inconformismo en este sector social, pero al mismo tiempo se constituían en el modo de reproducción de esquemas sociales con sesgo patriarcal.

A partir de los años setenta y de igual manera que las anteriores, de la mano del Estado se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, asociación de carácter mixto. En esta la participación de las mujeres se caracterizaba por acompañar a los grupos de hombres que invadían las tierras, en las movilizaciones, en acciones de presión para liberar a los presos, en la defensa de las comunidades en desalojos y enfrentamientos con la fuerza pública. Las mujeres como parte de las familias sin tierra, sentían esta necesidad, como suya principalmente, no diferenciándola de las necesidades como género.

Sin embargo entre 1972 y 1973 se crearon los comités femeninos de la ANUC, que sí bien correspondían a réplicas exactas de los comités mixtos, en cuanto a que su estructura, funcionamiento y prácticas de poder eran bastante similares al ejercido por los hombres, terminaron configurándose en los

espacios en los que las mujeres de la organización comienzan a debatir y reflexionar sobre problemas particulares que las afectaban.

Posteriormente, a finales de los setenta se crea la Secretaria Femenina de la ANUC, proceso que da un impulso importante a la ulterior organización autónoma de mujeres. A comienzos de los ochenta, los comités femeninos que seguían vigentes se constituyeron en un insumo importante tanto para el surgimiento de otras organizaciones de carácter femenino, como para el fortalecimiento del trabajo de género al interior de otras organizaciones derivadas del fraccionamiento de ANUC¹³⁴.

Frente a lo anterior es de resaltar, que dado el poco apoyo que las mujeres rurales encontraban en las organizaciones a las que pertenecían, estas debieron buscar soporte por fuera de estas, con el fin de poder por fin avanzar en el reconocimiento y posicionamiento de sus demandas particulares frente a la tierra y a otros aspectos relativos al desarrollo rural. En este contexto encontraron un doble apoyo. Por un lado a nivel de organismos de cooperación al desarrollo y por otro en instancias estatales del nivel nacional. Dicho sostén se enmarca en la tendencia descrita con anterioridad: la urgencia de incorporar a las mujeres al desarrollo.

De acuerdo a lo anterior, es de reconocer que en el ámbito internacional ellas encontraron apoyo de una serie de instancias de cooperación internacional al desarrollo, instancias que se constituyeron en socias del Estado colombiano y las que cumplían un rol particular en este proceso. Tal como lo señala Villarreal (2004, p. 261):

UNICEF apoyaba la actividad de capacitación y organización, además actividades de mejoramiento productivo para mujeres campesinas que venían participando en proyectos de generación de ingresos ejecutados por

¹³⁴ Recordemos que en la década de los 70's la ANUC se divide en línea Armenia (oficialista) y Sincelejo (Radical).

ICA. El PNUD por su parte había comprometido recursos para un proyecto productivo que se ejecutó desde el Ministerio de Agricultura y que luego fue transferido a INCORA.

Sobre este aspecto una de las entrevistadas resalta:

“En un viaje a Holanda al que me invitaron, ya no como parte de la ANUC, sino como líder campesina, me propusieron que porque con otras mujeres no nos organizábamos aparte de la ANUC. Nos dijeron miren que tipo de organización pueden hacer y nosotros de acá les damos un empujoncito. Estábamos participando en un taller internacional de agricultura orgánica y desarrollo rural que se hizo en Holanda y participamos 4 mujeres de Colombia, fueron días de convivencia, organización, discusión y mirar un poco a donde mirar desde nuestra experiencia el desarrollo local, el desarrollo rural y eso nos sirvió de base para armar un plan con un enfoque integral de lo que era la visión del campo, es decir como toda una propuesta de estilo de vista campesina. En ese plan y con el conocimiento que tenía del trabajo con mujeres, el apoyo de las europeas en ese sentido es que iniciamos un proceso organizativo muy bonito”.
(Entrevista a fundadora y ex presidenta de ANMUCIC, 2008)

En el ámbito nacional además contaban con el apoyo, tal como se dijo con anterioridad, de mujeres que desde las instancias estatales, principalmente en el Ministerio de Agricultura y el INCODER, ayudaron a promover y fortalecer la organización de las mujeres rurales. Este aspecto jugó un papel fundamental como coadyuvante de dicha dinámica. Lo anterior se dio no solo porque estas mujeres al hacer parte de espacios de decisión, podían intervenir para que la cuestión de género se tomase en serio, sino también porque mediante sus discursos y prácticas contribuían a remodelar las representaciones que, en dichos escenarios se tenía sobre el papel de las mujeres en el campo.

Este hecho bajo la perspectiva de esta investigación, facilitaría paulatinamente la organización de las mujeres y su configuración como agentes claves en la negociación de la política de tierras. Tal como se especificó en anteriores apartes, las llamadas femócratas, al provenir de la clase media, por ser profesionales y conocedoras de las temáticas rurales y aspectos relativos a la planeación del desarrollo rural bajo la perspectiva de género, por su trayectoria institucional y el reconocimiento que habían ido consolidando como expertas, a nuestro modo de ver detentaban capitales de tipo económico, social, cultural y simbólico, que soportaban su capacidad de incidir en el plano político y por ende de jalonar procesos para que las mujeres campesinas pudiesen ubicar sus demandas particulares en el nivel institucional. Al respecto se señala en una de las entrevistas:

“Nosotras contábamos con el apoyo de algunas mujeres que en el Ministerio y en el INCORA sobre todo, venían hablando en serio del derecho a la tierra y que vieron en el apoyo a procesos organizativos una vía para que nuestras demandas particulares tuvieran un espacio. Ellas fueron aliadas importantes pa que pudiéramos sacar adelante a la organización”. (Entrevista a lideresa de la ANMUCIC. Bogotá, octubre 2013).

Por otra parte estas últimas (las mujeres rurales) dada su situación marginal en el sistema, no solo por ser campesinas, sino también por ser mujeres en un mundo en el que prioritariamente se asociaba lo femenino con el cuidado del hogar (aunque esto en la realidad se contradiga); y, por el limitado acceso a recursos productivos, a educación, a satisfactores de las necesidades básicas, a la participación, entre otros, no contaban con el poder necesario para ubicar directamente sus demandas en la agenda política y por ende para modificar las representaciones que sobre ellas circulaban en diferentes ámbitos.

Los anteriores aspectos resultan importantes en la medida en que nos permiten intuir el cómo las alianzas establecidas entre agentes con diferentes niveles de

capital se constituyen en coadyuvantes del proceso organizativo. Las campesinas requerían de las femócratas, en concreto del poder que estas detentaban, para avanzar en la lucha por el reconocimiento de sus derechos.

En 1984 y por influencia de las Naciones Unidas (específicamente de UNIFEM) y el apoyo del Ministerio de Agricultura, específicamente la oficina de Mujer Rural, se crea la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia.

Al comienzo la organización no tuvo mayor acogida entre las mujeres, los hombres, las organizaciones campesinas y las instituciones que tienen que ver con el sector, sin embargo poco a poco va adquiriendo un importante reconocimiento por parte de diversos actores, se fortalece, y se constituye en el espacio que aglutinó a miles de mujeres rurales en toda su diversidad¹³⁵ y en el escenario donde pueden acomodar sus luchas y necesidades mil veces sentidas, pero que no habían logrado ser canalizadas por políticas institucionales, tal como lo manifiesta una de sus fundadoras:

“A pesar de haber un origen desde el gobierno tomó su propio rumbo de inmediato las mujeres se empoderaron de manera tal que esta propuesta se convirtió en una organización con amplia participación de las mujeres campesinas, negras e indígenas aglutinadas en asociaciones departamentales y municipales”. (Entrevista a lideresa de la ANMUCIC. Bogotá, noviembre 24 de 2013).

En esta organización confluyeron diferencias experiencias organizativas de mujeres que pertenecían a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que como parte de la secretaría femenina de la ANUC, espacio intentaron (sin éxito) posicionar las necesidades particulares de las mujeres campesinas frente al acceso a tierra, a factores de producción y de la formulación de políticas

¹³⁵ Como mujer rural se define institucionalmente a todas aquellas mujeres que viven en los sectores rurales tanto en zonas menos habitadas como en cascos urbanos que no sobrepasen de los 10.000 habitantes. Incluye, entonces a las mujeres indígenas, campesinas y negras.

públicas que contemplaran acciones especiales dirigidas a este colectivo. Frente a lo anterior señala Villarreal (2004, p. 241)

En los diferentes congresos de la ANUC la presencia de las mujeres fue siempre numerosa y como resultado de esto fue la de acordar la creación de espacios para debatir los problemas de las mujeres e incorporarlas a la plataforma de la organización. Sin embargo el resultado fue simbólico, dado que no se les permitió incorporarse en los organismos de decisión de manera activa y sólo se aprobó el funcionamiento de una Secretaría Femenina que simplemente podía coordinar la acción de proselitismo de la organización y la cooperación de las mujeres. La carencia de autonomía impedía diseñar una estrategia que incluyera los problemas de las mujeres como parte de las negociaciones de la ANUC.

De acuerdo con lo dicho, ellas dada su activa participación en previos procesos de movilización, habían ido adquiriendo capacidades organizativas, las que además fueron reforzadas a través de una serie de estrategias que el mismo Estado, bajo la tutela de las femócratas y de funcionarios sensibles al género, implementaban con el fin de impulsar tal proceso.

Una estrategia de la que es posible dar cuenta, es la referida en una de las entrevistas realizadas:

“Yo conocí a Leonora y las otras, ya cuando estaban en la ANMUCIC en unos cursos que en el INCORA se hacían sobre legislación agraria. Yo hacía parte del Sindicato del INCORA en ese momento. Las formábamos en liderazgo y otras cuestiones que creíamos las iban a empoderar para que pelearan por su derecho a la tierra. En ese curso estaban las aliadas del Ministerio. Se trabajaba fácil con ellas, porque es que ya venían con la ANUC, con quienes teníamos una estrecha relación”. (Entrevista a ex presidente Sindicato del INCORA. Bogotá, octubre 2013).

El anterior aspecto nos permite, bajo la perspectiva de esta investigación, introducir una cuestión importante. Consideramos que a través de la serie de estrategias desplegadas por el Estado para el fortalecimiento de la organización de mujeres, se pusieron en circulación una serie de discursos y prácticas relativas a la perspectiva de género, las que iban calando poco a poco en las mujeres modelando sus principios de visión y de acción y con ello las representaciones que encarnaban sobre sí mismas y sobre los varones.

Un ejemplo de lo anterior, referido por gran parte de las entrevistadas, es cómo a través de la influencia de estos discursos y prácticas, además de la trayectoria organizativa que encarnaban, las mujeres de la ANMUCIC fueron interiorizando que el acceso a la propiedad de la tierra, se constituye en un aspecto fundamental para el bienestar de sus familias, el propio y como requisito para su empoderamiento.

Siguiendo a Deere y León (2000) en relación al bienestar, la propiedad es relevante en la medida en que conlleva no solo el tener seguridad alimentaria, sino también es un bien clave para la generación de ingresos alternativos, cuestión que bajo la perspectiva de las autoras posibilita el mejoramiento en el nivel de vida de ellas y sus familias y les otorga posibilidades para enfrentar la adversidad.

En relación al empoderamiento, corrientemente se especifica que tal acceso es clave para que las mujeres adquieran poder de negociación no solo a nivel familiar, sino también comunitario y con ello avanzar en la deconstrucción de los esquemas tradicionales, que las mantienen en condiciones de subordinación frente a los varones y de una posición marginal en la sociedad (Sañudo, 2003).

El énfasis puesto en la relación entre acceso a la propiedad de la tierra, bienestar y empoderamiento, por ejemplo en el marco de los procesos de

formación a los que fueron invitadas las mujeres de ANMUCIC, caló de manera importante en ellas, quienes desde estas nociones comienzan a formular sus reivindicaciones. Este aspecto puede ser corroborado por algunas de las entrevistas:

“Me preguntas sobre qué sentido tenía reivindicar la tierra pa las mujeres. En ese momento, te digo así, porque veo que las cosas han cambiado un poco, nosotras pensábamos que si teníamos tierra pues podíamos tener mejores ingresos y pues platica pa el mercado, pa la educación de los hijos, la salud. Es decir podríamos sembrar, tener animales y poder tener un ahorrito para cualquier eventualidad que se presentará. Pensábamos que nos daba más seguridad. Por otro también veíamos que la titulación conjunta o la titulación individual, pues nos ponía en una mejor situación que si no la teníamos”. (Entrevista a lideresa ANUC- UR. Bogotá, octubre de 2013).

“La tierra la pusimos como una necesidad, pensábamos que de que le servía a una que le vengán hablar de política sino tiene tierra, no tiene que comer, yo te lo digo porque lo viví en carne propia, eso de no tener nada es verracamente bravo y nos impedía a nosotros avanzar en equidad con los varones. Sin título por ejemplo, que crédito te iban a dar”. (Entrevista a lideresa ANMUCIC. Bogotá, octubre 2013).

ANMUCIC, tuvo, desde un principio como objetivo la incidencia en las políticas públicas o en las estrategias estatales destinadas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer rural. En este contexto, su trabajo logró afectar, como veremos más adelante, significativamente las leyes de Reforma Agraria: 30 de 1988, y 160 de 1994 y de la Política para la Mujer Rural de 1994. Mejía (2006, p. 2) establece al respecto:

Durante la primera década de existencia ANMUCIC, entre mediados de los ochenta y de los noventa, logró importantes reivindicaciones para las

mujeres rurales, entre ellas la adopción de medidas positivas en las leyes de reforma agraria, un asiento para la organización en la máxima instancia del organismo que adjudicaba las tierras al campesinado, y la asignación de recursos por parte de las administraciones locales y nacionales para procesos de generación de ingresos para las campesinas.

De acuerdo a lo anterior, desde sus inicios la organización ha conseguido cambios fundamentales, no solo a nivel de las representaciones sobre las mujeres, en el contexto del movimiento social campesino, sino además en la institucionalidad del sector agrario y con ello “hizo incidencia en el congreso, en el gobierno nacional, en los gobiernos locales y logró posicionar el tema de las necesidades y derechos de las mujeres rurales en la agenda institucional.” (p. 6).

4.2 La negociación y puesta en marcha de la reforma agraria (1986 – 1990)

4.2.1 El contexto de la negociación

A mediados de la década de los ochentas “se tenía una estructura con altos índices de concentración de la propiedad, una fuerte fragmentación del minifundio, y la mediana propiedad había iniciado un breve ascenso con el desarrollo de la agricultura comercial” (PNUD, 2011, p. 224). A este panorama hay que sumarle la consolidación del narcotráfico y con ello la definitiva emergencia e institucionalización de los grupos paramilitares, entendidos estos como una estrategia armada para la acumulación de tierras¹³⁶. En palabras de Díaz y Otálora (2000, p. 24):

El binomio paramilitares – narcotraficantes propició la relatifundización, es decir la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de un solo propietario, mediante tácticas como las intimidaciones, masacres,

¹³⁶ En palabras del PNUD (2011, p. 224) “Fue en esta coyuntura en la que el conflicto armado, de la mano de los paramilitares y narcotraficantes inició un proceso de contrarreforma agraria que consolidaría definitivamente la alta desigualdad en la estructura agraria”.

desplazamientos forzados de población, entre otras tácticas de terror. En este contexto, estos (narcotraficantes) se apropiaron de “aproximadamente 5 millones de hectáreas de tierra.

Por otra parte es en este momento que se comienzan a vislumbrar los efectos negativos de las políticas proteccionistas de la agricultura. Entre las consecuencias, expertos como Machado (2005) entre otras señalan: la incapacidad de la agricultura para absorber la mano de obra fluctuante, que en específico correspondía a la masa de labriegos y labriegas, sin acceso o con acceso precario a la tierra y a otros factores de producción con el consiguiente incremento de la migración urbano - rural; la concentración de la propiedad de la tierra; la exclusión de las economías campesinas de la dinámica económica del país; y, la priorización de las actividades productivas de exportación.

Además es de considerar que tanto Colombia como los países de la región, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, comenzaron a implementar una serie de programas de ajuste estructural. A través de estos se apuntaba a la reforma del Estado, la liberalización y desregulación de la economía y a la estabilización macroeconómica. En sí lo que se esperaba es que los países (intervenidos a través de estos programas de reforma estructural) inicien el tránsito de Estados de bienestar (en el caso de los países desarrollados) o Estados planificadores (en el caso de los países subdesarrollados) a países donde predomine la desregularización de la actividad económica, la privatización de compañías estatales, el recorte de gasto social y la liberación de los precios y del mercado (Ahumada, 2002).

Es en este contexto en el que se observa un cambio radical en torno al modelo de desarrollo rural en Colombia. Bajo la nueva perspectiva la alternativa productiva que se define es la de los bienes en los que el país y ciertas regiones tenían ventajas competitivas y que por ende podían situarse en circuitos de mercadeo internacional.

Frente a lo anterior, es de resaltar que es específicamente durante el gobierno de Barco que “se inició el proceso de apertura de la economía, como resultado de los compromisos establecidos en los programas de ajuste macroeconómicos de 1984 – 1985, cuando el país comienza a doblegarse ante las condiciones que imponía el Fondo Monetario Internacional -FMI-” (Machado y Vásquez, 2005, p. 43).

Es en este escenario que gobierna Barco, quien a pesar de ser quien inicia la implementación del modelo neoliberal en el país, declara en su Plan de Gobierno la urgencia del diseño e implementación de políticas agrícolas que bajo una perspectiva redistributiva debían apuntar a la erradicación de la pobreza rural y la desigualdad. A través de “la definición de un nuevo marco institucional para el desarrollo rural, la expedición de la Ley 30 de 1988 y la profundización del Plan Nacional de Rehabilitación¹³⁷” (Machado y Vásquez, 2005, p. 41) se puso un especial énfasis en la atención a pequeños productores y a la capitalización y modernización del sector.

4.2.2 La reforma agraria en un contexto de transformación del sector rural

Con respecto a la reforma agraria, es de aclarar que Virgilio Barco incorporó este tema en su plataforma electoral y durante su mandato propugnó por lograr que sea una realidad. Entre los antecedentes directos para que esta intención se plasme en específico en la Ley 30 de 1988, se deben considerar:

1. A finales del mandato de Betancur, la tregua política lograda con las FARC, contribuyó a la consolidación de un escenario institucional en el marco del que se creó la Subcomisión Agraria. En este espacio confluyeron diversos sectores: las organizaciones campesinas, congresistas de los partidos tradicionales, representantes del Partido Comunista de Colombia,

¹³⁷ Con respecto al PNR “la administración Barco lo articuló a su plan de desarrollo y redefinió su estructura y su alcance, no solo porque lo enmarcó dentro de una concepción más global de la política, sino también porque se privilegió la participación comunitaria y la descentralización de las decisiones y acciones” (p. 43).

representantes de la SAC (en cabeza de Carlos Ossa Escobar) y funcionarios y funcionarias del Ministerio de Agricultura y del INCORA.

Dichos agentes, a través de la concertación de intereses diseñaron una propuesta común que se presentó cuando Barco inicia su gobierno, la que no fue finalmente tomada en cuenta en su totalidad, sin embargo sirvió de referente para la negociación (entre los mismos actores) y formulación en 1987 del proyecto de Ley, el que se sancionaría en el 88 dando lugar a la Ley 30 (Machado, 2002).

2. La presencia en el Estado (principalmente del Partido Liberal), en el INCORA y en los gremios (principalmente en la SAC) de sectores progresistas, quienes instauraron un escenario propicio para el debate político en torno a la necesidad de una reforma agraria en el país¹³⁸.
3. Nombramiento de Carlos Ossa Escobar en el gobierno de Barco (en el gobierno de Betancur fungía como director de la SAC) como Consejero de Paz, quien desde el comienzo se mostró dispuesto a acercarse al movimiento social campesino, sino también a generar estrategias para su fortalecimiento, como mecanismo para articular a estos en la formulación de una política de tierras más adecuada a las condiciones de los habitantes rurales del país. Este aspecto es resaltado por el mismo Ossa:

“Barco me nombró como Consejero de Paz. Con Betancur yo venía ejerciendo como presidente de la SAC y habíamos logrado serios avances al interior de la Sociedad y además nos habíamos acercado a las negociaciones con los armados. Barco creía que mi presencia como Consejero, ayudaría por un lado a continuar con las negociaciones con los grupos con los que no se habían logrado avances, sería favorable para que la SAC nos apoyará y además pensaba él que los sectores campesinos reconocerían en mí un aliado

¹³⁸ Sobre este aspecto se hizo referencia en el anterior capítulo.

importante. Mi intención desde el principio fue estrechar relaciones con las organizaciones campesinas, considerando que es con estas con quienes se debía hablar en serio de la reforma agraria, con los excluidos de las reformas era con quien debíamos hablar”. (Entrevista a ex presidente SAC. Bogotá, noviembre de 2013).

Frente a lo anterior es de considerar un aspecto de relevante importancia para el proceso de negociación de la Ley referida. Tanto la trayectoria política de Ossa, como su tendencia ideológica reformista y de carácter progresista le dieron credibilidad frente a los sectores campesinos, quienes veían en este personaje un aliado para el posicionamiento y lucha de sus intereses. Al respecto uno de nuestros entrevistados resalta:

“Las organizaciones campesinas, principalmente la ANUC línea radical y FENSUAGRO, reconocían a Ossa como un interlocutor válido. Ellos sabían cuál era la calidad humana de él, la calidad gerencial, las calidades políticas y el beneficio que podía representar esa experiencia que él tenía, ese bagaje que él tenía, ese conocimiento y la representación política que él traía en el gobierno anterior, el conocimiento del conflicto agrario y que no despertaba celos ni sospechas, ni prevenciones en relación con la subversión para el manejo de la reforma agraria, ni con el manejo de los conflictos agrarios. Eso claro le creo confianza a las organizaciones campesinas y el sindicato y por eso fue que lo apoyaron”. (Entrevista a ex funcionario INCODER. Bogotá 2006).

4.2.3 La negociación de la incorporación de las medidas de género en la política de tierras

4.2.3.1 Los agentes, habitus y representaciones de género

La Subcomisión Agraria, instancia constituida en el anterior gobierno se constituyó en el escenario para la negociación del proyecto de Ley de Reforma

Agraria¹³⁹, que daría lugar a la Ley 30 de 1988. En este marco confluyeron y participaron los siguientes agentes que: Organizaciones campesinas mixtas (ANUC-UR, FENSUAGRO, Coordinación Nacional Agraria –CNA- y FENACOA), organizaciones indígenas (Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-), Gremios (SAC), Organizaciones de mujeres rurales (ANMUCIC), funcionarios y funcionarias del Ministerio de Agricultura (Unidad de Desarrollo Social¹⁴⁰, Oficina Jurídica), funcionarios y funcionarias del INCORA (entre los que se incluye a miembros del sindicato de esta institución) y el Consejero de Paz. La propuesta fue presentada para su estudio en noviembre de 1988 ante el Senado de la República donde se discutió y sancionó.

A continuación pasaremos a identificar y caracterizar a los agentes, enfocándonos en dar cuenta sobre consideraciones relativas a los hábitos, representaciones de género y capitales que encarnan. El sentido de este aparte es el de evidenciar los rasgos con los que cada uno de los agentes se incorporó en la negociación para la incorporación de las medidas de género en la Ley 30 de 1988.

- **Las organizaciones campesinas mixtas**

Tal como se referenció antes, en la negociación participaron tres organizaciones campesinas, que para el momento conformaban el grueso del movimiento social campesino. En este sentido no hablaremos en concreto sobre las organizaciones, sino sobre las características y rasgos de quienes como parte del movimiento campesino, se encontraban articulados y articuladas a los procesos de lucha por la tierra.

¹³⁹ Corresponde al Proyecto 57 de 1986.

¹⁴⁰ Esta Unidad fue la encargada de dirigir la Política de la mujer campesina bajo la responsabilidad de la Viceministra de Agricultura. Desde esta unidad se promovía la capacitación y organización de las mujeres campesinas, que tuvo como primer alcance crear las condiciones legales para que operara una organización de campesinas y canalizar los intereses para participar en ella (Villarreal, 2004, p. 201).

Sí bien este se caracterizó durante el primer lustro de los ochentas por un apaciguamiento, producto de la represión violenta, por parte de Estado y terratenientes, en la segunda mitad de esta década, enfrenta un breve auge, específicamente en 1987, año en el cual se produjo un incremento de la movilización y de las tomas de tierra.

De acuerdo con Zamosc (1987) la protesta campesina, durante este periodo se fortalece en relación a los siguientes factores: la crisis económica que enfrentó el país durante ese momento la que originó un fuerte desencanto en este sector, descenso de la represión y el surgimiento y consolidación de partidos políticos alternativos como la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular, los que no solo fueron el producto directo de la desmovilización de los grupos armados, en el contexto del anterior gobierno, sino también como resultado de la apertura democrática que se inició durante este mismo (Mondragón, 2002).

En el marco de este proceso es de resaltar el fortalecimiento de la ANUC línea Sincelejo, organización que tras una serie de procesos de recomposición “buscaron integrarse nuevamente en una dinámica nacional y una sola expresión organizativa” (p. 23), proceso que da lugar a la ANUC-Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR). En el marco de esta y bajo su liderazgo gran parte del campesinado retomó la pospuesta lucha por la tierra. Frente a este aspecto, es de aclarar que las reivindicaciones referentes a este tema, presentan una innovación, la que a nuestro modo de ver, se venía gestando desde el comienzo de la instauración del modelo DRI.

Tal como se explicitó en apartes anteriores, mediante una serie de estrategias dirigidas al pequeño y pequeña productor, tales como la transferencia de tecnología, el acceso a crédito, canales de comercialización e infraestructura, la capacitación en temas de carácter empresarial, entre otras, se modelaron las necesidades del campesinado. En esta medida y bajo tal modelación, las demandas por la tierra pasaron a revestir un carácter de mayor integralidad. Ahora se busca la redistribución de este insumo, de manera que campesinos y

campesinas puedan acceder a esta en igualdad de condiciones con otros actores (hacendados); y, además tenga disponibles servicios agropecuarios y sociales.

Este aspecto refleja un cambio en los principios de visión y de acción de este sector, los que operaban en relación a la intensiva puesta en circulación de una serie de discursos concernientes al desarrollo rural, mediante los que se buscaba la instauración de unas visiones autorizadas sobre el deber ser de los campos y sus dinámicas¹⁴¹. Pero además estos habitus se habían modelado también en relación a la trayectoria de lucha recorrida por la organización desde mediados del siglo pasado y la influencia ideológica de partidos de izquierda y de otros sectores políticos.

Esta apreciación es ejemplificada a través de la propuesta que surge de la reunificación de la ANUC, en la que se expresa que la reforma agraria no solo debe situarse como una estrategia para desconcentrar la propiedad y con ello socavar el poder político, económico y social de las élites rurales, sino también como una medida para el fortalecimiento de la economía campesina (ANUC, 1987).

Por otra parte en el escenario político, además del reposicionamiento de ANUC, surgen otras organizaciones campesinas tales como Fensuagro¹⁴², Fenacoa¹⁴³ y la CNA¹⁴⁴, que en palabras de Bohórquez y O'Connor (2012, p.

¹⁴¹ Sobre este aspecto dimos cuenta en el capítulo 2. Dado que el DRI ni el PNR tuvieron cambios significativos, consideramos no llamar la atención sobre estos en esta parte del texto.

¹⁴² La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro- instancia que emergió como filial de la CUT, corresponde a “un proceso de fusión de distintos sindicatos de trabajadores agrarios con fuerte presencia en los departamentos de Cundinamarca, Guaviare, Arauca, Cauca, Tolima, Huila, Atlántico, Nariño, Meta, Quindío, Boyacá y Bolívar. Dicha federación se fundó en 1974 bajo el nombre de FENSA (Federación Nacional de Sindicatos Agrarios) y entre sus objetivos figuraban la democratización de la propiedad de la tierra; la adquisición, defensa y avance de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas; y la reforma agraria (Bohórquez y O'Connor 2012, p. 81).

¹⁴³ Esta corresponde a la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, organización que “agrupa a cooperativas agrarias y campesinas, cuya base social está compuesta por organizaciones de trabajadores” (Bohórquez y O'Connor 2012, p. 81).

79) “hablar de ellas conlleva referirse a una serie de organizaciones que actúan con unos objetivos, estrategias y formas de acción particulares, y logran individualmente, mediante un proceso complejo, presentarse como unidades relativamente coherentes y unificadas”. Estas, de acuerdo con los autores emergen como parte de la recomposición de la misma ANUC, debido a que ciertos sectores del campesinado no lograron encontrar viabilidad a sus propuestas en el seno de la Asociación.

Frente a lo anterior una cuestión importante a resaltar, es que en el marco de estos procesos organizativo, como en los anteriores confluían la serie de sujetos que componen la categoría campesinos: trabajadores y trabajadoras agrícolas, productores y productoras cooperativos, campesinos y campesinas sin tierra, pequeños y medianos productores y productoras, entre otros. De acuerdo con Salgado y Prada (2000) estos y estas compartían una identidad cuyo origen se ancla en el lugar que como clase ocupaban de acuerdo a su posición en la estructura de la tenencia de la tierra, aspecto que también modelaba sus visiones del mundo y sus prácticas. Dicha identidad compartida, bajo la perspectiva de esta investigación además se construyó de acuerdo a los influjos de los discursos y prácticas dominantes del desarrollo rural.

Las organizaciones referidas, aun con las diferencias que en el momento analizado podían revestir, coincidían en los siguientes aspectos: la redistribución de la tierra bajo una perspectiva de reforma agraria integral y radical, el fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria como eje de la economía campesina, la articulación participativa del campesinado en la definición de las políticas agrarias y la instauración de una democracia real y participativa en Colombia (Bohorquez y O’Connor, 2012).

¹⁴⁴ Esta organización está conformada “por campesinos minifundistas que hacen presencia en los departamentos de Tolima, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño y el Macizo colombiano” (Mondragón, 2002, p. 11).

En cuanto al campesinado que confluía en torno a ANUC-UR, Fensuagro, CNA y FENACOA, es de resaltar que, tal como se explicitó en anteriores apartes, también se puede considerar una clase en términos bourdianos en la medida en que se configuran en relación, por un lado a su posición marginal en la estructura de la tenencia de la tierra; y, por otro se conceptúan como sujetos de intervención, de acuerdo a los discursos y prácticas de los modelos de desarrollo rural, los que puestos en circulación fueron modelando no solo su identidad, sino también el tipo de demandas y luchas que planteaban en el plano político.

Evidentemente por la serie de razones expuestas en varios de los apartes del capítulo anterior, estos y estas tenían un acceso limitado a los capitales económico y político, cuestiones que limitaban sus posibilidades para influenciar de manera efectiva en la política de tierras. Sin embargo en relación a su trayectoria organizativa y a la serie de conocimientos y experticias adquiridas tras ser intervenidos por medio de discursos y prácticas de desarrollo rural, el campesinado se configura como un agente, que comienza a detentar ciertas capacidades, las que les permitieron situarse en la negociación de la política de tierras, de una manera diferente.

En este punto es clave resaltar, como desde el gobierno de Betancur y en el de Barco, mediante la apertura democrática, en parte la lógica de la intervención se modifica. Tal como hemos observado, la idea ya no es tanto fortalecer al campesinado como agente productor y con base en ello propiciar su acceso a la tierra. Se pretendió en estos momentos, mediante la ampliación de la participación ciudadana, reconocer e incluir a estos colectivos en el marco estatal, como ciudadanos y ciudadanas, con la capacidad y el poder para entrar en la arena política y construir la democracia.

Este reconocimiento a nuestro modo de ver, les permitió contar con capitales de tipo simbólico y político. Es decir mediante el apoyo brindado por las instituciones, las organizaciones contaban con la capacidad para definir qué

sentido debía tener la reforma agraria y con ello construir propuestas en las que se plasman sus demandas y mediante las cuales buscan transformar estructuralmente la realidad rural del país.

Además cabe aclarar, que la histórica inconformidad por su exclusión del sistema político y por su posición marginal en la estructura de la tenencia de la tierra, estos lograron unificar los intereses de amplios sectores del campesinado, lo que les supuso contar con una amplia base social de apoyo. En este sentido encarnan, aun superficialmente, un capital social importante.

En cuanto a las representaciones de género que encarnaban, estas estaban modeladas bajo la lógica androcéntrica. Se puede decir que la mayor parte del campesinado organizado y en las comunidades, en los que se incluye tanto hombres como mujeres, percibían a las mujeres rurales, solamente como sujetos con una identidad ligada al cuidado y a los hombres como los agentes productivos por excelencia.

Frente al papel de las mujeres en lo productivo, es de resaltar que para la mayoría y tal como lo afirman Medrano y Villar (1989) las actividades realizadas en este ámbito por ellas se concebían como actividades complementarias a las realizadas en el nivel reproductivo. Es decir no se concebían como sujetos con capacidad y potencial para la producción agropecuaria, sino que junto a niños, niñas y personas mayores, estaban al servicio del varón, el que en el imaginario social, se entronizaba como el agente productor y comercializador por excelencia.

Algunos testimonios de las personas entrevistadas corroboran lo dicho:

“Era tenaz, porque los hombres y también las mismas mujeres, no solo de las organizaciones, sino de los pueblos y veredas, seguían pensando que es que las mujeres debían estar es en las casas y cuidando a los hijos e hijas. Ellas estaban siempre en el ciclo de la

producción, pero eso parecía que no existía, pues se pensaba que ellas ayudaban al hombre y no que era una actividad en la que como mujeres también participaban". (Entrevista ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, noviembre 2013).

"Nosotras tuvimos que enfrentar a las comunidades que no querían reconocer que nosotras no solo estábamos para cuidar a los hijos y a los maridos". (Entrevista a lideresa ANMUCIC. Bogotá, noviembre 2013).

"Esa lógica machista de no reconocer que las mujeres no eran el complemento del hombre, sino que también sembraban, cosechaban y en momentos también estaban en la comercialización. Fue duro cambiar esa lógica, la que yo creo que hasta ahora poco se ha transformado". (Entrevista a ex funcionaria IICA. Bogotá, octubre 2013).

Al respecto Villarreal (2004) reconoce cómo los líderes de las organizaciones, quienes en su mayoría eran hombres, argumentaban de mil maneras las razones porque las mujeres no debían tener una organización propia. Los argumentos transitaban entre lo político, lo social y lo cultural.

En cuanto al primero se decía que la lucha particular de las mujeres difuminaría la lucha del campesinado como clase. Bajo esta razón se consideraba que las necesidades de tierra de ellas, era una cuestión que debía supeditarse a las necesidades generales de este sector. En cuanto a lo social, se argumentaba que los procesos organizativos particulares conllevarían a la crisis de las familias y de los valores tradicionales, pues ellas al contar con mayor poder, ya no se ocuparían de las familias y de sus maridos. En relación al cultural, se argüía que las mujeres, por razones biológicas estaban hechas para cuidar de las familias, para no tomar decisiones y para estar en los hogares,

considerándose que este era el lugar que les correspondía. Lo anterior es corroborado por los siguientes testimonios de algunas de las entrevistadas:

“Las mujeres a la cocina, nos decían los hombres de la ANUC, en la reunión del Guamo. Ellos no creían que nosotras podíamos tener la capacidad de liderar cambios. Pensaban también que si se nos daba tierra, pues nosotras íbamos a dejarlos y los hogares iban a entrar en crisis. Además que si estábamos en la política íbamos a descuidar nuestros hogares y de más. Fue complicado todo este asunto”. (Entrevista a lideresa ANMUCIC. Bogotá, noviembre 2013).

“Yo veía en la reunión del Guamo, el boicoteo del que fueron sujeto las mujeres. Pero no solo era por parte de los hombres, era de las mismas mujeres de las organizaciones mixtas, que hablaban desde la perspectiva familiar. Me acuerdo tanto que les decían que si se iban a ser feministas que mejor se buscaran otro lugar donde vivir, porque ellos no querían vivir con ese tipo de mujeres. Les daban muy duro, la sanción social era muy fuerte. Pero ellas fueron muy fuertes y siguieron aun cuando esto a algunas les costó su matrimonio”. (Entrevista ex funcionaria IICA. Bogotá, noviembre de 2013).

En palabras de Villarreal (2004, p. 258), lo anterior se constituye en la expresión del “dominio de la ideología patriarcal que considera legítima la jerarquía masculina y con base en ello es que se busca el control del pensamiento y de la acción de las mujeres”. Bajo esta lógica se niega la posibilidad que las mujeres opten por una organización autónoma, lo que en sí se esperaba es que ellas consolidaran tal proceso pero bajo la dirección masculina y en específico de las organizaciones existentes. Un ejemplo específico de lo anterior es que como resultado de una de las reuniones para consolidar a la ANMUCIC, los dirigentes de la ANUC “recomiendan que la Junta Directiva de esta organización sea formada por mujeres representantes

de cada organización mixta (controladas por el poder masculino de cada una de ellas)” (p. 258).

De acuerdo a lo expuesto, lo que es posible entrever es que el impulso a una organización autónoma de mujeres en el sector campesino retaba o ponía en jaque el sistema patriarcal, en el marco del cual los varones generalmente se aprovechaban del trabajo de las mujeres en los diferentes ámbitos. Tal como se dijo antes, sí bien ellas participaban activamente en los diferentes momentos de la producción, dicha participación era vista como complementaría de las actividades de los hombres y además una obligación de las mujeres, niños y niñas.

Otra consideración que ayuda a matizar lo dicho, es que además un proceso organizativo de tal envergadura implicaba:

La constitución de las mujeres campesinas como sujeto político independiente del varón. Esta posibilidad iba en contravía de la ideología de género que predominaba, según la cual lo doméstico era lo propio de las mujeres, mientras los hombres y sus organizaciones podían participar en actividades y en decisiones fuera de la casa y de la parcela” (Villarreal, 2004, p. 260).

De acuerdo con lo dicho es de entrever que los dirigentes y miembros de las organizaciones campesinas no quisieron, en este momento específico, legitimar los procesos organizativos de las campesinas, no solo porque encarnaban percepciones sobre ellas, basadas en ideologías de género, sino también porque consideraban que dicho proceso podía ser una afrenta contra sus intereses como dirigentes y también como género.

Esta cuestión reviste marcada importancia en el momento de la negociación de la Ley, pues no solo condicionó el que las mujeres pudiese ubicar sus demandas como tales, sino que además obligó a que, tal como se vio en

anteriores apartes, ellas terminarán modelando estas demandas, bajo la impronta patriarcal, es decir privilegiando como sujeto de reforma agraria, a un tipo de mujeres que es válida y aceptada en el marco de dicho sistema: la mujer cuidadora.

Para terminar este aparte, es de precisar que en relación a los capitales los sujetos articulados al movimiento campesino:

- Encarnaban en primera instancia un capital de tipo social, en la medida en que con su accionar, construían y estructuraba redes sociales, que bajo referentes comunes (que sobre todo estaban ligados a la percepción campesina sobre el uso de la tierra, aspecto modelado por discursos y prácticas hegemónicas como hemos mostrado) soportaban las acciones colectivas que realizaban y la interlocución con el Estado.
- Encarnaba un capital simbólico, dado que la serie de movilizaciones, tomas de tierras y liderazgos, habían logrado estructurar en funcionarios y funcionarias estatales una serie de representaciones sobre lo campesino, como una fuerza tanto con potencial desestructurador del sistema, como con la capacidad de aportar al desarrollo rural del país. En este sentido, tal como había sucedido en otros momentos, fueron considerados y consideradas como actores claves para negociar las políticas agrarias.
- Encarnaban también capitales culturales, pues líderes y lideresas del movimiento en relación a las capacitaciones que habían recibido, a las alianzas con otros actores, a la formación política y otras cuestiones, comenzaban a ser reconocidos como agentes con capacidad para incidir en los asuntos públicos.
- En cuanto a la conciencia de clase, aún con las diferencias significativas de lo campesino, lograron confluir en una apuesta común: la lucha por la

tierra y por la redistribución de esta, es decir una apuesta por la transformación de las condiciones estructurales las que los habían configurado como campesinos y como sujetos excluidos del sistema. En este punto es clave aclarar, que en gran parte las organizaciones mixtas, boicotearon los procesos organizativos de las mujeres, por considerar que estos diluían la lucha de clases.

- **La organización de mujeres campesinas (ANMUCIC)**

La creación de una organización de mujeres rurales, causó gran recelo al interior del movimiento campesino. Al respecto Villarreal (2004, p. 253) refiere:

El intento de una organización autónoma fue controvertido desde su iniciación y paralizada por la crítica del resto de organizaciones campesinas, masculinas en su dirección pero mixtas en su composición, con el argumento, secundado por los funcionarios del gobierno, que debilitaría al movimiento campesino y provocaría rupturas familiares.

Sin embargo esta situación no logró minar el posicionamiento de esta organización, con fuerza en el plano de la movilización campesina y de la lucha por los derechos de la tierra. Pero de todos modos ellas tuvieron que entablar una dura disputa por ser reconocidas como actrices políticas con intereses autónomos frente a los derechos del sector campesino y como un agente autónomo dentro del movimiento social rural.

La continua confrontación de la que eran víctimas tanto en el seno del movimiento campesino, como al interior de las instituciones y de las comunidades de las que hacían parte, además de la no fácil convergencia de intereses entre las diferentes mujeres que hacían parte de la organización (mujeres afro, indígenas, campesinas, pequeñas productoras, trabajadoras asalariadas, entre otras) implicaron que el proceso organizativo no despegase con fuerza sino hasta el año 1987.

Para que la ANMUCIC se constituyera en un agente con fuerza para incidir en la construcción de la política de tierras, las mujeres de la organización debieron llevar a cabo una serie de arduos esfuerzos, como por ejemplo los debates y reflexiones que se sucedieron al interior de la organización. Tras procesos de reflexión conjunta entre las líderes y las bases, se tomó conciencia que no todas las mujeres, enfrentaban las mismas problemáticas. De acuerdo con lo anterior, no solo por su pertenencia a una minoría étnica o a una región concreta, tenían discrepancias frente a los intereses que perseguían, sino también por el tipo de posición que tenían en la estructura de la tenencia de la tierra.

Algunas con un acceso marginal o nulo y otras propietarias por herencia o porque habían logrado adquirir por su cuenta algunas parcelas, entraban en pugna por el tipo de reivindicaciones que debían sostener. Este aspecto debió ser sorteado si se quería avanzar en el posicionamiento de sus demandas como mujeres en la agenda política. Este aspecto es referido por una de las entrevistadas:

“Difícil, difícil, nos pasó lo mismo que en la ANUC línea Sincelejo. A la organización entraban mujeres de muchas zonas del país y como tú sabes el país es bien complejo y no es lo mismo una mujer campesina de Nariño que una de Tumaco, estando en el mismo departamento. Una era agricultora y la otra pescadora. Más encima estaba que en unas zonas el machismo era de una manera y en otras de otra. Y, con la tierra peor, pa las campesinas era una cosa la tierra, una necesidad, para las indígenas también pero estas hablaban desde lo colectivo. Comenzar a construir desde esto tan diverso, no fue fácil. Súmale que los hombres no nos veían con credibilidad. Así fueron los primeros años de la ANMUCIC”. (Entrevista a lideresa ANMUCIC. Bogotá, octubre 2013).

Frente a lo anterior y de acuerdo con el análisis de la información recabada, es posible asegurar que uno de los comunes acuerdos a los que llegaron fue el de considerar la titulación conjunta a la pareja como una estrategia para el acceso a la tierra y como una manera de obtener derechos de propiedad dentro del matrimonio y en las uniones de hecho. Este aspecto a nivel de la lucha por la tierra de las mujeres de ANMUCIC se postuló como clave e en la medida que posibilitaría “una administración conjunta del patrimonio común del hogar” (Deere y León, 2000, p. 10).

Por otra parte, es de resaltar que a nivel estatal se continuaba con los proceso de fortalecimiento de la Organización. En este contexto, es que se realiza en febrero de 1987 una reunión en el Guamo (Tolima), la que fue auspiciada por el Ministerio de Agricultura y jalonada por las mujeres aliadas al proceso de las campesinas, las que todavía permanecían bajo el mandato del nuevo gobierno (el del presidente Virgilio Barco) y las nuevas que hicieron parte del equipo. A este encuentro “se invitaron además de la ANMUCIC a todas las organizaciones campesinas para que opinaran sobre la validez de la organización” (Villarreal, 2004, p. 255). En el marco de dicho encuentro se lograron acuerdos importantes entre los diversos sectores, frente a los objetivos que debían soportar el accionar de dicha Asociación, entre los que Villarreal destaca

En el encuentro se señaló la exclusión de las mujeres en materia de otorgamiento y titulación de tierras y la falta de reconocimiento de la variedad de formas familiares en que ellas se relacionaba como esposa o como compañera en unión libre, como madre soltera, viuda soltera o separada y en contextos disimiles como es el del campesinado, el de los indígenas o el del sector afrocolombiano (p 267).

Frente a lo anterior es importante recalcar, como estos acuerdos, evidencian la emergencia de la preocupación por cómo la condición de las mujeres en relación a los arreglos familiares o a su estatus civil, condicionaba de manera

importante el acceso a los recursos productivos (principalmente tierra y crédito). Esta preocupación tal como se mostró en apartes anteriores, no era nueva dado que en las reflexiones al interior de la organización emergió en relación a la pregunta sobre cómo sortear las diversas necesidades de las diversas mujeres que componían la ANMUCIC. En uno u otro ámbito la solución encontrada fue la de la titulación conjunta. En algunas de las entrevistas se hace referencia a este aspecto:

“Uno lo que veía es que sí le titulaban al hombre y si no estaba casado con la mujer y tenían hijos, este se quedaba con la tierra. La mujer era la que tenía que buscarse la vida y quedar desprotegida. Había mucha mujer así, eran muchas las que habían pasado por esa situación. Eso nos obligó a pensar por ejemplo en que sí nosotras habíamos apoyado las tomas de tierras y estábamos hombro a hombro con ellos, porque no teníamos tierra”. (Entrevista a lideresa ANMUCIC. Bogotá, octubre de 2013).

“El conflicto se llevó a muchos hombres que dejaban a sus mujeres en una situación muy mala y a los hijos y ellas se empobrecían más y el Estado no hacía nada y nosotras veíamos que esto era grave entonces decidimos que por ahí debía estar el asunto”. (Entrevista a lideresa ANMUCIC, Bogotá 2002).

En lo referenciado es posible entrever la relación entre estatus civil y acceso a la tierra, de acuerdo con Deere y León (2000) se constituyó entonces en uno de los ejes articuladores de las demandas que las mujeres rurales postularon con respecto al derecho a la propiedad de la tierra. En estas demandas a nuestro modo de ver lo que es posible entrever es que sin importar el estado civil de las mujeres, lo que estas persiguen es la garantía del acceso a la propiedad de la tierra como un requisito para el bienestar de ellas y sus familias.

Lo anterior nos permite vislumbrar una cuestión importante, frente a los principios de visión y de acción y en concreto sobre las representaciones de género. La idealización de una esencia femenina, ligada con el cuidado y la familia se identificó (estratégica y no estratégicamente) como el argumento bajo el cual las mujeres interpelarían a los diversos actores para que sean reconocidas como sujetos beneficiarias de la reforma agraria¹⁴⁵.

Como parte del fortalecimiento organizativo y retomando los resultados de la reunión del Guamo (Tolima), el Ministerio de Agricultura, decidió continuar con el apoyo mediante la reactivación del proyecto de Organización y Capacitación de la Mujer Campesina. Para tal fin se realizaron una “serie de encuentros con participación de 75 mujeres campesinas líderes” (Villarreal, 2004). Las reuniones tuvieron un doble propósito 1. Incentivar la participación de las mujeres en la reestructuración de los congresos departamentales y municipales de la ANUC; Y 2. Palpar el interés y acuerdo de mujeres dirigentes de la ANUC y de otras organizaciones en torno a reactivar la ANMUCIC” (p. 262).

Como resultado de tales encuentros es de resaltar que se priorizó sobre la urgente necesidad de afianzar a la Asociación no solo como un espacio para la construcción de propuestas encaminadas a la defensa de los derechos de las mujeres rurales, en específico sobre la propiedad de la tierra, sino para constituirse en un agente clave en la negociación y formulación de la Ley de Reforma Agraria que se venía gestando en el marco del gobierno de Barco.

Para que este agente se configurara como tal se requirió de otras estrategias, que el Ministerio de Agricultura consideró esenciales para darle legitimidad a la organización en las regiones. En este contexto se “convocó a un evento en diciembre de 1987 y allí se acordó la creación de las organizaciones departamentales y municipales de ANMUCIC” (p. 264). Además se estableció como cuestión estratégica la articulación de las mujeres con las administraciones locales, dado que se esperaba que estas incidieran en el

¹⁴⁵ Sobre este aspecto volveremos más adelante.

diseño de las medidas que, en lo local facilitarían que a estas les sean reconocidos y garantizados sus derechos.

Pero sí bien las mujeres de la organización contaban con el apoyo estatal para avanzar en su fortalecimiento, este proceso se veía obstaculizado por la reacción de sus pares varones, líderes de las organizaciones mixtas. En concreto a nivel de la ANUC se establecía que particularizar el acceso a la tierra por el género y lo étnico, diluía la lucha del campesinado como una lucha de clase. Se creía que los logros para unos iban a ser los logros para todos incluidas las mujeres.

Además los hombres de las organizaciones, quienes operaban bajo unas representaciones de género a través de las que relacionaban a las mujeres con el ámbito reproductivo y el del cuidado (fundamentalmente de la familia). Estos temían que el empoderamiento y autonomía que podían alcanzar estas llevase a la crisis de la unidad familiar, a la que consideraban el núcleo fundamental de la sociedad. En este sentido y de la misma manera que las socias de la ANMUCIC, las mujeres de la ANUC, estratégicamente aludieron a esa esencia y al importante que estas cumplían para el bienestar del hogar. Sobre este aspecto nos refiere una de las entrevistadas:

“En la ANUC fue complicado meter los temas de género, estos hombres dirigentes eran celosos y no querían que avanzáramos. Ahora lo veo y creo que era más miedo a perder el soporte que les dábamos y el poder que tenían sobre nosotras. Pero aprendimos a manejar eso y a hablar de una manera que no generara incomodidad y que no hiciera que nos tacharan de feministas o malas mujeres, porque ellos relacionaban lo uno con lo otro. Me acuerdo que con mis compañeras hablábamos entonces de mujer y familia y desde esa relación empezamos a hablar de la tierra”. (Entrevista a lideresa ANUC-UR. Bogotá, noviembre 2013).

Estratégicamente, aunque los principios de visión y de acción, que las mujeres encarnaban, se habían ido transformando en relación a la serie de procesos que hemos referenciado, ellas continuaban apelando a los roles tradicionales como una forma para lograr posicionar poco a poco sus intereses en la agenda.

Lo anterior a nuestro modo de ver, es una cuestión atravesada porque persistía la autorepresentación en relación a su papel como cuidadoras. Así se esencializa un sujeto femenino cuidador (madre, esposa, hermana, compañera) desde el cual se enfoca la construcción de un agente que realiza prácticas dirigidas al cambio y a la transformación social del entorno más inmediato, se podría decir de las necesidades prácticas. Frente a lo anterior una de las entrevistadas manifiesta:

“Las mujeres de ANMUCIC que en su mayoría venían de trabajar en la ANUC, venían con un cierto sesgo, ahora lo veo así, en ese momento nos parecía válido, y es que ellas reivindicaban los derechos de las mujer a la tierra, pero de una mujer con un hogar, es decir de una mujer que tenía a quien cuidar y que sí estaba sola y no tenía los recursos, pues no podía hacerlo. La familia y el papel de las mujeres en la familia se ponían como el referente desde el que se demandaba la tierra. Es que esto se veía porque muchas de ellas enfrentaban el abandono de los varones y quedaban por fuera de los derechos de la tierra, porque a estos era a quienes generalmente se les adjudicaba.”. (Entrevista a ex asesora del Ministerio de Agricultura. Bogotá, octubre de 2013).

A través de la legitimación (como diría Butler (2007) la esencialización) de una categoría desde la que se definía y validaba lo femenino (fundamentalmente la del cuidado), buscaban ser valoradas como sujetos claves en el desarrollo de sus comunidades. Esta cuestión bajo la perspectiva de esta investigación, creemos contribuyó a fortalecer un tipo de representaciones y significados de un ser mujer “estratégico y funcional” para el momento histórico en el que se

encontraban (el de la lucha y movilización de amplios sectores de la población excluidos del acceso a factores de producción y a satisfactores vitales¹⁴⁶)

Sin embargo también es posible entrever como a través de la organización se denuncia, esta misma condición que legitiman (mujeres cuidadoras) y su necesidad de cambiarla. Abiertamente esto se expresa en como ellas llaman la atención sobre como el ser mujer en estos contextos niega posibilidades y oportunidades (por ejemplo el de acceder a titulación de tierras o a programas de reforma agraria¹⁴⁷). Consideran que por el hecho de ser mujeres se les ha negado el acceso a recursos y a posibilidades que permitan la construcción de una vida digna.

Bajo esta lógica aluden a cómo esa identidad de género se constituye en el elemento clave en las discriminaciones y diferentes opresiones que ellas sufren; y, en este marco, es que este sujeto debe idear estrategias, que se despliegan a través de la organización, primero con miras a cambiar la identidad y segundo, a apostarle a cambios estructurales. Sobre lo anterior una de nuestras entrevistadas especifica:

“Hablabamos desde la familia, pero queríamos ir más allá, sino que era un poco difícil al comienzo, porque hablar de cambios fuertes nos traía mucho conflicto y rechazo. Entonces poco a poco íbamos hablando. Pedíamos que se nos titulará la tierra y con eso estábamos encaminándonos a lograr otras ganancias. La tierra da poder y hablabamos la tierra para las mujeres con familia porque queríamos que las mujeres con familia tuvieran poder”. (Entrevista a líder campesina ANUC. Bogotá, octubre 2013).

¹⁴⁶ Considero que el movimiento social en Colombia y de acuerdo con Prada y Salgado (2002), que las organizaciones y colectivos buscaban el reconocimiento de su ciudadanía, pero no de una ciudadanía que se enmarcara en la garantía de derechos, sino en que el estado se constituyere en un verdadero garante de las necesidades de sus ciudadanos.

¹⁴⁷ Para comprender los avances en América Latina en materia de mujer y acceso a tierra ver a León y Deere (2000).

Además y teniendo en cuenta el marco de la movilización social en el que se originan las organizaciones (movimiento social campesino), en sus discursos intentan articular la crítica a esas discriminaciones y opresiones por el hecho de ser mujer con otras discriminaciones y opresiones que deviene de otras identidades que se configuran en el cruce del género con categorías como la etnia, la clase social, el acceso a recursos, la edad, entre otros.

En este sentido es necesario resaltar que los objetivos de su lucha, sí bien están enfocados hacia el tema de mujer, esté no se desliga totalmente de las cuestiones de clase, por ejemplo, tema que subyace a la mayoría de las organizaciones del movimiento social, durante esta época.

De acuerdo con lo anterior, es decir que tanto la esencialización como la apuesta por una des-encialización (cuestionamiento de las identidades de género) se constituye en estrategias políticas. A través de la alusión a una identidad femenina, argumentada en el cuidado, ellas buscaban entrar y posicionarse en la escena de una movilización social de carácter eminentemente masculino; y, además perseguían el constituirse en agentes claves de interlocución con el Estado en sus diferentes niveles (nacional, departamental y municipal). Pero de la misma manera en este actuar, intentaban reivindicar otras posibilidades de ser y hacer de las mujeres.

Las mujeres de la ANMUCIC, a través de la organización, se configuran como agentes activos en la producción de representaciones y significados, que sí bien no se desligan de los tradicionales, de alguna manera retan los modelos establecidos a nivel de la familia, comunitarios, del movimiento social y la sociedad en general.

En este sentido las prácticas que ellas encarnan deben ser entendidas como políticas, en la medida en que le apuestan a una reconfiguración de los roles y papeles establecidos tradicionalmente para las mujeres. En coherencia con lo establecido por Escobar (2001), es de decir que también desde sus discursos y

prácticas se orientaban a la ampliación de los términos en que se habla de ciudadanía y de democracia.

Bajo la perspectiva de esta investigación aseguramos que dicha organización se constituye en un agente, que se configura por un lado en una triple tensión: con el movimiento social en general (de carácter masculino), con el Estado y a nivel comunitario y de sus familias.

En relación a lo anterior, es de precisar que el nacimiento de esta, fue un proceso marcado por los desproporcionados obstáculos que enfrentan las mujeres para organizarse, con sus parejas, con sus familias, sus comunidades, con sus pares hombres del movimiento social y con un Estado que al reconocer la posibilidad de la organización de las mujeres y propiciarla, como lo hizo con la ANMUCIC, no pretendía la emancipación de ellas o su posicionamiento político, sino que lo que buscaba era la coaptación de estos sujetos a través de la motivarlas a organizarse (Sañudo, 2008).

- **Los gremios de agricultores: la SAC**

La SAC¹⁴⁸, tal como se evidenció en el capítulo precedente, se constituye en la instancia que representa los intereses de los terratenientes en Colombia. En esta confluyen una serie de sujetos, que como parte de procesos históricos, políticos y económicos, se han configurado como élites rurales¹⁴⁹, las que a través de la acumulación de tierra se han configurado como una clase social específica, que en términos bourdianos correspondería

¹⁴⁸ Sobre este gremio se especificaron detalles en el capítulo anterior.

¹⁴⁹ En relación a lo especificado en el capítulo 2, las élites rurales, se constituyen en una clase social, la que se fue conformando, en conexión con una serie de procesos de diverso carácter, gracias a la acumulación de la tierra. En este sentido estas, además de ocupar un lugar privilegiado en la estructura agraria, gracias al acceso a la propiedad de la tierra (el que se ha dado vía acumulación), no solo ejercen un alto poder económico, sino que además regulan social, política y culturalmente a las zonas rurales del país. Tal como se dijo antes, sobre este aspecto se hizo especial énfasis en el capítulo precedente, dado que el lugar que ocupan en la estructura agraria ha sido determinante no solo en su posicionamiento en los espacios de negociación de la política de tierras, sino también en la consecución de sus intereses.

A la posición ocupada por estos en el espacio social según los capitales que se posean en el presente y la herencia social. Esta posición en el espacio social instituye las condiciones sociales de existencia, que dan lugar a distintos habitus, gustos, prácticas y estilos de vida (Souza, 1996, p. 56).

Estos agentes, además de compartir unos habitus, han tenido un acceso más o menos similar a los capitales económico, social, simbólico y político, cuestión que les ha posibilitado adquirir un gran poder en determinados ámbitos. Dicho poder, siguiendo la lógica de esta investigación, les ha permitido influenciar de manera importante la construcción de la política de tierras, es decir de la serie de medidas que, en determinados momentos se erigieron con el fin de regular el acceso a la propiedad de este recurso.

Para la segunda mitad de la década de los ochentas del siglo pasado, las élites no solo correspondían a hacendados y terratenientes, sino también a empresarios agrícolas de origen urbano y narcotraficantes, quienes además de detentar unos principios de visión y de acción diferenciados sobre el acceso y uso de la tierra, contaban con diferentes tipos de capitales. Pero sí bien este aspecto comprende matizaciones, es de resaltar que dichos sujetos, compartían ciertos rasgos y capitales, cuestión que les permitió posicionarse con mayor fuerza en los escenarios de negociación.

En este sentido, es de asegurar que el poder económico sustentando en la concentración de grandes extensiones de tierra, les conllevó a un incremento de su poder político y social, los que además se afianzaron a través del uso de estrategias violentas contra el campesinado. Sobre este aspecto uno de los entrevistados refiere:

“Lo que se ve siempre es que la gente que siempre ha tenido la tierra, que es la que le da el poder, ha podido violenta o no violentamente, lograr que el Estado mantenga su estatus quo. Eso se ve a lo largo de

todos los intentos reformistas. Los hacendados primero, los empresarios, los políticos con tierra y en los ochenta y noventa los narcos, influyeron en la política para no perder la tierra, también para poder contar con mecanismos legales para incrementarla. A la final el campesinado, aunque el gobierno o algunos sectores tenían la voluntad de cambiar las cosas, tenía las de perder siempre, porque el gobierno siempre iba a favorecer a quienes tenían la tierra, porque la misma tenencia de la tierra, les daba el poder para cooptar el aparato institucional. El uso de la violencia fue aquí fundamental, masacres y muertes selectivas se iban incrementando como una manera de hacer que la gente no protestase por la tierra. Esto fue así con la Ley 30 y la del 94. Aunque Barco tuviera la disposición de hacer cambios contundentes, la negociación se fue del lado de los terratenientes y siguió favoreciendo a unos pocos.”. (Entrevista ex funcionario INCODER. Bogotá, noviembre 2013).

La participación de las élites en los espacios de negociación, jamás se hizo de forma directa, sino a través de los representantes de los gremios y de funcionarios y funcionarias, quienes en el marco institucional actuaban como sus aliados. En este sentido cabe resaltar, tal como se estableció en el capítulo 2 y en varios apartados de este, la SAC se constituyó principalmente en el agente que representa los intereses de las élites rurales.

En general quienes hacen parte de este gremio, además de ser propietarios de grandes extensiones de tierra, habitaban y habitan en las principales ciudades del país, haciendo parte del aparato estatal en algunos casos, sobre todo en el ámbito local y también accediendo al sistema educativo que el campesinado en general.

Este rasgo, les permitió detentar una mayor autoridad para definir el deber ser de la realidad rural. Bajo este marco, en el seno de dicha instancia se concibe las apuestas por la redistribución de la tierra como una estrategia que va en

contravía de la modernización del sector rural. Tal como se mostró en el pasado capítulo, si bien esto, bajo el liderazgo de Ossa Escobar, se transformó medianamente para el momento referido, se retomó la visión tradicional que tenían sobre el acceso a la propiedad de la tierra. Al respecto uno de los entrevistados establece:

“Saliendo yo de la SAC, se perdió el avance que logramos durante Betancur. Acabé mi mandato allí y salí de la SAC y quien me siguió botó al traste todo lo que habíamos logrado. Además como te decía yo salí amenazado y tildado de guerrillero. En el gobierno de Barco, como Consejero de Paz, tuve que enfrentar a ese sector recalcitrante que representando a hacendados, terratenientes y ganaderos, no quería que la reforma agraria fuera una realidad. La cuestión no solo era porque les quitaba poder, sino porque pensaban que el campesinado debía o irse a las ciudades o ser mano de obra para la agroindustria”. (Extracto entrevista ex presidente SAC. Bogotá, noviembre 2013).

En relación a las representaciones de género, el primer aspecto sobre el que nos parece clave resaltar, es que quienes tradicionalmente componían este gremio eran varones, configurado como tales bajo la lógica androcéntrica, en el marco de la cual se produce una jerarquización de lo masculino sobre lo femenino. Esta cuestión tiene un primer efecto y es que los varones y sus visiones sobre lo rural se instituyen como las válidas.

En este sentido en el imaginario de los personajes de la SAC, el sujeto con autoridad y legitimidad para hablar de tierras, productividad y con capacidad para participar en los ámbitos donde estos temas se debatían, era el varón. De acuerdo con esto la SAC solamente reconocía solamente a los campesinos y a los funcionarios como sus interlocutores. Sobre este aspecto nos refiere una de las entrevistadas:

“Recuerdo que cuando comenzamos a participar en la construcción de la propuesta de Ley y en eso nos encontrábamos con los hombres de la SAC, bueno sabiendo que allí no había mujeres, era con hombres con quienes nos enfrentábamos, ellos no nos consideraban como las personas con quien también debían sentarse a hablar sobre tierras y mucho menos nos daban credibilidad para sentarnos a la par con ellos para hablar de producción y de género. (Entrevista ex presidenta ANMUCIC. Valencia, enero 2014).

Dichos agentes, bajo los principios androcéntricos desde los que pensaban y actuaban definían a las mujeres y sus roles. De acuerdo con esta lógica las conceptualizaban como sujetos de derechos en la medida en que encarnan una identidad propia: la de ser cuidadoras.

Lo anterior es ratificado por la entrevista realizada a Carlos Ossa, presidente de este gremio, durante el gobierno de Betancur, quien aun revistiendo una perspectiva progresista sobre el asunto; y, considerando que posteriormente cumplió un papel importante en la operativización de las medidas de género que se plasmaron en la Ley 30 (aspecto sobre el que volveremos más adelante) las representaciones que encarnaba sobre ellas y sus papeles provienen de esquemas de percepción y disposiciones acuñadas bajo la impronta androcéntrica. Cuando le preguntamos sobre porque él consideraba clave que las mujeres accedieran a la propiedad de la tierra, él contestó:

“Las mujeres son esenciales para que las familias campesinas se mantengan cohesionadas y ellas a diferencia de los hombres piensan más en las familias. Nosotros veíamos que sí oíamos sus demandas podíamos de alguna manera hacer que la vida de las familias mejoraran en su bienestar. Que tengan la propiedad de la tierra les daba mejores condiciones para que ellas y sus familias estuvieran mejor. Además sí ellas siempre habían sido productoras porque no

darles lo que a los campesinos en general se les daba o se les reconocía”. (Entrevista ex presidente SAC. Bogotá, noviembre 2013).

- **Los agentes institucionales**

En cuanto al nivel institucional y en relación con la información obtenida de las entrevistas, el presidente Barco se constituyó en un aliado para que la problemática agraria y en específico lo relativo a la redistribución de la tierra se ubicara de nuevo en la agenda política; y, además se considerara como una cuestión que debía ser concertada entre diferentes actores.

Sí bien este mandatario no fue especialmente sensible al género, continuó contando con parte del equipo de mujeres que, en el marco de la anterior administración, había participado y jalonado la formulación y ejecución de la política y el surgimiento de la ANMUCIC. De acuerdo con León y Deere (2000) este aspecto fue fundamental para que con el cambio de gobierno no se perdieran los avances obtenidos y además para que fuese posible consolidar al género no solo como un eje transversal para la planificación del desarrollo rural, sino como un asunto necesario para el logro de la equidad.

Tanto en las entrevistas como en la revisión de información secundaria, fue posible entrever que en el marco de este mandato, se afianzaron no solo en las femócratas, sino también en algunos funcionarios y funcionarias del Ministerio en cuestión y del INCORA, nuevas representaciones sobre las mujeres rurales¹⁵⁰.

Por un lado se ratifica la idea sobre que esta población, aunque no se sea visible, ha tenido una participación activa en el ámbito productivo, no solo a

¹⁵⁰ Esto no significa que la totalidad de quienes hacían parte de los procesos, a nivel institucional, encarnaron cambios significativos en sus modos de percibir y actuar sobre la realidad. En este sentido estamos solamente hablando de quienes en realidad habían operado un cambio significativo en sus apreciaciones sobre las mujeres, transformaciones que tal como se dijo en el anterior aparte, devienen de una serie de cuestiones sobre las que precisamos en detalle anteriormente.

nivel de la siembra, cosecha y manejo pos cosecha, sino también (aunque de manera limitada) en la comercialización. Esta apreciación sobre las mujeres y su papel en lo productivo comienza a posicionarse en la serie de documentos que se producen a nivel del Ministerio. Los estudios que realizan algunas de las femócratas como Fabiola Campillo (1989) y Diana Medrano (1991), entre otras, se orientan a dar cuenta sobre el aporte económico de este grupo poblacional al PIB; además llaman la atención sobre como en la cuantificación de la Población Económicamente Activa rural, se invisibiliza a estas como tal.

Por otro lado, en el marco de estos estudios se denuncia como, tal invisibilización, también se especifica frente al aporte económico de las mujeres por el desarrollo de las actividades que desarrollan en el ámbito reproductivo. Según Campillo (1989, p. 97), lo anterior tiene que ver con la desvalorización monetaria que se hace del trabajo de las mujeres y establece:

Una es la economía de los bienes, la que se concibe `la economía propiamente dicha`; y por otro lado, la economía oculta, invisible, la economía del cuidado. Lo que la diferencia es que el trabajo en la segunda no es remunerado, no se contabiliza y sobre todo es realizado principalmente por las mujeres, sin distinción de edad, raza o etnia.

Complementariamente Díaz (2002) expresa que lo anterior también se debe principalmente a que no se distinguen los límites entre el ámbito reproductivo y el productivo, muchas de las actividades de producción y transformación de alimentos y bienes no alimenticios de origen agrícola, que hacen las mujeres se integran al trabajo del hogar y no se asume como natural que tengan que ser remunerados. Complementariamente es de considerar que además dichas actividades se consideran como parte de lo que las mujeres deben realizar como parte de sus deberes como esposas de los varones productores.

Por otra parte y siguiendo a León (2006, p, 46) consideramos que lo anterior tiene que ver con que el “esquema de la familia nuclear, concebido para la

sociedad industrial moderna, fue trasladado sin mediaciones a las sociedades agrarias, tanto para interpretarlas como para implementar políticas públicas”. Se contempla así, a la unidad familiar, como un espacio donde cada género y en relación con la edad, lleva a cabo unas actividades en específico, es decir no se contempla como un ámbito donde se plasman y reproducen las jerarquías de género, sino un espacio donde los roles se complementan.

Estas y otras cuestiones, pretendieron ser rebatidas por las mujeres, que en el marco del Ministerio y del INCORA, produjeron información clave sobre la situación de las mujeres rurales. Esto a nuestro modo de ver, además de revelar un cambio en los principios de visión y de acción de estas, modelaron las prácticas y discursos de quienes participaban en la planificación de lo rural y de quienes eran receptores y receptoras de tales prácticas y discursos.

Lo anterior puede ser comprendido desde dos dimensiones. Por un lado posibilitó un cambio en las perspectivas que sobre el desarrollo rural se tenían y con ello se ubicó a las mujeres campesinas como un sujeto clave para la definición de políticas. Pero por otro, pensamos que las mujeres comenzaron a ser representadas desde las representaciones (valga la redundancia) que se tenían del papel del varón en lo productivo.

Un segundo cambio en las representaciones de género, fue con respecto a que las mujeres podían ciertamente ser productoras, es decir se visualizaban como sujetos con las capacidades para, por medio del acceso a factores de producción, a tecnología, capacitación e infraestructura, articularse activamente a tal dinámica y ser tan eficientes como los hombres.

En este sentido, esta transformación al cual aludimos puede ser leído como una tendencia a validar que lo que es útil para los varones les es útil a las mujeres; y, en este sentido se comienza a posicionar la idea que como requisito para el empoderamiento de las campesinas, es clave brindar las mismas condiciones que los hombres han detentado en el plano productivo.

De acuerdo con lo anterior vemos como comienzan a posicionarse la idea sobre que las mujeres rurales, deben adquirir las destrezas necesarias para avanzar y posicionarse en el mundo público, construido e institucionalizado para hombres, por hombres. Es claro, que aquí el tipo de mujer que se quiso articular como el sujeto de intervención, es una mujer validada y legitimada en el marco del patriarcado. Es decir a la que se le quiso y quiere otorgar, aquellas condiciones, que a los hombres, les han sido útiles para consolidarse como el paradigma del sistema productivo, en el ámbito público, comunitario, en general, en la mayor parte de los espacios sociales.

Por otra parte y en referencia a lo anterior, lo que también fue posible entrever en el marco de las entrevistas y de la información secundaria recabada es que a pesar de una transformación en las representaciones sobre las mujeres, continuaba operando una visión sobre estas como cuidadoras por excelencia y como artífices del bienestar de las familias y además de las comunidades. Este aspecto puede ser corroborado en el siguiente aparte de una entrevista:

“Nosotras veíamos que por ejemplo los funcionarios hombres, sobre todo los del INCORA, que estaban en las regiones, creían, y digo creían porque lo tenían bien arraigado, que a las mujeres solo se las ponía como sujetos de los proyectos de desarrollo rural, en la medida en que estas eran madres cabeza de hogar. Era una constante en muchos espacios que se pensara que solo por esto debían ser reconocidas como sujetos con derechos”. (Entrevista a ex asesora del Ministerio de Agricultura. Bogotá, octubre de 2013).

Así una identidad legitimada y valorada en el contexto patriarcal, se supone como la identidad legítima para la protección y a quien es adjudicataria de ella, se le otorgan las condiciones para poder insertarse activamente en lo productivo (Sañudo, 2011).

Sin embargo lo anterior, vemos que aun considerándolas como sujetos con potencial para la producción, de todos modos la identidad de madres y cuidadoras continúa mediando en el reconocimiento de estas como sujetos productivos. Esto es posible porque el encarnar, una identidad funcional al patriarcado, les otorga legitimidad para entrar a la esfera del reconocimiento, un reconocimiento que ha sido exclusivo para los hombres y el que es obviamente es otorgado por ellos mismos.

Una última cuestión que es necesario resaltar, es que lo concerniente al género en el marco institucional, se contempla como algo que tiene que ver directamente con las mujeres y no con los hombres. Raramente se encuentra una apelación a la necesidad de articular a los hombres al plano doméstico como una condición para que las mujeres puedan avanzar hacia la igualdad.

A lo largo de este aparte, hemos dado cuenta de la serie de rasgos que caracterizaban a los agentes que se articularon a la negociación para la incorporación de las medidas de género en la Ley 30 de 1988. Tal como se observa, se hizo especial énfasis en sus habitus, en las representaciones de género y capitales que encarnaban. La idea fue la de mostrar las características, con las que dichos agentes entraron a negociar, aspectos que fueron vitales para los logros que se obtuvieron en la Ley.

A continuación pasaremos, ya en concreto a especificar sobre el proceso de negociación, evidenciando cómo operaron las representaciones de género que cada agente encarnaba.

4.2.3.2 Cómo operaron las representaciones de género en la negociación

Hasta la formulación de la Ley 30 de 1988, apreciaciones específicas sobre al acceso a la propiedad de la tierra, desde una perspectiva de género, no habían sido consideradas para la negociación y construcción de las leyes agrarias. En sí la única persona nominada como sujeto de derecho de reforma agraria había sido el varón; y, es solo hasta el momento que estamos analizando y en

relación directa con la serie de factores referenciados, es que las mujeres se sitúan como sujetos prioritarios para el acceso de la propiedad de la tierra.

Dicha ubicación no fue una cuestión fácil, tal como se ha demostrado en anteriores apartes. Este fue un proceso lleno de tensiones, pero también concertaciones (la Ley a la final no fue lo único que se negoció, sino también la incorporación del género). El que los agentes reconocieran a las mujeres también como sujetos de reforma agraria no se constituyó en el producto de la toma de conciencia sobre la importancia política que este asunto conlleva o de una interiorización de principios democráticos o desde una perspectiva de derechos.

Lejos de esto, la incorporación del tema se da por la presión llevada a cabo tanto por la ANMUCIC como por las femócratas en un escenario propicio que se estaba configurando en relación a: la influencia de organismos internacionales, los avances normativos en términos del reconocimiento de los derechos de las mujeres, la existencia de una institucionalidad a nivel nacional adecuada y la voluntad política de algunos sectores políticos.

Sin embargo el presionar supuso entonces que unas y otras, en alianza, participaran de la negociación no directamente con los argumentos contenidos en la normativa internacional referente a la protección de los derechos de las mujeres (o bajo las premisas de la igualdad y la no discriminación), por ejemplo, sino apelando a por un lado: las ventajas que para las familias y las comunidades tenía el que las mujeres fuesen propietarias o compartieran la titularidad conjunta; y, las prerrogativas que para la dinamización de la economía rural tenía el incorporar activamente a las mujeres al ámbito productivo mediante el acceso a factores de producción.

De acuerdo con algunas de las entrevistadas, bajo estos argumentos es que fue posible el negociar con los agentes varones las cuestiones relativas al

acceso igualitario a la tierra de hombres y mujeres, tal como se especifica a continuación:

“Principalmente los líderes de la ANUC estaban reticentes a que en la norma se contemplara a las mujeres como propietarias igual que ellos. Tenían miedo a que esto supusiera que las familias se vinieran abajo, que las mujeres tuvieran más poder y con eso más autonomía”. (Entrevista a investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana en temas de género y políticas públicas. Bogotá, septiembre 2013).

“Aunque claramente las mujeres también hablaban del reconocimiento de sus derechos bajo su identidad de madres y cuidadoras, las chicas de la ANMUCIC se percataron que desde esta perspectiva era más fácil entrar a hablar con la ANUC y con el resto de organizaciones. Sabían y por la experiencia que habían ya tenido, que era mejor no irse en contra del sistema directamente, sino buscarle los laditos para entrar mejor. Ellas decían por la comba se llega al palo.” (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, Septiembre de 2013).

“Por el lado del Ministerio cuando hablábamos del derecho de las mujeres a la tierra, dado que la relación era con los altos mandos del gobierno, quienes estaban convencidos de la necesidad de modernizar el país en tiempos de reajuste, hablábamos de las ventajas de dar a las mujeres los recursos necesarios para que se convirtieran en potenciales y eficientes productoras. Esto calaba en forma. No hablábamos directamente de empoderamiento por la propiedad sino como esto llevaría a que la agricultura se modernizara”. (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, Noviembre de 2013).

Sin embargo lo anterior es clave resaltar que muchas de las mujeres militantes de la ANMUCIC estaban convencidas que su derecho a la tierra, no era una

cuestión mediada por las cláusulas de igualdad y no discriminación, sino porque esto posibilitaría un mejor nivel de vida para ellas y sus familias, es decir como una garantía para sortear las vulnerabilidades que diariamente enfrentaban como mujeres en un contexto patriarcal.

En este sentido, consideraban que el acceso legítimo a la propiedad conllevaría a contar con las condiciones necesarias para hacer frente, por ejemplo al abandono del varón o a otras circunstancias que las ubicara en una situación de fragilidad. A nuestro modo de ver desde esta posición no retaban al sistema patriarcal, en el marco del cual aun teniendo serias desventajas se sentían cómodas. Sobre este aspecto algunas de las entrevistadas recalcan:

“El trabajo con las mujeres de la base era difícil, sacarnos de la cabeza que la seguridad en diferentes sentidos no la da el marido solamente. Difícil, difícil. Nosotras, las que estábamos a la cabeza y las que manteníamos más relación con las del Ministerio y con la gente del INCORA, sabíamos que debíamos ir más allá en lo que decíamos, pero no se podía hablar tan alto, porque perdíamos el apoyo de las bases y nos ganábamos a los hombres. Entonces mejor hablar con las palabras que se querían escuchar”. (Entrevista a ex presidenta de ANMUCIC. Valencia, enero de 2014).

“En este momento y que veo retrospectivamente la cosa, veo que muchas de las que estábamos haciendo de líderes y trabajando porque nuestros derechos se metieran en la Ley, teníamos en la cabeza que la importancia de tener tierra tenía que ver con la familia y con la seguridad que le podíamos dar a esta. Algunas, más claramente las que estaban más cercanas a la gente del INCORA y del Ministerio, pues querían ir más allá, pero no se veía posible porque no nos iban a dejar”. Entrevista a ex presidenta ANMUCIC. Bogotá, noviembre de 2013.

Por otra parte, en el ámbito de la negociación es clave, reconocer que la incorporación del género en la Ley referenciada, no solo dependió directamente de la representación puesta en escena y validada con quienes se negociaba, esto también estuvo supeditado a la capacidad de negociación, con la que la ANMUCIC participó en tal proceso.

Frente a lo anterior es de reconocer que gracias a la serie de procesos de capacitación y fortalecimiento de las que había sido objeto la Asociación, por parte del Ministerio de Agricultura y del INCORA, estas habían adquirido capacidad de negociación no solo con el Estado, sino también con las organizaciones mixtas y con los gremios. Lo anterior es corroborado con información contenida en algunas de las entrevistas:

“El aprendizaje fue impresionante. Ver por ejemplo a Leonora, a María Carvajal o a María Emma, que eran las que hacían parte de la Junta, o mejor dicho las cabezas visibles de la organización como hablaban con las organizaciones sobre los derechos de las mujeres a la tierra, lo que debía plasmarse en la Ley. Nosotras les ayudábamos a preparar los discursos cuando debían hablar por ejemplo ante la SAC o ante los senadores. Me impresionaba ver la capacidad de Leonora, sobre todo. Ella poco a poco se había ido haciendo una líder con mucha fuerza de persuasión”. (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, noviembre de 2013).

“A mí personalmente sí me preguntas por Leonora, yo reconocía en ella una líder de verdad. Ella logró avanzar mucho en ese aspecto. Claro que es que ella ya venía de otros procesos, pero ella avanzó mucho es de reconocerlo. Ella no se achicopalan cuando hablaba con los líderes. A la final ella tenía el reconocimiento que muchas no tenían, pero es que ella sabía cómo hablar cuando tenía que hablarle a los hombres”. (Entrevista a exfuncionario INCORA. Bogotá, octubre de 2013).

Es interesante resaltar, como el reconocimiento que muchos y muchas de entrevistados y entrevistadas, hacen de las líderes de ANMUCIC y en específico sobre su participación en la negociación, opera bajo la lógica de la valoración que hacen del liderazgo desde una perspectiva masculina.

Este aspecto sobre todo pudo ser rastreado en las entrevistas realizadas a hombres tanto funcionarios como líderes de las organizaciones mixtas. Para ellos, las mujeres de la Asociación fueron reconocidas como actores con potencial de influir en la Ley y precisamente en la negociación, cuando se comportaron como lo hacían los varones. Es decir cuando interpelaron a los diferentes agentes tal cual lo hacían, por ejemplo los líderes de la ANUC. Este aspecto es referenciado en varias de las entrevistas:

“Leonora que es la que más me acuerdo, ella tenía una gran capacidad propositiva como la que uno veía en la gente de la ANUC. Ella era muy inteligente en lograr consensos y de respaldo y de establecer lazos fuertes con la dirigencia campesina a quienes logró convencer acerca del papel de la mujer. Ese aprendizaje lo hizo cuando paso por la ANUC, allí estuvo de la mano de importante dirigentes”. (Entrevista ex funcionario INCORA. Bogotá, octubre de 2013).

“Leonora y las otras que estaban en la Junta Directiva, lograron un nivel de convencimiento muy grande. Ellas hablaban igual a nosotros y a nosotros nos parecía que eso era un gran aprendizaje de ellas”. (Extractos entrevista a líder ANUC. Bogotá, octubre de 2013).

Pero sí bien pensamos que esta es una de las claves bajo la que son valoradas las líderes de la Asociación, también consideramos que tal valoración no solo se relacionaba con los rasgos masculinos que les pudieron ser adjudicados, sino también porque ellas “estratégicamente” siguieron apelando a la representación de mujer que los campesinos y campesinas y otros de los actores reconocían como de validez para mediar el reconocimiento

de sus derechos. De esta manera podían ser escuchadas sin mayores restricciones. Es decir hablaban de la manera que hablaban los líderes varones, pero hablaban de lo femenino, tal como ellos lo querían escuchar.

Por otra parte el énfasis puesto en la relación entre acceso a la propiedad de la tierra, bienestar y empoderamiento en el marco de los procesos de formación, como dijimos antes caló de manera importante en las mujeres, quienes desde estas nociones comienzan a formular sus reivindicaciones. Este aspecto puede ser corroborado por varios de los apartes de las entrevistas realizadas a algunas mujeres de ANMUCIC:

“Me preguntas sobre qué sentido tenía reivindicar la tierra pa las mujeres. En ese momento, te digo así, porque veo que las cosas han cambiado un poco, nosotras pensábamos que si teníamos tierra pues podíamos tener mejores ingresos y pues platica pa el mercado, pa la educación de los hijos, la salud. Es decir podríamos sembrar, tener animales y poder tener un ahorrito para cualquier eventualidad que se presentará. Pensábamos que nos daba más seguridad. Por otro también veíamos que la titulación conjunta o la titulación individual, pues nos ponía en una mejor situación que si no la teníamos”. (Entrevista lideresa ANUC- UR. Bogotá, octubre de 2013).

“La tierra la pusimos como una necesidad, pensábamos que de que le servía a una que le vengán hablar de política sino tiene tierra, no tiene que comer, yo te lo digo porque lo viví en carne propia, eso de no tener nada es verracamente bravo y nos impedía a nosotros avanzar en equidad con los varones. Sin título por ejemplo, que crédito te iban a dar”. (Entrevista lideresa ANMUCIC. Bogotá, octubre 2013).

Lo anterior a nuestro modo de ver, es una cuestión atravesada también por la autorepresentación que las mujeres tenían en relación a su papel como cuidadoras. De acuerdo con esto, vemos como se esencializa un sujeto

femenino cuidador (madre, esposa, hermana, compañera) desde el cual se enfoca la construcción de un agente que realiza prácticas dirigidas al cambio y a la transformación social del entorno más inmediato. Frente a lo anterior una de las entrevistadas manifiesta:

“Las mujeres de ANMUCIC que en su mayoría venían de trabajar en la ANUC, venían con un cierto sesgo, ahora lo veo así, en ese momento nos parecía válido, y es que ellas reivindicaban los derechos de las mujer a la tierra, pero de una mujer con un hogar, es decir de una mujer que tenía a quien cuidar y que sí estaba sola y no tenía los recursos, pues no podía hacerlo. La familia y el papel de las mujeres en la familia se ponían como el referente desde el que se demandaba la tierra. Es que esto se veía porque muchas de ellas enfrentaban el abandono de los varones y quedaban por fuera de los derechos de la tierra, porque a estos era a quienes generalmente se les adjudicaba.”. (Entrevista a ex asesora del Ministerio de Agricultura. Bogotá, octubre de 2013).

Esta cuestión bajo la perspectiva de esta investigación, creemos contribuyó a fortalecer un tipo de representaciones y significados de un ser mujer “estratégico y funcional” para el momento histórico en el que se encontraban (el de la lucha y movilización de amplios sectores de la población excluidos del acceso a factores de producción y a satisfactores vitales)

Por otra parte y con respecto a las representaciones de género que los representantes de la SAC encarnaban y que operaron como eje de la negociación, es de recalcar que estos, al ser sujetos por un lado configurados bajo la lógica androcéntrica; y, por otro con una visión sobre que la economía campesina se constituye en una actividad que obstaculiza la modernización del agro, enfrentaron una doble tensión en el marco de la negociación.

Por un lado comulgaron con el reconocimiento del derecho de las mujeres a la tierra en la medida en que se beneficiaría a aquellas que revestían la condición de cuidadoras (jefas de hogar) o como compañeras (con relación formal e informal) de los campesinos. En este sentido la representación válida para este agente y la que no ofrecía ningún reto al sistema era la de la mujer cuidadora y esposa, complemento del varón en el ámbito agrícola. En este sentido estos aceptaron sin problema la figura de la titulación conjunta de la tierra, que se constituyó como veremos más adelante en una de las reivindicaciones peleada por las mujeres de la ANMUCIC.

Pero por otra parte, la consideración sobre la importancia que tiene que las mujeres accedan a la tierra como requisito para la modernización del campo, iba en contra de sus pretensiones, como representantes de clase, sobre el acceso a la tierra. Su interés no estaba enfocado a que se beneficie a los campesinos y ahora mucho menos a las mujeres, sino a que el Estado definitivamente valide la gran propiedad como la alternativa de desarrollo rural del país. Sobre esta doble tensión es factible dar cuenta a través de extractos de algunas de las entrevistas:

“En un Congreso de la SAC, recuerdo bien, Leonora habló ante un numeroso grupo. A ella no le temblaba la voz ni nada. Su discurso, que nosotras estratégicamente ayudamos a preparar, trataba de mostrar que el acceso de las mujeres a la tierra era importante en la medida en que las familias campesinas podían mejorar su nivel de vida. La palabra clave familia. Eso era lo que ellos querían escuchar de ella”. (Entrevista a ex funcionaria del Ministerio de Agricultura. Bogotá, octubre 2013).

“El acceso a la tierra del pequeño productor sea hombre, sea mujer, de quien sea, es un tema que ha causado malestar en la SAC. Ellos negociaron lo del género y que las mujeres tuvieran tierra y cedieron porque era una presión de las organizaciones y del Ministerio, pero

eso no los convencía y no los convencía no porque no consideraran a las mujeres aptas para ser propietarias, sino porque ellos no creían en la economía campesina y veían al movimiento campesino como un enemigo”. (Entrevista a exfuncionario INCORA. Bogotá, octubre 2013).

Frente a lo anterior es de aclarar que los representantes de la SAC no concebían a las mujeres rurales y su organización como un obstáculo para el logro de sus intereses, dado que no percibían a estas como un actor con potencial político para incidir no solo en la Ley referida, sino en otros aspectos relativos a la política de tierras.

En algunas entrevistas realizadas a miembros de la SAC que participaron en dicha negociación, se preguntó por la valoración que hacían en el momento sobre la lucha de las mujeres por la tierra y sobre los argumentos desde los que ellas reivindicaban tal derecho, en general la respuesta se centraba en mostrar que ellas luchaban no como clase sino como un grupo particular con unos intereses específicos que eran fáciles de solventar. Además expresaban una especie de “tolerancia cariñosa” a la lucha que ellas estaban entablando. Especifiquemos con un aparte de una de las entrevistas lo dicho:

“La lucha de las mujeres la veíamos como algo bonito, no subversivo. Ellas estaban peleando por ellas y sus familias, porque los hombres campesinos no las dejaban tener tierra o las tenían marginadas. A la final tenían derechos y eso era lo que peleaban”. (Entrevista a representante de la SAC. Bogotá, octubre 2013).

En cuanto a los funcionarios públicos que no hacían parte del grupo de las femócratas, para ellos las mujeres encarnaban un actor con potencial para la dinamización del agro, representación que no se distanciaba de las que argüían las mujeres del Ministerio y del INCORA aliadas con las líderes de ANMUCIC.

Finalmente las mujeres de ANMUCIC en alianza con las femócratas, logran conciliar con los diferentes agentes varias cuestiones que se plasman en la Ley como evidencia de la incorporación del género:

- La titulación del predio a la pareja, expedición de carácter obligatorio sin importar el estado civil; y la priorización de las mujeres jefas de hogar como sujetos de reforma agraria principalmente de tierras baldías de colonización (Artículo 12).
- Con respecto a aquellas mujeres que no estuviesen casadas o que tuvieran a cargo a su familia, se las denominó como “potenciales beneficiarias”, es decir como sujetos con posibilidad de acceder a la tierra siempre y cuando las otras (jefas de hogar y casadas) estuviesen ya beneficiadas (Deere y León 2000)¹⁵¹. Sin embargo para estas, en el marco de la Ley, se estableció su participación en empresas comunitarias de mujeres.
- El derecho a heredar una parcela, la que haya sido adjudicada al compañero mediante otros procesos de reforma agraria (Artículo 33)

A nuestro modo de ver y bajo la perspectiva de esta investigación las representaciones que fueron puestas en escena por las mujeres de ANMUCIC y por sus aliadas, en el marco del proceso de negociación referenciado no ofrecieron mayores contradicción con las representaciones que encarnaban los varones, lejos de eso, su reconocimiento afianzaba el imaginario que ellos tenían sobre las mujeres como esposas y madres. Así mediante la Ley se reconoce un derecho, que sí bien debe considerarse como un avance significativo, lo que supone en sí es una ratificación de la imagen válida que en el marco patriarcal se había otorgado a las mujeres.

¹⁵¹ En específico en el artículo 12 de la Ley 30 de 1988, se establecen las decisiones sobre este aspecto.

5. Las representaciones de género y su mediación en la negociación de la Ley de Reforma Agraria “160 de 1994”.

Tal como se explicitó en el capítulo precedente, la intención de dar cuenta de la negociación entre agentes para la construcción de la política de tierras, en específico de la incorporación de aquellas medidas desde las que promueve el acceso igualitario de hombres y mujeres a la propiedad de la tierra, es la de evidenciar cómo operan las representaciones de género, que diferentes agentes encarnan, en tal proceso.

En esta vía el siguiente momento que nos hemos propuesto analizar es la negociación de la Ley de Reforma Agraria, formulada y sancionada en 1994, la que se denomina en general como la Ley 160 de 1994. Esta se constituye en la segunda norma, mediante la que se incorporan medidas relativas al género en los procedimientos para el acceso a la propiedad de la tierra de campesinos y campesinas. A través de esta se introduce el principio de igualdad como eje transversal para los procesos de titulación de la tierra; y, además se establece que el Estado debe promover la participación equitativa de las mujeres rurales, en la planeación de los programas de desarrollo rural.

A diferencia de la Ley 30 de 1988¹⁵², de reforma agraria, en la 160 se matiza aún más el sujeto que se prioriza como beneficiario, es decir mujeres campesinas jefes de hogar, que además se encuentren en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez y carezcan de tierra propia o suficiente, condiciones que no se exigen a los hombres campesinos. Una segunda novedad, corresponde, tal como se dijo en el párrafo anterior, es que se instituye el principio de participación de las mujeres rurales, a través de sus organizaciones, en el diseño y puesta en marcha de las estrategias de desarrollo rural.

¹⁵² Que tal como se evidenció en el anterior capítulo, fue la primera en la que se agregan consideraciones explícitas para la promoción del acceso de hombres y mujeres campesinos en igualdad de condiciones. En sendas normas se plasman la obligatoriedad de la titulación conjunta de la tierra y la priorización de las mujeres cabeza de hogar como sujetos de reforma agraria.

Podemos decir, de acuerdo con Deere y León (2000) el hecho que las mujeres tengan que cumplir con las condiciones referidas, obedece principalmente a los efectos desmedidos que está teniendo el deterioro de la guerra sobre la población civil, que de manera particular sitúa a las mujeres campesinas en condiciones de mayor vulnerabilidad. En cuanto a la inclusión de la participación de este grupo poblacional en lo concerniente al desarrollo rural, de acuerdo con las autoras este se constituye en una expresión de la madurez que la ANMUCIC alcanzó durante esta década.

Estos y otros hechos además de ser importantes en la negociación de la Ley referida, marcaron una impronta en el mantenimiento o remodelación de las representaciones de género que los agentes encarnaban, las que desplegaron y usaron en la concertación, para la incorporación de los aspectos relativos al género.

A continuación y siguiendo la lógica del anterior capítulo, mostraremos en primera instancia los principales rasgos del contexto, intentando mostrar cómo los algunos hechos (Cambio constitucional en 1991, deterioro de la guerra, transformación de modelo económico, entre otros) promovieron y condicionaron cambios en los principios de visión y de acción que encarnan los agentes y por ende en las representaciones de género. Estos cambios se constituyeron en ejes fundamentales a la hora de la negociación; y, en segundo lugar evidenciaremos en concreto el proceso de la negociación, de nuevo haciendo énfasis en los agentes, sus habitus, representaciones de género y capitales, sus interés y ganancias alcanzadas.

5.1 Los procesos que condicionaron la negociación

5.1.1 Las implicaciones de la Ley de Reforma Agraria 30 de 1988 para el trabajo organizativo de la ANMUCIC

Finalmente la sanción de la Ley 30 de 1988, no se constituyó en un mecanismo para llevar a cabo una eficaz y amplia reforma agraria en el país, debido a que no alteró sustancialmente la estructura bimodal de la tenencia de la tierra. Sin embargo mediante esta, se formaliza con mayor medida la participación de las organizaciones campesinas en la concertación de los procesos de reforma agraria.

Tal como consta en el artículo 8º, en la Junta Directiva del INCORA tendrían asiento los representantes de las organizaciones que participaron en la formulación de la Ley (ANUC, FENSA entre otras), entre estas la ANMUCIC; y, además se establece que deben conformar los comités consultivos nacionales y regionales, espacios creados para el debate con las comunidades, sobre sus necesidades y problemáticas en materia de crédito, tierras y apoyo estatal. Pasaremos a evidenciar la importancia que estos dos elementos tienen, no solo frente a la negociación, sino también a nivel del modelamiento de las representaciones de género encarnadas por los agentes.

En relación a la participación de la ANMUCIC en la Junta Directiva del INCORA, consideramos que esta decisión estatal revela la legitimidad que comienza a otorgársele a dicha instancia, legitimidad no solo como un actor político clave en materia de reforma agraria. Además el posicionamiento en este ámbito las situó en igualdad de condiciones con los representantes de las organizaciones campesinas mixtas, cuestión que a nuestro modo de ver implicó el remodelamiento de las representaciones que estos encarnaban sobre ellas. Al respecto uno de nuestros entrevistados nos refiere:

“La ANMUCIC hacía parte de la Junta Directiva después de que salió la Ley 30, allí compartía asiento con nosotros. Si al principio les teníamos recelo, ahora veíamos que ellas podían en coalición con nosotros avanzar en los temas agrarios, comenzamos a verlas como aliadas y no como enemigas”. (Entrevista a ex presidente de Fensuagro. Valencia, enero de 2014).

Lo anterior no quiere decir que las representaciones tradicionales de género, asociadas principalmente al cuidado, hubiesen cambiado radicalmente, sino que dada la coyuntura y la legitimidad que el Estado le otorgaba a la ANMUCIC, estas comienzan a vislumbrarse como actores claves para debatir y construir propuestas sobre reforma agraria, las que no necesariamente se limitaban a incorporar los temas de género. Este aspecto es referenciado por una de nuestras entrevistadas:

“Por ejemplo el líder de la ANUC, que estaba en la Junta, cada vez sentíamos que nos aceptaba como interlocutoras para construir propuestas. Claramente nosotras no queríamos dejar perder el foco, que era el derecho de las mujeres, pero veíamos que la situación del país, el conflicto, la violencia, la inestabilidad política, implicaban que participáramos en debates más amplios. Quizás esto era peligroso para nuestros intereses, pero la unión hace la fuerza”. (Entrevista a ex líder de ANMUCIC. Bogotá, octubre 2013).

Con respecto al segundo elemento: la participación en los comités consultivos, este aspecto cobra importancia en la medida en que conllevó no solo al fortalecimiento de la organización, sino también a su reconocimiento como sujetos políticos con capacidad para incidir en los procesos concernientes a la reforma agraria; y, al desarrollo rural del país en niveles que iban más allá de ámbito político (Villarreal, 2004).

Estos aspectos, bajo la perspectiva de esta investigación, tienen alta relevancia, en la medida en que no solo modifican los principios de visión y acción de estas mujeres y de los otros agentes con quienes interactúan, sino que además les permite acceder a capitales de tipo social y político, los que les fueron altamente útiles en los procesos de negociación de la Ley 160.

Con respecto a lo anterior, en primera instancia podemos decir que tanto su permanencia en estos espacios como el posicionamiento de sus intereses particulares concernientes al derecho a la tierra, desde una perspectiva de género, fueron cuestiones que dependieron directamente de las alianzas que las mujeres mantuvieron tanto con las femócratas del Ministerio de Agricultura y del INCODER, sino también con funcionarios con un papel importante en la toma de decisiones, como el gerente nacional del INCORA: Carlos Ossa Escobar, a quien Barco nombraría como tal, con la finalidad de llevar a cabo lo estipulado en la Ley 30 de 1988. Una de nuestras entrevistadas, revela la importancia de este personaje y de otros para el avance y logro de sus intereses:

“Había buenos funcionarios que nos apoyaban y nos animaban a seguir adelante con el trabajo que llevábamos en los comités consultivos. Uno de ellos Carlos Ossa fue muy importante en esa lucha de las mujeres y en la organización. Yo recuerdo como en los 2 primeros años de implantación de la Ley 30 y nosotras trabajando en los comités para que las mujeres conocieran sus derechos, para que los funcionarios también los apropiaran y los aplicaran, era imposible y nos tocó hablar con Carlos Ossa, que editara una circular y una resolución de Gerencia, para que todos los Gerentes tuvieran como mandato tomar esos puntos de la ley y así pudiésemos a nivel de los comités avanzar en lo que se había dicho en la Ley para las mujeres”.
(Entrevista a ex presidenta ANMUCIC. Valencia, enero 2014).

Por otro lado es de considerar que no solo las alianzas con agentes claves determinan el nivel del capital con el que cuentan. Las dirigentes de esta organización, a medida que ampliaban su radio de acción en las regiones, también incrementaban el apoyo por un lado de las bases sociales, es decir de las mujeres militantes presentes en las regiones; y, por otro con autoridades locales. Al respecto es posible entrever en una de las entrevistas:

“Entonces fue una lucha muy grande para la organización, primero que las mujeres se apropiaran también de lo que se había ganado en la ley, entonces, para eso se hizo todo un plan de capacitación y las mujeres se fueron apropiando a nivel local y regional, en esa apropiación se nos fueron sumando muchas mujeres, que nos apoyaban porque se daban cuenta que era posible que lo que se decía en la Ley se diera en la práctica”. (Entrevista a ex presidenta de ANMUCIC. Valencia, enero de 2014).

Lo anterior es corroborado por un estudio realizado a comienzos de los noventas por el Fondo DRI (1992), en el marco del que se evidencia la proyección política de ANMUCIC a nivel de todo el país. En el marco de dicho informe

Se muestra el alcance nacional de esta organización, destacando como las capacitaciones recibidas en años precedentes había permitido a las asociadas participar en los comités de consulta de las entidades del sector agropecuario para la definición de políticas y programas de desarrollo con las mujeres rurales (Villarreal, 2002, p. 280)

De acuerdo a lo anterior, además podemos observar como la ANMUCIC, poco a poco iba adquiriendo capacidades políticas, es decir con capacidad para ser interlocutoras y de incidir en actores (alcaldes, gobernadores, funcionarios y funcionarias, entre otros) que en el ámbito público tenían la función de diseñar

las estrategias estatales, para que los avances obtenidos en la Ley fuesen una realidad.

Lo anterior también fue posible en gran parte gracias a los procesos de fortalecimiento que la asociación tuvo en la década de los ochentas; y, además por el recorrido que muchas de sus líderes tuvieron en organizaciones campesinas de carácter mixto.

A nuestro modo de ver lo anterior, refleja la adquisición de habitus políticos, es decir de principios de visión y de acción, que configurados con base en los procesos de formación experimentados, las alianzas con actores, el recorrido y trayectoria organizativa previa, entre otros, les permitían concebir su realidad (la rural) y la posición de ellas en esa realidad, de otra manera; además de tomar conciencia que encarnaban el poder de transformar los factores estructurales que condicionaban su situación. Una situación claramente de subordinación, no solo frente al acceso a la propiedad de la tierra, sino también frente a su posición en las relaciones de poder.

Por último podemos decir que comenzaron a poseer un importante capital simbólico, es decir una serie de recursos (discursos, prácticas, imágenes) que puestas en circulación tuvieron la eficiencia para cambiar los principios de visión y de acción de otras mujeres y de otros actores. En relación a esta cuestión, podemos decir que iban modelando las representaciones de género que los diferentes agentes y las comunidades en general encarnaban sobre hombres y mujeres, su papel en la agricultura; y, también su rol el movimiento social por la lucha por la tierra. Este aspecto puede ser matizado por algunos de las entrevistas realizadas:

“Poco a poco iban teniendo mayor legitimidad ante el Estado y el movimiento campesino. No solo es qué pensarán que eran capaces de dar la pelea por la tierra, sino que por ejemplo líderes de la ANUC y los mismos funcionarios, comenzaron a tomarse en serio la

importancia que tiene el acceso a la propiedad de la tierra de las mujeres y a ver que estas también podían sacar un predio adelante. Se iba superando, no del todo no, pero si en algunos, esa imagen que las campesinas no podían sacar adelante solas el predio, que necesitaban a los hombres para eso”. (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, octubre de 2013).

Bajo la perspectiva de esta investigación, los anteriores avances (propiciados por la implementación de la Ley 30) permitirían que la ANMUCIC como agente clave en la negociación de la política de tierras, participara con fuerza en la negociación de la Ley 160, ya que contaban con mayores capacidades para posicionar sus intereses y por ende las representaciones de género que eran de su interés.

Sin embargo los avances referidos, las mujeres de ANMUCIC no dejaban de enfrentar diversos obstáculos. A pesar de los logros en términos de reconocimiento y de alianza en ciertos espacios y con ciertos actores, esto no supuso que a nivel de funcionarios y funcionarias de los niveles locales (incluso nacionales) y de las mismas comunidades y organizaciones, ellas fueran percibidas como un actor legítimo. Sesgos de género seguían operando con fuerza. Creencias arraigadas relacionadas con la idea que las mujeres no cuentan con las capacidades y fortaleza para sacar adelante una finca o que no pueden desarrollar eficientemente un proyecto productivo. Al respecto en el marco de algunas de las entrevistas se especifica sobre lo anterior:

“Nosotros que éramos, del Sindicato del INCORA –SINTRADIM- y que estábamos a favor de ellas también veíamos como en las regiones la gente no se tragaba el cuento de la titulación conjunta o de la prelación de las mujeres. Por un lado uno veía que la gente que estudiaba los requerimientos decían que las mujeres no iban a ser capaces y que para que se titulaba a los dos si a la final los hombres son a los que le sirve la propiedad para lo del crédito. Entonces

veíamos como no lo hacían. En otras ocasiones las comunidades y las mismas mujeres decían que en eso no creían, las mismas mujeres decían es que yo sin mi marido o hijos no puedo sacar esto adelante entonces mejor que le titulen a él". (Entrevista a funcionario INCODER. Bogotá, octubre de 2013).

"Era cosa complicada, es que nos tocó difícil porque muchas mujeres no sabían leer y no entendían de que era que hablábamos y ellas no se veían como propietarias o no veían que podían decirle al marido es que yo tengo derechos también sobre el predio que nos del INCORA". (Entrevista a expresidenta ANMUCIC. Valencia, enero 2014).

Por otra parte es de resaltar que, la legitimación que el Estado le había otorgado a la ANMUCIC, al propiciar su participación en los espacios de toma de decisiones (que en general eran de carácter masculino) generaba malestar en los líderes de las organizaciones campesinas mixtas. En estos espacios, se percibía la lucha de las mujeres, como una lucha particular, la que podía atomizar los intereses colectivos del campesinado; y, además podía desviar la atención estatal de los problemas relativos a la inequitativa distribución de la tierra. Estos líderes y también es lideresas de la ANUC, por ejemplo, incluso, veían con recelo el trabajo de la ANMUCIC. Esta cuestión implicaba también obstáculos para el posicionamiento de los intereses de este grupo en la agenda política.

Lo anterior bajo la perspectiva de esta investigación evidencia tensiones de poder entre las mujeres de ANMUCIC y los líderes de las organizaciones. El que las mujeres de dicha asociación, cada vez en mayor medida, fueran percibidas como actores políticos con capacidad para interlocutar con el Estado y además con una base social fuerte que poco a poco le iba dando mayor legitimidad, era percibida como una cuestión "medianamente peligrosa" para los intereses del campesinado.

Por un lado se pensaba que esta lucha específica podía acaparar la atención del Estado; y, en segundo lugar que podía generar fisuras al interior de las organizaciones. Sin embargo en opinión de entrevistados y entrevistadas, esto no supuso una generalidad en la percepción. De manera contraria a lo que pensaban unos pocos, fue posible la unificación de intereses entre las diversas organizaciones campesinas (mixtas y de mujeres) para la constitución de un bloque común, que como agente participaría en la negociación de la Ley 160 de 1994.

5.1.2 La formulación de la Constitución de 1991

A de los ochenta el país, a pesar de la desmovilización de algunos de los grupos guerrilleros y la creación de canales democráticos, para la participación de ciudadanos y ciudadanas en la construcción de un proyecto de nación de talante democrático¹⁵³, la violencia seguía arreciando con fuerza al país. Los efectos de estos se cebaban principalmente en la población civil. Esta situación era exacerbada por los altos niveles de corrupción y de inestabilidad política.

En este contexto, es que algunos sectores progresistas, comienzan a impulsar la necesidad de un dialogo nacional para la formulación de una nueva Constitución. La idea base de esta iniciativa, es que en gran parte el conflicto y su irregularización, tienen que ver directamente con la limitación de los canales democráticos y de participación de la ciudadanía; y, por ende es necesario construir verdaderamente una estructura inclusiva, basada en la participación y en la garantía y protección de los derechos humanos.

Para lo que nos hemos propuesto estudiar, consideramos que este proceso es clave dado que condiciona la negociación por parte de los diferentes agentes que concertaron la Ley 160 de 1994, en relación a las siguientes razones. Por un lado facilitó que se establecieran alianzas entre los agentes (principalmente el movimiento campesino) y otros sectores sociales, cuestión que coadyuvó a

¹⁵³ Sobre este aspecto se dio cuenta en el capítulo 2.

la unificación de intereses en pos de la búsqueda de acuerdos para el reconocimiento de los derechos.

Para ejemplificar lo dicho, tomemos el caso de ANMUCIC, instancia que en el marco de los debates para la formulación de la Constitución conformó sinergias con otras organizaciones de mujeres (colectivos de feministas, organizaciones de mujeres populares y mujeres de sectores sociales como: sindicatos de trabajadores, organizaciones populares mixtas y otras independientes). La finalidad de estas coaliciones fue la de consolidar un fuerte bloque para el logro el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la nueva Carta Magna.

Estas alianzas permitieron no solo el intercambio de experiencias sobre las problemáticas que enfrentan los diferentes sectores de mujeres sino también de discursos y prácticas, cuestión que bajo la perspectiva de esta investigación, conllevaría a una ampliación no solo de las representaciones de género, sino también de los intereses a perseguir. Este aspecto puede ser matizado a través de una de las entrevistas:

“Hasta que fue lo de la Constitución, nosotras en mayor medida no habíamos entrado en contacto con otras experiencias organizativas. La preocupación nuestra eran las mujeres rurales y sobre todo el derecho a la tierra de estas y con quienes si nos aliábamos era con quienes nos ayudaban, pero no con otras mujeres. En las Mesas de trabajo conocimiento un montón de experiencias que nos enriquecieron y por ejemplo eso nos sirvió mucho para hacer debates internos, que habíamos dejado de lado, sobre la diversidad de las mujeres que componían la Asociación y como debíamos tener en cuenta esto cuando proponíamos lo de la tierra”. (Entrevista a ex presidenta ANMUCIC. Valencia, enero 2014).

Lo anterior nos permite entender cómo la convergencia de diferentes procesos organizativos y tendencias feministas, da lugar a que, en el marco de la

Asociación, se posicione una visión feminista de la diferencia. Consideramos que esto es factible porque la misma confluencia de distintas posibilidades de ser mujer (campesinas, indígenas, negras, urbanas, populares, intelectuales, sindicalistas, entre otras) contribuyó a la toma de conciencia sobre que, tal diversidad también existe al interior de la organización, reconocimiento que ellas suponen debe comenzar a permear las reivindicaciones.

Es de decir que este aspecto había sido abordado, en el momento en que se buscaba el fortalecimiento de la organización (1987), pero fue una cuestión que quedó subsumida a la búsqueda de acuerdos mínimos entre la diversidad de mujeres que componían la Asociación. Aspecto que ellas en el marco de la negociación de la Constitución de 1991, identifican como una decisión que conllevó a un alto costo político, en la medida en que, en las primeras etapas de la ANMUCIC, supuso la homogenización de identidades en pos del logro de intereses comunes.

“Hablando con las mujeres de otras organizaciones, que en ese momento compartían espacios de trabajo con nosotras, ellas eran feministas, de organizaciones mixtas, sindicalistas, negras, indígenas, obreras, de todo, convergíamos con estas en que no podíamos hablar solo de una mujer campesina, pero más bien ahora que lo razono, creo que más que eso, fue que tomamos conciencia, que en el afán que teníamos por lograr el reconocimiento de nuestros derechos, dejamos de lado el pensar en que éramos diversas”. (Entrevista a lideresa, ANMUCIC. Bogotá, octubre de 2013).

Por otra parte, una cuestión que nos llama la atención, es sobre cómo la incorporación de la cláusula de igualdad como eje de la nueva Carta, supuso para las mujeres de la Asociación, la existencia de un nuevo argumento para hablar de la tierra y de los derechos de las mujeres en el plano político.

Bajo la perspectiva de nuestra investigación la idea de igualdad cala con tal fuerza en el discurso de la ANMUCIC que desplaza un poco las representaciones de género que fundamentaban las reivindicaciones del acceso a la propiedad de la tierra, las que habían operado con fuerza en la negociación anterior. Las mujeres ya no hablan del acceso a este insumo como requisito para el bienestar de ellas y sus familias, sino como una cuestión de igualdad. Al respecto una de las líderes de la organización refiere:

“En los debates para la Constitución, en las Mesas de trabajo y otros espacios que se conformaron, ya no se hablaba en términos de pedir algo al Estado por su buena voluntad o para el bienestar, sino que ahora se estaba hablando que todos y todas teníamos derechos en razón de la igualdad. Esto nos servía para pensar los derechos de las mujeres rurales como una cuestión de igualdad”. (Entrevista a expresidenta de ANMUCIC. Bogotá, octubre 2013).

En cuanto a los condicionamientos de este proceso en los principios de visión y de acción de los otros agentes, principalmente en los que encarnaban las organizaciones campesinas mixtas, consideramos que la participación y la misma formulación de la Constitución, al ampliar el reconocimiento de derechos ciudadanos, como el de la participación, legitimó en mayor medida la articulación¹⁵⁴ de dichas organizaciones en la construcción de leyes y políticas relativas a la reforma agraria. Creemos que este proceso les otorga mayores recursos y capacidades para interlocutar con el Estado e incidir en los aspectos que les conciernen.

¹⁵⁴ Es solamente hasta la Constitución de 1991, que se instauran los mecanismos de participación ciudadana como eje para la construcción de la ciudadanía. Además que se estipula como un derecho, obliga al Estado a desplegar todos los mecanismos necesarios para que la sociedad civil, de manera organizada, se articule a la definición y puesta en marcha de las acciones estatales.

5.1.3 El deterioro de la guerra y los efectos sobre la población campesina

El deterioro de la guerra durante la primera mitad de la década de los noventa, condiciona de doble manera la negociación de la Ley 160 de 1994. Por un lado al tener efectos desmedidos sobre la población civil, en particular sobre las y los habitantes de las zonas rurales del país, limita la capacidad de acción de las organizaciones sociales, sobre todo las campesinas; y, por ende su capacidad de incidir en la negociación de la Ley referenciada. Por otra parte, dado los efectos particulares que el conflicto tiene sobre hombres y mujeres, los intereses y reivindicaciones pasan a estar modelados por estos efectos, lo mismo que su lucha y las representaciones de género que se ponen en escena.

Para mediados de la década referida, en Colombia la guerra tiene manifestaciones y actores diferentes a los de la época precedente (setentas y ochentas), ajustándose a lo que Kaldor (2001, p. 15) ha denominado “Nuevas Guerras”, es decir aquellas donde se produce “el desdibujamiento de las distinciones entre guerra, crimen organizado y violaciones a gran escala de los derechos humanos”; y, por otro en las que opera una transformación en 1. Los objetivos de la guerra 2. Los métodos de lucha y 3. Los métodos de financiación.

En Colombia, a comienzos de la década referida se evidenciaban además los siguientes rasgos del conflicto: el resquebrajamiento del monopolio del Estado sobre la fuerza y la violencia legítima y organizada, es decir la privatización de la violencia asociada al auge del crimen organizado y del paramilitarismo, el deterioro de la legitimidad política en un contexto de crisis económica, fiscal y de corrupción y el control territorial por parte de actores armados a través del uso de la violencia con miras al control político de la población (Sañudo, 2003).

En este contexto es de resaltar que la consolidación, durante comienzos de esta década, en la escena de la guerra de los grupos paramilitares está

directamente relacionada con: 1. el afianzamiento de una economía ilícita derivada del narcotráfico que implica la necesidad de control territorial y de territorio para la producción y comercialización del alcaloide, así narcotraficantes y paramilitares se alían para este fin; 2. surgen como una estrategia antsubversiva cuyas operaciones militares estaban y aún lo están dirigidas a debilitar la presencia de las guerrillas en territorios geoestratégicos y lugares donde, dadas sus características medioambientales, se pueden desarrollar megaproyectos o facilitar la entrada de multinacionales; y, 3. se constituyen en una estrategia para afianzar un modelo neoliberal, fundamentado en la gran propiedad de la tierra para la agroindustria u otros modos de producción. Bajo este escenario

Los paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basado en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual. Las guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo. Además afectaron a la población civil como efecto colateral de los ataques a los centros urbanos, y de la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonal. La violencia de los miembros de la Fuerza Pública se centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales producto de los bombardeos, y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza (GMH, 2013, p. 36).

En el marco de este panorama es clave llamar la atención sobre la criminalización de la protesta social, dado que una de las intencionalidades de este nuevo modus de la guerra fue la de debilitar los procesos organizativos,

sobre todo de aquellos relativos a la lucha por la tierra. Al respecto una de nuestras entrevistadas refiere:

“Toda la arremetida paramilitar, que se viene desde los 90’s, tiene que ver con una cosa directamente y es con el neoliberalismo. Comienzan las masacres, los desplazamientos forzados, los atentados, con la excusa de acabar con la guerrilla, y con lo que querían acabar era con el campesinado, con los indígenas y con los afrocolombianos, porque todos estábamos en zonas donde iban a implementar proyectos productivos a gran escala. Querían debilitar al movimiento campesino sobre todo porque ahora ya no se quería hablar de reforma agraria sino de mercado de tierras”. (Entrevista a ex presidenta ANMUCIC. Valencia, enero 2014).

En este contexto los procesos organizativos del campesinado comienzan a debilitarse, cuestión que obliga a la recomposición de sus acciones, objetivos y discursos. Entre los efectos que Sañudo (2003) destaca se pueden contar:

- Pérdida de capacidad de acción y gestión colectiva para la consecución de satisfactores para sus necesidades
- Pérdida de la capacidad de interlocución colectiva con el Estado
- Pérdida de derechos y reivindicaciones logrados en anteriores movilizaciones y protestas (un ejemplo es el caso del acceso a tierra, logrado por campesinos y campesinas a través de la organización)
- Desestructuración de redes de apoyo colectivas a nivel local y regional.
- Pérdida de referentes colectivos de identificación basados en la organización
- Pérdida del capital ideológico, creado y recreado de acuerdo a las experiencias como organización.

El debilitamiento de dichos procesos (sobre todo a través del desplazamiento forzado de las bases sociales por amenazas y los asesinatos de líderes y

lideresas en este momento 1990 – 1994) coincide con una profundización en la concentración de la tierra. Hacendados, narcotraficantes, políticos, empresarios y líderes paramilitares (que podríamos clasificar en el marco de lo que a lo largo de este estudio hemos denominado elites rurales), continúan con los procesos de apropiación de la tierra a través del uso de la violencia. Estas tierras se destinan ahora al cultivo de productos para la agroindustria, especialmente de palma africana y para la explotación minera a gran escala.

El anterior panorama revela entonces cómo el campesinado como agente para la negociación de tierras, en el marco del deterioro de la guerra, sufre un proceso de debilitamiento, cuestión que se evidencia en su participación en los procesos de negociación, aspecto sobre el que volveremos más adelante.

5.1.3.1 Impacto de la guerra en las mujeres rurales

De acuerdo con lo anterior PNUD (2003, p 49), propone comprender cómo el escalonamiento de la guerra, a comienzos de la década de los 90's, ha implicado una mayor participación de las mujeres en el conflicto armado ya sea como víctimas y/o combatientes. Según esta fuente

La mujer es víctima de cuatro clases de violencia política: i) como blanco directo de las acciones violentas por ser líder o combatiente; ii) como víctima incidental de formas de agresión sexual previas o simultáneas a tales acciones, en su calidad de líder, combatiente, mujer de un actor o simplemente campesina, indígena, afrocolombiana que habita en una zona de conflicto; iii) como miembro (en tanto madre, compañera, hija, hermana, amiga) de una red de relaciones familiares y afectivas que resulta desmembrada por esos actos, y iv) como objeto de actos de violencia sexual o de menoscabo de su libertad (acceso carnal violento, acoso sexual, prohibición de relaciones afectivas o sexuales o del embarazo, aborto impuesto), dentro de los propios grupos armados.

Además es de considerar, que en el contexto del deterioro de la guerra, la muerte violenta también incluye a las mujeres, constituyéndose como la segunda causa de mortalidad y además de establecerse en potenciales víctimas de los armados, ellas sufren mayoritariamente los efectos de la guerra, pues es debido al rol otorgado por la sociedad, deben encargarse de la supervivencia de sus familias, como viudas, jefes de hogar , familiares de presos políticos o de desaparecidos, pero sobre todo como desplazadas (Meertens, 2000).

Complementariamente el informe que presenta la Mesa de Mujer y conflicto armado (2000) sobre la situación de las mujeres a lo largo de la década de los noventa, revela el siguiente panorama:

- Mujeres, jóvenes y niñas son víctimas cada vez más numerosas de la violación al derecho a la vida, a través de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. “En el periodo comprendido entre enero de 1990 y junio de 1999, en promedio una mujer murió diariamente en Colombia a causa de la violencia sociopolítica ” (p. 55)
- Entre las principales formas de violencia utilizadas por guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado contra las mujeres

Son la violencia sexual en sus diversas formas; trabajos domésticos forzosos; imposición de normas y códigos de conducta; castigos por sus relaciones afectivas y vínculos familiares con actores armados del bando contrario; amenazas y ataques a las organizaciones de mujeres o tentativas de cooptación de las mismas; reclutamiento forzado de mujeres y niñas; amenazas a la vida e integridad que en muchas ocasiones obligan al desplazamiento forzado; bloqueos y confinamiento de sus comunidades; detenciones arbitrarias, entre otras (p. 66)

- De la totalidad de mujeres, jóvenes y niñas colombianas, las que más se ven afectadas por el recrudecimiento de la guerra son aquellas que históricamente han sufrido procesos de exclusión social, económica y política y desprotección de su derecho. En general estas son campesinas, indígenas, afrocolombianas y mujeres pobres.

Por otra parte es de considerar que si bien todas las mujeres se consideran como víctimas directas de la guerra, aquellas que han desarrollado procesos participativos, organizativos y comunitarios y pertenecientes a organizaciones de mujeres o mixtas, se ubican como las principales víctimas. Según la Mujer y Conflicto Armado (2000) las organizaciones nacionales y regionales de mujeres, con una mayor preponderancia aquellas que tienen oficinas en zonas donde el conflicto se presenta con mayor intensidad, se constituyen en objeto de persecución política, víctimas de amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales, desplazamiento forzado y desapariciones forzadas:

“En el 93 es que se comienza a profundizar el proyecto paramilitar, este toma fuerza en las zonas rurales del país. Nosotras llegábamos a hacer el trabajo de base y las mujeres con mucha angustia nos contaban que estaba pasando. Esto nos obligó entonces, en primer lugar a denunciarlo en foros nacionales sobre el conflicto y la guerra en Colombia y en estos foros teníamos espacio nosotras y nos pronunciábamos con mucha fuerza sobre que estaba pasando en las regiones y en los que nos declaramos en autonomía frente a los actores armados legales e ilegales. Y a partir de allí es que se vienen una serie de amenazas contra las mujeres de la organización. Comenzaron a amenazar a las mujeres en las regiones a las líderes, a desplazar mujeres y tuvimos que comenzar a sacar a las mujeres”. (Entrevista a ex presidenta de ANMUCIC. Valencia, enero de 2014).

En este contexto los actores armados (guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas del Estado), en relación a la necesidad que tienen de ejercer el control social y político de los territorios, ven en las organizaciones de mujeres un obstáculo para tal fin, por considerar que su trabajo comunitario, organizativo y de liderazgo entorpecen el logro de sus intereses; y, además ponen en entredicho la lógica patriarcal que ellos reproducen a través de la guerra.

Esta situación a nuestro modo de ver comienza a permear la construcción de representaciones y significados de lo femenino y marca de manera sustancial el desarrollo de las acciones políticas y sociales de la ANMUCIC, frente a las reivindicaciones. En este sentido el deterioro de la guerra y el impacto que ésta tiene en las mujeres de la Asociación obliga a la necesaria reformulación de sus discursos y su accionar, desde los que se comenzó a reclamar el derecho a la neutralidad, a una salida negociada al conflicto desde la verdad, la justicia y la reparación.

Además estas establecen que los ataques no cesarán si no se garantiza, por parte del Estado, las medidas efectivas para la superación de la impunidad y para el juzgamiento de los delitos atroces cometidos contra las líderes sociales y sus organizaciones. Bajo esta lógica arguyen que es importante pero no suficiente que la Constitución Política reconozca el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, sino que es imprescindible que la política pública sea coherente con el marco jurídico de protección de los derechos humanos.

Por otra parte es de considerar que los impactos de la guerra sobre la ANMUCIC, las obligan a un replanteamiento del tipo de reivindicaciones sobre la tierra, dado que ahora ya no debe pelearse por la adjudicación, sino también porque no se ponga en duda la capacidad de ser beneficiarias en un contexto de conflicto armado. Además dado que muchas mujeres quedan solas y desprotegidas en este contexto, en el marco de sus discursos se comienza a

poner un mayor énfasis en las víctimas de la guerra, como sujetos prioritarios de reforma agraria. Al respecto una de nuestras entrevistadas refiere:

“Se empieza a sentir con fuerza las agresiones. Por un lado estábamos las líderes que comenzamos a ser amenazadas. Por otro la gente en las regiones que tiene que desplazarse porque los paramilitares están entrando y amenazando a la gente. La ANMUCIC debió frenar el proceso un poco, o sea el tema de los debates sobre la tierra porque debía ahora dar respuesta a lo nuevo que nos estaba pasando. Esto implicó a mi modo de ver un retroceso frente a lo que habíamos avanzado como colectivo, sobre todo en la unificación de nuestros intereses sobre la tierra”. (Entrevista a expresidenta ANMUCIC. Bogotá, noviembre 2014).

Complementariamente, también es de reconocer que las consecuencias de la guerra se expresan en una doble dimensión. A nivel colectivo, en relación a la atomización de redes y por ende de los grupos de apoyo consolidados a partir de procesos organizativos locales, jalonados por los grupos y con ello hay una pérdida considerable del capital social con el que contaba la ANMUCIC; y, segundo a nivel individual, pues las agresiones socavan considerablemente la autoestima de las mujeres.

“Veíamos no solo como nos desplazaban a las mujeres de la regiones, como amenazaban a otras, a otras las mataban. Era un drama humanitario y además después de toda la fuerza que habíamos adquirido, nos íbamos debilitando, pero no solo la organización se iba debilitando, también las mujeres que se habían empoderado tanto, empezaban a debilitarse”. (Entrevista a ex presidenta ANMUCIC. Bogotá, noviembre 2014).

En este contexto, los impactos obligan a la necesaria reformulación de su discurso frente a lo práctico y lo estratégico, cuestión lo que permea la construcción de representaciones y significados de lo femenino. Los tópicos se discuten y analizan desde el tipo de representaciones y significados de lo femenino que se están produciendo en el escenario de la guerra.

Por otra parte es de recalcar las mujeres víctimas de la guerra en Colombia y socias de la ANMUCIC, antes de vivir este evento y las problemáticas que subyacen a éste, no se consideraban sujetos de derechos. En este contexto comienzan a articularse en una serie de canales institucionales que las dotan de elementos para el ejercicio de su ciudadanía. Junto con el trabajo activo de las ONG's de derechos humanos con los que se alía ANMUCIC, empiezan a reconocer los mecanismos que existen para el ejercicio de sus derechos y su exigibilidad. Tal como lo afirma Valderrama¹⁵⁵

En el contexto del Observatorio de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, llevamos a cabo un trabajo activo por concientizar a las mujeres desplazadas de que son sujetos de derechos. Muchas de ellas no se consideraban como tal y solo es hasta el desplazamiento forzado de ellas y sus familias y porque entran en contacto con el Estado y con otras instancias, es que comienzan a pensarse como tales y de ahí comienzan a hablar en esos términos.

5.1.4 Reforma agraria en un contexto de implementación del modelo neoliberal

Los efectos negativos en la región del modelo intervencionista de finales de los setenta y comienzos de los ochenta, llevaron a que agencias internacionales como el BM, FMI y el BID sugirieran a los Estados latinoamericanos la incorporación en el plano nacional de una serie de reformas con el objetivo de

¹⁵⁵ Este testimonio se encuentra en el DVD las Invisibles. Mujeres desplazamiento y política pública en Colombia". Rubiela es una de las fundadoras del Observatorio de los derechos de las mujeres desplazadas por la guerra en Colombia.

sentar las bases para la implementación del modelo neoliberal. Mediante un ajuste estructural se buscaba estabilidad económica y la mejora de las tasas de crecimiento en la región (Bakker, 1999).

Como lo manifiesta Bejarano (2000), este nuevo paradigma implicaba que el mercado comenzara a jugar un rol más protagónico en las políticas económicas, reduciéndose el papel del estado como ente regulador. Las iniciativas legislativas, los cambios constitucionales, las decisiones políticas y los actos administrativos, fueron herramientas fundamentales para consolidar estas nuevas reglas de juego económicas y políticas en los planos nacionales (Kalmanovitz y López, 2005)

En Colombia sí bien es con López Michelsen y los gobiernos que le siguen, es cuando se inicia de forma paulatina la aplicación de una serie de políticas encaminadas a abrir el mercado nacional (modernización de la economía), con la llegada de Cesar Gaviria al gobierno en el año 1990 es cuando seriamente en el país se plantea una apuesta por este nuevo modelo.

La liberalización del mercado fue uno de los principales objetivos de esta administración, situándose en la base para la formulación de las políticas económicas y sociales. La apertura impulsada consistía en insertar a la economía y a la industria colombiana en el entorno global, intentando con esto, sacarla del aislamiento generado por el esquema de sustitución de importaciones.

Dado la importancia que para la economía del país tenía la producción agrícola, este sector también se incluyó en la estrategia general de apertura y de reformas institucionales. Estas transformaciones se operaron a través de dos grandes reformas: en primera instancia, la inclusión de los productos del sector agropecuario dentro del programa de liberalización del comercio internacional, con lo cual se comenzó a desmontar la intervención del gobierno en este sector; y, la segunda hace referencia a las grandes inversiones

públicas para riego y drenaje, estas como prioridad del gobierno para desarrollar una agricultura de exportables (Jaramillo, 1998). Estas decisiones políticas revelan la importancia que el gobierno nacional estaba dando al desarrollo del campo a partir de su industrialización y tecnificación, cuestiones que principalmente se plasmaron en apuestas por la adecuación de tierras. Estas estrategias se pensaron podrían llevar a una mayor competitividad en el mercado internacional.

Los años 90 representaron para el sector rural una década de cambios y transformaciones, situaciones que se evidencian en una fuerte ruptura de modelos y concepciones del desarrollo agrario en Colombia. La entrada del país a las nuevas reglas de juego del sistema capitalista bajo un modelo neoliberal, implicaron que el sector agropecuario presentara una reducción de las intervenciones del Estado en materia económica y política, con una tendencia a privilegiar el mercado sus demandas y condiciones, aumentando así la importación de alimentos. Tal decisión conllevó el desmonte de la institucionalidad de apoyo a la economía de tipo campesino y a la producción de alimentos para el consumo interno, que en palabras de Balcázar (2004, p. 48) se manifiesta en que

A comienzos de los 90's las políticas sectoriales más efectivas excluyeron a la agricultura campesina como foco de acción por ser esta esencialmente productora de bienes no – transables. Dicha exclusión, se explica por el hecho de que las políticas de protección comercial resultan inocuas para los productos que no son materia de comercio internacional. Con excepción del café, el grueso de la agricultura campesina se compone de bienes que tradicionalmente han sido no transables a nivel internacional, como es el caso de los tubérculos, la panela y la mayoría de frutas y hortalizas.

Es en este contexto, en el que el gobierno de Cesar Gaviria, bajo asesoría y apoyo del Banco Mundial, propone un borrador de Ley de reforma agraria. En

el marco de este se presenta la figura de reforma vía mercado de tierras, es decir la adquisición (por compra no por extinción) por parte del Estado de haciendas para su parcelación y el otorgamiento de subsidios de reforma agraria a campesinos y campesinas que cumplieran con algunos requerimientos (ser mayor de 16 años, tener vocación agrícola, ser jefe o jefa de hogar, entre otros) (Fajardo, 2002).

En palabras de Cardoza (2005, p. 46) en este contexto “La Reforma Agraria pasa de ser un problema de economía política, cuya solución es responsabilidad del Estado, a un problema de reducción de las distorsiones e imperfecciones de los mercados y de las políticas”.

A través de esta propuesta lo que se perseguía era el adecuar el sector rural a los procesos de globalización de las economías, hacer de la agricultura una actividad competitiva y sentar las bases para la consolidación definitiva de un modelo agroindustrial, que con el tiempo se convertiría en el núcleo central del poder del sistema agroalimentario.

Operativamente hablando se esperaba que la redistribución de la tierra en el sector rural, operara a través de lo que Fajardo (2002), ha llamado “Mercado asistido”, en específico mediante algunos incentivos para el sector privado. En palabras de Machado (2009, p. 67) “La intervención directa se dejaría para casos muy particulares de conflictos o de ubicación de desplazados por la violencia”.

La oferta gubernamental se sucede en un momento, en el que campesinos y campesinas comienzan a vislumbrar los primeros efectos de la implementación de las políticas neoliberales en el sector rural. En este contexto comienza una paulatina toma de conciencia sobre cómo la implementación de dichas políticas no consideró que pobladores y pobladoras del campo tradicionalmente tenían un acceso limitado a los factores de producción (tierra, agua, trabajo y capital);

y, ocupaban una situación marginal en la estructura de la tenencia de la tierra (Muñoz y Sañudo, 2008).

De acuerdo con Corrales y Forero (1992, p. 60), los campesinos y las campesinas fueron víctimas de un modelo en el que no se contempló a la producción campesina, sus características y el papel que esta podía jugar en el proceso de apertura; y además en este marco se consideraba al campesinado como “un sector desarticulado, marginal, homogéneo y en vías de extinción que merece tan sólo algunos apoyos puntuales de emergencia o ser considerada dentro de los sectores como objeto de política social”.

Bajo estos supuestos se retiró el apoyo institucional a la economía campesina, cuestión que afecta particularmente las condiciones de acceso a los recursos productivos. Por ejemplo “El crédito se vio encarecido con el desmonte de subsidios financieros y con el desmonte de la Caja Agraria” (p. 70).

De acuerdo a lo anterior podemos decir que tanto los efectos tempranos de la implementación de las primeras reformas neoliberales, como la existencia de propuesta estatal sobre un tema que es sensible para el campesinado (la redistribución de la tierra) y que es una propuesta que claramente va en contra de los intereses de este sector, se constituyen en condicionantes o coadyuvantes claves para comprender la posterior negociación de la Ley.

Para confirmar lo anteriormente expresado, traemos a colación un fragmento de una entrevista realizada a un ex líder del Sindicato del INCORA:

“La ley 160 fundamentalmente como la proponía el gobierno de Gaviria era una ley reaccionaria en su esencia. Es una ley que no es de Reforma Agraria, es una ley de simple compraventa de tierras. Era una afrenta contra el movimiento campesino, pero también pensamos que era una oportunidad para negociar otro proyecto. Por qué? Porque los efectos de las políticas de Gaviria debían ser examinados

y podíamos hablar desde esos efectos para decir que si no se hacía reforma agraria habría una crisis en el sector rural” (Entrevista a ex líder de Fensuagro. Bogotá, octubre 2013)

5.1.5 La formulación de la Política para mujer rural de 1994

Podemos decir que desde la formulación de la Política para la mujer campesina de 1984¹⁵⁶, hasta mediados de los noventa ya existía en el país un importante avance, en términos de la conciencia sobre la urgencia de incorporar el género al diseño de sus estrategias. Sí bien el papel de las femócratas y de la ANMUCIC en este aspecto fue relevante, también fue clave que en el marco gubernamental hicieran presencia hombres y mujeres, quienes sin mayor sensibilidad frente a este tema, tenían voluntad política para permitir la viabilidad de los procesos.

Por otra parte, Muñoz (2002) reconoce que la formulación de esta política también es el resultado de los compromisos asumidos por el Estado colombiano para cumplir con el Plan de Acción de la FAO para el apoyo a la mujer Rural (producto de la VI Conferencia Regional para la mujer rural de 1991) y del programa de Acción regional para las mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001. Dichos compromisos estaban enfocados a “dar respuestas más permanentes a las demandas diferenciadas de hombres y mujeres, eje central de las estrategias de desarrollo rural” (p. 101).

Entre estas respuestas se estipuló la promoción del acceso de las mujeres rurales a los factores de producción, entre ellos la tierra, además de la necesidad de estimular la participación de la mujer en procesos de toma de decisiones, el fortalecimiento de organizaciones campesinas, entre otros.

Con la ayuda técnica de la FAO, esta política comienza a ser formulada en 1992 y se sanciona en 1994, mediante CONPES N° 23. En el marco de esta se

¹⁵⁶ Aspecto desarrollado en el marco del capítulo 3.

prevé, en primera instancia que las diferentes instancias encargadas de la gestión del desarrollo rural del país, deben incorporar el enfoque de género en sus acciones. Bajo esta consideración las acciones del INCORA, con respecto a la dotación de tierras a campesinos y campesinas, debían estar transversalizada por la perspectiva de género.

Este mandato no fue asumido de manera rigurosa por tal instancia, cuestión que se refleja en que por ejemplo la incorporación de cuestiones relativas a este Enfoque en la Ley 160, no se suceden sino es por la presión de la ANMUCIC. Tal como veremos más adelante, tanto en la propuesta estatal como en la que surge del movimiento campesino en alianza con sectores como el Sindicato del INCORA, en se omitió completamente tanto lo avanzado en la Ley 30 de 1988, como las nuevas demandas de las mujeres rurales.

5.2 El proceso de negociación de la Ley de Reforma Agraria “160 de 1994”

5.2.1 La construcción y negociación entre agentes de una contrapropuesta al Estado

Antes de pasar a precisar sobre el tema que nos convoca, el cómo operaron las representaciones de género en la negociación de la política de tierras y en específico de aquellas medidas concernientes al género, consideramos clave dar cuenta de algunos rasgos generales del proceso de concertación en general, dado que estos nos permitirán entender la posterior negociación para la incorporación de las medidas de género.

En este contexto campesinos y campesinas organizados rechazaron el proyecto de Ley formulado por Gaviria e iniciaron un proceso de concertación entre diversas organizaciones rurales e indígenas, todas ellas confluyendo en una coordinadora agraria denominada “Consejo Nacional de Organizaciones Agrarias e Indígenas –CONAIC-”, para la elaboración de un proyecto de Ley a presentar al gobierno. Esta coordinadora había sido creada, como escenario

para la coalición de diferentes actores rurales, en el marco de las negociaciones de paz, en el gobierno de Betancour.

El proceso de construcción del proyecto de Ley por parte de la CONAIC, estuvo acompañado por movilizaciones campesinas e indígenas con el objetivo de avanzar en el establecimiento de alianzas con otros sectores del movimiento social. Producto de lo anterior, Cardoza (2003, p. 65) resalta como “las centrales sindicales respaldaron tanto el proyecto de Ley presentado como las negociaciones que se establecieron con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Agricultura y del INCORA”.

En este contexto, tal como resaltan algunas personas entrevistadas, el nombramiento de José Antonio Ocampo como Ministro de Agricultura en 1993, facilitó el avance de las negociaciones entre las organizaciones y el Estado. El Ministro referenciado:

Acogió la mayor parte de las propuestas de las organizaciones campesinas e indígenas, entre estas la figura de Reservas Campesinas. En el marco de esta se contempla que el Estado deberá “regular, limitar y ordenar de la propiedad rural, eliminando la concentración y el acaparamiento de tierras baldías, promoviendo la adquisición o implantación de mejoras, el fomento de la pequeña propiedad campesina, previniendo la descomposición de la economía campesina del colono y evitando la transformación de este en mediano empresario (Mondragón, 2002, p 5).

Este aspecto es referenciado por uno de nuestros entrevistados

“Ocampo era receptivo a las propuestas del campesinado, no tenía ese tono recalcitrante del anterior ni de todo el equipo de Gaviria, él sabía que tenía que concertar con nosotros porque si no nosotros

íbamos a seguir moviendo a la gente y parábamos el país”.
(Entrevista a ex líder Sindicato del INCORA. Valencia, enero 2014.).

Entre gobierno y organizaciones coincidieron en la necesidad de crear el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Campesino, pensado este como un mecanismo efectivo de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas de dotación de tierras a los campesinos y campesinas, y la prestación integral de servicios para su desarrollo.

Sí bien la Ley parece contener las propuestas de las organizaciones campesinas es de precisar, que esta tiene un doble sentido, tal como lo revela Cajamarca (2013). La autora especifica cómo a través de esta, el Estado jugó doble. Por un lado le dio el carácter de política social, en la medida en que estableció la dotación de tierras al campesinado como una cuestión de atención estatal; por otro lado, lo que se evidencia es como la dotación de tierras, no tiene otra intención que la de darle los mecanismos necesario para que se articule efectivamente al nuevo modelo y pueda actuar de manera más competitiva en este contexto. En palabras de Deere y León (2000, p. 214) “la presión política desde abajo y el grado de la crisis agrícola produjeron finalmente una Ley que es al mismo tiempo redistributiva y liberal”. Sobre este aspecto, además nos refieren entrevistados y entrevistadas:

“En su momento no nos dimos cuenta de la trampa de la Ley. El gobierno aceptó muchas de nuestras prebendas, incluso ajustó todo a la nueva Constitución. La dotación de tierras, aun marginal y todo ya se veía ahora no como una cuestión de redistribución sino de acceso”.
(Entrevista a ex líder Fensuagro. Valencia, enero de 2014).

“Con la Ley 160 lo que se ve es que el debate sobre la reforma agraria se enterró y lo que quedó fue una idea base de la tierra como un insumo para ser más productivos”. (Entrevista a ex funcionario INCORA. Bogotá, octubre de 2013).

De acuerdo con lo anterior y bajo el criterio de Mondragón (2002, p. 5), en la Ley que finalmente es sancionada por el Estado, sí bien se introducen muchas de las propuestas del proyecto presentado por el campesinado (figura de reservas campesinas, acceso progresivo a la propiedad de la tierra mediante subsidios, Sistema Nacional de Reforma Agraria) en el marco de esta se acaba con la figura de extinción de dominio como mecanismo para obtener tierras destinadas para la dotación a población campesina. Mediante este cambio se perdía un derecho adquirido como era “el que a los tres años de estar inexplorado un predio procedía la extinción de dominio”.

5.2.2 La negociación para la incorporación de las medidas de género

En cuanto a la negociación para la incorporación de las medidas de género, es de resaltar, que por varias razones que ahora pasaremos a explicitar, en el marco de la nueva Ley, los avances obtenidos con la anterior en relación al reconocimiento de los derechos de las mujeres, en principio no iban a aparecer. Tanto en el proyecto de Gaviria como de la CONAIC las medidas específicas para que las mujeres rurales accedieran a la propiedad de la tierra, fueron omitidas. El hecho que se retomarán es el resultado de una dura pelea que da la ANMUCIC, algunas líderes de la ANUC y las aliadas femócratas.

Tanto el dar al traste con los avances de género como la omisión de este tema en el debate y concertación de la nueva ley, pueden ser explicados por las siguientes razones, las que están interrelacionadas directamente:

- Aun con el trabajo y la madurez que había alcanzado la ANMUCIC durante la década precedente, continuaba siendo un agente que en el marco del movimiento campesino generaba cierto rechazo. Pero este rechazo en sí no era por pelear el derecho a la tierra en general, sino por pelearlo de manera particular. Sobre este aspecto nos refiere una de nuestras entrevistadas:

“A mi ellos me respetaban y a las otras también pero porque pensaban que éramos unas líderes campesinas buenas, no porque estuviéramos peleando el derecho de las mujeres a la tierra. En este proceso de la CONAIC nos tomaron como sus aliadas, pero como sus aliadas dentro del campesinado, no como unas aliadas con intereses particulares”. (Entrevista a ex presidenta ANMUCIC. Valencia, enero 2014).

- La importancia de articular la perspectiva de género en la planificación del desarrollo rural era una cuestión que solo calaba en las mujeres de la Oficina de Mujer Rural del Ministerio y del INCORA. No se había constituido en un asunto serio, es decir un asunto que debía considerarse como eje del diseño y puesta en marcha de las políticas públicas o de las estrategias estatales. Sí bien en la Política para Mujer Rural de 1994, se había establecido la incorporación del género en todas las acciones relativas a lo rural, como una cuestión urgente y casi que obligatoria, la mayoría de instancia no asumió este compromiso (Muñoz, 2002).

En este sentido lo que es posible entrever es la no existencia de una conciencia sobre la importancia y relevancia de este asunto a nivel de la gestión estatal; y, además lo que podemos percibir es cómo este tema se sitúa como un aspecto marginal y no principal en el quehacer estatal. Por otra parte también es de considerar los sesgos de género con los que seguían operando funcionarios y funcionarias públicos.

“Gaviria si te puedo decir que cero sensible al género, porque con Barco aunque este no sabía mucho, de alguna manera era sensible y se rodeó de gente sensible y eso nos permitió avanzar mucho. Sin embargo te puedo decir que en gran parte que a la final el tema de género haya quedado se debe a que teníamos una aliada y era la primera dama Ana Milena de Gaviria, quien se interesa y fomenta los

encuentros”. (Entrevista ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, octubre 2013).

- A nivel de las comunidades y las bases se percibía a las mujeres de ANMUCIC, a sus aliadas o en general a quien hablase de género, de igualdad o de otras cuestiones de este tipo, como personas que iban en contra de las buenas costumbres y que querían atomizar a las familias. En un país altamente católico, cualquier presunción de derechos en el que se contemple a la mujer como un sujeto principal implica retar el sistema y esto produce rechazo.

“Me acuerdo escuchar seguido que hay vienen esas que son las que van a dividir los hogares, decían hablan de tierra, pero lo que quieren es que las mujeres se liberen y dejen a sus familias”. (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, octubre 2013).

- El contexto de transformación del agro, mediante la implementación de políticas neoliberales y el deterioro de la guerra, son cuestiones que tuvieron efectos negativos sobre los procesos organizativos de mujeres.

Por un lado el Ministerio poco a poco limitaba los recursos para financiar las actividades de fortalecimiento de la ANMUCIC y la participación de estas en los Comités Consultivos. Se consideraba más urgente el diseño y puesta en marcha de programas y proyectos para la atención a población afectada directamente por el conflicto armado (Villarreal, 2004); por otro las líderes de esta organización y de otras estaban siendo amenazadas por los actores armados, principalmente por los paramilitares cuestión que minimizó su rango de acción y la lucha por sus derechos particulares a la tierra.

Sí bien los factores referenciados tuvieron un efecto importante en que el género y su importancia para la construcción de la política de tierras, se omitiese en la formulación tanto de la propuesta estatal como la del

campesinado, las mujeres de la ANMUCIC dieron la pelea por continuar en la lucha por sus derechos.

Tal como se dijo al comienzo de este aparte, con la finalidad de no dejar por fuera del proyecto concertado por el campesinado los avances en relación al acceso en igualdad de condiciones de hombres y mujeres a la tierra, las mujeres de la organización junto sus aliadas femócratas, inician una lucha para conservar lo establecido en la Ley 30 e incorporar otros aspectos que no habían sido considerados. Una de nuestras entrevistadas nos resume el proceso a continuación:

“Fue una pelea dura de jornadas hasta la una o dos de la mañana en el Ministerio, en el Congreso de la Republica, haciendo lobby hasta en la Casa de Nariño con la Primera Dama, en el Ministerio, buscando aliados en el INCORA, y aliados y en fin, hasta que por fin sentadas con Manuel Ramos abogado del INCORA les decíamos: Mire este artículo que consideramos que debe quedar así para que beneficie a las mujeres del campo, este así y este asa, pasamos un memorial, Prácticamente lo llevábamos a todas estas reuniones en donde se negociaba, lo negociamos primero con las organizaciones agrarias, ya estábamos en ese proceso de CONAI y finalmente creo que logramos tener un éxito importante”. (Entrevista a ex presidenta ANMUCIC. Valencia, enero 2014).

En los siguientes párrafos mostraremos como las mujeres de la ANMUCIC y sus aliadas tuvieron que negociar la incorporación de las medidas de género con cada uno los agentes implicados en la construcción de la propuesta de la norma. Es de aclarar que en la lógica que tomó el proceso, ellas solamente debieron negociar con dos agentes: con el movimiento campesino que preparaba una contra respuesta al Estado y con el Estado que en negociación con el movimiento campesino formula la Ley.

5.2.2.1 ¿Con quiénes negociaron?: los actores, sus habitus y representaciones de género.

- **Consejo Nacional de Organizaciones Agrarias e Indígenas**

Por un lado las mujeres deben concertar con la CONAIC, coalición de la que ANMUCIC también hacía parte. Tal como se dijo antes, esta instancia estaba compuesta por organizaciones agrarias y de comunidades indígenas y sindicatos agrarios. Entre estas se desatacan: Fensuagro, Fanal, Festracol, Fedefique, ANUC-UR, ONIC, AICO, Sintradin, Sintracreditario y Sinaltraica. La convergencia de estas en una apuesta convergente, en palabras de Cardoza (2005) fue el resultado de la afluencia de diversos sectores, quienes encarnaban el interés común por construir una propuesta de Reforma Agraria, con la cual interlocutar con el Estado y rebatir la propuesta oficial.

Gran parte de las organizaciones que componen dicha coalición, tenían una trayectoria e historia importante de lucha por la tierra, cuyo origen en la mayoría se anclada en los años cincuenta, como era el caso de FANAL. Otras surgen en los 60's como la ANUC, organización que tras algunas crisis se recompone a finales de la década de los ochenta.

Esta coalición además está integrada por la principal organización indígena del país. Frente a este aspecto es de resaltar, que aunque indígenas y comunidades campesinas tengan divergencias sobre el carácter del acceso a la propiedad de la tierra (Para los pueblos indígenas el acceso es colectivo – a través de la figura de resguardo- y campesinos de manera individual) se unieron para la construcción de una propuesta de reforma que pudiese beneficiar a la mayoría de implicados e implicadas.

Hacían parte de estas organizaciones, principalmente hombres, con una amplia y reconocida trayectoria política y organizativa. Estos se pueden definir como sujetos con un aprendizaje político importante dada su participación, no solo en

previas negociaciones para la construcción de la política de tierras, sino también en los procesos relativos a la lucha por la tierra.

Además ellos y ellas habían adquirido importantes conocimientos políticos, a través de la interacción directa con organizaciones de izquierda y de carácter progresista, que históricamente habían estado cercanas al campesinado y sus luchas (Partido Comunista, Partido Liberal). Estos aspectos junto con las capacidades adquiridas por su trayectoria organizativa y de participación en otros procesos relativos a la construcción de la política de tierras, a nuestro modo de ver dieron lugar a lo que hemos llamado *habitus políticos*.

A estos los definimos, en el marco de este estudio, como la serie de principios de visión y de acción, la serie de disposiciones (como diría Bourdieu) que se han ido configurando en el marco de la experiencia individual y colectiva; las que tienen como fin retar el sistema hegemónico, principalmente aquel que se ha ido instaurando en relación directa con la configuración histórica del modelo de tenencia de la tierra, en el que generalmente estaban en una situación de marginalidad.

En esta vía de análisis debemos considerar además que la participación activa de varios sectores sociales en la formulación de la Constitución de 1991 y la construcción de acuerdos entre estos sectores, facilitó la confluencia de las organizaciones mencionadas para pensar y debatir una propuesta alternativa de reforma agraria. Tal como lo manifiesta uno de nuestros entrevistados:

“Cuando estuvimos tan activos en las mesas de trabajo para hacer propuestas que incluyeran a varios sectores, armamos alianzas importante con otros movimientos sociales, lo que nos ayudo más adelante, teníamos la coalición y teníamos mejores argumentos para rebatirle al Estado, esa propuesta neoliberal que habían construido con el auspicio del Banco Mundial”. (Entrevista a líder ANUC, Bogotá, octubre 2013).

En este contexto a las luchas tradicionales por la tierra, se unieron otras luchas, como las de los trabajadores, las de las y los defensores de los derechos humanos y las de los sectores populares por la satisfacción de las necesidades básicas (infraestructura y servicios). En este sentido la CONAIC no solo se constituía en un escenario de confluencia de unas pocas organizaciones, sino en el resultado de alianzas y experiencias de trabajo y de lucha por la solución de disímiles problemáticas que enfrentaban colombianos y colombianas.

Consideramos que estos principios de visión y de acción políticos configurados en el marco de los aspectos y procesos referenciados, se enfocan ahora en la construcción de una apuesta común de reforma agraria, la que a la final se concibe como una política de carácter redistributivo e integral, a la que se denominó “Proyecto Campesino”. Este en palabras de Mondragón (2002, p. 78) esta se caracterizó por

1. Desarrollar el mandato constitucional que en su Artículo 64 dice: - Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos-; 2. Recoger las iniciativas de amplios sectores sociales, gremiales y de trabajadores. Su elaboración fue el fruto de prolongadas y fructíferas discusiones en torno a la Reforma Agraria, habiéndose recogido importantes aportes por parte de organizaciones campesinas, de trabajadores agrícolas, de pescadores, de cooperativas agropecuarias, de sindicatos, de movimientos indígenas y de negritudes, así como de especialistas en el tema; y, 3. Constituirse en una propuesta que presentó alternativas realistas a la crítica situación que vive el campo colombiano y a sus efectos en las ciudades.

En cuanto a las representaciones de género que encarnan los actores que confluyen en este agente (CONAIN) podríamos decir que sí bien, muchos de estos habían participado directamente de los debates con la ANMUCIC; además habían hecho parte de la serie de debates que desde el Ministerio de Agricultura se realizaban con miras a validar la importancia de incorporar el género en la planeación del desarrollo rural; y, además que muchos líderes tenían como sus compañeras sentimentales a las líderes de ANMUCIC, definitivamente las representaciones de género que encarnaban no habían cambiado considerablemente. Sobre este aspecto refiere una de nuestras entrevistadas:

“La omisión de nuestras demandas, era lo más directo que hicieron para mostrarnos que las necesidades particulares de las mujeres campesinas a la tierra, no era una cuestión que importaba. Pero esa poca importancia iba más allá y lo que demostraba es que a la final nos seguían viendo marginales en la lucha y seguían pensando que nosotras no podíamos ser sujetos de reforma agraria. Esto con casi todas las organizaciones y la mayoría de los hombres que participaron para hacer el contraproyecto para Gaviria”. (Entrevista ex presidenta de ANMUCIC. Valencia, enero 2014).

A diferencia de los agentes institucionales, se puede decir que la mayor parte del campesinado organizado, continuaban percibiendo a las mujeres por un lado como cuidadoras y esposas; y, segundo como compañeras de lucha con unas necesidades sobre la tierra que debían estar subsumidas a las necesidades del campesinado como clase. En palabras de una de las líderes de este proceso:

“Pues los hombres y las mujeres también para esa época no habían cambiado mucho. Veían nuestras demandas sin fundamento. Decían pero si lo que se pelea para todos sirve para todos, porque ustedes mayor prioridad. Cuando aceptaban que mayor prioridad era porque

se hablaba de una mujer que debía cuidar de otros, ya sea de sus hijos porque estaba sola o viuda, o cuidadora de la comunidad. Nosotras pensábamos que esto había cambiado después de trabajar en esto, era un poco frustrante". (Entrevista a exlíder de ANMUCIC. Bogotá, octubre de 2013).

De acuerdo con lo expresado es posible entrever entonces que los hombres y las mujeres también, aun inmersos en procesos de cambio social por su trayectoria política, seguían siendo el producto de un prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de biologización de lo social. Bajo esta impronta estos sujetos seguían considerando como naturales los roles de las mujeres asociados a la crianza y al cuidado¹⁵⁷.

En relación a lo anterior, cabe considerar que la permanencia de esta apreciación sobre el rol de las mujeres, se debe en gran parte que mediante la Ley 30 de 1988 y los alcances obtenidos, se reforzaron y produjeron sentidos y significados sobre lo femenino desde los que se fortaleció el orden patriarcal, que son a la final los que han quedado en el imaginario de los agentes que ahora negocian la Ley 160 de 1994.

Estas representaciones sí bien existían anteriormente, creemos que posterior a la Ley 30, se instalaron con fuerza en la mente de los negociadores y negociadores, situándose ahora como imágenes mediadoras de la concertación. Consideramos que estas imágenes validadas por la anterior Ley no retaron ni práctica ni simbólicamente las tradicionales creencias asociadas a hombres y mujeres y sus papeles en el ámbito rural frente a lo productivo y lo reproductivo. Frente a este aspecto una de las entrevistadas refiere:

"Ahora veo que no fue bueno hacer tanto énfasis en que el acceso a la tierra de las mujeres campesinas serviría para el bienestar de ellas

¹⁵⁷ Ya sabemos que en el marco de la anterior Ley, esta representación fue la aceptada por la mayor parte de los agentes y la que se legitimó como mediadora del acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra.

y sus familias. Nosotras nos metimos también en esa lógica y lo que vimos después es que cómo eso era lo que aparecía en la 30 y era lo que se legitimó y aceptó, entonces era difícil cambiarla y buscar que los hombres asumieran otras reivindicaciones que no pasaran por las mujeres y sus familias. (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, noviembre 2013).

De acuerdo a lo anterior es de resaltar cómo a través de la Ley 30 se afianzó la producción social de la diferencia entre hombres y mujeres, es decir la producción y reproducción de dos esencias sociales jerarquizadas. Además se fortaleció el tipo de relaciones que de esta diferencia proyecta: mujer cuidadora – hombre productor, mujer complemento del varón, entre otros.

Complementariamente podemos decir y bajo la perspectiva de esta investigación, que tanto el campo de la significación como el de la acción, se encontraron mediados por la oposición diferencial entre lo masculino y lo femenino y por la naturalización de la relación entre dominador y dominado. Así las representaciones de género se constituyeron, no solo en el producto de tal división, sino en una manera de, a través de su circulación, naturalizaron la diferencia.

Además, es posible entrever como se evidencia un posicionamiento de lo masculino por encima de lo femenino, cuestión que no solo es el producto de un ordenamiento arbitrario de la realidad, sino que al ser una cuestión “naturalizada”, pasa a ser parte de los habitus, constituyéndose en el principio organizador de las percepciones y de las acciones de los varones pertenecientes a las organizaciones campesinas. Y, claramente también de las mujeres.

Lo anterior nos sirve para plantear que la valoración simbólica de hombres y mujeres que se hace bajo la lógica androcéntrica, se constituye en la base de

la interacción entre agentes en la negociación, tal como había sucedido en el marco de la anterior concertación.

- **Agentes estatales**

Como sabemos la negociación directa, en el caso del Estado, para conservar las medidas de género de la Ley 30 e introducir nuevos aspectos, se hace con el Ministro de Agricultura José Antonio Ocampo, su equipo de colaboradores y las personas encargadas en el INCORA de llevar a cabo las gestiones para la concertación de la Ley. De acuerdo con algunas de las entrevistadas, estos agentes fueron altamente receptivos, en primera instancia porque la esposa del Presidente Gaviria, había sido una impulsora de las iniciativas de las mujeres rurales y presionó al gobierno para que estas se tomaran en serio y fueran ubicadas en la agenda política.

En segundo lugar fue factible la cooperación estatal porque a la final las mujeres de ANMUCIC no buscaban cambios abruptos en lo anteriormente establecido. Ellas solamente querían introducir algunas innovaciones como la de la participación de las mujeres rurales en los procesos de planificación del desarrollo rural; y, la ampliación del sujeto de derechos de reforma agraria a aquellas mujeres viudas y víctimas de la guerra, sujeto que ya había sido reconocido previamente a través de una Resolución emitida por el INCORA en 1991. Mediante dicha Resolución se privilegia en los procedimientos para el acceso a tierra, a las mujeres que estén en “estado de desprotección como resultado de la situación de violencia característica del país, lo que incrementaba los casos de viudez y abandono (Deere y León, 2000, p. 243).

Sin embargo cabe aclarar que dada la tendencia política del gobierno: la que estaba enfocaba a avanzar en la apertura económica y la reconversión del agro, el derecho de las mujeres a la tierra no se concebía como una medida de carácter afirmativo, sino como una medida de política social. En este sentido esta se piensa en dos vías: por un lado se busca socavar los efectos que causa

la implementación de las políticas neoliberales, atendiendo a los sectores de la población más vulnerables como era el caso de las mujeres rurales; y por otro, a través de la focalización, se buscaba brindar a los sujetos las condiciones necesarias para incorporarse al nuevo modelo, ayudando, así, a su afianzamiento.

De esta forma, mediante este tipo de acciones se prioriza a los sectores más vulnerables con el fin de incorporarlos a la productividad nacional, que es la tendencia que comienza a ser observada en las políticas para mujer rural desde comienzos de los noventas hasta mediados de la década pasada (Cajamarca, 2013).

Sobre este aspecto las entrevistas nos brindan algunas pistas:

“La nueva lógica del gobierno, a pesar que cedió en la negociación con los campesinos y con las mujeres, es que la Ley debía ser un mecanismo de modernización del campo. Se ve claramente eso en que por ejemplo prioriza para los subsidios a población que considera vulnerable (jefas de hogar por ejemplo), pero no porque Ocampo considerara que las mujeres tienen derecho a la tierra, sino porque las ve como sujetos que pueden incorporarse a la productividad activamente y que solo necesitan unos pocos mecanismos para esto”.
(Entrevista a ex funcionaria IICA. Bogotá, octubre 2013).

De acuerdo a lo anterior consideramos que las representaciones de género que encarnaban las y los agentes institucionales frente a las mujeres rurales, además de estar configuradas bajo los principios de visión y de acción patriarcal, de acuerdo con los cuales se percibe a las mujeres como sujetos claves en el cuidado, evidencian una innovación. Ahora se muestra a las mujeres como sujetos vulnerables, que deben ser atendidos para hacer posible su ingreso al nuevo modelo y en específico al ámbito productivo. instancia que es la que se privilegia en la Ley y en las políticas neoliberales.

En esta vía de análisis y de acuerdo con la información obtenida mediante las entrevistas realizadas, las mujeres rurales, en el marco del nuevo modelo cobran particular importancia por dos cuestiones: por ser sujetos que enfrentan mayores niveles de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad por causa del deterioro de la guerra; y por ser reconocidas como factor fundamental para el desarrollo económico y para la producción agrícola nacional.

Bajo esta doble connotación es que son percibidas las mujeres en el marco del nuevo gobierno. Y, si bien las reivindicaciones de ANMUCIC iban más en la vía del derecho a la tierra, no se distanciaban de lo que el gobierno pretendía: atender a poblaciones vulnerables y otorgas más y mejores mecanismos para hacerlas más productivas. Al respecto una de nuestras entrevistadas resalta:

“Con Barco veníamos trabajando en una lógica y era la tierra como medio para empoderar a las mujeres, pero no solo económicamente, sino en todos los niveles. Esto se veía en el trabajo que la de ANMUCIC hacían en las regiones y que nosotras acompañábamos desde el Ministerio y los resultados mostraban que las mujeres además de contar con algo propio que les daba capacidad de decisión, se sentían más fuertes. Esto cambio con el nuevo gobierno, en el que además no seguimos la mayoría de nosotras, lo que se veía es que no se quería empoderar a las mujeres, sino tratarlas como se trataba a los campesinos hombres cuando se los quería hacer objeto de políticas y programas como meros productores o usuarios de servicios”. (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, octubre de 2013).

Frente a lo anterior una cuestión a resaltar es que mediante la focalización de las mujeres rurales como sujetos de atención en razón de su vulnerabilidad y por su potencialidad como sujeto activo en la producción, se omiten las condiciones estructurales que reproducen la situación de inequidad que condicionan el acceso a la propiedad de la tierra, aspecto que a la final era el

que se perseguía atacar mediante los cambios normativos en la política de tierras. En este sentido la igualdad en el acceso se contempla bajo el nuevo modelo en una doble vía. Por un lado es una cuestión que se facilitará a través de la focalización por la vulnerabilidad de los sujetos; y, otra el punto de llegada sí los sujetos cuentan con los medios para ello.

De acuerdo a lo anterior, podemos decir entonces que la inclusión de las mujeres en las políticas sociales neoliberales es ambivalente. Por un lado mediante la atención focalizada, se afirma tres supuestos: la maternidad como el rol más importante desempeñado por ellas, el papel de la crianza de los hijos como la tarea más efectiva y el de consumidora y usuaria de recursos (Peláez y Rodas, 2002, p. 10). Por otro lado, mediante el enfoque de eficiencia y productividad se quiere potenciar la labor de las mujeres dentro de las economías de cada país (León, 2006). De esta forma, este modelo supone que las mujeres teniendo las condiciones para insertarse activamente al plano productivo, pueden aportar y potencian el crecimiento económico.

- **La negociación al interior de la organización**

La necesidad de concertar sobre las reivindicaciones que debían incorporarse en la formulación de la nueva Ley, además fue una cuestión que debía negociarse con las militantes de la organización, que para comienzos de la década de los noventa sumaban más de 50 mil afiliadas en varios departamentos del país (Sañudo, 2003). En este contexto y con apoyo del Sindicato del INCORA y de otras organizaciones aliadas, las líderes de ANMUCIC prepararon una serie de reuniones a nivel nacional, en el marco de las cuales se reflexionó en torno a las innovaciones que debían consignarse en la propuesta para la formulación de la nueva Ley.

De acuerdo con la mayor parte de las entrevistadas las que pertenecen o pertenecían a ANMUCIC, la primera idea que surgió en estos espacios de reflexión, la que logró la convergencia de las diversas posiciones de las

mujeres participantes, fue que dada la envergadura del conflicto armado y los especiales efectos que estaba esté teniendo sobre las afiliadas en general, era necesario poner el énfasis en que las mujeres víctimas de la guerra deberían constituirse en uno de los sujetos prioritarios de reforma agraria.

Esta pelea venía dándose desde comienzos de la década. En este contexto la ANMUCIC aprovechando su cercanía con el Gerente General del INCORA (Carlos Ossa Escobar), lograron que en 1991 se emitiera a este nivel, una Resolución, mediante la que se especificaba que en los procedimientos de reforma agraria (los que estaban sujetos a lo estipulado en la Ley 30 de 1988) debía darse prioridad a las mujeres víctimas de la guerra.

Sin embargo se especificó que la figura de víctima se introduciría como una característica, con la que se buscaría que se reconociera, que las mujeres en el contexto de la guerra y de otros, enfrentaban una mayor vulnerabilidad. Sí bien en la anterior Ley, la figura ya reconocida fue la mujer jefa de hogar¹⁵⁸ en estado de desprotección, ahora introduciendo el carácter de víctima se buscaba ampliar la protección. Sobre este aspecto una de nuestras entrevistadas refiere:

“Ya nos habían sacado de la propuesta las organizaciones y como te decía antes debíamos preparar la nuestra con la que mantuviéramos las ganancias anteriores pero también que pudiésemos introducir nuevas cosas. Todo había que hacerlo rápido porque nos cogieron de sorpresa al sacarnos del proyecto que se iba a presentar. Lo primero en lo que todas coincidimos era en conservar la focalización sobre

¹⁵⁸ Pero la jefatura femenina parece ser una categoría demasiado ambigua que a pesar de evidenciarse por medio de hechos concretos (las mujeres abastecen el hogar y toman la mayor parte de las decisiones) no es asumida por ellas hasta que ocurre un hecho que las vulnera. Si antes ellas tenían un papel fundamental en los espacios donde participaban, no existía la necesidad de plantearlo como una situación reconocida por las instituciones, pues ya existía un previo reconocimiento de parte de sus familias y de su comunidad, siendo estas las legitimadoras de tal papel. Así la jefatura femenina legalizada, se constituye en una estrategia de inclusión, en la búsqueda de reconocimiento y como posibilidad de acceso a recursos, que si bien está enfocada a la búsqueda de satisfactores prácticos, necesariamente implica una identidad asumida estratégicamente (Sañudo, 2003).

mujeres en estado de desprotección, pero ahora con el agravante que ese estado de desprotección también se daba porque las mujeres estábamos siendo víctimas de la guerra o estábamos quedándonos solas porque nuestros maridos se morían en la guerra”. (Entrevista a ex presidenta ANMUCIC. Valencia, enero de 2014).

En este sentido podemos decir que ellas siguen apelando a representaciones tradicionales de género para negociar su propuesta (madre, esposa, cuidadora), pero ahora introducen un aspecto que radicaliza esa primera representación, que es la victimización que enfrentan en un contexto de deterioro de la guerra, situación que las condiciona de manera especial y las sitúa en un nivel de mayor vulnerabilidad, cuestión que posibilitaría un mejor y mayor reconocimiento de sus derechos.

5.2.2.2 ¿Cómo operan las representaciones de género en la negociación?

Es clave resaltar como en la negociación de la ANMUCIC con el Estado se puso especial énfasis en la urgencia de privilegiar a la mujer víctima de la guerra que tuviera bajo su cuidado a hijos e hijas u otros familiares, es decir a la mujer madre y cuidadora pero ahora “más vulnerable que nunca”. Tal como pudimos ver esta representación tiene coherencia con el tipo de representación que se privilegia en el marco neoliberal.

A nuestro modo de ver, dicha coherencia posibilita que las mujeres puedan continuar siendo reconocidas como sujetos de reforma agraria, bajo una identidad legitimada por el patriarcado, la que además es funcional en el nuevo modelo dado que ahora el Estado tiende a focalizar la atención sobre individuos con alto grado de vulnerabilidad; y, más aún sí se trata de mujeres que cumplen roles tradicionales y que están en calidad de víctimas.

Bajo la perspectiva de esta investigación, podemos decir además que las mujeres de ANMUCIC plantearon y usaron la representación de la víctima como una estrategia para avanzar en sus intereses, claramente sin demeritar

que las agresiones estuvieran realmente sucediendo. Creemos que esto se torna funcional, dado que es más fácil hablar al Estado bajo un lenguaje de victimización, que en un lenguaje de derechos; y, más aún a un Estado para el que las políticas sociales neoliberales deben ahora enfocarse a sacar a las personas de la vulnerabilidad para que se transformen en sujetos altamente productivos y no en atender las condiciones estructurales que promueven la exclusión.

Sin embargo tal como aseguran León y Deere (2000) sí bien el uso de esta identidad pudo situarse como estratégico para el momento en el que estaban, implicó que otras identidades de mujeres quedaran al margen del reconocimiento como sujetos de reforma agraria (por ejemplo mujeres pobres campesinas sin hijos ni compañero). En este sentido lo que se puede ver es que solo es posible acceder a tierra si se cumplen con unos requisitos identitarios fijos y limitados.

En cuanto a la titulación conjunta, sobre este aspecto las entrevistadas no refieren que se haya suscitado el debate al interior de la ANMUCIC, lejos de eso, se precisó desde el comienzo que este aspecto quedaría tal cual quedó en la Ley 30 de 1988. Frente a esta cuestión es clave precisar que sí bien en los hombres de las organizaciones la titulación conjunta no se constituyó en un aspecto de alta tensión o contradicción con los intereses de las mujeres cuando se negoció la anterior Ley. En este momento que estamos analizando, esta reivindicación sí generaba tensión entre las líderes de la ANMUCIC y los líderes de las organizaciones mixtas.

Creemos que en el primer momento que se peleó esta reivindicación, los varones campesinos no calibraron las implicaciones que esta decisión tendría para sus intereses. Posterior a la implementación de la Ley 30, es que los hombres de las comunidades y de las organizaciones toman conciencia sobre cómo la titulación conjunta y con ello el reconocimiento de la capacidad de las mujeres de heredar del cónyuge mina el poder que los varones obtenían si una

finca estaba solo a su nombre. Este reconocimiento limita su poder de decisión sobre aspectos que tienen que ver con la pareja y la familia y además posibilita que las mujeres puedan por si mismas acceder a crédito u otros recursos en su calidad de propietarias, aspecto que tiene una alta trascendencia a nivel de su empoderamiento. Sobre este tema, en algunas de las entrevistas realizadas se hace referencia:

“La titulación conjunta que no levantó mucha ampolla cuando se metió en la Ley 30, ya cuando las mujeres lo quisieron meter en la 160, es que generó reacciones porque es que muchos ya primero habían visto que las mujeres exigían su derecho y cuando les titulaban a los dos, pues el hombre para hacer cualquier negocio en el que pusiera de respaldo la finca tenía que contar con el aval de la mujer”. (Entrevista a funcionario INCODER. Bogotá, noviembre de 2013).

“Muchos de los hombres pensaron que la titulación conjunta era una de esas cosas que se podía quitar así no más e iban a seguir con sus privilegios, pues se dieron cuenta que no, que ya no era así y entonces este fue uno de los puntos que nos quisieron quitar en la nueva Ley”. (Entrevista a exlíder de ANMUCIC. Bogotá, octubre de 2013).

Frente a lo anterior, se puede decir además que la tensión que emerge frente a la figura de titulación conjunta evidencia, una tensión entre las representaciones de género que encarnaban las mujeres de la ANMUCIC y los hombres de las organizaciones. Decimos tensión porque las mujeres ahora tenían la certeza que el ser dueñas de la mitad del predio las dotaba de poder y las ubicaba en una posición diferenciada en el hogar y en la comunidad. Mientras que para los varones, la existencia de una mujer propietaria conllevaba a una limitación de su poder y de sus privilegios. Resulta importante matizar lo anterior a través de una entrevista:

“Es que unas y otros leían contrariamente lo que estaba pasando. Mientras que para las mujeres era una opción para transformar su situación y condición, para los hombres significaba un retroceso en sus privilegios”. (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, octubre de 2013).

Por el contrario la representación que las mujeres de ANMUCIC encarnaban como sujetos con capacidad de decisión y de acción por ser propietarias, no generó a nivel de los actores institucionales. Lejos de eso, al Estado en su afán de contar con sujetos útiles al nuevo modelo, comenzó a ver en el empoderamiento de las mujeres, a través del acceso a la tierra (sea individual o a través de titulación conjunta) una posibilidad para activar la productividad del sector rural y una estrategia para la modernización de este sector. Uno de los funcionarios del INCORA, participe de la implementación de la Ley refiere:

“El interés por empoderar a las mujeres era un interés muy neoliberal, no era para que ellas tuvieran derechos, sino que comenzaran a ser productoras como los varones, había que reconvertir a todos y entre ellas había que reconvertir a las mujeres”. (Entrevista a ex funcionario INCORA. Bogotá, octubre de 2013).

Con respecto a la innovación incorporada en la negociación de la Ley 160 con respecto a la participación de las mujeres rurales en los espacios de planeación del desarrollo rural, es de decir que esta organización, al haber alcanzado un nivel de incidencia bastante significativo (dado que en algunos departamentos las líderes hacían parte del Consejo y de otras instancias de planeación, espacios en los que participaban ampliamente no solo para el posicionamiento de sus intereses sino también para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tierra) tenía una mayor madurez para la construcción de propuestas que incorporaran tal componente.

En este sentido podemos decir que estas al encarnar significativas capacidades políticas, habían adquirido no solo reconocimiento del Estado, sino también capacidad con funcionarios y funcionarias, con el fin de lograr el posicionamiento de sus intereses, tal como refiere una de nuestras entrevistadas:

“Nosotras para el 94 ya no éramos las mismas que cuando comenzamos. Antes tímidamente hablábamos. Cuando comenzamos con la organización no estábamos muy versadas, pero en ese momento ya sabíamos a quién dirigirnos y como dirigirnos, ya sabíamos con quién debíamos hablar y cómo debíamos hablarle. Además hablábamos mejor y con razones hablábamos”. (Entrevista a lideresa de ANMUCIC. Bogotá, noviembre 2013).

Lo anterior revela que sus habitus políticos iban configurándose con más fuerza. Esta innovación de los principios de visión y de acción de ellas y de quienes las perciben (Estado, organizaciones y comunidades), facilitó el que ellas pudiesen ubicar las representaciones de género que ellas consideraban las válidas, en el plano político. Pero no solo hablamos de las representaciones útiles para el reconocimiento del sujeto de reforma agraria, sino también que el accionar de ellas posibilitaba que funcionarios y funcionarias, por ejemplo, las percibieran como agentes con capacidad para incidir en lo público y en lo político.

En este sentido se sucede (ya venía sucediéndose en el marco de todos los procesos referenciados) una transformación significativa tanto a nivel de la subjetividad como del ámbito objetivo (habitus), manifestándose en una mayor autoestima, una mayor capacidad política, entre otras cuestiones, que no solo desarrollan las líderes sino también muchas de aquellas que están en las bases. Al respecto consideramos clave citar las siguientes entrevistas:

“Muchas de nosotras y de las que militaban en la organización, ya no éramos lo que éramos cuando comenzamos en la ANUC o en otros espacios. No solo sabíamos cómo meternos en lo institucional pa que nuestros derechos se garantizarán, también sabíamos hablar y hablamos consistentemente con quien sea. No nos daba miedo, nosotras ya no éramos las de antes y creo que en parte eso hizo que nos amedrentaran cuando quisieron omitir nuestros derechos en la propuesta de la Ley 160”. (Entrevista a ex presidenta ANMUCIC. Valencia, enero 2014).

“Yo me acuerdo cuando María comenzó, ella era una campesina que mucho no sabía cómo hablarle al alcalde, ni siquiera a los de las organizaciones, después de todo este proceso, María era una líder reconocida, con un discurso bastante bien estructurado y con una capacidad de liderazgo muy alta”. (Entrevista a ex funcionaria Ministerio de Agricultura. Bogotá, octubre de 2013).

Lo anterior además tiene que ver con la influencia que reciben de otras organizaciones de mujeres (Red Nacional de Mujeres, SISMA Mujer) con quienes han establecido alianzas importantes y con quienes han debatido sobre temas relativos a la ciudadanía, a la igualdad, a la participación política, a los derechos humanos. Temas que ANMUCIC considera de relevante importante para su lucha por la tierra.

En este orden de ideas es clave resaltar cómo el discurso de la ANMUCIC se va perfilando cada vez más, en la medida en que pasa a estructurarse en mayor medida, aprehendiendo y asimilando conceptos relativos al género o contenidos de la teoría feminista, desde lo que ahora hablan sobre sus necesidades y problemáticas. Además en este contexto, la ANMUCIC a través de estos discursos mayormente estructurados comienza a interlocutar activamente con otros actores, en específico aquellos relativos al sistema de cooperación al desarrollo. En estos escenarios hablan con mayor fuerza desde

una perspectiva de DD.HH y DIH y a tener una mayor receptividad (principalmente del sistema de Naciones Unidas), lo cual supuso un involucramiento masivo de la Comunidad Internacional, en el proceso colombiano (que se expresa en recomendaciones, denuncias de la situación y apoyo a los procesos de las mujeres y de la sociedad civil).

Lo anterior es clave reconocerlo, sin embargo es de aclarar que este tipo de discursos no fueron utilizados en la negociación, pues ellas eran conscientes que hablar desde el género, desde el feminismo o desde el derecho a la tierra, podía ser contraproducente para el logro de sus intereses. Es decir podía generar un mayor rechazo o que el gobierno u otros actores no estuviesen receptivos a sus demandas. Les era más funcional hablar desde la victimización o desde el papel de cuidadoras, que desde su ser como sujeto de derechos. Este aspecto es posible intuirlo en una de las entrevistas:

“Nosotras entramos en un proceso bien interesante te digo después de lo que hicimos para la Constitución. Con las de la Red Nacional y otras organizaciones, nos comenzamos a formar en lo de la perspectiva de género, en derechos humanos y también en el feminismo, pero esto sabíamos que era para nosotras para fortalecernos nosotras, pero no para hablarles a los compañeros o a los hombres en general, porque sabíamos que esto nos iba a dividir con ellos y no nos iba a unir”. (Entrevista a ex presidenta de ANMUCIC. Bogotá, enero 2013).

Uno y otro aspecto referenciado con anterioridad permea la introducción en el debate de consideraciones sobre la participación de las mujeres rurales. Sí bien en la Ley 30 de 1988 se reconoció la articulación de la ANMUCIC en espacios consultivos, ahora las mujeres querían ir más allá al reivindicar la participación en todos los escenarios donde se planifica el desarrollo rural. Este aspecto es ejemplificado por algunas de las entrevistas realizadas:

“A nosotras nos pareció clave aprovechar lo que se decía en la Constitución y como sabíamos que en el Bloque de Constitucionalidad se incorporan los tratados internacionales de derechos humanos, sabíamos que la CEDAW estaba allí y nos amarrábamos a lo que decía. Así nos peleamos el derecho a participar en los espacios de decisión, no solo en la Junta Directiva del INCORA, también en los Comités de Política y otros donde se decidieran temas sobre el desarrollo rural”. (Entrevista a lideresa de ANMUCIC. Bogotá, octubre 2013).

A nuestro modo de ver el proceso referenciado reta totalmente las representaciones de género tradicionales, mediante las que se liga a las mujeres con el cuidado. Sin embargo esta innovación en las representaciones, la que claramente se plasma en uno de los puntos que las mujeres presionan para que se incorpore en la nueva Ley, genera grandes tensiones con los varones de las organizaciones.

Dichas tensiones emergen no solo porque para ellos resultaba difícil el cambiar de la noche a la mañana la percepción tradicional sobre las mujeres y además porque consideran que estas capacidades y este tipo de acciones minimizan su poder de decisión y de acción, no solo a nivel del movimiento, las bases, sino también cuando deben interlocutar con el Estado.

Bajo esta lógica los varones de las organizaciones, para desvirtuar el trabajo de las mujeres, vuelven a apelar a imágenes y significados negativos sobre la feminidad. Estrategia encaminada a descalificar el trabajo organizativo que las mujeres de ANMUCIC venían haciendo. Además, prácticamente pasan a omitir en su proyecto tanto los avances logrados en la Ley 30, como las nuevas reivindicaciones. Este aspecto es referenciado en una de las entrevistas:

“Yo hacía parte del INCORA y de la Junta Directiva, yo estaba muy cercano a la lucha de las mujeres porque a ellas las conocí desde la

ANUC, pero lo que yo veía es que el que el Estado les diera voz y voto a ellas y además ellas quisieran más voz y voto, pues eso generaba una cosa fea en los hombres. Ellos decían que ellas no podían participar porque su lugar era la casa y porque no iban a lograr lo que ellos podían lograr". (Entrevista a funcionario INCODER. Bogotá, octubre de 2013).

Por otra parte un aspecto sobre el que es clave resaltar, es que sí bien las mujeres en sus propuestas consideraban clave el acceder en igualdad de condiciones que los varones a los recursos productivos, con el fin de no solo empoderarse económicamente sino también avanzar en el mejoramiento de su posición y condición, pensamos que cayeron en el juego del nuevo gobierno, al asumir que el acceso igualitario no requería de medidas afirmativas.

En este sentido se limitaron a priorizar sobre el acceso a la propiedad, pero no pelearon porque se tuvieran en cuenta las condiciones estructurales que les impedían el acceso efectivo a esta, es decir en condiciones de igualdad con los varones. Creemos que esto se debe al momento en el que estaba la ANMUCIC y a la premura de la negociación, marco temporal en el cual se dificultaba llevar a cabo análisis profundos sobre la realidad de las mujeres en las zonas rurales del país.

En relación a lo anterior es factible entrever como el acceso a la tierra que ellas pelean, aun con medidas de priorización, está anclado con las representaciones que ellas tienen del varón. En el imaginario de ellas, incluidas las de ANMUCIC, los hombres se entronizaban como el sujeto productor, por excelencia; y, quien debía ser considerado (tanto institucional como en las comunidades y en las organizaciones) como el patrón de sujeto de derechos. Bajo esta perspectiva, pensamos que el esfuerzo, se limita a pedir las condiciones que en general habían sido otorgadas a los varones en el ámbito productivo y público.

En este sentido podemos decir que las mismas reivindicaciones que lanzan las mujeres están imbuidas de sesgos de género, pues homologa las expectativas y necesidades de los varones a ellas con la finalidad de lograr convertirse en sujetos activos en el nuevo modelo de desarrollo rural. Ellas quienes, claramente y no por ser menos que los hombres, no consideran que han sido sujetos modelados por el patriarcado y que por ello en ocasiones no reúnen las capacidades y habilidades para insertarse activa y eficientemente en un sector que ha sido diseñado y mantenido tanto institucional como culturalmente por los hombres y para los hombres.

Frente a lo anterior es de resaltar que el tipo de mujer que se quiso articular como el sujeto de derecho de la reforma agraria, es una mujer validada y legitimada en el marco del patriarcado (madre y cuidadora) a la que se le quiso y quiere otorgar, aquellas condiciones, que a los hombres, les han sido útiles para consolidarse como el paradigma del sistema productivo.

Finalmente mediante la concertación de la propuesta con los actores devino por un lado en que se ratifica con mayor vigor el derecho de las mujeres rurales a la tierra y como sujetos de los programas económicos y sociales, encaminados a mejorar las condiciones y la situación del sector rural. Así la Ley 160 de 1994 recoge los avances formulados en el texto de la Ley 30 de 1988, a la que deroga, mediante el Artículo 111, sobre la equidad de género y se constituye en un puntal para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales.

Por otra parte mediante esta se reafirma la titulación conjunta, la priorización de las mujeres jefas de hogar en el acceso a la tierra y a los recursos productivos; se postula la participación equitativa de las mujeres rurales, como clave para la planeación de los programas de desarrollo rural; y, se establece medidas afirmativas para la promoción del acceso de las mujeres rurales a la tierra y a los recursos productivos.

Ejemplo de ello, es lo estipulado, en el Artículo 7, mediante el que se establece que el Estado implementará programas especiales para “mujeres campesinas jefes de hogar y a las que se encuentren en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez y carezcan de tierra propia o suficiente”; y, en el Artículo 24, se establece que la ocupación de la ANMUCIC cupo en la Junta Directiva del INCORA está relacionado directamente con el papel que ellas tanto en el nivel nacional como regional, deberán cumplir como veedoras para comprobar que efectivamente funcionarios y funcionaras cumplan con lo estipulado en la Ley de manera efectiva.

6. Conclusiones

Tal como se ha planteado a lo largo de este documento, el estudio se centró en la negociación que se establece entre agentes sociales, en momentos específicos y sobre un particular, que es la incorporación de las medidas de género en la política de tierras. Estos agentes sociales, en cuanto sujetos que encarnan una serie de principios de visión y de acción (*habitus*), bajo los que se orientan y ordenan sus valoraciones, percepciones y las acciones que realizan.

El surgimiento de los agentes sociales, es una cuestión que debe ser pensada como el producto directo de la configuración histórica de la estructura de la tenencia de la tierra, en la que estos van ocupando un lugar diferenciado. Tal cuestión ha sido determinante en el tipo de capitales a los que acceden y por ende de las posibilidades que tienen de posicionarse en el campo donde se negocian los aspectos concernientes a la propiedad de la tierra y además en el conseguir sus objetivos.

A lo anterior hay que agregar, que tanto el acceso a los capitales (económico, político, social, cultural y simbólico), como las posibilidades de participar y ganar, en los ámbitos de la negociación, va a depender de cómo los agentes han sido “configurados”, y su aceptación, bajo la impronta de la lógica androcéntrica. En el marco de la cual la realidad, los cuerpos, los objetos, las subjetividades, las maneras de interpretar y actuar sobre el mundo devienen de “esquemas inconscientes de percepción y de apreciación”, que bajo la impronta de “las estructuras históricas del orden masculino”, se han incorporado en la subjetividad y en la materialidad de los cuerpos.

Mediante las comprensiones y explicaciones del mundo que se acuñan bajo esta lógica, los sujetos y la sociedad producen y organizan la realidad como una estructura, en la que se opone lo masculino a lo femenino y en la que el primero, por lo general ocupa el lugar privilegiado. Tal oposición, claramente

media en la valoración de hombres y mujeres y por ende en sus posibilidades de ser reconocidos como sujetos de reforma agraria.

En este sentido tanto el campo de la significación como el de la acción, se encuentran mediados por la oposición diferencial, que conlleva a una naturalización de la relación entre dominador y dominado. Así las representaciones de género se constituyen, no solo en el producto de tal división, sino en una manera de, a través de su circulación, naturalizar la diferencia y lo que de esta se desprende.

Esta cuestión supone que las mujeres campesinas en general, han tenido menos posibilidades de acceder a capitales, porque se las dispone a ser campesinas (sumemos la lógica androcéntrica con el hacer parte de una clase social – el campesinado- que en general ha ocupado una posición marginal en la estructura de la tenencia de la tierra), y por ende han tenido menores posibilidades de ubicar sus intereses en el plano de la negociación.

Sí bien, tal como se mostró a lo largo del documento, estas dado que no contaban con los capitales (político, social, económico y simbólico) “para jugar el juego correctamente” entraron a la negociación encarnando representaciones de género alineadas con la lógica androcéntrica (por lo menos durante el primero momento: ley 30 de 1988).

Apelando a imágenes y significados del ser mujer aceptados y legitimados social y culturalmente (cuidadoras, madres, vulnerables), reivindicaron su derecho a la tierra (titulación colectiva y priorización en los programas de reforma agraria), como un derecho soportado en la naturalización que de lo femenino se ha hecho históricamente.

En este contexto se esencializó un sujeto femenino que fundamentalmente afianza su identidad en el cuidado de los otros o en relación siempre con otro u otra (madre, esposa, hermana, compañera). Desde esta categoría se invoca

otras representaciones (las que serán más claras en la negociación de la Ley 160 de 1994), la de ser sujetos políticos con capacidad para impulsar procesos de transformación social. Consideramos entonces que a través de la esencialización de una categoría desde la que se definía y validaba lo femenino (fundamentalmente la del cuidado), ellas buscaban ser valoradas como sujetos con potencial para aportar al desarrollo de sus comunidades y a la dinamización de la economía campesina.

De acuerdo con lo anterior, consideramos, que en este proceso el uso de representaciones asociadas al cuidado, se tornó en una cuestión estratégica. Afirmamos esto, en la medida en que a través del poner en circulación un significado del ser mujer tradicional y aceptado socialmente, a lo que apelaban era al lograr mejores condiciones materiales, que les permitieran mejorar no solo sus condiciones de vida, sino su posición en la sociedad, es decir el empoderamiento en todos los ámbitos.

Este aspecto, nos permite intuir otra cuestión importante. Tal como se puede observar en el capítulo cuatro, en el que se plasman consideraciones sobre la negociación de la Ley 30 de 1988, las mujeres de ANMUCIC mediaron el reconocimiento que querían alcanzar, a través de la apelación a esencialidades de ser mujer. Conseguido el reconocimiento y en el marco de otros procesos sobre los que también damos cuenta, ellas fueron adquiriendo mayor poder, es decir tuvieron mayores posibilidades de acceso a diferentes capitales.

Este aspecto conllevó, a que en la siguiente negociación la concerniente a la Ley 160 de 1994, aunque sus demandas habían sido excluidas del programa campesino, las mujeres rurales reivindicaron otros derechos, como el de la participación; y, además comenzaron a interpelar a los otros agentes, a través de un discurso más estructurado, en el que incorporaron cuestiones tales como la igualdad y la no discriminación.

De acuerdo con esto, planteamos que a través tanto de la esencialización, en la que parece estar inmersa una apuesta por la des esencialización (cuestionamiento de las identidades de género), ellas buscaban entrar y posicionarse en la escena de una movilización social de carácter eminentemente masculino; y, además perseguían el constituirse en agentes claves de interlocución con el Estado en sus diferentes niveles (nacional, departamental y municipal).

En este sentido consideramos que éstas, a través de la organización, se configuran como agentes sociales activos en la producción de representaciones y significados, que sí bien no se desligan de los tradicionales, de alguna manera retan los modelos establecidos a nivel de la familia, comunitarios, del movimiento social y la sociedad en general.

Además es de resaltar, como el reconocimiento en un primer momento, les conllevó posteriormente, al afianzamiento de alianzas con otras organizaciones de mujeres, con quienes debatieron y reflexionaron sobre una serie de problemáticas que afectándolas por ser mujeres, cobran significativa diferencia, de acuerdo a la identidad de mujer que encarnan.

En este contexto, las mujeres de ANMUCIC, tomaron conciencia, sobre la importancia que adquiere pensar las diferencias que emergen en el marco de la categoría mujer rural; y, como estas diferencias implican también disímiles reivindicaciones frente al derecho a la tierra. Es de decir que este aspecto había sido abordado, en el momento en que se buscaba el fortalecimiento de la organización (1987), pero fue una cuestión que quedó subsumida a la búsqueda de acuerdos mínimos entre la diversidad de mujeres que componían la Asociación. Aspecto que ellas en el marco de la negociación de la Constitución de 1991, identifican como una decisión que conllevó a un alto costo político, en la medida en que, en las primeras etapas de la ANMUCIC, supuso la homogenización de representaciones en pos del logro de intereses comunes.

Estas alianzas permitieron no solo el intercambio de experiencias sino también de discursos y prácticas, cuestión que bajo la perspectiva de esta investigación, conllevaría a una ampliación no solo de las representaciones de género, sino también de los intereses a perseguir. En este orden de ideas, es de recalcar como dicho intercambio, incide en la mejor estructuración de sus discursos. Por ejemplo, en el marco de los cuales la cláusula de igualdad cala con tal fuerza, que desplaza un poco las representaciones de género que fundamentaban las reclamaciones del acceso a la propiedad de la tierra, las que habían operado con fuerza en la negociación anterior.

Apelar a la igualdad y la prohibición de la discriminación en razón del sexo, se configuran como uno de los cimientos desde los que comienzan a construir sus reivindicaciones. Al ser asumidas, dichas cláusulas, como una condición política que el Estado debe garantizar a ciudadanos y ciudadanas, ellas comenzaron a reclamar a los agentes del nivel gubernamental, la urgencia de desplegar las estrategias necesarias para pasar del reconocimiento formal a los hechos.

Por otra parte, debemos considerar que las alianzas establecidas con las mujeres a las que, en el marco de este estudio, hemos llamado femócratas y con funcionarios sensibles al género, conllevaron, a que las mujeres de ANMUCIC, contaran con capitales sociales (en el que podemos incluir el apoyo de estos agentes), los que a nivel de la negociación, les permitieron el posicionar sus intereses y avanzar en sus logros. Estas conexiones, sobre todo las que mantenían con las femócratas, bajo nuestra perspectiva, además propiciaron una ampliación en los principios de visión y de acción, que encarnaban las mujeres rurales, lo cual tuvo efecto en la estructuración de sus demandas y reivindicaciones.

En relación a lo anterior, también es de considerar, que la existencia de un ambiente institucional propicio, en el que se instaló con fuerza la necesidad de

incorporar el género a la planeación del desarrollo rural, facilitó el que las mujeres rurales, accedieran a capitales culturales. A través de la capacitación, en temas variados (organizativos, productivos, de planeación, derechos), ellas adquirieron una serie de elementos, que les permitieron articular mejor sus demandas.

En cuanto a las representaciones que encarnaron los diferentes agentes, podemos decir, que estas se mueven en dos niveles, relacionados entre sí. Por un lado es palpable la generalizada identificación de las mujeres como cuidadoras y la valoración, del cuidado como si fuera una de las principales actividades, sino la más. Con ello la valoración social y económica de las actividades que realizan las mujeres campesinas, es casi nula, sí estas no se encuentran referidas a su papel como cuidadoras.

Así, las mujeres no son consideradas de manera autónoma, sino en relación con otros, como: madres, esposas, hijas, con lo cual se invisibilizan sus propias necesidades y experiencias. En esta perspectiva la familia es la unidad de intervención más no las mujeres y se apela a las mujeres como sujeto de derechos, solo sí su estatus se corresponde con el de cuidadora.

Por otro lado, sobre todo en el plano gubernamental, pudimos ver cómo se privilegia a las mujeres como sujeto de reforma agraria, en relación a su papel como productoras, en un contexto de modernización del agro (que sobre todo se sucede con la implementación de las políticas neoliberales en los noventa). Se considera clave el dotarlas de insumos para la producción, con miras a constituir las en sujetos eficientes para el nuevo modelo. La tendencia ha sido la de propiciar, una ampliación de los roles de las mujeres, en virtud de su capacidad productiva, pero sin omitir su capacidad de cuidar.

Debemos considerar que bajo el modelo neoliberal, se propone mejorar la eficiencia de las mujeres rurales a partir de sus roles reproductivos: el control del crecimiento de la población, el ser amas de casa, entre otras funciones

(Ospina, 1998). Esto quiere decir, que las mujeres son vistas a partir de la ambivalente noción propia de tal modelo, que las incorporan al desarrollo y al mundo económico (porque garantizan mayor productividad), sin que dejen de lado sus funciones reproductivas y de cuidadoras.

En relación a lo anterior, podemos decir, que el reconocimiento del derecho a la tierra de las mujeres rurales, en el marco de la implementación de políticas neoliberales, se constituye en una estrategia para, a través de la articulación de estas en lo productivo, producir tipos de sujetos, cuyas características o rasgos les permitirán ser funcionales al sistema.

En este sentido, el poner en circulación nuevas representaciones de género, ligadas a la capacidad de las mujeres para ser productivas y aportar al desarrollo rural y a la dinamización de la economía, a través del reconocimiento de su derecho a la tierra, propicia la asimilación de una serie de imágenes y representaciones “convenientes” sobre los sujetos y su papel en el nuevo modelo. Como señala Lauretis (1989, pág. 25) “la construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género y de discursos institucionales con poder para controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e implantar representaciones de género”.

Tal como se mostró a lo largo de este documento, además de que se significa a las mujeres rurales, en el marco del neoliberalismo como productivas, también se apela a situarlas como sujetos de intervención de la política social, en razón de representarlas como vulnerables y víctimas (significados que materialmente existen y que también ha sido reivindicada por ellas en relación con los efectos que experimentan con el deterioro del conflicto armado). Esta asignación de imágenes y representaciones basadas en la fragilidad, está encaminada a constituir la como un sujeto de intervención de las políticas sociales, intervención que también está encaminada a transformarlas en un sujeto coherente con las necesidades del modelo.

En cuanto a los varones, campesinos tal como se demostró a lo largo de los últimos capítulos, estos en general percibían a las mujeres bajo la perspectiva de ser seres que fundamentalmente tenían como rol principal el cuidado. Bajo esta perspectiva aceptaron, pero con gran reticencia, que el acceso a la propiedad de la tierra, tuviese otro significado para las mujeres.

Dicha reticencia, podemos decir que está directamente relacionada con los principios de visión y de acción, que éstos encarnaban, como sujetos sociales “configurados” como tales en el marco de la lógica androcéntrica. Pero también, los campesinos, sobre todo los pertenecientes al movimiento de la lucha por la tierra, veían en las reivindicaciones de la ANMUCIC, un proceso que podía desestabilizar los procesos organizativos, consolidados y afianzados históricamente.

Esta cuestión se explica, porque el campesinado organizado, había interiorizado (habitus político) una identidad como clase social rural, la que se conformó en directa relación con su posición marginal en la estructura de la tenencia de la tierra. En este sentido, la lucha particular que entablaron las mujeres de ANMUCIC, fue percibida como un elemento desestabilizador de los procesos organizativos, en la medida en que estos se concebían como procesos que emergían de la lucha de clases.

7. Bibliografía

- Ahumada, C. (2002). La ideología neoliberal: una justificación teórica del predominio de los poderosos. *Papel político*, Vol. 11, N°1, 37-58.
- Albán, A. Reforma y contrareforma agraria en Colombia. *Revista de Economía Institucional* Vol 13 N° 24 327-356.
- Alonso, E. El estructuralismo genético y los estilos de vida: consumo, distinción y capital simbólico en la obra de Pierre Bourdieu. Recuperado el 05 de septiembre de 2014, de http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/c_lecciones/LM-Alonso consumo.PDF
- Amigot, P., Pujal, M. (2006). El binarismo de género como dispositivo de poder social, corporal y subjetivo. *Quaderns De Psicologia*, Vol. 12, N° 2, 131-148.
- Amigot, P., Pujal, M. (2009). Una lectura del género como dispositivo de poder. *Sociológica*, año 24, número 70, mayo-agosto de 2009, pp. 115-152.
- Amorós, C. (1985). *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. Barcelona, Anthropos.
- Amorós, C. (1997). *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad*. Madrid. Ediciones Cátedra.
- Araya, S. (2002). *Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión*. Cuaderno de Ciencias Sociales 127. San José: FLACSO.
- Arango, L. (2002). Sobre dominación y luchas: Clase y género en el programa de Bourdieu. *Revista Colombiana de Sociología*, VII, (1), 100 -117.
- Ausdal, S. (2008). Ni calamidad ni panacea: una reflexión en torno a la historiografía de la ganadería colombiana. En A. Flórez-Malagón (Ed.), *El poder de la Carne* (pp.28-47). Bogotá: Editorial Javeriana.
- Bakker, I. (1999). Dotar de género a la reforma de la política macroeconómica en la era de la reestructuración y el ajuste global. En C. Carrasco (Ed.), *Mujeres y economía, nuevas perspectivas para viejos y nuevos problemas* (pp. 245-280). Barcelona: Icaria.
- Balcázar, A. (2004). *Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia*. Bogotá: SAC.

- Bejarano, J. (1985). *Economía y poder. La SAC y el desarrollo agropecuario colombiano, 1871- 1984*. Bogotá: SAC-CEREC.
- Bejarano, J. (1987). *La historiografía económica sobre los siglos XIX y XX en Colombia: resultados y vacíos predominantes*. Bogotá: FINES.
- Bejarano, J. (1989). Cien años de economía colombiana, introducción. En: A, T. *Nueva Historia de Colombia V*, pp. 5-7. Bogotá: Planeta.
- Bejarano, J. (1994). Historia económica y desarrollo. La historiografía económica sobre los siglos XIX y XX, CEREC, 1994, Bogotá.
- Bejarano, J. (1997). *Políticas agrícolas en los países de la comunidad Andina: un análisis comparativo*. Lima: IICA-Centro Regional Andino.
- Bejarano, J. (2000). Ética y Economía. *Revista de Economía del Rosario* 1, Vol. 3.
- Berriain, J. (1990). *Representaciones colectivas y proyecto de modernidad*. Barcelona: Anthropos.
- Berger, P., Luckmann. (1968). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Bohorquez, J., O'Connor, D. Movimientos sociales rurales colombianos: de la resistencia a una cultura política alternativa en un mundo transnacional. *Suma de negocios* Vol 3 N° 1 65-87.
- Bourdieu, P. (1980). *El sentido práctico*. Madrid: Taurus.
- Bourdieu, P. (1985). *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*. Madrid: Akal.
- Bourdieu, P. (1988). *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.
- Bourdieu, P. (1991). *Lenguaje and simbolic power*. Ed: J, Thompson. Harvard. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1993). *Sociología y Cultura*. Barcelona: Grijalbo.
- Bourdieu, P. (1997). *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Barcelona: Anagrama.
- Bourdieu, P. (2001A) *Cuestiones de sociología*. Madrid: Itsmo.
- Bourdieu, P. (2000B). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- Bourdieu, P. Estrategias de reproducción y modos de dominación. *Colección pedagógica Universitaria* N° 37 – 38.

- Bourdieu, P. (2004). *(El baile de los solteros*. Madrid: Anagrama.
- Buendía, D. *¿Victimas sin tierra o Mujeres sin derechos? Un dilema aún sin resolver*. Tesis sin publicar. Facultad de Ciencias políticas y Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Bruel, T. (2008). *Representaciones sociales de género: un estudio psicosocial acerca de lo masculino y lo femenino*. Tesis no publicada, Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
- Butler, J. (2001). *Mecanismos psíquicos del poder*. Ediciones Cátedra. Valencia.
- Butler, J. (2007) *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.
- Cajamarca, L. *La trampa de la igualdad: neoliberalismo y políticas públicas para la mujer rural*. Tesis sin publicar. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Calatrava, J. Muer y desarrollo rural en la globalización: de los proyectos asistenciales a la planificación de género. *Globalización y mundo rural* N° 803 73- 101
- Campillo, F. (1989). Género y desarrollo rural: Una relación desigual. *En el desarrollo rural en América Latina hacia el siglo XXI*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Charlesworth, H. (1997). ¿Qué son los derechos humanos internacionales de la mujer. En: R. Cook (Ed.), *Derechos humanos y de la mujer. Perspectivas nacionales e internacionales*. Bogotá: PROFAMILIA.
- Cardoza, G. (2005). *La transición y adaptación del INCORA de un modelo estructural e interventor al modelo neoliberal facilitador del mercado de tierras*. Tesis no publicada. FEAR. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-
- Colmenares, G. (1987). *Historia económica y social de Colombia*. Bogotá: Planeta.
- Córdova, R. (2003). El concepto de habitus de Pierre Bourdieu y su aplicación en los estudios de género. *Colección Pedagógica Universitaria* 40, 1- 12.
- Corrales, E. J. Forero (2007). *La reconstrucción de los sistemas de producción campesinos. El caso de Asproinca en Riosucio Supía*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

- Cuértara, M. (2008). La transformación de las representaciones de género en la educación superior. *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades*, SOCIOTAM, VIII, (1), 155-174.
- De Lauretis, T. (1989). *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*, London, Macmillan Press.
- Díaz, D. (2002). Situación de la mujer rural colombiana. Perspectiva de género. *Cuadernos de Tierra y Justicia* N° 9. Bogotá: ILSA.
- Díaz, D., Otalora, F. *La mujer campesina colombiana en su lucha por la reforma agraria*. Canadá: Rights and Democracy. International Centre for Human Rights and democracy development.
- Durkheim, E. (1989). Representations individuelles et representations collectives. *Revue de Métaphysique et de Morales* 6.
- Durkheim, E. (2011). Las representaciones colectivas como nociones-tipos en las que participant los individuos. *Aproximaciones teóricas, nociones de prácticas y representaciones*, Sesión1.
- Duveen, G., Lloyd, B. (2003). The significance of social identities. *British journal of Social Psychology*, 25,219-230
- Eicher, V., Emery, V., Maridor, M., Gilles, I. & Bangerter, A. (2011). Social representations in psychology: A bibliometrical analysis. *Papers on Social Representations*, 20,1-11.
- Escobar, E. (Ed). (2001). Política Cultural y Cultura Política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales en Latinoamérica. Bogotá: TM Editores.
- Escobar, E. (2007). *La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Caracas: Editorial el perro y la rana.
- Fals Borda, O. (1976). *Capitalismo, hacienda y poblamiento en la Costa Atlántica*. Bogotá: Punta de Lanza.
- Fajardo, D. (1991). *Reforma Agraria en la solución de conflictos armados*. Recuperado el 05 de enero de 2014, de http://www.mamacoca.org/e_book_Compendio_rural/Dario_Fajardo_Colombia_Reforma_Agraria.htm
- Fajardo, D. (2002). *Situación y perspectivas del desarrollo rural en el contexto del conflicto armado*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

- Fernández, J. (2013). Capital simbólico, dominación y legitimidad. Las raíces weberiana de la sociología de Pierre Bourdieu. *Papers Revista de Sociología*. Vol 98, No 1 33-60.
- Gaitán, G. (1984). *La lucha por la tierra en la década del 30*. Bogotá: Ancora Editores.
- Garcia, A. (1973). *Sociología de la Reforma Agraria en América Latina*. Bogotá: Cruz del Sur.
- García, A. (2006). El problema agrario de América Latina. Recuperado el 14 de octubre de 2013, de www.revistas.unal.edu.co/index.php/revistaun/article/download/.../12367
- Gayle, R. (1986). El tráfico de mujeres: Notas sobre la “economía política” del sexo. *Nueva antropología*, Vol.VIII, nº30, México.
- Geertz, C. (2003). *Conocimiento local. La interpretación de las culturas*. Barcelona: Paidós Básica.
- Giménez, G. (2002). Introducción a la sociología de Pierre Bourdieu. *Colección Pedagógica Universitaria*, (37), 1 – 11.
- Gilhodes, P. (1976). *Las luchas agrarias en Colombia*. Bogotá: ECOE ediciones.
- Grupo Memoria Histórica. *Informe Basta Ya. Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Gutierrez, A. (2005). Poder y representaciones: elementos para la construcción del campo político en la teoría de Bourdieu. *Revista Complutense de Educación*, Vol. 16 (2) 373 – 385.
- Gutierrez, A. (2004). Poder, hábitos y representaciones: recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu. *Revista Complutense de Educación*, Vol. 15 (1) 289 – 300.
- Hernández, M. (1991). *La constitución de las haciendas en la Costa Caribe*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Howarth, C., Volklein, C. (2005). A review of controversies about social representation theory: a british debate and psychology. *Culture and Psychology*, 11 431-454.
- Hernández, E. (2006). La impronta práctica para la formulación de sentido. *Voces y contextos* núm II, año I.

- Ibarra, I. (2007). *Transformaciones identitarias de las mujeres como resultado de su participación política en las guerrillas y en las acciones colectivas por la paz en Colombia*. Tesis doctoral no publicada, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
- Jahoda, G. Critical notes and reflections on social representations. *European Journal of Social Psychology*, 8 195- 209.
- Jaramillo, C. (1998). La agricultura colombiana en la década de los 90” *Revista de Economía de la Universidad del Rosario* II 9-39. Bogotá.
- Jodelet, D. (1986). La representación social: fenómeno, concepto y teoría. En: S. Moscovici: *Psicología Social. Vol II*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Jodelet, D. (2006). El Movimiento de Retorno al Sujeto y el Enfoque de las Representaciones Sociales. *Revista Cultura y representaciones sociales*, VII, (1), 100 -117
- Kaldor, M. (2001) *New and Old Wars—Organized Violence in a Global Era*. Stanford: Stanford University Press.
- Kalmanovitz, S. (1989). *La encrucijada de la sinrazón y otros ensayos*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Kalmanovitz, S. (2008). *Nueva Historia Económica de Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Kalmanovitz, S. (2009). *Economía y nación una breve historia de Colombia*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Kalmanovitz, S., Lopez, H. (2005). Aspectos de la agricultura colombiana en el siglo XX. En: S. Kalmanovitz. *La agricultura colombiana en el siglo XX*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica,
- Lamas, M. (Comp.) (2003). *El género, la construcción cultural de la diferencia sexual*. México: Universidad Autónoma de México.
- Leon, M., y Deere, C. (2000). *Género, Propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- León, M. (2006). Neutralidad de género y políticas públicas en las reformas agrarias en América Latina. *Revista Nómadas* N° 24 44-21. Bogotá: Universidad Central.

- Lobato, M. (2009). *Una relectura del pensamiento sociológico de Émile Durkheim*. México: Universidad Iberoamericano.
- Lutz, B. (2006). El desarrollo rural: discursos oficiales y prácticas normativas en México. *Revista Pampa* 02 11-25. Recuperado el 13 de enero de 2013, de dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3289176.pdf
- Machado, A. (2001). El café en Colombia a principios del siglo XX. . En G. Misas (Ed.), *Desarrollo Económico y social en Colombia en el siglo XX*. (pp.77-100). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Machado, A. (2002). *De la estructura agraria al sistema agroindustrial*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Machado, A. *La academia y el sector rural*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 10 de diciembre de 2013, de http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/64/la_institucionalidad.pdf
- Machado A. (2009). Ensayos para la historia de la Política de tierras en Colombia. Bogotá, Colombia: Editorial Gente Nueva.
- Machado, A. (2011). *El desarrollo rural y la institucionalidad*. Bogotá: PNUD.
- Machado, A., Samaca, H. *Las organizaciones del sector agropecuario. Un análisis institucional*. Bogotá: TM Editores.
- Machado, A., Vásquez, R. (2005). *Políticas agrarias durante el gobierno de Barco 1986 – 1990*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Markova, I. (2006). Sobre las formas de interacción del reconocimiento social. En: V., Albúndiz (Coord.) *Representaciones sociales, alteridad, epistemología y movimientos sociales*. Guadalajara. Universidad de Guadalajara.
- Martín, E. El concepto de campo como herramienta metodológica. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* pp 11 – 33.
- Martínez, J. S (2013). Las clases sociales y el capital en Pierre Bourdieu un intento de aclaración, Materiales de trabajo. Recuperado el 05 de enero de 2013, de <http://josamaga.webs.ull.es/Papers/clase-bd-usal.pdf>.
- Mato, D. (2001). *Producción transnacional de representaciones sociales y transformaciones sociales en tiempos de globalización*. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado el 13 de octubre de 2013, de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/gt/uploads/20100912040753/9mato.pdf>

- Medrano, D. (1991). *Mujer y modernización agropecuaria: balance, perspectivas y estrategias*. San José de Costa Rica: IICA.
- Medrano, D., Villar, R. (1989). *Mujer campesina y organización rural en Colombia*. Bogotá: CEREC.
- Meertens, D. (2000). *Ensayos sobre tierra, violencia y género*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Mejía, C. (2006). *Historia de ANMUCIC*. Bogotá: SISMA Mujer.
- Melo, J. (1987). *Predecir el Pasado: Ensayos de Historia de Colombia*. Bogotá: Editores Norma.
- Mesa Mujer y Conflicto Armado. (2000). *Una década de violaciones a los derechos humanos de las mujeres*. Bogotá.
- Mora, Martín. (2002). La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. *Revista de Pensamiento e Investigación social* N°2 pp 78-102. Recuperado el 12 de noviembre de 2013 de <http://ddd.uab.cat/record/5237>.
- Mondragón, H. (2002). *La organización campesina en un ambiente de terror*. Bogotá. ILSA.
- Moscovici, S. (1979). *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Buenos Aires: Huemul S.A.
- Moscovici, S. (1981). *On social representations*. In J.P. Forgas (Ed.)
- Moscovici, S. (Comp.) (1989). *Psicología social*. Madrid: Editorial Paidós.
- Moser, C. (1998). *Planificación de género. Objetivos y obstáculos. Género en el Estado, estado del género*. Recuperado el 05 de agosto de 2013, de <http://www.mujeresdelsur.org/portal/images/descargas/moser.%20planificacion%20de%20genero..pdf>
- Múnera, L. (1998). 1998. *Rupturas y Continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia, 1968-1988*. Bogotá: IEPRI.
- Muñoz, P., Sañudo, M. (2008). *Mujeres rurales, derecho a la alimentación y TLC*. Bogotá. Documento de trabajo.
- Muñoz, P. (2002). *La política pública para el desarrollo de la mujer rural de 1994 en Colombia: aportes para su análisis*. Tesis de maestría no publicada. FEAR, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

- Muñoz, P. (2003). Aportes para el análisis de la política pública para el desarrollo de la mujer rural de 1994 3n Colombia. *Cuadernos de Desarrollo Rural* (50) 98-124.
- Nivón, E., Rosas, A. (1991). Para interpretar a Clifford Geertz. Símbolos y metáforas en el análisis de la cultura. *Alteridades* pp 40-49. Recuperado el 10 de octubre de 2013, de http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/ana/alt-1-05_nivon_rosas.pdf
- Nussbaum, M. (2002). *Las mujeres y el desarrollo humano*. Barcelona: Editorial Heider.
- Ortner, S. (1982). *La teoría antropológica desde los años sesenta*. Recuperado el 10 de diciembre de 2013, de www.unc.edu/.../la%20teoria%20antropologica%20desde%20los%20años.
- Ortner, S. Withead, H. (2003). Indagaciones acerca de los significados sexuales. En: M, Lamas (Comp.). *El género, la construcción cultural de la diferencia sexual*. México: Universidad Autónoma de México.
- Ospina, R. *Para empoderar a las mujeres*. Bogotá: IICA.
- Ochoa, D., Restrepo, D. (1997), "Balance político de la descentralización, Descentralización, desarrollo institucional y democratización. Bogotá: Escuela Superior de Administración Pública.
- Olsen, F. (1990). El sexo del derecho. En: D. Kairys (Ed.), *The Politics of Law* (pp452.467). Traducción de Mariela Santoro y Christian Courtis. Nueva York: Pantheon, 1990. Recuperado el 20 de septiembre de 2013, de <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-sexo-del-derecho.pdf>
- Palacios, M. (1989). *El café en Colombia (1850-1970) Una historia económica, social y política*. En: Nueva Historia de Colombia. Tomo III. Bogotá: Editorial Planeta.
- Peláez, M., y Rodas, L. (2002). *La política de género en el Estado colombiano: Un camino de conquistas sociales*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Pérez, E., Farha, María (1998). *De lo invisible a lo visible: hacia un enfoque de género en el desarrollo rural*. Bogotá: DNP. GTZ. Bogotá.
- Piñero, S. (2008). La teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de Pierre Bourdieu: Una articulación conceptual. CPU - e, *Revista de Investigación Educativa*, 7. Recuperado el 05 de septiembre de 2013

de http://www.uv.mx/cpue/num7/inves/pinero_representaciones_bourdieu.html //

Plascencia, J. (2007). *Elementos de la construcción, circulación y de representaciones colectivas en la obra de Émile Durkheim*. Recuperado el 05 de septiembre de 2013 de www.academia.edu/.../Representaciones_sociales_teor%C3%ADa_e_investigaci%C3%B3n

PNUD. (2003). *Informe desarrollo humano Colombia: Conflicto Callejón con Salida*. Bogotá: PNUD.

PNUD (2011). *Colombia rural razones para la esperanza*. Bogotá: PNUD.

Prada, E., Salgado, C. (2000). *Campesinado y Protesta Social en Colombia*. Bogotá: CINEP.

Puleo, A. (1993). *La Ilustración olvidada: la polémica de los sexos en el siglo XVIII*. Barcelona: Anthropos.

Reyes, A. (1979). *Latifundio y poder político*. Bogotá: CINEP.

Romany, C. (1997). La responsabilidad del Estado se hace privada: una crítica feminista a la distinción entre lo público y privado en el derecho internacional de los derechos humanos. En: R. Cook (Ed.), *Derechos humanos de la mujer: perspectivas nacionales e internacionales*. Bogotá: PROFAMILIA.

Sánchez, G. (1977). *Las ligas campesinas en Colombia: auge y reflujo*. Bogotá: Ediciones Tiempo Presente.

Sañudo, M. (2000). *Religiosidad popular y construcción alternativa del territorio*. Tesis no publicada. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Sañudo, M. (2003). *Reinventando la vida: procesos de reconstrucción vital de mujeres desplazadas por la violencia en Colombia*. Tesis no publicada. FEAR. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Sañudo, M. (2008). *Mujeres refugiadas en España: sujetos políticos globales*. Tesis no publicada. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.

Sañudo, M. (2011). *El derecho a la alimentación de las mujeres rurales en Colombia*. Documento de trabajo.

Suarez, N.(2009). *Política mujer rural en Colombia. Una aproximación analítica desde la perspectiva de género*. Quito: FLACSO.

- Suhner, S. (2002). *Resistiendo al olvido. Tendencias recientes del movimiento social y de las organizaciones campesinas en Colombia*. Bogotá: TAURUS. UNRISD.
- Tovar, H. (1980). *Grandes empresas agrícolas y ganaderas (Nueva Granada, siglo XVIII)*. Bogotá: Cooperativa de Profesores Universidad Nacional.
- Tovar, H. (1988). *Hacienda Colonial y Formación Social*. Barcelona: Editorial Sendai.
- Uribe, M. (2007). *Salvo el poder todo es ilusión*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Valcárcel, A. (1997). *La política de las mujeres*. Madrid: Ed Cátedra.
- Vega, R. (2004). Las luchas agrarias en Colombia en la década de 1920. *Cuadernos de Desarrollo Rural* (52) 65 – 85.
- Vega, R. (2012). Colombia un ejemplo contemporáneo de acumulación por desposesión. *Theomai* 26 1-24. Recuperado el 17 de septiembre de 2013 de <http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/Vega%20Cantor%20-%20Colombia.pdf>
- Vera, H. (2002). Representaciones y clasificaciones colectivas. La teoría sociológica del conocimiento de Durkheim. *Revista Sociológica*, 50 103 - 121.
- Villarreal, N. (2004). *Sectores campesinos, mujeres rurales y Estado en Colombia*. Tesis doctoral sin publicar. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad de Barcelona. Barcelona.
- Villarroel, G. (2007). Las representaciones sociales: Una nueva relación entre el individuo y la sociedad. *Fermentum*. Mérida- Venezuela, (49), 434 - 454.
- Wolf, E. (1971). *Los campesinos*. México: Labor.
- Zamosc, L. (1987). *La cuestión agraria y el movimiento campesino*. Bogotá: CINEP.
- Zuleta, E. *Conferencias sobre historia económica de Colombia*. Bogotá: Ediciones Tiempo Crítico